



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los
principios rectores del nuevo modelo procesal penal

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Roy Ober Muñoz Yarihuaman

ASESOR:

Mg. Guisseppi Paul Morales Cauti

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA - PERÚ

2017

Página del jurado

Yzaga Arévalo Víctor Liliano

Presidente

Salas Quispe Mariano Rodolfo

Secretario

Morales Cauti Guisseppi Paul

Vocal

Dedicatoria

A Jesucristo y la Virgen María, porque han sido mi fortaleza y guía, iluminando los caminos de mi vida.

A mi padre, Sr. Ruddy Muñoz Linares, quien ha sido y será figura de protección y apoyo incondicional.

A mi madre, Sra. Zonia Yarihuaman Macha, por su profunda dedicación y tesón para afrontar los embates de la vida, cuyo reflejo radica en mi ser.

A mi hija, Kassandra Muñoz Salas, quien me ha motivado cada instante para no desfallecer en la búsqueda de mis objetivos.

Agradecimiento

Especialmente a los Jueces y Fiscales, que coadyuvaron con la elaboración de la presente investigación.

A los docentes de la plana de investigación de esta casa de estudios, por su encomiable labor en busca del conocimiento.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Roy Ober Muñoz Yarihuaman, identificado con DNI N° 46188457, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. Toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.
3. He respetado las normas internacionales para citas y referencias; resguardando los derechos de autorías de las fuentes consultadas, por lo tanto, esta tesis no contiene plagio en ninguno de sus apartados.
4. Los datos e información que se presentan en la presente tesis son auténticos y veraces, toda vez que no han sido falseados, duplicados y reflejan la realidad investigada.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 27 de noviembre de 2017

Roy Ober Muñoz Yarihuaman
DNI N° 46188457

Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal”, la misma que se pone a vuestra consideración; guarda como firme propósito el riguroso análisis de la actual jurisprudencia relevante en contraste con la doctrina y la normativa vigente; denotando las falencias del legislador quien ha olvidado la Razón de Ser del Proceso Penal, relegando el respeto irrestricto de los Principios rectores en los que se fundan las instituciones jurídico-procesales; viéndose ante la disyuntiva: de fortalecer la imagen del Estado como el drástico ejecutor del *Ius Puniendi*; aunque esto signifique graves atentados a los Derechos individuales, o ejecutar los mecanismos procesales adecuados acordes a los Principios rectores de un proceso garantista, a fin de resguardar la dignidad del individuo frente a la acción persecutora del Estado; es en este contexto que se analiza la institución del proceso inmediato y su aplicación.

Guardando el fiel cumplimiento de los requisitos de aprobación para la obtención del título profesional de Abogado; se compuso en la primera sección por la **introducción** donde se abordó el estudio de la realidad problemática, analizando los trabajos antecedentes y teorías relacionadas al tema, estableciéndose el problema, la justificación y los objetivos, concluyendo con la formulación del supuesto jurídico; la segunda sección compuesto por el **método** en el que se desarrolló todo lo concerniente a la metodología de investigación, revistiendo así esta investigación, de valor científico; llegando a concluir con el registro de los **resultados**, **discusión** y **conclusión**; para dejar sentada las **recomendaciones**; amparadas y sustentados en la documentación anexa.

El autor.

Índice

	Pág.
Página del Jurado.	ii
Dedicatoria.	iii
Agradecimiento.	iv
Declaración Jurada de Autenticidad.	v
Presentación.	vi
Índice.	vii
Índice de Figuras y Tablas.	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
I. INTRODUCCION	1
Aproximación temática.	2
Trabajos previos.	8
Teorías relacionadas al tema.	15
Formulación del problema.	47
Justificación de estudio.	49
Objetivo.	51
Supuesto Jurídico.	52
II. MÉTODO	54
2.1 Tipo de investigación.	55
2.2 Diseño de investigación.	56
2.3 Caracterización de Sujetos.	57
2.4 Población y Muestra.	59
2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y validez.	60
2.6 Métodos de análisis de datos.	62
2.7 Unida de análisis: Categorización.	64
2.8 Aspectos éticos.	64
III. RESULTADOS	65
3.1 Descripción de los resultados de la técnica de entrevista.	67
3.2 Descripción de los resultados de la técnica de análisis documental.	85

3.3 Descripción de los resultados de la técnica de análisis jurisprudencial.	87
3.4 Descripción de los resultados de la técnica de análisis de caso.	92
3.5 Descripción del resultado de la técnica de análisis normativo comparado.	94
IV. DISCUSIÓN	97
4.1 Respecto al Objetivo General.	99
4.2 Respecto al Primer Objetivo Específico.	111
4.3 Respecto al Segundo Objetivo Específico.	116
4.4 Respecto al Tercer Objetivo Específico.	119
V. CONCLUSIÓN	123
VI. RECOMENDACIONES	127
VII. REFERENCIAS	130
ANEXOS	137
Anexo 1. Matriz de Consistencia.	138
Anexo 2. Fichas de Validación de Instrumentos.	140
Anexo 3. Instrumentos.	
Anexo 3-A. Guía de Entrevista.	155
Anexo 3-B. Guía de Análisis Documental.	159
Anexo 3-C. Guía de Análisis Jurisprudencial.	161
Anexo 3-D. Guía de Análisis de Casos.	166
Anexo 3-E. Guía de Análisis Normativo.	169
Anexo 4. Aplicación de la Guía de Entrevista.	
Anexo 4-A. Entrevista realizada a Liliana Aliaga Cabrera.	171
Anexo 4-B. Entrevista realizada a Carlos Matamoros Curipaco.	179
Anexo 4-C. Entrevista realizada a Renán Franklin Lapa Rivas.	187
Anexo 4-D. Entrevista realizada a Carlos Miguel Villa Ortiz.	195
Anexo 4-E. Entrevista realizada a Cesar Augusto Nakazaki Servigón.	203
Anexo 4-F. Entrevista realizada a Francisco Celis Mendoza Ayma.	209
Anexo 4-G. Entrevista realizada a Ruth Mariela Ponce Ormeño.	217
Anexo 4-H. Entrevista realizada a Paola Luz Valdivia Sánchez.	225
Anexo 4-I. Entrevista realizada a Walter Enrique Molina López.	233

Anexo 5. Aplicación de la Guía de Análisis Documental.

Anexo 5-A. Guía de Análisis del Proyecto de Ley N° 5391/2015-CR.	241
Anexo 5-B. Guía de Análisis de la Casación N° 842-2016 Sullana.	243
Anexo 5-C. Guía de Análisis de la Casación N° 692-2016 Lima Norte.	244
Anexo 5-D. Guía de Análisis de la Resolución N° 2 (Exp. 12-2016) – Lima.	246
Anexo 5-E. Guía de Análisis de Caso Exp. N° 00186-2016-1JR-PE-03.	248
Anexo 5-F. Guía de Análisis Normativo Comparado.	253
Anexo 6 Proyecto de Ley N° 5391/2015-CR.	258
Anexo 7 Jurisprudencia.	264
Anexo 8 Exposición de motivos del D.L N° 1194.	306

Índice de Figuras y Tablas

Figuras	Pág.
Figura 1. Conclusiones relevantes de los trabajos previos nacionales.	12
Figura 2. Conclusiones relevantes de los trabajos previos internacionales.	14
Figura 3. Etapas del proceso penal ordinario.	16
Figura 4. Tipos de procesos especiales.	22
Figura 5. Etapas del proceso especial inmediato.	24
Figura 6. Presupuestos materiales del proceso inmediato.	25
Figura 7. Ventajas del proceso inmediato.	27
Figura 8. Supuestos de aplicación del proceso inmediato.	28
Figura 9. Características del nuevo sistema procesal penal.	36
Figura 10. Derecho de defensa en la norma nacional e internacional.	44
Figura 11. Derecho de defensa en el proceso inmediato.	46
Figura 12. Aplicación de los métodos de análisis de datos.	63

Tablas	Pág.
Tabla 1. Caracterización de sujetos	58
Tabla 2. Relación demográfica	59
Tabla 3. Relación documental	59
Tabla 4. Categorización de las unidades temática	64
Tabla 5. Regulación latinoamericana sobre el delito flagrante	95
Tabla 6. Regulación latinoamericana sobre la incoación del proceso inmediato	95
Tabla 7. Regulación latinoamericana sobre el límite del proceso inmediato	96
Tabla 8. Plazo de detención por flagrancia	96

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal; en relación a la metodología de la investigación, la presente investigación fue elaborada bajo el enfoque cualitativo enmarcándose en el diseño de la teoría fundamentada; así mismo en el análisis documental se empleó el método sistemático y hermenéutico principalmente. La investigación se origina a raíz de la aplicación irregular del proceso inmediato lo que evidencia graves vulneraciones a los derechos amparados en los principios procesales. Para la recolección de los datos de investigación se emplearon técnicas como la entrevista, el análisis documental, análisis jurisprudencial, análisis de caso y análisis normativo; concluyéndose que existen críticas en la aplicación del proceso inmediato que transgreden los principios procesales del nuevo modelo procesal penal.

Palabras clave: Proceso penal, proceso inmediato, principios procesales, nuevo modelo procesal penal.

ABSTRACT

The present investigation had as purpose to identify the critical present on the implementation of the immediate process from the perspective of the guiding principles of the new model of criminal procedure; in relation to the methodology of the research, the present investigation was developed under the qualitative approach within the boundaries of the design of the grounded theory as well as in the documentary analysis is the systematic method and hermeneutic mainly. The research originates as a result of the irregular application of the immediate process evidence of serious violations of the rights protected in the procedural principles. For the collection of data, research techniques were used as the interview, the documentary analysis, jurisprudential analysis, case analysis and policy analysis; it was concluded that there are critical in the implementation of the immediate process that transgress the principles of due process of the new model of criminal procedure.

Keywords: Criminal proceedings, immediate process, procedural principles, new model of criminal procedure

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación temática.

Es preciso referirnos a la aproximación temática como la fase de la investigación en la que se describe la realidad problemática. “En términos prácticos, la descripción del problema consiste en describir lo que ocurre con el problema en la realidad, dicha descripción debe ser lo más objetivo posible a fin de determinar que el problema tiene ocurrencia en la realidad” (Robles, 2014, p. 20). De los antes expuesto se puede aseverar que la aproximación temática se traduce en presentación de hechos, en especial de los más resaltantes que se presenta en torno a una realidad relevante y factible de ser materia de estudio.

La importancia de esta fase de la investigación, radica en su utilidad para la exploración de manera sistemática de los eventos que reúnen caracteres que propician una investigación a fin de obtener esquemas de interpretación de la realidad problemática.

Ahora bien, presente trabajo de investigación abordó el análisis e identificación de las críticas existentes en la aplicación del proceso inmediato reformado por el Decreto Legislativo N° 1194. Observándose los lineamientos normativos dados para este proceso especial –por ser más célere- desde la perspectiva de las garantías procesales y constitucionales, exigidos para que su aplicación se pueda dar de manera idónea.

En la sociedad peruana ya no habla de seguridad, sino de *inseguridad* lo que cobra sentido en base a las cifras arrojadas de la nueva investigación realizada por el proyecto de opinión pública de América Latina realizada por el Barómetro de las Américas; que señala en su último informe, que el Perú se caracteriza por ser el país con un mayor crecimiento de la criminalidad en América Latina. La delincuencia hoy en día, se ha convertido es un indicador social que refleja la paupérrima labor político-criminal estatal observándose cifras alarmantes que se traducen en inseguridad en el ámbito jurídico y social.

Se podría afirmar que hoy se vive en un Estado en el que el legislador emite normas a mérito de las necesidades momentáneas, como es el caso de la *Ley N° 29569*, promulgada el año 2010, disponiendo la modificatoria del artículo N° 259

del Código Procesal Penal del 2004; estableciéndose una vez más la ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas de cometido el delito; esto en atención a lo acontecido en el caso de “*la niña Romina*”; del mismo modo, la *Ley N° 30054* promulgada el año 2013 a mérito del cual se incrementó la pena del delito de violencia y resistencia contra la autoridad como efecto resultante de lo acontecido en el mercado mayorista del distrito de La Victoria “*la Parada*”.

Sin embargo, es preciso no olvidar que vivimos en un Estado Constitucional de Derecho; en el que tanto las potestades, como las prohibiciones están sujetos a los principios rectores de rango constitucional; en esta línea podemos aseverar que un sistema procesal garantiza el respecto por los Principios Constitucionales, siempre y cuando la estructura del Gobierno sea acorde a un Estado Democrático de Derecho, contrario sensu, las instituciones jurídicas procesales vulnerarían los principios rectores del proceso mismo.

El Derecho Penal moderno asume los principios doctrinarios de mínima intervención, humanidad, protección, prevención y resocialización de la pena, contenidos tanto en la constitución política del estado como en el título Preliminar del Código Penal peruano vigente y estos mismos principio son lineamientos que regulan el poder punitivo del Estado, en el entendimiento que nuestra realidad carcelaria es sumamente drástica [...]. Siendo que la aplicación de la pena subyace en el Principio de humanidad [...], por cuanto la pena debe ser vista como un mal necesario. (Avalos, 2015, p. 27)

Sin embargo, en la normativa vigente se advierte la trasgresión a la razón de Ser del proceso penal; olvidándose del respeto a los Principios rectores en los que se fundan las instituciones jurídico-procesales. Es en este escenario que surge la disyuntiva entre, fortalecer la imagen del Estado como el drástico ejecutor del *lus Puniendi* -*aunque esto signifique graves atentados a los derechos individuales*-, o ejecutar los mecanismos procesales adecuados y acorde a los Principios rectores de un proceso garantista -*con la finalidad de resguardar la dignidad del individuo frente a la acción persecutora del Estado*-.

Es de observarse que la población tiene la percepción de un sistema de justicia aletargado y teñido de corrupción -*donde los favores tienen el subtítulo de sentencia*- sumándose a ello, las figuras poco dinámicas y engorrosas que dejan

un sinsabor en los justiciables. Lo antes expuesto se materializa en lo acontecido el quince de septiembre del año dos mil quince cuando los diarios y noticieros informaron, que en la región de Huánuco una turba de pobladores dio muerte a dos ciudadanos –*presuntos autores de robo*- quemándolos en vida, este suceso ocurrió como respuesta a la campaña popular denominada “*chapa tu choro y déjalo paralítico*”.

Considerando que hoy en día las penas son más rígidas, empero no se han obtenido los resultados deseados, advirtiéndose que de manera errónea se ha considerado que la lucha frontal contra la criminalidad se limita al endurecimiento de las penas y del uso indiscriminado de los pseudo-mecanismos procesales motivado por una errónea aplicación político-criminal; contrario sensu, esta debería de implementarse desde el gobierno central con incidencia directa en la población; sin embargo, se delega esa responsabilidad al sector justicia, que se ve en la obligación de aplicar estos mecanismos a través de sus órganos Jurisdiccionales buscado saciar el fervor de la población por una respuesta clara y contundente a cambio de asumir el riesgo de transgredir los principios inherentes al proceso garantista, siendo estos principios necesarios para alcanzar la justicia.

Es en este escenario que el proceso inmediato cobra mayor relevancia, debido a que su aplicación incide directamente contra la creciente criminalidad contrarrestando al descontento social, pues ha logrado satisfacer la necesidad de justicia de la población. Es importante destacar que el proceso inmediato es de carácter *especialísimo* dotado de simplicidad y celeridad; empero ha desarrollado prisas innecesarias en el trámite que conlleva la supresión de etapas procesales necesarias para la configuración misma de un proceso penal garantista, a fin de asegurar el respeto irrestricto de los Derechos y Principios Constitucionales.

Ahora bien; en el proceso penal, el titular de la legalidad es el Juez, sin embargo los jueces que han saltado a la palestra por los casos mediáticos como el de la Sra. Silvana Buscaglia, (condenada a prisión efectiva de 6 años y 8 meses como resultado del proceso inmediato por flagrancia) y el caso del Sr. Chu Cerrato (empresario condenado a 4 años y 5 como resultado del proceso inmediato por flagrancia) los jueces tenían la calidad de *Juez Supernumerario* lo que incide de

manera significativa contra la autonomía e independencia jurisdiccional. “Uno de los más graves problemas que aqueja al Poder Judicial es el alto índice de provisionalidad de sus magistrados. De cada 100 jueces en el Perú solo 58 son titulares, mientras que 42 son provisionales o supernumerarios” (Gutiérrez, Torres y Esquivel, 2015, p. 5).

En este sentido, si tenemos en cuenta que los jueces supernumerarios y jueces provisionales no tienen garantizados su continuidad en el cargo esto los ubica en una situación de fragilidad ante la presión que ejercen los medios de comunicación, los grupos de poder y la presión institucional ejercida por el *Órgano de Control*.

Con los casos precedentes; es claro que nadie está exento de ser víctima de lo que hoy en día se denomina “*el terrorismo punitivo*”, claro ejemplo de ello es el caso de Edwin Francisco Alejo Cama, quien fue procesado en atención al proceso inmediato por flagrancia el cual finalizó *condenándolo a cadena perpetua* por la presunta comisión de secuestro en grado de tentativa en agravio de una menor de edad.

De esta forma, se pretende reflexionar sobre la *excepcionalidad del proceso inmediato* y la viabilidad de su aplicación abordándose el análisis de los principios transgredidos tanto desde la audiencia única de incoación del proceso inmediato; así como en la audiencia única de juicio inmediato para ello es necesario el análisis desde los Principios del Nuevo modelo procesal Peal, advirtiéndose los atentados incurridos por la rapidez en la obtención de la condena.

Si bien es cierto existen sendos pronunciamientos -*Acuerdo Plenario N° 2-2016 y las casaciones N° 842-2016 y 692-2016*- para la uniformización en la aplicación del proceso inmediato, sin embargo se advierten ciertas flexibilizaciones en las garantías del proceso penal por ende una aplicación de este proceso ha evidenciado la vulneración de los principios procesales.

Uno de los presupuestos de admisibilidad de este proceso especial es el delito de omisión a la asistencia familiar, evidenciándose una reserva en la actuación probatoria toda vez que deviene de un proceso civil previo; empero es necesario

advertir la trasgresión a los principio procesales toda vez que el fundamento legal en lo civil se remite al artículo 481° del Código Civil -*los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos... No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos-*, en la práctica se emite una sentencia en base a la probabilidad.

Por otra parte estamos frente a las distintas interpretaciones de flagrancia lo que conlleva a un problema en el momento de su aplicación toda vez que el criterio para la incoación del proceso inmediato difiere unas de otras, otorgándose en la práctica al presupuesto de flagrancia un carácter extorsivo a fin de que el individuo se acoja a la figura especial de *terminación anticipada*, que en muchos de los delitos este instrumento del Derecho Premial, no excluye al procesado de la cárcel efectiva.

Desde la perspectiva garantista se estaría haciendo frente a una *Fast Justice* amparándose en la lucha contra la criminalidad organizada, todo ello se materializa a través de los juzgados de flagrancia, donde abunda la discrecionalidad y se carece de criterio de proporcionalidad, dando como resultado a jueces que actúan como boca de la ley sin mediar interpretación alguna y olvidándoseles el rol fundamental de garantes de la legalidad.

En esta misma línea, si consideramos como *garante del Derecho*, al abogado defensor, que muchas veces no está preparado para ejercer una defensa idónea en el corto plazo otorgado por este proceso especial, consciente con esta realidad coincido con la posibilidad de que no debería de incoarse el proceso inmediato, si no se garantiza el patrocinio de un abogado defensor eficaz y oportuno. Recomendándose que esta exigencia debería de ser de primer orden, en los casos en los que el imputado se encuentre privado de su libertad; toda vez que la normativa vigente ha establecido que, la interposición de los recursos, se deben de realizar en la misma actuación procesal como lo señala el inciso 4 del artículo 140 correspondiente al Decreto Legislativo 1307; considerándose, además, que los recursos interpuestos deben de ser estrictamente oral.

Lo antes expuesto, evidencia una asimetría con el procesado libre, a quien se le garantiza tres días (considerando los efectos de la notificación) para interposición de su recurso, siendo un tiempo prudencial y razonable para la construcción adecuada de la pretensión impugnatoria, acarreando los efectos negativos de la falta de tiempo para ejercer una defensa idónea y eficaz, viéndose afectado el principio de igualdad. “El principio de igualdad consiste, en la prohibición de tratos diferenciales por parte del Estado. Se refleja en la igualdad en la aplicación de la ley y en la igualdad en la utilización de mecanismos legales” (Maestre, 2007, p.170). En esta línea de ideas; la presente investigación aborda al Proceso Inmediato como una herramienta estrictamente excepcional; así mismo, este proceso debe de contar con un desarrollo legislativo preciso que restrinja su acceso cuando no existan supuestos razonables para su incoación, restringiéndose su aplicación para procesos que importan *delitos con penas de carcelería no efectiva*.

En relación a lo antes expuesto, podríamos formular el siguiente cuestionamiento: *¿En qué tipo de delitos, por su naturaleza, el fiscal tendría que solicitar la incoación del proceso inmediato y en cuales no?*, y si consideramos que en nuestra realidad la defensa se podría obtener documentos relevantes en tan corto plazo, a diferencia del uso de la fuerza pública (policía) que hace el Fiscal, quien tendría la ventaja para la incriminación del individuo, en esta idea vale cuestionarnos, ¿El plazo del proceso por flagrancia es acorde a nuestra realidad nacional o atenta contra el principio de igualdad de armas?

Finalmente, la realidad actual nos hace conscientes de la necesidad de un proceso garantistas.

La decisión política que defina el sistema debe optar básicamente por dos alternativas: primar el interés público y fortalecer el poder del Estado en la persecución penal, aun negando los derechos del individuo, o en otorgarle al individuo las suficientes garantías para que enfrente a ese poder punitivo, preservando su dignidad de persona en un plano en el que no se vea absolutamente desprotegido frente a las instituciones públicas de la persecución penal. (Morales, 2001, p. 48)

Si bien es cierto, la simplificación del proceso es una herramienta muy útil, algunos excesos y descuidos en su aplicación han generado fuertes críticas, ya que en vez de aplicar la norma procesal acorde a las garantías y derechos constitucionales en los que se inspira su fundamentación *-olvidándose del precepto material de simplicidad en los procesos para su aplicación-* se presenta un sistema procesal con miras a la aplicación de *penas singulares* y carentes de justificación constitucional. Se debe tener en cuenta que la naturaleza del proceso inmediato es excepcional per se, es uno de los procesos especiales contenidos en el libro quinto del D.L 957 (código procesal penal del 2004), teniendo como fundamento principal su excepcionalidad.

Como uno de sus preceptos de aplicación se puede encontrar a la *flagrancia*, figura que se caracteriza porque trae consigo la emisión de una sentencia rápida y efectiva que acarrea muchas veces consecuencias devastadoras para el individuo quien en la mayoría de los casos pierde su libertad. En esa misma línea es preciso considerar que el proceso Lógico–Jurídico que se realiza para la obtención de una sentencia no puede limitarse a una interpretación literal de la ley; sino por el contrario, acoger los Principio Constitucionales a fin de arribar a una justificación racional; en la decisión que importa no solo el futuro de un individuo sino de los que lo rodean.

Trabajos previos.

Es preciso que toda investigación se vincule con estudios anteriores, a fin de contrastar la utilidad y relevancia del tema de investigación.

El conocimiento de estudios previos permite deducir temas para investigar e identificar aspectos de un problema que necesita ser estudiado más a fondo. Así, en ciertos casos la revisión de literatura precede a la formación del problema. La investigación no surge del vacío; por lo general constituye una extensión de conocimientos y teorías previos. (Monje, 2011, p. 23)

El tema que recoge la presente investigación, concita el interés de los sistemas que se rigen por el modelo Euro continental, es en ese contexto que se han ensayado innumerables trabajos desde distintas perspectivas y objetivos; a

continuación, se detallan los trabajos, a nivel nacional e internacional, previos que guardan cierta relación con la presente investigación.

Antecedentes a nivel nacional.

Cartagena (2016, p.208), en su investigación titulada: *“Inconvencionalidad del Decreto Legislativo N° 1194 y sus efectos en la administración de justicia de la provincia de san Román - Juliaca”* para obtener el título de abogado, presentado en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez; cuyo estudio de esquema cuantitativo y tuvo como objetivo general: Demostrar la Inconvencionalidad del D.L. N° 1194 en casos de flagrancia, por ser violatoria al derecho a la defensa dentro de un plazo razonable; y concluyó lo siguiente:

PRIMERA. El Decreto Legislativo N° 1194 que reformula el Proceso Inmediato, es Inconvencional, por violar el derecho al Plazo Razonable y a la defensa del procesado, así lo ha demostrado, el Derecho Internacional, la Jurisprudencia, Doctrina, y el 83% de los abogados encuestados de la Provincia de San Román de Juliaca.

SEGUNDA. Los supuestos de flagrancia incisos 3 y 4 del artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal, no cumplen con los presupuestos de Inmediatez Personal, Inmediatez Temporal y la Necesidad de Urgencia establecidos por el Tribunal Constitucional, y la Jurisprudencia, por lo que estos supuestos enervan el derecho el defensa del procesado ante un Proceso Inmediato Reformado.

TERCERA. A nivel del Ministerio Público, bajo la reforma del proceso inmediato, afecta gravemente su actuación Objetiva, su imparcialidad y su independencia, siendo sus funciones encomendadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CUARTA. A nivel del Poder Judicial, bajo la reforma del Proceso Inmediato ha generado una sobre carga procesal al Juez de Investigación Preparatoria y las sobre abundancia de sentencias condenatorias.

QUINTA. El Decreto Legislativo N° 1194 Proceso Inmediato para casos de flagrancia su implicancia en la Administración de Justicia de la Provincia de San Román de Juliaca, causa un efecto de Ineficacia, por no responder al derecho al plazo razonable.

Carrasco (2016, p. 94), en su investigación titulada: *“La implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, lima-norte 2016”* para obtener el título de abogado en la Universidad de Huánuco; fue un estudio cuantitativo del tipo básico y tuvo como objetivo general analizar si el proceso de flagrancia o proceso inmediato por flagrancia cumple con las garantías que ofrece toda acusación fiscal, y con el plazo razonable, concluyendo en lo siguiente:

Se concluye que efectivamente en el proceso inmediato por flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, asimismo se da cuenta que esta vulneración es consecuencia de la excesiva celeridad existente en este proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Se concluye asimismo corroborando las hipótesis secundarias planteadas en la investigación; por lo cual se entiende que el plazo establecido de 24 a 48 horas desde la detención para la recaudación de medios probatorios que desvirtuaran la presunción de inocencia del acusado y sustentan la acusación fiscal en un proceso de flagrancia tiene implicancia negativa en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Así mismo se debe cambiar el hecho de que el fiscal sea obligado a acusar una vez pasado la audiencia de proceso inmediato y darle la potestad que en caso de duda pueda pasar a proceso ordinario. Por último, pero no menos importante es necesaria la implementación de la prisión preventiva en estos casos una vez que se cambie extendiendo el plazo de vigencia de este proceso.

Meneses (2015, p. 119), en su investigación titulada: *“Procedimiento para investigar y sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad”*. Para obtener el título de abogado en la Universidad San Martín de Porres en Lima, metodológicamente fue de tipo descriptiva, teniendo como objetivo general, exponer la necesidad de implementar un procedimiento especialísimo, a fin de investigar y sancionar aquellos delitos cometidos en flagrancia; y, concluyó que:

3. Teniendo en consideración la justificación de los procedimientos especiales, el Procedimiento Inmediato no está debidamente regulado, debido que establece tres situaciones diferentes para su aplicación, asimismo, de acuerdo a las estadísticas, no se aplica de una forma óptima y eficaz.

5. Para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, se deberá tener en consideración: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales en cada caso en concreto.
8. Teniendo en cuenta la finalidad de la investigación preparatoria, no es necesario realizar una investigación extensa y/o compleja para un delito flagrante debido a que ya se conoce la identidad del autor y de la víctima desde la comisión del delito o instantes después de la perpetración de este.
11. El Procedimiento Especial para delitos flagrantes no vulnera ningún derecho fundamental por cuanto tiene su fundamento en la Constitución e instrumentos internacionales protectores de derechos humanos.
12. El Procedimiento especial para delitos flagrantes contribuirá a la reducción de la sobre carga procesal y la inseguridad ciudadana, por cuanto ya existen precedentes internacionales que han obtenido resultados positivos respecto al tratamiento de delitos flagrantes.

Oré (2016, p. 119), en su investigación titulada: “*Trascendencia del Principio de Presunción de la Inocencia dentro del Proceso Inmediato en los Supuestos de Cuasiflagrancia y Presunción de Flagrancia*”, para obtener el título de abogada en la Universidad Cesar Vallejo, metodológicamente el trabajo se elaboró bajo el esquema cualitativo; y, concluyó que:

(...)

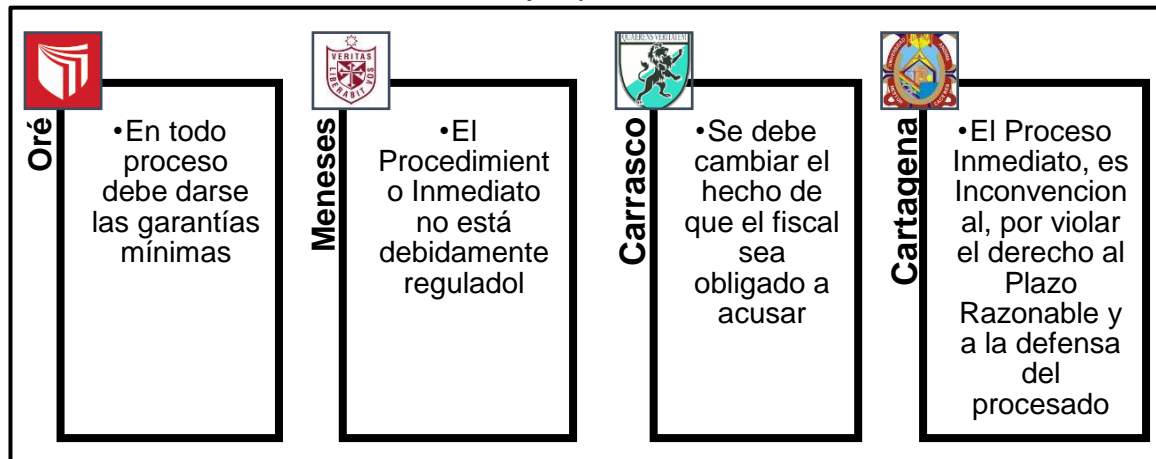
Por lo tanto, es permisible sindicar que las implicancias jurídicas en cuanto al derecho a la libertad del proceso en los supuesto de Cuasiflagrancia y presunción de flagrancia se hacen materializables a partir de un requerimiento fundado de prisión preventiva en donde el imputado ve limitado su derecho a la libertad y defensa, en relación que por la celeridad que ostenta el proceso inmediato el procesado pasa a ser privado de derecho a la libertad en tan solo 72 horas, a su vez es en merito a esta brevedad que el imputado no puede reunir suficientes medio probatorio que demuestre su inocencia, por lo tanto el juez se encuentra sesgado a los elementos de convicción ofrecidos por la fiscalía y para que dicha decisión se desarrolle un proceso con las garantía mínimas este queda solo facultado sobre la base del sentido discrecional del operador jurídico.

Por último, es necesario establecer que, dentro del desarrollo de todo proceso debe darse las garantías mínimas que demuestre que este se viene desarrollando sobre los cánones de un debido proceso y de un adecuado respeto del derecho a la defensa para todas las partes, aunado a ello resulta de mayor relevancia que estos se

demuestren dentro de la incoación de un proceso especial inmediato el cual debe ser restringida por medio actividad probatoria que acredite la imputación de un ilícito penal a un determinado sujeto activo.

Figura 1

Conclusiones relevantes de los trabajos previos nacionales.



Fuente: Adaptación de los trabajos previos nacionales.

Antecedentes a nivel internacional.

Castejón (2009, p. 133), en su investigación titulada: “*El procedimiento de flagrancia en el derecho procesal penal venezolano*”. Investigación para obtener el grado de Maestro en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela, fue de tipo interpretativo que tuvo como objetivo general analizar la figura especial de flagrancia en el Derecho Procesal Penal y concluyo en lo siguiente:

La presentación por el Ministerio Público del aprehendido in fraganti ante el juez de control, y su solicitud de calificación de la flagrancia, derivan del carácter optativo que otorgan a esta actuación fiscal los vocablos “podrá proponer”, que utiliza en encabezamiento del artículo 372 del COPP, pero evidentemente que de solicitarlo así el representante del Ministerio Público, ello fundamentalmente obedecerá a que dicho funcionario fiscal dispondrá en ese momento de todos los elementos probatorios que posibiliten que el juez de control pueda calificar la flagrancia, y en consecuencia poder realizar en forma inmediata el juicio oral y público.

En cuanto a la oportunidad, duramente criticada por algunos estudiosos de la ciencia procesal, que incorpora el tercer aparte del artículo 373 del COPP, para que en el caso de calificación de la flagrancia el Fiscal y la víctima presenten la acusación directamente en la audiencia del juicio oral, se apoya el criterio de la

mayoría de los tribunales del país en el sentido de realizar una audiencia especial previa a aquella en que debía realizarse el juicio oral, a los fines de que el Fiscal y la víctima presentaran su acusación y que de ella pudiera imponerse oportunamente el acusado a los fines y la mejor preparación de su defensa.

El procedimiento abreviado, tal como está concebido actualmente en la legislación nacional para ser utilizado como mecanismo especial de juzgamiento en casos de aprehensión por delito flagrante, salvo las observaciones que se han hecho en cuanto al efecto suspensivo incorporado en su estructura, de manera general, se adecua a los principios fundamentales que supra-constitucional y constitucionalmente ha escogido Venezuela en la búsqueda de la concreción de su definitiva conversión en un Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho y Justicia.

Monge (2009, p. 286), en su investigación titulada: “*La Constitucionalidad del Procedimiento Penal de Flagrancia*”, trabajo que se realizó para obtener el grado de licenciado en derecho en la Universidad de Costa Rica en la ciudad de San José; metodológicamente fue un estudio de tipo cualitativo y exploratorio teniendo como objetivo general, analizar la existencia o no de roces de constitucionalidad en la aplicación del actual procedimiento especial de flagrancia, contenida en la legislación costarricense, trabajo que concluyo lo siguiente:

El procedimiento de flagrancia presenta una serie de particularidades que lo distinguen del trámite ordinario, y de otros procesos especiales existentes en el Código Procesal Penal actualmente. Su principal contraste con la tramitación ordinaria radica en la supresión de las etapas preparatoria e intermedia, aunque se mantienen algunos actos procesales que, normalmente, se llevan a cabo en dichas etapas, como la conciliación y el uso de medidas alternativas.

En relación con el derecho de defensa en el trámite especial para flagrancias se concluye que, aun y cuando pudieran no existir manifestaciones expresas que impliquen adelanto de criterio por parte del órgano jurisdiccional a la hora de hacer correcciones a la acusación, esta obligación que la ley impone a dicho órgano genera un contacto no deseable del juzgador o juzgadora con el asunto que va a decidirse, con anterioridad al juzgamiento. Aunque es oportuno que se realice esta corrección, no existe motivo para hacerla recaer en la misma persona o personas que luego tengan a cargo el juzgamiento.

(...) frente al trámite de flagrancia, se ofrece una respuesta que resulta célere con respecto a los fines del juzgamiento desde el punto de vista penal, pero que no

impregna con la misma característica la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la víctima-actor/a civil en cuanto a la reparación. Esta atención deficiente de las víctimas constituye un retroceso con respecto a lo que proponen las tendencias procesales penales más modernas, y una contradicción con los propios objetivos que la Ley 8 720 expresa en sus artículos primero y segundo.

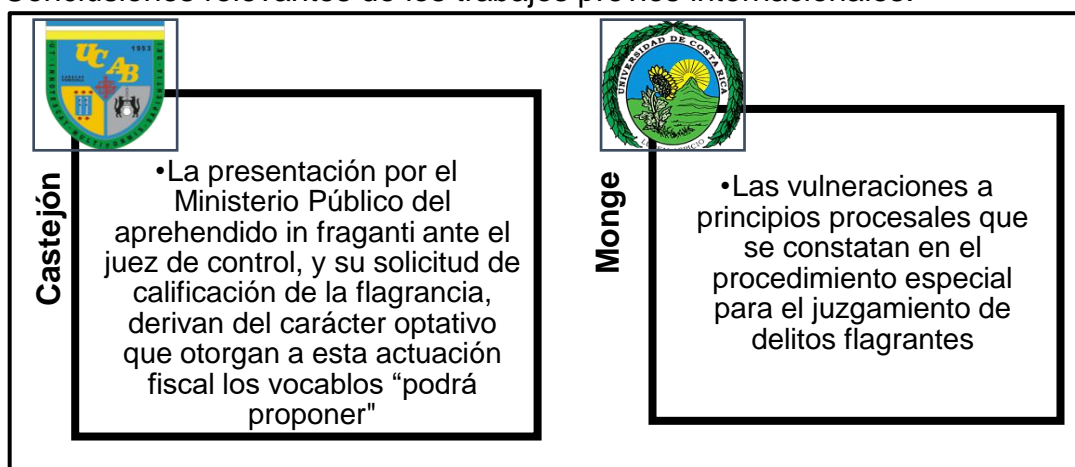
Existe, del mismo modo, lesión al principio de inocencia en el trámite especial, al exponer a la persona imputada a las consecuencias prácticas que se desprenden de la publicidad que se regula para la totalidad de la audiencia. Estas consecuencias pueden ser, entre otras, una mayor exposición en medios de comunicación con anterioridad a la condenatoria –la cual genera a su vez afectaciones al honor y la intimidad–, dificultad para optar por la conciliación y otras medidas alternativas al proceso.

El imputado y la imputada sometidos al procedimiento especial para flagrancias, reciben un trato diferenciado que pretende justificarse en la notoriedad del delito cometido. Sin embargo, dicha diferenciación no está avalada por nuestra Carta Fundamental y, en ese tanto, vulnera el principio de inocencia que cobija a toda persona perseguida por la presunta comisión de un ilícito.

Las vulneraciones a principios procesales que se constatan en el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos flagrantes, en suma, hacen que no resulte posible afirmar la existencia de un adecuado respeto al “debido proceso” dentro de dicho trámite, en la medida en que dicho principio engloba a aquellos y los mismos son necesarios para su configuración. Igualmente, se extraña para la satisfacción del debido proceso, la posibilidad de que la persona imputada pueda solicitar ante un tribunal superior el estudio de la medida cautelar impuesta en su contra.

Figura 2

Conclusiones relevantes de los trabajos previos internacionales.



Fuente: Adaptación de los trabajos previos internacionales.

Teorías relacionadas al tema.

También conocido como marco teórico, esta es una de las fases de gran importancia en la elaboración de todo estudio de investigación, donde se desarrollaran las nociones y características más importantes relacionadas a las categorías del tema de investigación; en ese sentido podríamos aseverar que las aproximaciones que se hacen en esta parte del trabajo constituye un aporte esencial en la investigación académica, ya que es el cuerpo de la investigación.

El marco teórico es una construcción teórica que permite sostener el planeamiento del estudio, con conceptos y antecedentes solidos que no dejan duda que el estudio a realizar se ha ubicado adecuadamente dentro de un nivel de investigativo y que existen argumentos necesarios para defender su ejecución. (Supo, 2015, p. 26)

La elaboración de esta sección de la investigación, no debe de asumirse como una simple recopilación de información y menos como una mera descripción conceptual de las variables inmersas en la investigación, sino una relación integral que sistematice las teorías básicas que circundan a cada investigación en concreto. La presente investigación cumple a cabalidad con lo antes mencionado.

El Proceso Común en el Nuevo Código Procesal Penal.

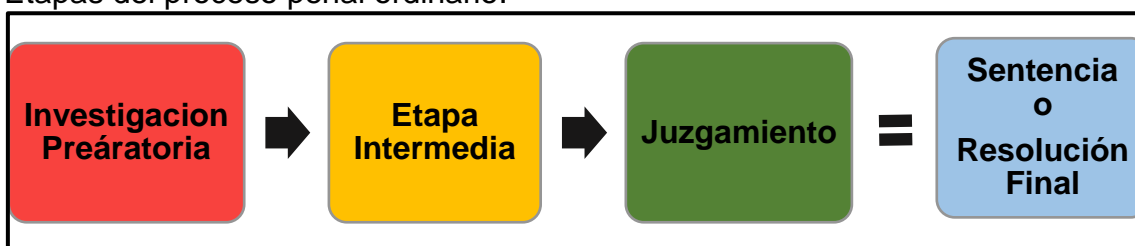
Conocido además como proceso penal base, proceso penal ordinal y proceso penal ordinario en las distintas jurisdicciones de Latinoamérica, sin embargo hoy en día en la Corte de Justicia de Lima *-donde aún no rige en su totalidad las disposiciones del nuevo modelo procesal penal insertado en el D.L 957 o “Nuevo Código Procesal Penal”-* el proceso común es nominado como el proceso ordinario y su operatividad se rige por la ley N° 9024 *-Código de Procedimientos Penales del año 19 40-*; donde se hace referencia a un solo proceso para los delitos, constituido de dos etapas: la etapa de instrucción a cargo del Juez Penal y la etapa de juzgamiento dirigido por un pleno conformado por tres Jueces Superiores.

Ahora bien, hablar del proceso en sí, no tendría asidero si previamente no hablamos del derecho procesal penal, en síntesis, debe de considerarse al derecho procesal penal como aquella rama del derecho procesal, caracterizad por

regular los presupuestos, requisitos y efectos del proceso penal; ahora bien, en el presente caso debe de considerarse al D.L 957, como norma procesal encargada principalmente de regular la estructura y funciones del proceso penal. "proceso común que, según sus propias aristas, comprende desde la formalización de la investigación preparatoria hasta la emisión de la sentencia; implica entonces, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento" (Peña, 2016, p. 48). Las etapas mencionadas por el autor son recogidas en el cuerpo normativo antes mencionado, en su libro tercero titulado Proceso común.

Figura 3

Etapas del proceso penal ordinario.



Fuente: Adaptación del D.L 957.

Tras estos presupuestos, es preciso señalar que el proceso común se caracteriza por contar tres fases o etapas, establecidas en libro III de la norma adjetiva.

Desde la perspectiva de los rasgos más característicos del proceso común, en su ámbito declarativo se tiene que constar de tres etapas centrales, cada una con un contenido propio, que tienen como eje el principio de contradicción: Investigación preparatoria, etapa intermedia y enjuiciamiento.

En el ámbito del proceso de declaración o declarativo de condena, y desde la competencia funcional, determina la intervención de dos tipos de jueces: (i) el juez de la investigación preparatoria, que interviene como juez de garantía, en la etapa de investigación preparatoria, y dirige la etapa intermedia; y (ii) el juez penal, que dirige la etapa de enjuiciamiento. (San Martín, 2015, p. 801)

Se puede afirmar además que el proceso común acoge todas las etapas necesarias en un sistema procesal penal de garantías y principio, ya que este se rige por la sucesión de actos o etapas que garantiza el deber ser del proceso penal, dotando de caracteres singulares, toda vez que las etapas procesales se cumplen en amplitud y con ello se cumple con el respeto por las garantías procesales.

Ahora bien, en palabras del profesor Sánchez “en el proceso ordinario o común, el calificativo de ordinario se refiere a que por medio de ese proceso los jueces y tribunales pueden conocer objetos de toda clase sin limitación alguna” (Sánchez, 2011, p. 11). Desde esta perspectiva, el proceso ordinario (juicio oral) cumple con garantizar los principios procesales; así lo plasmó la Corte Suprema en su pronunciamiento sobre el recurso de nulidad N° 4003-2013; el caso en concreto deviene del recurso interpuesto contra la resolución emitida por el colegiado de la extinta Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte de Lima; que por unanimidad dispusieron adecuar el trámite al proceso Sumario, tras haber declarado fundada la excepción de naturaleza de acción a consecuencia del cual se ordenó el archivamiento de la causa en el extremo del delito de Asociación Ilícita para Delinquir (Ordinario), dejando subsistente el delito de Estafa (Sumario) ante ello la defensa de la parte civil interpone recurso de nulidad alegando vulneración a la debida motivación y al debido proceso, considerando que no debió variarse la vía procedimental del proceso que se venía tramitando en la vía ordinaria.

QUINTO.- Este supremo Tribunal considera que la Sala superior Penal debió proseguir con el trámite del presente proceso, al haber quedado subsistente el delito de estafa, pues si bien dicho delito corresponde ser tramitado en vía sumaria conforme lo dispone el Decreto Legislativo número ciento veinticuatro; sin embargo el A-quem- y en general los operadores de justicia- no debe ser puramente formalista, sino debe efectuar un juicio de ponderación frente a las situaciones que se presentan en el proceso a favor de los justiciables (encausados y agraviados); en tanto, ellos en puridad buscan que sus pretensiones sean resueltas de una manera rápida y eficaz[...]. **SEXTO.-** La sala superior penal debió considerar que al emitir su resolución declarando fundada las excepciones de naturaleza de acción y cosas juzgada por el delito de asociación ilícita para delinquir, subsistía aun la acusación [...] en la modalidad de estafa[...], y no declarar insubsistente la aludida acusación, tanto más, si proseguir con el proceso no implicaba afectar o vulnerar derecho alguno a los acusado, menos aún , a las demás parte procesales, por el contrario el proceso penal ordinario resulta más garantista, en tanto someterse a un juicio oral implica desarrollar los principios rectores del proceso, tales como inmediación, oralidad, publicidad y contradictorio [...]. **SÉTIMO. -** La sala superior penal al disponer [...] se lleve a cabo el juicio oral por delito de estafa, toda vez que los actuados siguen en la instancia superior, teniendo en cuenta los plazos procesales a efectos de evitar la

prescripción de la acción penal [...]. (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, R. N. N° 4003-2013 Lima, 2015)

Queda claro, entonces, que la vía ordinaria satisface de manera amplia el respeto por las garantías constitucional en el ámbito procesal, demostrándose de manera copulativa que la estructura del proceso común es idónea para la tutela de los derechos, así mismo, no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias, como lo reconoció el Tribunal Constitucional en el EXP. N° 02383-2013-PA/TC. En este orden de ideas, la jurisprudencia vinculante antes citada es de obligatoria observación para la tramitación del proceso penal, exigiendo la prevalencia y respeto por los principios rectores del proceso penal.

Este Nuevo Código Procesal inserta el sistema conocido como el sistema acusatorio con rasgos adversariales, premunido de principios que acuden en defensa de los derechos constitucionales en cada etapa del proceso común; así, por ejemplo, tenemos al principio de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, otras de las particularidades es que este cuerpo normativo radica en la exclusión los formalismos innecesarios. En esta misma línea se tiene claro que el proceso diseñado por el Nuevo Código Procesal Penal busca que exista un equilibrio entre el valor garantía y el de seguridad, brindando una serie de posibilidades para que el imputado afronte el proceso dentro del marco de las garantías que establecen la Constitución y los distintos tratados internacionales de Derechos Humanos.

Es evidente entonces que el nuevo modelo procesal que incorpora el Código Procesal Penal, se sustenta y se edifica sobre la base del sistema procesal penal acusatorio con rasgos adversariales, cuyas principales líneas rectoras son, a saber:

- I. Separación de funciones de investigación y de juzgamiento (principio acusatorio).
- II. El juez no procede de oficio.
- III. El proceso penal se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad.

- IV. La garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento: esta garantía de la oralidad permite que los juicios se realicen con inmediación y publicidad.
- V. La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso, siendo la excepción la privación de la libertad del imputado. (Rosas, 2013, p. 573)

Ahora bien, al identificar y analizar el proceso ordinario no se puede pasar por alto las fases o etapas con la que se compone; sin embargo estas fases procesales no se abordaran con amplitud, empero observaremos en cada etapa las salidas alternativas con las que se cuenta como herramienta para agilizar la resolución de la causa.

I. La fase de investigación preparatoria (art. 334 del D.L 957)

En esta fase se puede decidir por la Terminación Anticipada.

II. La fase de etapa intermedia (art. 344 del D.L 957)

Puede optarse por el Acuerdo Preparatorio o Principio de Oportunidad.

III. La fase de juzgamiento art. 356 del D.L 957)

Se puede accionar la Conclusión anticipada de Juicio.

En ese orden de ideas se tiene que la tendencia por el modelo Euro-Continental se ha venido arraigando de manera contundente y esto se ha reflejado en la legislación procesal de los estados de América latina. “Tradicionalmente en la reforma latinoamericana se ha utilizado la expresión “salidas alternativas” de modo diverso, para designar prácticamente cualquier otra forma de termino que no sea persecución tradicional” (Cubas, 2009, p. 539).

Es evidente entonces que las salidas alternativas son herramientas poderosas que en manos de los operadores de justicia debidamente capacitados otorgaran a la sociedad soluciones de alta calidad, reflejándose en aceptabilidad de la sociedad por una justicia inmediata y con resultados convenientes.

El proceso especial.

El grupo de procesos privilegiados de un tratamiento diferenciado son los procesos especiales, ahora bien, para poder entender de manera conjunta los que implica el proceso especial es preciso entender lo que implican los elementos que lo conforman.

El proceso.

El proceso, ha sido materia de estudio de innumerables juristas, sin embargo, es preciso dirigirse a las nociones básicas que se establecen en el Diccionario Jurídico Elemental (2006) que define al proceso como: “Las diferentes fases o etapas de un acontecimiento. Conjunto de autos y actuaciones”. De estas nociones básicas se obtiene la conceptualización de proceso como ese conjunto de actos. “el conjunto dialéctico, dinámico y temporal de actos que se realizan durante la ejecución de la función jurisdiccional del Estado” (Monroy, 1996, p. 135). En este orden de ideas, se debe entender que el proceso es lo que está detrás de las formas.

El ámbito penal, el Proceso es el instrumento del que se vale el Estado para la imposición de penas a todos aquellos individuos que han lesionado los bienes jurídicos fundamentales de la persona y la sociedad.

El carácter de especial.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2017) Especial puede definirse como: “Singular o particular, que se diferencia de lo común o general”.

De la acepción anterior se establece que el carácter especial del proceso hace referencia a un proceso singular y excepcional que se diferencia categóricamente del proceso común, en esa misma línea es válido asegurar que este tipo de proceso no está contenido en un carácter general. “Los procesos especiales están previstos para circunstancias específicas de especial relevancia procesal, que obliga a una configuración procedimental propia, alejada del procedimiento ordinario” (San Martín, 2005, p. 15). En líneas generales, basta con referirse a la nominación para sentar la naturaleza de estos procesos.

El sistema judicial de administración de justicia, en un Estado democrático de derecho, está dirigido a cumplir los principios constitucionales, solucionar el conflicto, combatir la morosidad judicial, dar sentido humano a la justicia, crear un juez activo y dinámico en la resolución de conflicto, fortalecer la función del abogado dentro de la sociedad y el sistema judicial, simplificar el proceso, dignificar la justicia, buscar la verdad real, sustituir la escritura por la oralidad, dar publicidad a los procesos, garantizar el ejercicio de las libertades democráticas, propiciar el respeto del pueblo

en el sistema de administración de justicia, procurar la par por encima de la contienda, generar mecanismos de dialogo, impulsar la celeridad procesal, permitir el acercamiento de las partes a su juez; es decir se orienta a humanizar el proceso. Pretende una justicia más humana, destinada a la solución oportuna y adecuada del conflicto. (Araya, 2009, p. 33)

Como se puede apreciar, los procesos especiales surgen a causa de que el proceso ordinario *-común-* no satisface a cabalidad las exigencias que surgen en determinados supuestos; o bien porque no era el más idóneo para afrontar casos particulares; en merito a ello, el legislador se ha visto en la necesidad de regular los “procesos especiales” para solucionar la problemática criminal con determinadas actuaciones procesales.

Así mismo, se debe entender que el proceso común se ha diseñado para todos los casos habituales; sin embargo, surgen situaciones exclusivas que ameritan un trato distinto, resulta oportuno establecer que, en el proceso penal, la razón de esta diferencia está dada por la especificidad de la situación que regula y al que se aplica este proceso penal especial. “La razón de ser de los procesos especiales es dotar al sistema de mecanismos procesales que permitan atender las necesidades de celeridad, tutela y paz que nuestra sociedad exige” (Tejada, marzo 2016, p. 57). En la misma intención de lo antes mencionado por el autor, se debe de contemplar al proceso especial como la estructura para tener un proceso más eficiente y que coadyuvan en la reforma procesal toda vez que esta estructura esté adecuadamente empleada por los operadores en atención a los principios y garantías constitucionales.

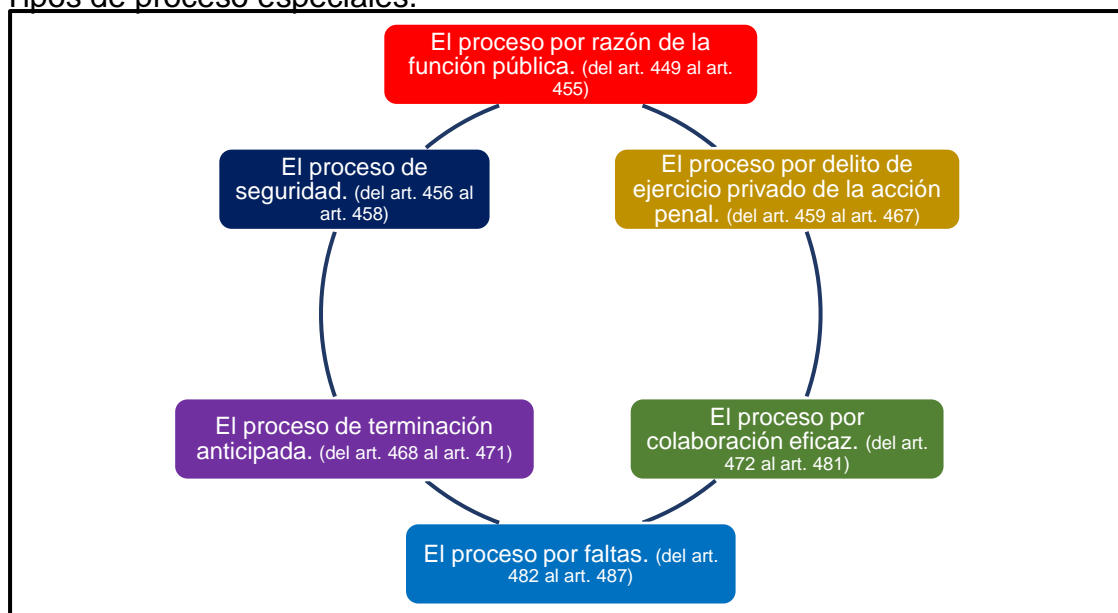
En el Nuevo Código Procesal Penal *-D. L N° 957-* los procesos especiales buscan la simplificación del proceso en su conjunto; de lo antes expuesto es preciso deslindar las comparaciones necesarias del proceso inmediato de las salidas alternativas. “Tradicionalmente en la reforma latinoamericana se ha utilizado la expresión “salidas alternativas” de modo diverso, para designar prácticamente cualquier otra forma de término que no sea la persecución tradicional.

Considerándose que, dentro de los procesos especiales se han regulado mecanismos de aceleración o agilización del proceso penal. De este modo se

tiene que en el proceso común u ordinario, el órgano del juzgamiento debe hacer la audiencia, con la finalidad de obtener la información maternizándose en resoluciones orales, citando a los testigos y peritos para tal fin, en esta vía procesal las partes sólo coadyuvan, mientras que el Decreto Legislativo N° 1194 –*norma que adelanta la vigencia y aplicación del proceso inmediato*–, establece que son las partes quiénes tienen esta responsabilidad, bajo apercibimiento de prescindirlos.

Figura 4

Tipos de proceso especiales.



Fuente: Adaptación del D.L 957.

La normativa procesal vigente, incluye distintos procedimientos bajo la denominación de procesos especiales con la finalidad de contar con esquemas alternativos al proceso ordinario y que además faciliten el procesamiento de determinados casos en atención. “De esta manera se regula debidamente el procedimiento que se debe seguir en atención a características muy particulares” (Sánchez, 2009, p. 361). Precizando que la lógica central de los procesos especiales radica en su alternatividad al proceso ordinario, con sus propias características, que precisamente lo distinguen de aquel y que deben de ser utilizados para cumplir con sus finalidades.

Los procesos especiales están destinados a estimular la eficacia y a promover la simplificación procesal; habida cuenta son estructuras procesales dotadas

además de las garantías procesales con la finalidad de dotar al sistema de mecanismos procesales que permitan atender las necesidades de celeridad procesal en marco del equilibrio entre garantía y eficacia.

El proceso inmediato.

Para definir el proceso inmediato es preciso, dirigiéndonos a la naturaleza de su configuración, así podremos notar que este es uno de los procesos especiales que se distingue del proceso común, entendiéndose como un proceso excepcional que fundamenta su aplicación en la simplificación, celeridad y eficacia procesal. Hecha la consideración anterior es preciso contemplar la noción básica del término inmediato.

El carácter de inmediato.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2017) Inmediato puede definirse como: “Que sucede enseguida, sin tardanza”.

Desde las perspectivas precedentes es necesario ensayar una conceptualización ahora desde su función; así, tendríamos que el proceso inmediato es un medio que sirve para resolver los conflictos de relevancia jurídico penal con el objeto de alcanzar una respuesta inmediata o rápida en los casos en los que las circunstancias que comprenden a los hechos no requieren una mayor actuación indagatoria y probatorio, ya que los elementos de convicción son lo suficientemente contundentes y diáfanos para debelar toda duda y presunción.

El proceso inmediato es un proceso especial, que, en favor de la celeridad procesal, obvia la fase de investigación preparatoria propiamente dicha y la etapa intermedia cuando se presentan determinados supuestos; es decir, luego de culminar con las diligencias preliminares, por las características particulares de los casos materia de investigación, se acude, en mérito a este proceso, directamente a la fase de juzgamiento. (Ore, 2016, p. 7)

Según se ha citado, el Proceso Inmediato es una clase de Proceso Especial que difiere en forma y actuaciones del proceso ordinario *-hoy en día proceso común-* fundamentándose en la facultad del Estado para organizar la respuesta del sistema penal con criterios propios al de razonabilidad y eficacia; así lo reconoce

el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CM16. “Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está prevista para aquellos casos en los que no se requiera mayor investigación para el fiscal logre su convicción” (Reyna, 2015, p. 107). En consecuencia, se puede aseverar que el proceso inmediato tiene como fin principal, evitar la etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia para dar paso a la etapa de juzgamiento.

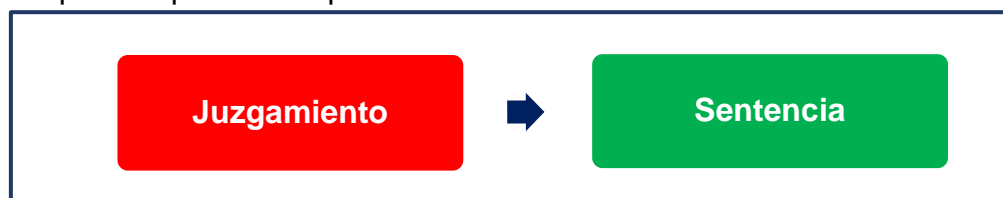
Ahora bien, si se consideran los fundamentos del proceso especial como materia de análisis, debemos de abordar el espíritu de la norma, advirtiéndose que este procedimiento simplificado se inspira en la necesidad de resguardar a los sujetos agraviados por la trasgresión del bien jurídico en particular.

Por un lado, la suficiencia de elementos de convicción es una circunstancia objetiva que permite advertir con indicios de verosimilitud la intervención del imputado en el hecho perseguible penalmente. Es tarea del fiscal analizar si cuenta con suficientes elementos de convicción para comprobar la culpabilidad del presunto autor. Esta tarea implica determinar si se cuenta o no con una causa probable y si las pruebas obtenidas son suficientes. (Cuba, 2016, p. 13)

De los anteriores planteamientos se deduce que el surgimiento del proceso inmediato se fundamentaría en la ineficiencia de los mecanismos que comprenden al proceso penal ordinario o común, ya que no puede afrontar la saturación y la creciente demanda procesal que se incrementa de mano de los índices de la delincuencia común. Es en este contexto que surge la tesis de un proceso especial impregnado del espejismo de un proceso garantista que pregona una relación directa entre la eficacia y las garantías procesales.

Figura 5

Etapas del proceso especial inmediato.

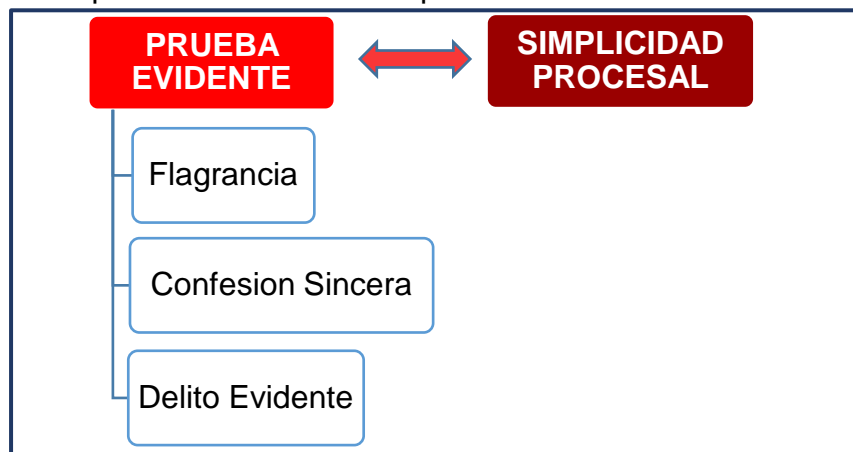


Fuente: Adaptación del Manual de Derecho Procesal Penal (Reyna 2015).

Por lo tanto, el proceso inmediato se acciona toda vez que se tengan las circunstancias extraordinarias que permita justificadamente obviar o quitar algunas fases del proceso penal, en este caso en concreto se tiene la supresión de la fase preparatoria, fase intermedia y parte de la etapa de juzgamiento. “El procedimiento inmediato atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el proceso penal. La finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria” (Sánchez, 2009, p. 364). Por las consideraciones anteriores, se admite la necesidad de la diferenciación del proceso, y con ello se genere la regulación de vías diversas al proceso común, permitiendo atender los casos con eficacia y de manera racional.

Figura 6

Presupuestos materiales del proceso inmediato.



Fuente: Adaptación de la exposición de motivos del D.L. 1194.

Como puede observarse en la figura precedente, el proceso inmediato está compuesto por elementos materiales para su configuración como lo son la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad o simplicidad procesal; dichos elementos han sido reconocidos en el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria.

7° Sin duda, el proceso inmediato nacional –de fuente italiana–, en clave de legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta, primero, en la noción de “simplificación procesal”, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin mengua de su efectividad; y, segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de “evidencia delictiva”

o “prueba evidente”, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo.

Por consiguiente, en la medida que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente.

Antecedentes históricos del proceso inmediato.

El proceso inmediato como institución jurídico procesal no es una figura nueva en el ordenamiento jurídico, ya que se ha mantenido por años en nuestro cuerpo normativo, sin embargo, cobra notoriedad gracias a los Decretos Legislativos que reforma su aplicación –D. L N° 1194 y D.L N° 1307-

El proceso inmediato tiene sus referencias en el ordenamiento italiano de 1988, que regula el *giudizio direttissimo* (artículo 449o a 452o) y el *giudizio immediato* (453o a 458o), donde en el primero es posible la prescindencia de la etapa intermedia y el juzgamiento expedito de los hechos. Los presupuestos procesales para su aplicación son detenciones flagrantes, confesión del imputado del hecho delictivo (*giudizio direttissimo*) o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado (*giudizio immediato*). (Araya, 2009, p.90)

Así mismo, el anclaje jurídico italiano ha servido para poder desarrollar esta figura que obedece al sistema Euro continental, legando su utilidad y aporte a la realidad nacional.

Giudizio Direttissimo (El juicio directo) [...] consiste en la directa presencia del delincuente ante el juez enjuiciador sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar. El juicio directo italiano procede ante dos supuestos. El primero es cuando la persona ha sido detenida en flagrante delito, [...]. El segundo es cuando la persona ha confesado los hechos durante el interrogatorio. (Martínez, 2015, p. 589)

En tal sentido, surge en la práctica procesal penal los mecanismos expeditos y fundados en simples criterios de eficiencia y economía procesal, esto se genera a raíz de una sociedad carente de soluciones inmediata y menos engorrosas, actuando de manera semejante al proceso inmediato de hoy en día.

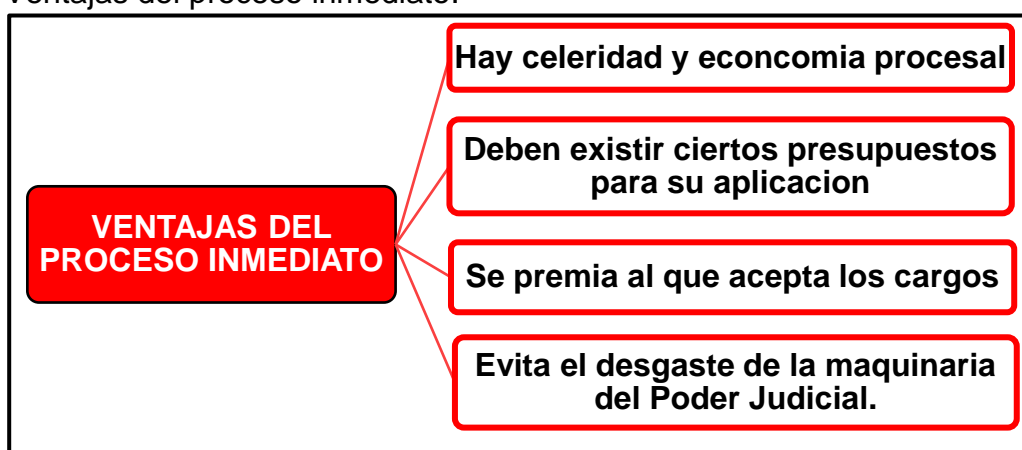
Giudizio Immediato (El juicio inmediato) [...] en este caso, el Ministerio Público puede solicitar directamente al juez, de investigación preliminar que tenga lugar el

juicio inmediato cuando el acusado haya sido interrogado sobre los hechos cuya prueba es evidente después de la investigación. (Martínez, 2015, p. 589)

En referencia a la clasificación anterior, se debe entender que es de la escuela italiana de donde surgió el sentido del proceso penal. Así mismo, es preciso acotar que estas dos instituciones se limitan a la supresión de las diligencias preliminares, dejando salvo las etapas necesarias para el decurso de un proceso con las garantías debidas; empero, nuestro proceso especial garantiza la supresión de la etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y parte de la etapa de juzgamiento; mutilando así el respeto por los principios procesales que ungen de legalidad y garantizan la defensa del individuo frente a la acción punitiva del estado.

Figura 7

Ventajas del proceso inmediato.



Fuente: Elaboración propia.

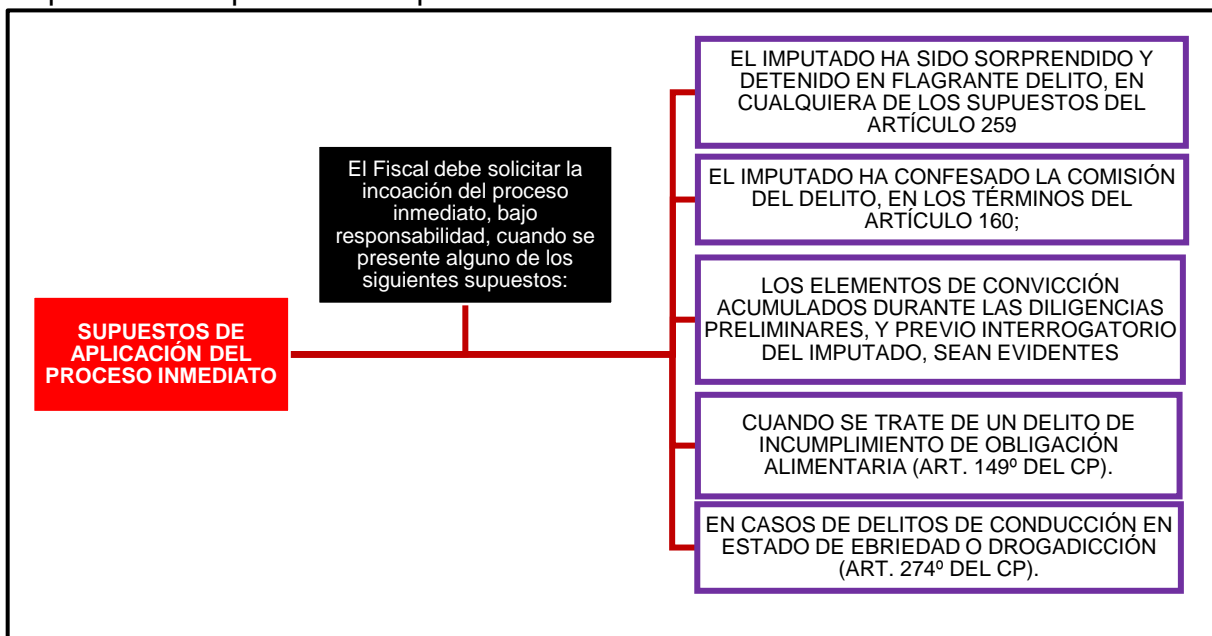
Supuestos de aplicación o de procedencia del proceso inmediato.

La calidad excepcional del proceso inmediato exige una interpretación estricta de la norma que deberá de emplearse de manera equilibrada entre la eficacia procesal y las garantías procesales; por lo antes expuesto es de suma importancia detallar que este proceso y sus supuestos ya estaban regulados desde la promulgación del D.L 957 (Código Procesal Penal promulgado el 29 de julio del año 2004), que recogía estos supuestos en el artículo N° 446; sin embargo, el Derecho al ser una Ciencia Social se adecua a las necesidades de la sociedad y evoluciona junto a ella. Es esta necesidad social lo que reviste de fundamento la dación del Decreto Legislativo N° 1194 (Vigente desde el 29 de

noviembre del año 2015), norma que varía significativamente lo estipulado en el texto original en lo referente al proceso inmediato.

Figura 8

Supuestos de aplicación del proceso inmediato



Fuente: Adaptación del Artículo N° 446 del Nuevo Código Procesal Penal.

Por lo tanto, la característica más relevante del proceso inmediato es su celeridad a consecuencia del recorte de la actividad probatoria por falta de necesidad de la misma, de tal modo se debe tener en consideración que cuando se tratan de procesos penales que comprenden pluralidad de sujetos, la sujeción al proceso inmediato se encuentra condicionado a que todos ellos se encuentren comprendidos en los supuestos de aplicación de la indicada vía procedimental.

Hecha la consideración anterior, es necesario notar que la tramitación de un proceso en la vía inmediata se inicia con el requerimiento Fiscal ante el Juez de la Investigación Preparatoria, por otro lado, la oportunidad procesal para el requerimiento es luego de la conclusión de las diligencias preliminares o hasta antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, en concordancia con estos requisitos la norma establece los siguientes supuestos de procedibilidad:

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. En cualquiera de los supuestos del artículo 259. (Inc. 1.a del art. 446 del D.L

957 modificado por el D.L 1194)

Este supuesto sufrió una modificación con respecto a su redacción original, ya que anteriormente este supuesto no incluía lo contenido en el artículo 259° del mismo cuerpo normativo, lo que además debemos de suponer porque no dice lo contrario.

En consecuencia, para poder encuadrar algún caso en concreto bajo este supuesto, debemos de remitirnos al artículo 259° del Decreto Legislativo 957 – Nuevo Código Procesal- que regula los supuestos de detención policial en los casos de flagrancia delictiva, amparando en su contenido: la flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta; sin embargo, este artículo fue tantas veces modificado en vista a la contradicción que guardaba con la Constitución Política, toda vez que el máximo intérprete de la Carta Magna estableció la necesidad de concurrencia de dos elementos para que se configure la flagrancia, requisito *sine qua non* por tratarse del derecho de la restricción del derecho a la libertad; estos son: La inmediatez temporal y la inmediatez personal.

4. Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: a) **inmediatez temporal**, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes; b) **inmediatez personal**, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. (Tribunal Constitucional, STC. N° 2096-2004-HC/TC, 2004)

Cabe agregar que esta posición difiere contundentemente con el supuesto de flagrancia presunta reconocido por el artículo 259° del Decreto Legislativo 957, toda vez que la flagrancia es un fenómeno que se debe de ver y no probar. Empero, el legislador parece haber olvidado que la ciencia procesal penal debe aplicarse en articulación con las garantías constitucionales, esto se materializa con la promulgación la ley N° 30558 publicada el nueve de mayo del año en curso, a mérito del cual se modifica la duración de la detención policial trasmutando el plazo máximo de 24 horas a 48 horas.

De por sí, la figura de la flagrancia presunta concita una marcada crítica, de la

modificatoria establecida por el Decreto Legislativo 1194, es de notarse el despropósito en la ampliación del plazo de detención de 24 a 48 horas ya que esto significa un retroceso en el campo de las garantías constitucionales, infiriéndose que el Sistema de Justicia se encuentra limitado para poder garantizar un proceso que respete la libertad y dignidad del ser humano, hecha la consideración anterior es de considerarse que mientras más estrecha sea nuestra libertad más ancho será el margen para que impere el abuso del poder.

Acercamiento a la Flagrancia Delictiva.

El delito flagrante es aquel acto delictivo que se realiza en presencia de una o más personas o cuando se es descubierto inmediatamente después de cometido el acto delictivo, debiendo para ello existir instrumentos relacionando con el hecho cometido, este acto soporta características y elementos para ser considerada como tal. “Para que exista el delito flagrante, el requisito es que este se haya consumado, esto es que la acción u omisión punible del autor se haya manifestado objetivamente” (Borja, 2009, p. 33). En este mismo orden de ideas, se debe de amparar la noción de flagrancia como algo latente y evidente que no amerite ni el más mínimo esfuerzo por probar el acto delictivo.

Aun así, nuestro marco normativo ampara este supuesto bajo el rotulo de flagrancia. “El termino flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya observación convence al testigo de que esta presenciando la comisión de un delito” (San Martín, 1999, p, 807). Haciendo hincapié en la característica singular que debe de guardar este delito advertido, de manera que el observador tenga la plena seguridad sin duda alguna de la comisión de un acto delictivo y de la identificación visual del hecho detonante en el tipo penal que se estuviera cometiendo, por ende, la perpetración debe de ser escandalosa y ostentosa, sin estos requisitos considero que no podríamos hablar de flagrancia por que la duda invadiría esta figura haciéndola caer.

Es preciso tomar en consideración la visión normativa comparada respecto de la figura de flagrancia; así tenemos que:

En República Dominicana, en el artículo 41 del Código de Procedimiento Criminal,

se conceptúa la flagrancia de la siguiente manera: “Se comete en la actualidad o acaba de cometerse. Se reputa también flagrante delito, el caso en que el inculpado sea acusado por el clamor público, y el que se halle con objetos, armas, instrumentos o papeles que hagan presumir ser el autor o cómplice del delito; con tal que esto suceda en un tiempo próximo o inmediato al del delito”.

En México, en el Código Federal de Procedimientos Penales, Capítulo IV del Título V, artículo 193, se contemplan los casos de flagrancia. En la última reforma, se indica que al hecho de que pueda encontrarse en poder del inculpado instrumentos o productos del delito se le suma la posibilidad de que aparezcan huellas o indicios, que hagan presumir fundadamente su participación.

En Colombia, reconociendo formalmente la realidad de las expresiones de la flagrancia, en el artículo 370 del Código Procesal Penal se puede leer que: “(...) hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él o cuando es perseguida por la autoridad o cuando por voces de auxilio se pide su captura”. (Gaceta Jurídica, 2010, p. 12)

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160. (Inc. 1.b del art. 446 del D.L 957 modificado por el D.L 1194)

Este supuesto para la aplicación del proceso inmediato, también ha sufrido la modificatoria de su texto, ya que se ha incrementado la parte in fine, que asienta el fundamento normativo de la confesión del procesado que además esta intrínsecamente relacionado en el proceso como un acto de defensa material.

Para la comprensión de este supuesto nos remite al artículo 160° del mismo cuerpo normativo, lo que debe de suponerse en vista que no dice lo contrario, ahora bien, lo que ahí se estipula es lo siguiente:

Artículo 160. Valor de prueba de la confesión

1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra.

2. Solo tendrá valor probatorio cuando:

- a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción;
- b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas;
- c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y,
- d) Sea sincera y espontánea.

Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30076, pub. el 19/08/2013.

Como se observa, la confesión de la comisión del delito no debe de ser una confesión menguada ni dudosa, ya que solo tendrá valor probatorio cuando, sea verdadera y debidamente corroborado con otros elementos probatorios, cuando esta confesión sea espontánea y libre eso nos recalca que bajo ninguna circunstancia se ampara la tortura para la obtención de la confesión; así mismo, se tomara por válida su confesión si esta es prestada en compañía de su abogado frente a un juez o un fiscal, claro está todos estos presupuestos obedecen a principios constitucionales que la jurisprudencia ha venido rindiendo culto a estos últimos años como es de verse de las sentencias de la corte suprema referente al tema de la confesión.

Por lo demás, no se puede analizar de manera aislada la confesión del imputado, ya que esta confesión va ligada a la comisión de un delito, del cual no se tiene la menor duda, se aprecia cierto desdén por el principio de presunción de inocencia y para que ello tenga asidero legal, debe de configurarse bajo la comisión de un delito flagrante; concretamente, debemos entender la confesión verosímil, libre y consiente, como aquel reconocimiento que hace el sujeto de la realización de un hecho delictivo, con el fin de coadyuvar a la administración de justicia.

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. (Inc. 1.c del art. 446)

Este supuesto no ha sido afectado por la última modificatoria establecida en el D.L 1194, de la lectura podemos entender que los actos primigenios es decir hasta antes de cumplir los 30 días de formalizada la investigación preparatoria, deben de expresar la existencia de un hecho delictivo con relevancia penal, determinados además de mera plena y concreta la participación del sujeto imputado.

El delito evidente no tiene una referencia legislativa específica. Sin embargo, con arreglo a su acepción literal, un delito evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin la menor duda. Cuando la ley hace mención a la determina da prueba evidente, exige una prueba que inmediatamente, esto es *prima faccie*, persuada de su correspondencia con la realidad. (Mendoza G.G., 2016, p. 245)

Como si no fuera suficiente, la intervención que se ejerce en la funcionalidad del Ministerio Público, entendiendo que este es un Órgano Autónomo del Estado, al compelerlo a perseguir los delitos bajo el procedimiento del proceso inmediato, sino, además ahora se le está dictando las formas de cómo debe de realizar su trabajo, exigiéndosele además del cumplimiento de los plazos que por cierto son perentorios. Ahora bien, no se trata de poner en tela de juicio la capacidad de los persecutores de la acción penal, empero, necesitamos resguardar los intereses del procesado que lo único que le ampara hasta el momento es la presunción de inocencia, la misma que buscara ser derruida por el poderío estatal.

d) Por tratarse de los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente código. (Inc. 4 del art. 446 del D.L 957 modificado por el D.L 1194)

Este supuesto es insertado con la última modificatoria al proceso inmediato, como podemos advertir en el caso de la Omisión a la Asistencia Familiar, en adelante OAF, no cumple con las cualidades de un delito flagrante, por ello debe de ser admitida como presupuesto la evidencia probatoria y ausencia de complejidad; ahora bien, si se considera el apremio que surge ante la necesidad de los alimentos es comprensible que la tramitación procesal de este delito, no puede estar expuestos a los formalismos y ritualismos de un proceso común.

Se debe realizar un real dimensionamiento del impacto de los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en la seguridad ciudadana, para no atizar expectativas ilusas en el sentido que su procesamiento en el proceso inmediato sería una herramienta idónea para afrontar los problemas de seguridad ciudadana. (Mendoza F.C., 2017, p. 209)

Tal como se ha visto, en la descripción de realidad problemática en la presente investigación, la errónea aplicación de la política criminal deja carta abierta a sendos excesos normativos, más aún si lo que se quiere es combatir la inseguridad a nivel nacional; ahora bien, podemos asevera que con el confinamiento carcelario del padre omitente a las obligaciones alimentistas flaco favor se hace a la seguridad ciudadana.

En esa misma línea, el tipo penal de *Omisión* es un *tipo especial propio*, que responde a la capacidad de actuar del individuo (Reátegui, 2014). Este individuo además debe de gozar de plena capacidad motora y psíquica. Aun se advierte que el individuo *omite dolosamente* en su beneficio y en perjuicio del agraviado, se estaría incurriendo en grave atentado contra la seguridad jurídica, si consideramos que en el proceso inmediato la capacidad económica del sujeto activo no puede ser materia de probanza.

Por otro lado, el delito de conducción en estado de ebriedad en adelante CEE, se tiene la comisión de este delito cuando una persona a pesar de haber consumido bebidas alcohólicas, conduce un vehículo automotor, este delito se encuadra sin lugar a dudas en el supuesto de flagrancia delictiva, es precisamente bajo este supuesto en el que amerita la utilidad de las salidas alternativas propuestas en el numeral 3 del artículo 447° del mismo cuerpo normativo, con ello se estaría evidenciando lo que se ha denominado como *terrorismo procesal*, ya que en total indefensión el sujeto que apenas cobra lucidez se ve conminado a decantarse por el principio de oportunidad, con el único fin de no transitar el inhóspito procedimiento administrativo con lo que podría obtener una prisión preventiva si así lo discrimina la discreción del juzgador; aun así, con el principio de oportunidad el “*ranqueado delincuente*” afronta una alta posibilidad de ser sentenciado a una pena que importe la pérdida de su libertad.

Es evidente entonces que, en la exposición de motivos de la norma del proceso inmediato, se amplan datos estadísticos de inseguridad, también es cierto que reflejan la gran cantidad de proceso por la comisión de OAF y CEE denotando que la inclusión de este supuesto al proceso inmediato obedecería primordialmente, a la carga y congestión que representan en la realidad procesal del país.

El proceso inmediato en el ordenamiento jurídico nacional.

Se tiene al proceso inmediato previsto en el código procesal penal en su libro quinto, titulado los Procesos Especiales, sección primera comprendiendo los artículos 446, 447 y 447; sin embargo, este cuerpo normativo ha sido modificado; en consecuencia, tenemos el Decreto Legislativo N° 1194 (2015), la misma que

realiza algunas precisiones sobre este proceso especial, así tenemos el siguiente articulado:

➤ **Artículo 446.- Supuestos de aplicación.**

Artículo modificado por el Artículo 2 del D. Legislativo. N° 1194, pub. el 30/08/2015.

➤ **Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.**

Artículo Modificado por el Art. 2 del D. Legislativo N° 1307, Pub. el 30/12/2016.

➤ **Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato.**

Artículo Modificado por el Art. 2 del D. Legislativo N° 1307, Pub. el 30/12/2016.

En el ámbito normativo la flagrancia está contenida en el artículo 259° del código procesal penal que establece facultades expresas, otorgándole así policía nacional del Perú de detener sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito, ante ello se puede considerar como supuestos de flagrancia, así tenemos la flagrancia estricta sensu: conforme lo reconoce los incisos 1 y 2 del articulado antes citado, en este supuesto no existe la huida del sujeto.

La cuasi flagrancia o flagrancia material: regulado en el inciso 3, en este caso el sujeto que perpetra el hecho delictivo ha huido, pero su aprehensión se realiza inmediatamente, estaríamos en la situación en el que el autor es percibido, es perseguido y detenido y la flagrancia presunta: regulada en el inciso 4, en este caso no se ha sorprendido al autor al momento de la comisión del hecho criminal, solo existen indicios de su comisión.

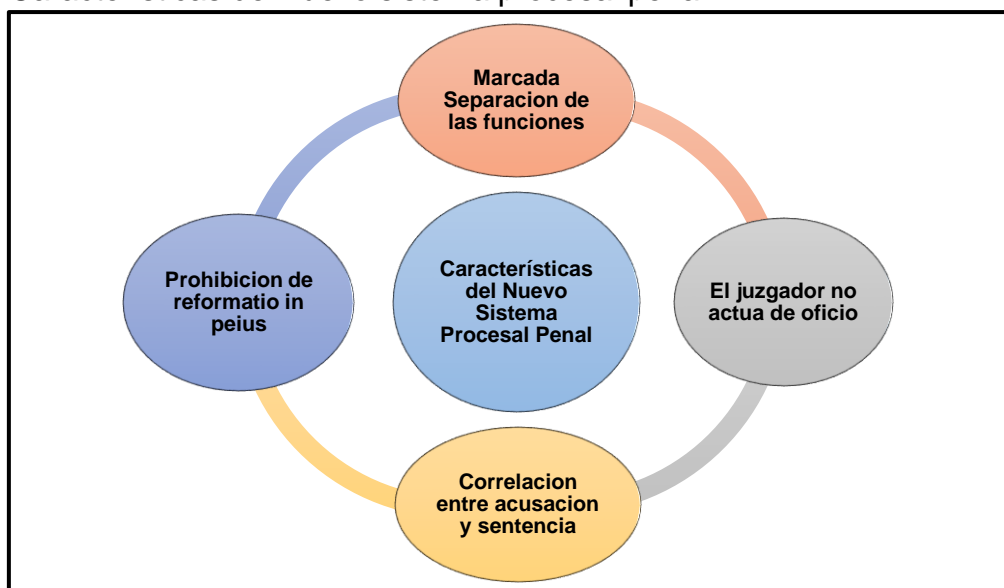
Ahora bien, este proceso especial es una novedad del D.L 957 inspirado en el nuevo modelo procesal penal, ya que en el antiguo sistema procesal penal no se encontraba regulado. Dejándose la precisión que se recoge en el único plenario que se celebró para determinar la diferencias entre acusación directa y proceso inmediato, es decir en el acuerdo plenario N° 6 del 2010 que no tardo en reconocer que el proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran suficientemente desarrollado en el artículo 446° NCPP.

El nuevo modelo procesal penal.

A diferencia del modelo mixto, sistema bajo el cual se encuentra el código de procedimientos especiales de 1940, este nuevo modelo procesal, ha venido instaurándose en los diferentes sistemas procesales que abrazan la estructura Euro-continental; sin embargo, es preciso acotar que este no es ningún modelo nuevo, ya que nace en Italia a fines de 1988, revolucionando desde ya el proceso penal. “Este sistema, basado en el principio acusatorio, redefine los roles tanto del fiscal como del juez, y le asigna al primero la responsabilidad de investigación y persecución, mientras que al segundo la decisión o fallo” (Arbulú, 2014, p. 20). Como podemos ver este nuevo modelo procesal se caracteriza primordialmente por confiar íntegramente la responsabilidad de la persecución del delito, mediante los apremios de la investigación delictiva.

Figura 9

Características del nuevo sistema procesal penal.



Fuente: Adaptación de los Manuales operativos (Academia de la Magistratura, 2007).

Esta cercanía entre el modelo adversarial y el acusatorio se aprecia con nitidez en ciertos aspectos específicos. Uno de ellos es la posición del fiscal. En la medida que el fiscal es considerado en ambos modelos como una parte procesal más sobre la que recae la carga de la prueba, es exigible que su actuación sea neutral (principio de imparcialidad) y objetiva (principio de objetividad). Esto determina que el Fiscal tenga la obligación de revelar evidencia exculpatoria a la defensa del imputado. (Reyna, 2015 p. 49)

Conocido en el medio como el modelo acusatorio con rasgos adversariales, trae consigo la exigencia de la oralidad ya que es la piedra angular de este nuevo modelo procesal que emplea esta cualidad como instrumento cualificado de comunicación en el proceso, y por antonomasia se podría decir, con la oralidad se garantiza el principio de la publicidad, implantándose como eje, un concierto de audiencias; a la par podemos observar que se ha incrementado el espectro de los principio acusatorios como lo detallamos líneas arriba.

Así mismo la implementación de este nuevo modelo procesal importa una reforma de importante trascendencia en el ámbito jurídico, como se ha podido apreciar este nuevo modelo procesal demarca su real importancia en su desarrollo dinámico; con la que se torna obligatorio el respeto por los principios que la compone; advertimos además que el acceso a la justicia a través de la jurisdicción, se ve mucho más asequible, puesto que propugna la supresión del tiempos innecesarios vertidos en los formalismos del sistema instaurado y aún vigente, garantizando una mayor concordancia del proceso penal con un Estado Constitucional de Derecho; y, son los operadores del derecho los llamados a resguardar que el cumplimiento de la función del derecho procesal no se dé a cualquier costo o que se prepondere por encima de las garantías constitucionales.

Hay que destacar que con este nuevo modelo procesal penal se apunta y direcciona hacia un derecho penal reparador. En contraposición a un derecho penal sancionador; del mismo modo hacia una justicia restaurativa frente a una justicia retributiva. Hoy en día lo que se requiere es un derecho penal que resuelva conflictos mediante alternativas de solución inter partes con la propuesta de soluciones inmediatas y dentro del marco legal, respetando los derechos y garantías inherentes a las partes involucradas. (Rosas, 2013 p. 25)

En este marco de ideas, el nuevo modelo procesal penal responde a una moderna concepción del Estado; así mismo es con este nuevo sistema que se marca el inicio del respeto a los derechos, garantías procesales y al debido proceso. “la configuración del sistema acusatorio –propio de un Estado de Derecho– se deriva de la constitucionalización de los principios procesales” (Academia de la Magistratura, 2007, p. 27). Se observa claramente que este nuevo sistema acusatorio con rasgos adversariales en el que se funda el D.L N°

957, arraiga estas características inicialmente en su título preliminar que recoge la *ratio legis* de este Nuevo Código Procesal Penal; estableciéndose un proceso común para todos los delitos sin excepción, con lo que se defenestra el proceso sumario del sistema procesal penal.

Por todo lo antes mencionado, el modelo acusatorio con rasgos adversariales que adopta el Nuevo Código Procesal Penal; es un sistema garantista –predominante en los sistemas jurídicos europeos continentales- que busca la reducción de los márgenes de arbitrariedad y desigualdad, con ello busca la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de ciertos elementos de un modelo que permite la obtención de los fines del proceso penal, los mismos que están asociados al respeto y realización de los Derechos Fundamentales. Así bien, este modelo se fundamenta sobre los siguientes cuatro principios:

- ✓ El principio acusatorio
- ✓ El principio de igualdad de armas
- ✓ El principio de inviolabilidad del derecho a la defensa
- ✓ El principio de oralidad y publicidad

Los Principios en el nuevo modelo Procesal Penal.

Como ya lo sentencio en su oportunidad Beloso (como se citó en San Martín, 2015). “En ese sentido, los principios configuran las líneas directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente respetadas para lograr el minio de coherencia que supone todo sistema procesal” (p. 55). Entonces, los principios son los que dan forma al sistema de enjuiciamiento a través de los lineamientos estructurales a fin de resguardar los principios constitucionales, ya que es te nuevo modelo de corte acusatorio con rasgos adversariales funda su operatividad en la vigencia de un estado constitucional de Derecho.

El Estado Social y Democrático de Derecho o Estado Constitucional de Derecho reconocido en el artículo 43° de nuestra Constitución y desarrollado por el Derecho constitucional, se fundamenta especialmente en la defensa de los derechos fundamentales y la consagración de las garantías para la defensa de la persona humana y su dignidad, tal como estipulan los artículos 2°, 3° y 139° de la Constitución Política del Estado. (Gálvez, 2017, p. 33)

Según se ha citado, los operadores del derecho se encuentran sometidos a las exigencias de los principios procesales, castigando con la nulidad la inobservancia de los mismos.

1.- El Principio Acusatorio.

El nuevo modelo acusatorio trae consigo la más importante de las innovaciones siendo esta la separación de funciones de los operadores jurídicos en el proceso penal; revistiendo a la acusación con el valor que da sentido al proceso penal. “La acusación es la piedra angular del procedimiento y del juzgamiento, esta exigencia permite al imputado conocer el contenido de la acusación formulada para que pueda hacer mejor uso de su derecho de defensa” (Peña, 2016, p. 73). De lo antes citado se puede entender que esta separación de funciones representa se materializa con la imparcialidad del juzgador y por ende la acusación debe de ser ejercida por un tercero distinto al que tiene el rol decisor; esta función del representante del ministerio público está contenido en el título preliminar del D.L. N° 957.

Artículo IV.- Titular de la acción penal

1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.

2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. (...)

(Artículo modificado por el artículo 3° de la Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto de 2013)

En sumarias consideraciones, se corroboró que la vigencia del principio acusatorio en el procedimiento penal, permite garantizar la imparcialidad de los órganos que administran justicia, despojando al juez de las tareas persecutorias para dar paso a un juez decisorio y a un Juez de garantías.

Este principio, reconocido por la constitución y previsto en el inciso 1 del artículo 356 del D.L 957, radica en el imperio que ostenta el titular del ejercicio de la acción penal para perseguir y formular la acusación ante la jurisdicción penal, con

fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba válida y contra el sujeto agente debidamente identificado. “El principio acusatorio guarda relación con otro principio: el de imparcialidad del juez que le permite que su rol decisor no se contamine con uno de persecución que le corresponde a la fiscalía” (Arbulú, 2014, p. 50). Por las consideraciones anteriores se debe relacionar en primer orden con la atribución otorgada al Ministerio Público, quien goza de la exclusividad para incoar el proceso penal. Por otro lado, el máximo intérprete de la constitución política nacional se ha pronunciado al respecto sosteniendo.

5. (...) Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. Ello implica, por tanto, que el órgano jurisdiccional se encuentre vinculado a los términos de la acusación fiscal, específicamente en lo concerniente a la imputación penal (ello en mérito a la condición del Ministerio Público como titular de la acción penal ya mencionada). (Sentencia Exp. N° 72742006-PHC/TC)

De lo antes citado podemos resaltar la relación directa que guarda este principio con la atribución del Ministerio Público, lo que denota quizá, su característica más importante; y, es precisamente esta característica la que delimita la actuación del juzgador quien no podrá asumir funciones acusatorias. En concreto, Todo inicio de un proceso tiene que ser a pedido del fiscal, el juez no puede ir más allá, por lo tanto, sin acusación previa no hay juicio oral.

2.- El Principio de Igualdad de Armas.

Este principio es recogido en el artículo I, numeral 3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal (D.L 957).

Artículo I.- Justicia Penal

3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. (...)

Este principio es de suma importancia en el proceso penal, toda vez que busca proveer de las mismas posibilidades a la parte imputada como al persecutor del delito; buscando la paridad procesal, garantizando a los involucrados en un

proceso penal, similares medios de ataque y de defensa. “El principio de igualdad de armas reconoce un trato procesal igualitario entre los contendores dentro del proceso penal” (Reyna, 2015, p. 50). Así, mismo es preciso señalar que es en el ámbito de la defensa del imputado donde se encuentra de manera relevante este principio que está muy relacionado con el derecho a la defensa.

Como antecedente, se debe de considerar que en el modelo mixto que precede del nuevo modelo acusador con rasgos adversariales -reconocido por el Nuevo Código Procesal Penal- los Jueces y Fiscales reflejaban cierto recelo con las pruebas que ellos obtenían lo que denotaba la presencia de un sistema inquisitivo. Sin embargo, hoy en amparo del nuevo modelo procesal penal, el abogado defensor, así como los demás sujetos procesales no sólo podrán enterarse de la información que haya conseguido el Fiscal o la Policía, sino que además podrán obtener copia de la documentación que a su consideración le son útiles para el ejercicio de una defensa adecuada.

De lo antes mencionado se aprecia que en las innovaciones que el Nuevo Código Procesal Penal implementa se rige por los principios garantistas, a fin de resguardar los derechos que están inmersos en el proceso.

Todo esto se da, básicamente a que el presente Código recoge el principio de igualdad de armas, con el que se borra principalmente las desigualdades entre fiscal y abogado defensor, convirtiendo a ambos en adversarios con igual posibilidad de acceso a los elementos probatorios. (Cáceres e Iparraguirre, 2017, p. 839)

Ahora bien; este principio tiene presencia y mayor relevancia cuando nos referimos a las actuaciones procesales que se despliegan en la base del nuevo sistema procesal que comprende un modelo adversarial. “En el Proceso Penal dicha relación confrontacional toma lugar entre la Defensa del imputado y el representante del Ministerio Público” (Peña, 2016, p. 751). En el mismo marco de lo antes citado se advierte que el principio de igualdad de armas se torna necesario en especial en el Juicio Oral, donde se puede apreciar el despliegue de los mecanismos de defensa y acusación.

A manera de colofón, es de suma importancia recalcar que tanto el órgano persecutor como la defensa, deben de contar con similares instrumentos y

herramientas de defensa y contradicción, ya que se encuentran en un escenario que garantiza una relación horizontal.

3.- El Principio de Inviolabilidad del Derecho de Defensa.

El derecho a la defensa constituye una garantía constitucional a mérito del cual el procesado o investigado cuente con las posibilidades idóneas para hacer frente a las imputaciones del Ministerio Público.

El derecho de defensa, como principio rector, debe entenderse en su sentido lato, es decir, sus efectos no se circunscriben al inicio del proceso penal propiamente dicho, sino que a partir de que una agencia estatal promueve y exige la comparecencia de un individuo (fase del sumario, de investigación preliminar, diligencias preliminares, etc.), este ya se encuentra premunido con el irrestricto derecho de defensa, a partir de actos concretos de defensa material como a la asistencia letrada (técnica). Desde el primer momento en que se dirige sobre un individuo un requerimiento formal o se producen actos de coerción sobre aquel (detención en flagrancia, medidas limitativas y restrictivas de derechos), sea por los órganos de persecución o por mandato jurisdiccional, rige de forma irrestricta el derecho de defensa. (Peña, 2016, p. 87)

Entonces, se puede aseverar que el principio de inviolabilidad del derecho de defensa importa que tanto el imputado como su abogado no pueden estar impedidos de alegar en el proceso ante un tribunal a fin de justificar sus derechos. En ese orden de ideas, la prevalencia de este principio es de fundamental relevancia ya que es reconocido no solo por la normativa interna sino, por las normas internacionales como:

Observaciones del Derecho a la Defensa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Reconoce el derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de su defensa, en el siguiente articulado:

Art. 14.-

1. "(...) Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías (...) en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella (...).
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”.

Observaciones del Derecho a la Defensa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Reconoce este principio procesal, siendo recogido en el siguiente articulado.

Artículo 8. Garantías judiciales.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) c. Concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”.

Observaciones del Derecho a la Defensa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Reconoce la importancia del derecho de defensa como garantía fundamental, en el siguiente articulado:

Artículo 11.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

De los articulados antes mencionados se puede rescatar el factor común que radica en el otorgamiento de los medios adecuados para la preparación de la defensa. Ahora bien, este principio está contemplado además en el inciso 14 del artículo N°139 de la Constitución Política del Perú;

Observaciones del Derecho a la Defensa en el Nuevo Código Procesal Penal.

Además, este principio es recogido en el título preliminar de la norma adjetiva, que a la letra dice:

Artículo IX.- Derecho de Defensa

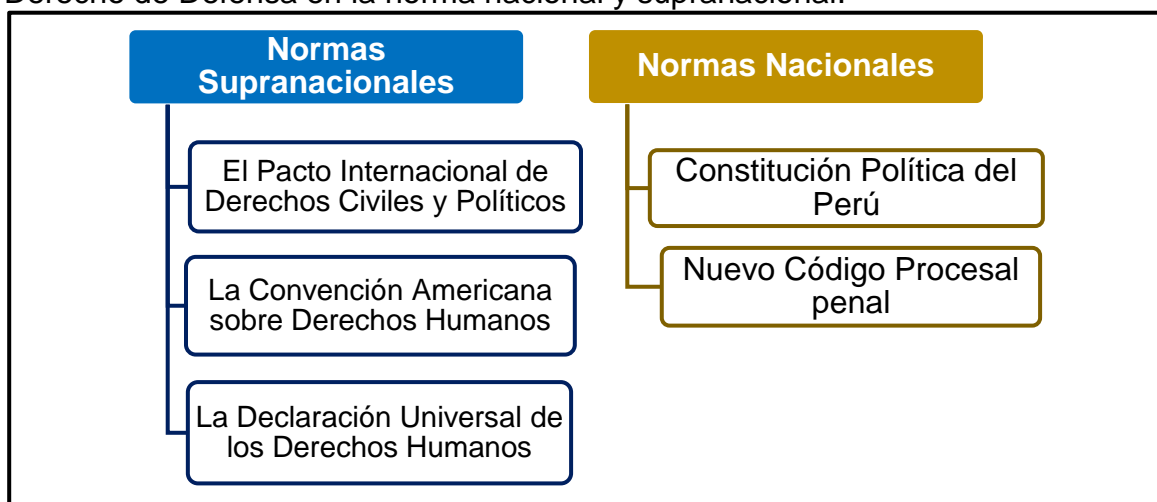
1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que

prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes.

Ahora bien, el principio de inviolabilidad del derecho de defensa cobija en sus distintas formas de protección integral de los derechos constitucionales que se reconocen en el proceso penal. Para Binder (como se citó en Nakasaki, 2017). “El derecho de defensa no puede tener limitaciones”. De un análisis directo se puede decir que el derecho a la defensa debe acudir en defensa de la persona ante todas las etapas de un proceso, por lo que su limitación en la práctica significaría un peligro latente contra esta institución, en consecuencia, no es exigible la existencia de una imputación formalizada y concreta contra el individuo ya que el derecho a la defensa se genera desde una simple imputación, aun siendo menguada o informal.

Figura 10

Derecho de Defensa en la norma nacional y supranacional.



Fuente: Elaboración propia.

Sobre la constitucionalización del Derecho de Defensa.

Abordar el estudio del derecho de defensa sin duda dirige las prerrogativas al análisis constitucional de esta figura procesal, ahora bien, como se ha mencionado este principio es de aplicación imperativa en el proceso inclusive antes de que se haya instaurado un proceso penal formal –esto se materializa con el auto de apertura de instrucción-, esto garantizado por la Constitución Política en los siguientes termino.

Trigésimo Sexto.- El derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y, otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso (STC N° 06260-2005-HC/TC).

El Derecho a contar con un abogado defensor,

Reconocido por nuestra carta magna, llegando en el acápite del derecho de la defensa en el artículo 139°, inciso 14° donde se contempla lo siguiente: “principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención, tiene derecho a comunicarse personalmente con el defensor de su elección y a ser asesorado por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. Ahora bien, la asistencia de un abogado defensor debería de ser exigible con las cualidades de una defensa adecuada y veraz.

El Derecho de Contradicción,

inmerso en el principio de inviolabilidad al derecho de defensa y en el principio de igualdad de armas, se encuentra el principio de contradicción, reconocido además por nuestra constitución, resguardando que tanto el acusador, acusado o imputado, cuenten con las mismas prerrogativas para acceder a la jurisdicción a fin de hacer valer sus respectivas pretensiones, propugnando la igualdad procesal.

El plazo razonable como extensión del Derecho de Defensa.

No se puede trasgredir un Derecho Constitucional como lo es el derecho de defensa y el plazo razonable; así, se puede aseverar que en el primer caso, el plazo está determinada por la norma y es taxativa; lo que difiere tremendamente con el plazo razonable, ya que, este plazo surge ante la necesidad concreta de tiempo para ejercer de manera digna uno de los derechos inmersos en el proceso – *Derecho a la Defensa*-.

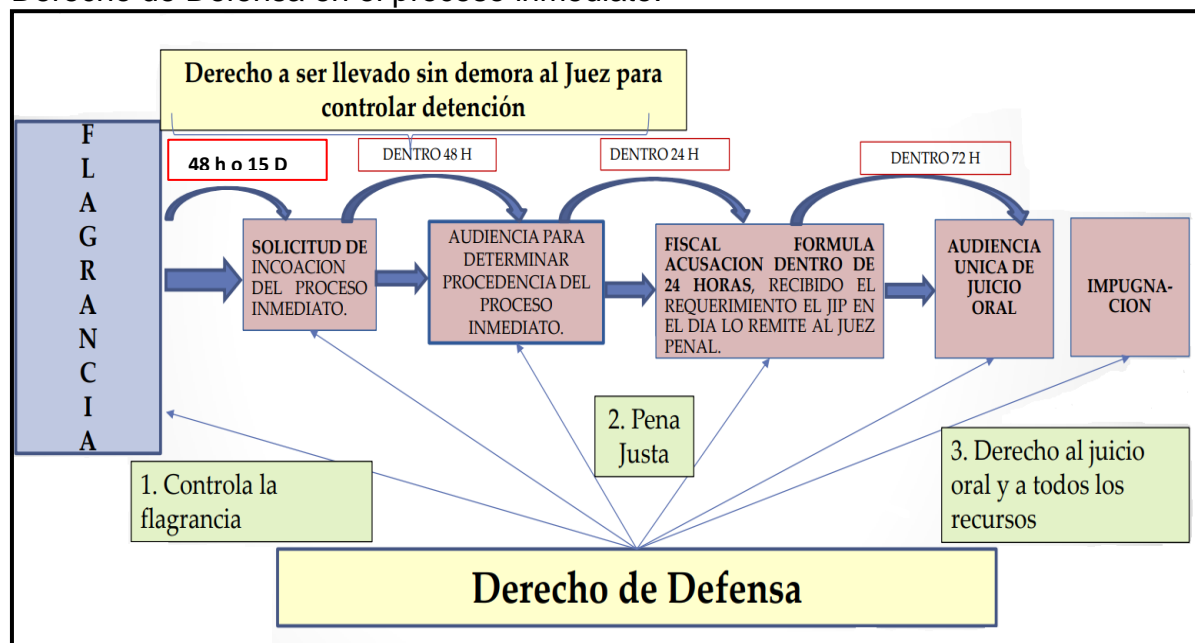
La configuración del plazo razonable atiende a la complejidad o no del caso. Si el

objeto del proceso es un caso fácil, entonces el plazo necesario para la satisfacción de su objeto será breve. Empero, no debe asumir fictamente cumplido su objeto por la mera flagrancia, y con ello anular la garantía del plazo razonable. (Mendoza, F.C., 2017, p. 30)

El nuevo modelo procesal, configura el derecho de defensa desde una perspectiva más amplia, garantizando al sujeto imputado la relevancia de su defensa; por otro lado se tiene que el derecho de defensa está regulado por distintos ordenamientos jurídicos en concordancia con las normas contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales; así, en el numeral catorce del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado de 1993, se establece como garantía de la Administración de Justicia, el no ser privado del derecho de defensa en cualquier estado del proceso.

En concordancia con lo antes mencionado, es evidente que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra. Toda persona imputada de la comisión de un delito, tendrá derecho, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.

Figura 11
Derecho de Defensa en el proceso inmediato.



Fuente: Conferencia: "El proceso inmediato: Retos y Desafíos" (Burgos).

4.- El Principio de Oralidad y Publicidad.

La oralidad implica la realización de los principales actos del proceso a través de actos orales, empero, para que esto sea posible es necesario juntar a las partes y al tribunal en un mismo local o espacio físico, cual es la sala de audiencia y hacerles partícipes simultáneos de los actos.

La oralidad es una característica inherente al juicio oral e impone que los actos jurídicos procesales constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se realicen utilizando como medio de comunicación la palabra proferida oralmente; esto es, el medio de comunicación durante el juzgamiento viene a ser por excelencia, la expresión oral, el debate contradictorio durante las sesiones de la audiencia. (Cubas, 2009, p. 44)

En la fase de los debates se determina la existencia de la inmediación en esta fase procesal, tanto en la apreciación de la prueba como las posiciones de las partes en el proceso (presentación del caso, informes orales conclusivos, etc.). Ahora bien, la oralidad presenta ventajas sobre la escritura consiste en la posibilidad de apreciar los testimonios de manera directa, este acto está regulado por el artículo 361 del Nuevo Código Procesal Penal.

Artículo 361°. - Oralidad y registro

1. La audiencia se realiza oralmente, pero se documenta en acta. El acta contendrá una síntesis de lo actuado en ella y será firmada por el Juez o Juez presidente y el secretario. Los Jueces, el Fiscal, y la defensa de las partes pueden hacer constar las observaciones al acta que estimen convenientes. Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico, según el Reglamento que al efecto dicte el órgano de gobierno del Poder Judicial.

Así, mismo la publicidad, es una de las innovaciones del nuevo sistema procesal, dejando abierta la posibilidad de un acto procesal ventilado y transparente a diferencia de lo que se tenía en los procesos sumarios.

Formulación del Problema.

Esta etapa de la investigación, es conocida también como el planteamiento del problema, fuera cual fuera la nominación es preciso recordar que esta es una de

las más importantes etapas ya que es a raíz del hallazgo de una problemática que surge la necesidad de una investigación.

En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable; depende de cuan formalizado este el investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p.36)

Podemos inferir que la necesidad de investigar surge del planteamiento del problema. “Un problema se define como una situación colectiva en la es posible identificar los elementos que la causan, cuando esto se logra se tienen elementos para un buen planteamiento” (Ávila, 2006, p.35). Determinándose así la naturaleza sustancial para el presente trabajo de investigación.

Como se habrá observado, la formulación de un problema asume generalmente la forma de una pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizada la investigación. Dicho de otro modo, el objetivo fundamental de la investigación es resolver precisamente dicho problema de conocimiento (encontrar la respuesta) y su éxito deberá medirse entonces antes que nada para la claridad pertenencia y precisión de dicha respuesta. (Sabino, 1992, p.42)

Como pudimos ver, el planteamiento o formulación del problema o la problemática, se presenta con cuestionamientos que deberán buscar respuestas validas en la investigación.

Problema General.

¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal?

Problema Especifico 1.

¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio?

Problema Especifico 2.

¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas?

Problema Especifico 3.

¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa?

Justificación del Estudio.

En esta fase se pretende exponer de manera concreta el para qué del presente estudio. “Consiste en brindar una descripción sucinta de las razones por las cuales se considera válido y necesario realizar la investigación; dichas razones pueden ser convincente de manera que justifique la inversión de recursos, esfuerzo y tiempo” (Monje, 2011, p. 69). En consecuencia, este rubro de la investigación funciona como un filtro para determinar la relevancia de un trabajo de investigación.

Se debe de considerar, que una investigación o tesis debe de contener una utilidad para el conocimiento científico y por ende para la sociedad.

La justificación del problema debe siempre surgir (es preciso recalcarlo) a partir de preguntas. Podríamos decir que cuanto mayor número de respuestas se contesten positivas y satisfactoriamente, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización, en cuanto a su conveniencia: ¿Qué tan conveniente es la investigación?, es decir, ¿para qué sirve?; relevancia: ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿Quiénes se beneficiaran con los resultados de la investigación? [...]. (Ramos, 2014, p. 123)

El presente estudio de investigación, guarda en sí mismo una justificación de corte teórica, práctica y metodológica, mediante los cuales se fundamenta y se determina la razón de su realización.

Justificación Teórica.

Todo trabajo de investigación que importe un debate académico debe de asumir una justificación basada en lo teórico. “Razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto de conocimiento” (Cortés y Iglesias, 2004 p. 15). El presente proyecto de investigación respecto a las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, se justifica teóricamente en el aporte al reconocimiento de los principios rectores del nuevo modelo procesal

penal y de su relación con las garantías procesales, con el firme propósito de contrastar la realidad práctica de la aplicación del proceso inmediato con lo establecido en la normatividad nacional.

Justificación Práctica.

La justificación práctica tiene su razón de ser en la función de coadyuvar en la solución del conflicto materia de investigación. “Razones que señalen que la investigación propuesta ayudara en la solución de problemas o en la toma de decisiones” (Cortes y Iglesias, 2004 p. 15). El presente estudio asegura su justificación práctica en la aplicabilidad, de las conclusiones y recomendaciones que surgen a mérito del análisis de lo que implica el proceso inmediato y las garantías procesales reconocidos, en los principios rectores del nuevo modelo proceso, que se viene vulnerando con la simplificación procesal; así mismo se como resultado de la presente investigación se postulara, una revisión exhaustiva del marco normativo con la finalidad de establecer los límites de la actuación punitiva del Estado, y delimitar los parámetros que deben tenerse presente por los operadores de justicia en cuanto a los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, con el propósito de resguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas, estableciendo modelos procesales que sean acordes a un Estado de Constitucional de Derecho, en beneficio de la sociedad.

Justificación Metodológica.

Habiéndose establecido los parámetros de la metodología de investigación, es preciso que su empleo sea justificado. “Razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación” (Cortes y Iglesias, 2004 p. 15). En el presente proyecto de investigación relacionado con las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, elaborado íntegramente bajo el enfoque cualitativo, siendo además, del tipo descriptivo; asegura su justificación metodológica en los aportes obtenidos por medio de los instrumentos y formatos de validación a través de las entrevistas, encuestas, cuestionamientos y el fichaje con el respeto por las formas establecidas en el marco metodológico y en atención al manual académico de referencias y citas (APA - sexta edición).

Objetivo.

A lo largo de la investigación, el problema planteado puede alcanzar diversas soluciones por ello es recomendable la formulación de los objetivos.

Un aspecto definitivo en todo proceso de investigación es la definición de los objetivos o del rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse. Así, los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientara a lograr estos objetivos. (Bernal, 2010, p. 97)

En el presente trabajo, se han perfilado los objetivos acordes a la problemática del cual se ha desarrollado ampliamente por ser un trabajo académico. “El investigador además de delimitar el problema básico (...), debe señalar concretamente sus objetivos de manera que responda a la pregunta ¿Qué pretende alcanzar con esta investigación? O en otras palabras ¿a qué resultado se pretende arribar?” (Jiménez, 1998, p.31). Se colige entonces que los objetivos son los fines que deseamos alcanzar con la investigación.

Objetivo General.

El objetivo general de una investigación es amplio y de manera general. “Contiene los grandes lineamientos teleológicos de lo finalmente queremos conseguir con la investigación” (Arazamendi, 2009, p. 61). Así debemos considerar este el eje para determinar los objetivos específicos; en el presente proyecto de investigación abraza el siguiente objetivo general:

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Objetivo Específico.

En búsqueda de la crítica directa y consiente, los objetivos específicos guardan una aplicación particular. “Son los concreto y definitivos, las metas inmediatas las cuales arribara el investigador, sus resultados son singulares” (Arazamendi, 2009, p.71). Una vez establecido el objetivo general es preciso señalar los siguientes objetivos en el presente estudio.

Objetivo Especifico 1.

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio.

Objetivo Especifico 2.

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas.

Objetivo Especifico 3.

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.

Supuestos Jurídicos.

Los supuestos, son los elementos de la investigación que cumplen una labor de orientación y guía en la estructuración del trabajo de investigación.

Suposición o conjetura verosímil, de relaciones entre hechos o fenómenos sujetos a comprobación. Proposición tendiente a generalizarse la cual se probará por medio de los resultados obtenidos de una muestra recolectada en un proyecto de investigación. Debe expresar relación entre dos o más variables y enunciar claramente cómo se va a comprobar esta relación. (Monje, 2011, p.82)

En la investigación en concreto, los supuestos jurídicos, cumplen el rol directriz de una posible solución. “La formulación de la hipótesis constituye un proceso del conocimiento hacia la posible ley desde el punto de vista formal es una conjetura o suposición que se expresa en forma de enunciado afirmativo” (Cortes y Iglesias, 2004, p. 22). De esto se colige que la formulación de determinadas suposiciones conlleva a un planteamiento de solución adecuado.

Supuesto Jurídico Principal.

Se advierten críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Supuesto Jurídico Especifico 1.

Se evidencia la vulneración al principio acusatorio por la aplicación del proceso inmediato.

Supuesto Jurídico Especifico 2.

Se evidencia la vulneración al principio de igualdad de armas por la aplicación del proceso inmediato.

Supuesto Jurídico Especifico 3.

Se evidencia la vulneración al principio de inviolabilidad del derecho de defensa por la aplicación del proceso inmediato.

II MÉTODO

El presente trabajo de investigación se elaboró bajo el enfoque cualitativo, ya que es menester del desarrollo de esta investigación, el informar con claridad y contundencia acerca de lo advertido en la sociedad nacional sujeta a imperio de lo normativo. “Enfoque cualitativo: su propósito es describir y evaluar las respuestas generalizadas, con el objetivo de explicarlas y así comprobar las hipótesis y obtener conclusiones, en el análisis cualitativo es las frecuente en la entrevista o en las preguntas abiertas” (Gómez, 2012, p. 82). En esa misma idea podemos aseverar que el enfoque cualitativo consiste en analizar la magnitud y trascendencia de los presupuestos aplicado en el presente trabajo, así mismo busca conocer la aceptación o rechazo de los entendidos en el tema, sobre las propuestas o postulaciones que se presentan, así como determinar la viabilidad o inviabilidad de los supuestos elaboradas y diseñadas.

En el presente proyecto de investigación relacionada con las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, se rige por el enfoque cualitativo ya que asume una perspectiva holística del proceso penal, así mismo; busca la descripción del fenómeno social frente a las vulneraciones de los principios rectores del proceso penal sin la necesidad de desglosar variable alguna, para analizarlas con el empleo de las técnicas estadísticas.

2.1 Tipo de investigación.

Determinar la tipología y diseño es de vital importancia en la investigación jurídica, en tanto señalan la naturaleza, contenido y procedimiento metodológico a seguir. Podemos aseverar la importancia de la ubicación del tipo de estudio en el cual se encauza toda investigación académica. “Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir” (Tamayo, 2003, p. 44). De lo desarrollado por este metodólogo se puede inferir que es necesario saber qué tipo de investigación deseamos desarrollar, para así poder usar los métodos adecuados y orientar los resultados.

De acuerdo al fin que persigue.

El presente estudio es una investigación básica. “A la investigación pura se le da el nombre de básica o fundamental, se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios” (Rodríguez, 2005, p. 22). En esa misma línea, la presente investigación, es una investigación básica, porque busca como resultado el desarrollo de una teoría fundada en principios y leyes, con una aplicación práctica e inmediata. “Cuyo objetivo es generar un conocimiento encaminado a explicar y predecir la realidad, tanto natural como social” (Pacheco y Cruz, 2006, p.44). Con lo antes expuesto, es preciso señalar que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar la aplicación del proceso inmediato, a través de mecanismos adecuados

De acuerdo al tipo y nivel de conocimiento que se obtiene.

La presente investigación es Explicativa. “Su objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o al menos, las condiciones en que ellos se producen” (Sabino, 1992, p, 46). La presente investigación que se relacionó con las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal; es una investigación explicativa, porque pretende analizar y dar a conocer el fenómeno social del proceso inmediato y las vulneraciones de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal; a fin de identificar la fase en la que se estarían vulnerando los principios antes acotados; así también los efectos que causa en la sociedad.

2.2 Diseño de investigación.

La definición del diseño de investigación esta intrínsecamente ligado con el tipo de investigación que se desea realizar.” El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández et al., 2016, p.128). En resumen, se podría decir que son las directrices de un plan de investigación al cual se debe ceñir nuestra investigación.

Por lo antes mencionado es preciso sostener que el diseño de la investigación, consiste en la elección de las pericias y el método que se empleara en el trabajo de investigación. “El diseño de la investigación es un planteamiento de la investigación en el cual se plasma una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas” (Gómez, 2012, p. 36).

De lo previamente citado, se puede concluir que el presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado en el diseño: **Teoría Fundamental**; por ser una investigación de esquema cualitativa, este diseño emplea un proceso sistemático del enfoque cualitativo con la finalidad de genera una teoría a fin de explicar a nivel conceptual la interacción de un sistema en un contexto concreto (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). Así mismo, la actual investigación de enfoque cualitativo, obedece al diseño: **Estudio de Caso**.

Análisis de personas, eventos, decisiones, periodos, proyectos, políticas, instituciones u otros sistemas que son estudiados holísticamente por uno o más métodos. El caso que es objeto de la indagación será una instancia de una clase de fenómenos que proporciona un marco analítico dentro del cual se lleva a cabo el estudio. Dentro de este, el caso contribuye a iluminar y explicar el fenómeno (su clase o a este). (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 386)

Para la materialización de estos diseños se empleará el uso de cuestionarios especializados y recolección de datos bibliográficos, así como, análisis de la jurisprudencia a fin de responder el planteamiento del problema.

2.3 Caracterización de sujetos.

La caracterización de sujetos, importa la cualificación de los expertos que serán claves para entender la problemática. Se tiene en cuenta la opinión de sujetos expertos en un tema. “en esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y que características deberán tener los sujetos” (Bernal, 2010, 160). De lo antes expuesto se puede inferir que el uso de la caracterización se emplea en estudios cualitativos y explorativos.

En el presente trabajo de investigación, se ha tomado en cuenta por el grado de participación y de afectación a los sujetos involucrados en la aplicación del proceso inmediato, estos son los siguientes:

Tabla 1

Caracterización de sujetos.

Nombre	Profesión	Especialidad	Cargo	Experiencia
Liliana Aliaga Cabrera	Abogada	Penal - Procesal Penal	Fiscal Superior	Doctora en Derecho / Fiscal Superior de la 2° Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada
Carlos Matamoros Curipaco	Abogado	Penal - Procesal Penal	Fiscal Superior	Doctor en Derecho / Fiscal Superior Especializado contra la Criminalidad Organizada
Renán Franklin Lapa Rivas	Abogado	Penal - Procesal Penal	Procurador Público	Procurador Público Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Asistente de Juez superior
Carlos Miguel Villa Ortiz	Abogado	Penal - Procesal Penal	Abogado Litigante en materia Penal	Procurador del Ministerio de Justicia / Profesor de Penal y Procesal Penal / Abogado penalista litigante
Cesar Augusto Nakazaki Servigón	Abogado	Penal - Procesal Penal	Abogado Litigante en materia Penal	Profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Ética profesional / Abogado penalista litigante a cargo de los casos más complejos en materia penal de los últimos años / Autor de libros en materia Penal y Procesal Penal.
Francisco Celis Mendoza Ayma	Abogado	Penal - Procesal Penal	Juez Superior	Profesor de Derecho Penal, Procesal Penal / Juez Superior de la Sala Penal Nacional / Ensayista y escritor de libros en observancias al proceso inmediato.
Ruth Mariela Ponce Ormeño	Abogada	Penal - Procesal Penal	Juez supernumerario Especializada en lo Penal	Jueza del Tercer Juzgado de Investigación preparatoria de la Corte de Ventanilla (enero – junio de 2016)
Paola Luz Valdivia Sánchez	Abogada	Penal – Procesal Penal	Juez Titular Especializada en lo Penal	Jueza del Octavo Juzgado Unipersonal de Lima, Fiscal de Prevención del Delito
Walter Enrique Molina López	Abogado	Penal - Procesal Penal	Juez supernumerario Especializada en lo Penal	Juez de Investigación preparatoria de la Corte de Ventanilla (mayo – diciembre de 2016)

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Población y Muestra.

La población es el conjunto de sujetos que se caracterizan por ser hacia quienes están dirigidos los instrumentos de recolección de datos. “Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre característica común de un grupo de seres u objetos” (Rodríguez, p. 79). En consecuencia, la muestra de la presente investigación de enfoque cualitativa vendría a ser los mismos integrantes de nuestra población.

a) Población y muestra demográfica.

En la presente investigación tenemos a los siguientes expertos en la materia.

Tabla 2

Relación demográfica.

N°	Población / Muestra
1	Liliana Aliaga Cabrera
2	Carlos Matamoros Curipaco
3	Renán Franklin Lapa Rivas
4	Carlos Miguel Villa Ortiz
5	Cesar Augusto Nakazaki Servigón
6	Francisco Celis Mendoza Ayma
7	Ruth Mariela Ponce Ormeño
8	Paola Luz Valdivia Sánchez
9	Walter Enrique Molina López

Fuente: Elaboración propia.

b) Población y muestra documental

En la presente investigación se obtendrá el análisis de los siguientes documentos.

Tabla 3

Relación documental.

N°	Población / Muestra
1	Proyecto de Ley N° 5391/2015-CR
2	Casación N° 842-2016 Sullana
3	Casación N° 692-2016 Lima Norte
4	Resolución N° 2 (Exp. 12-2016) - Lima
5	Caso Exp. N° 00186-2016-1JR-PE-03
6	Legislación comparada (Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Honduras)

Fuente: Elaboración propia.

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez.

Para la elaboración de todo trabajo de investigación se hace necesaria la recopilación de datos, y así poder contrastar la información teórica con las variables del tema de investigación.

Los métodos y técnicas que se seleccionen y la construcción de los instrumentos de recolección de datos deben responder a los objetivos de la investigación, a la forma de plantear el problema y la hipótesis que pretende probarse, todo ello respondiendo a un determinado marco teórico y conceptual. En la investigación no basta seleccionar las técnicas idóneas y construir adecuadamente los instrumentos para recabar la información empírica o cualitativa; es necesario aplicarlos correctamente, de acuerdo con una estrategia metodológica que tome en cuenta las circunstancias particulares en las que se lleva a cabo su utilización. (Bijarro, 2015 p. 57)

De lo antes citado, podemos aseverar que son a través de estos elementos que se obtendrán conocimiento objetivo y preciso para el análisis correcto de la problemática de la presente investigación.

Técnicas de recolección de datos.

A fin de abordar la problemática advertida en el primer punto de la presente investigación; se emplearan las siguientes técnicas de recolección de datos.

- a) La entrevista.-** A través de esta técnica el investigador concurre con los especialistas que luego de una razonada discreción elige para someterlo a cuestionamiento. “La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un problema que se investiga” (Cortes y Iglesias, 2004 p. 37). Ahora bien, los especialistas a los que se entrevistó en el desarrollo de la presente investigación están compuestos por jueces de investigación preparatoria, fiscales, abogados públicos y particulares así como el procurador en asuntos judiciales del Estado, de quienes se obtuvieron información especializada.
- b) Análisis de documentos.-** En la aplicación de esta técnica se buscará el estudio concienzudo de documentos previamente seleccionados que servirán para conseguir corroborar los objetivos de la presente

investigación; ahora bien, en la presente investigación se realizó el análisis de un proyecto de ley y diferentes resoluciones jurisprudenciales que guardan relación directa con el objetivo general.

c) Análisis normativo.- Esta técnica importa la aplicación de los conocimiento epistemológicos del investigador y dominio de las diferentes técnicas de interpretación de la norma; para la presente investigación Se realizó el análisis normativo comparado con la finalidad de contrastar las disposiciones normativas de Latinoamérica con la normativa local a efectos de observar el cumplimiento de los objetivo de la investigación.

d) Análisis de caso.-Esta técnica guarda relación directa con el tipo de investigación en el que se desarrolla el presente trabajo académico. “Es un examen sistemático de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una persona, un proceso (...) se refieren al análisis de un fenómeno social” (Monje, 2011, p, 117). Ahora bien, en la presente investigación se desarrolló el análisis de un caso comprendiéndose el análisis de lo dispuesto en primera y segunda instancia con incidencia directa en los objetivos que comprende el trabajo académico.

Instrumentos de recolección de datos.

Los instrumentos se emplearán con el afán de administrar de manera eficiente el empleo de las técnicas de recolección de datos.” Son las herramientas utilizadas por el investigador en la recopilación de los datos, las cuales se seleccionan conforme a la necesidad de la investigación en función de la muestra elegida” (Muñoz, 2011, p. 241). Estos instrumentos son necesarios para la elaboración del trabajo de investigación.

En la presente investigación, a fin de registrar con absoluta veracidad los alcances de la problemática y la corroboración de los objetivos se emplearon los siguientes instrumentos: La guía de entrevista, la guía de análisis jurisprudencial, la guía de análisis de casos y la guía de análisis normativo comparado.

2.6 Métodos de análisis de datos.

Como lo determino en su oportunidad Kerlinger (como se citó en Ávila, 2006). “El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación”. En esa línea de ideas, en el presente trabajo se utilizarán el Método de Análisis Sistemático y Hermenéutico, del ordenamiento Jurídico y de la Jurisprudencias con la finalidad des desmembrar las actuaciones de los operadores del derecho en los procesos denominados, procesos especiales; siendo necesario el empleo de los siguientes métodos de análisis:

a) Método Inductivo: Este método, consiste en la obtención de conclusiones generales partiendo del análisis de un caso en particular.

Inducción es el proceso de razonamiento que analiza una parte de un todo y va desde lo particular a lo general, o de lo individual a lo universal. Es un método de investigación empírico que parte de la observación casuística de un fenómeno, hecho, evento o circunstancia para analizarlo, lo que permite formular conclusiones de carácter general que suelen convertirse en leyes, teorías y postulados. De esta forma, sus conclusiones son de carácter general. (Muñoz, 2011, p. 215)

Con lo antes expuesto, se puede aseverar que este método se empleó en la fase discusión, ya que se obtuvieron los datos de los análisis jurisprudenciales de donde se partió para establecer las afirmaciones generales.

b) Método Argumentativo: Este método consiste exteriorizar los mensajes o ideas que contiene el texto sometido a la investigación, para ello es preciso mantener un orden a fin de establecer las relaciones lógicas que existe entre la construcción semántica y lo que se quiere expresar; este método se empleó ampliamente en la fase del Marco Teórico en la elaboración de los .parafraseo e interpretación, por lo que además se empleó en la fase de discusión.

c) Método Sistemático: El empleo de este método se materializó primordialmente cuando se analizó los datos recolectados de los instrumentos, ya que esta información obtenida se contrastó con lo desarrollado por los trabajos previos y lo establecido por los doctrinarios en la sección de teorías

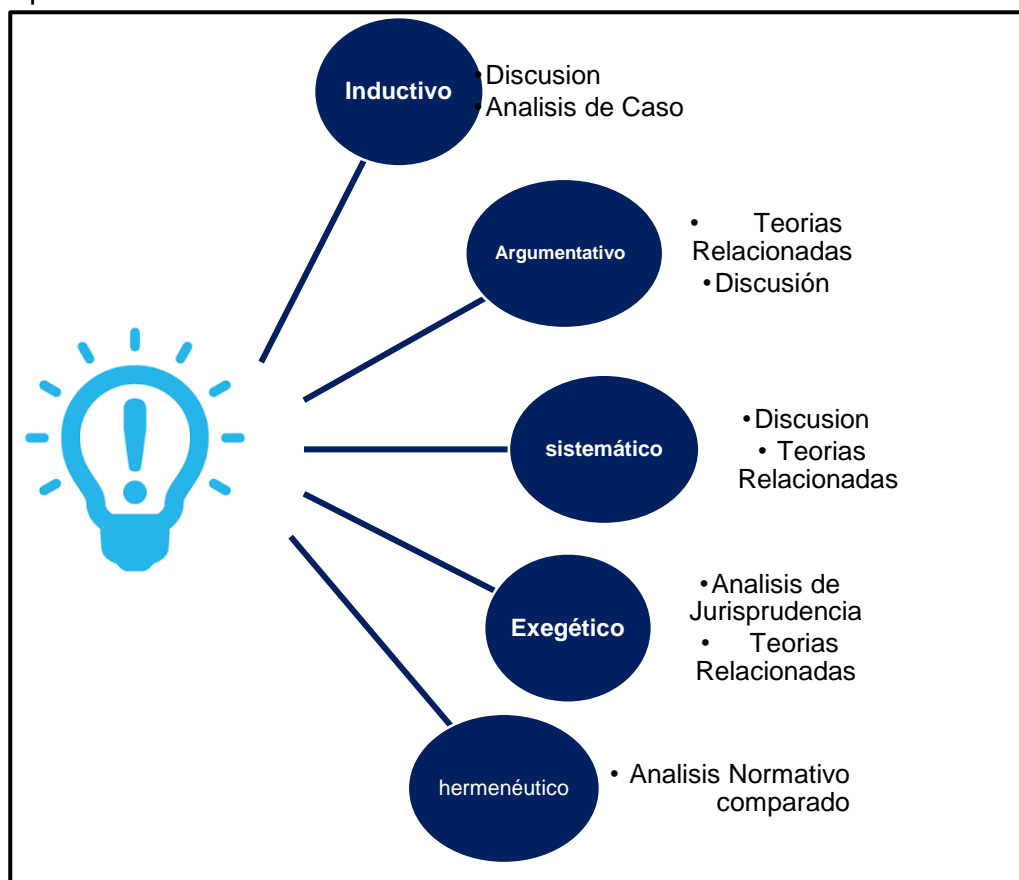
relacionadas. “Un sistema es un conjunto de elementos íntimamente relacionados que pretenden satisfacer un objetivo común, en donde cada uno de sus elementos tiene una relación interactiva con los demás elementos, tanto internos como externos” (Muñoz, 2011, p. 215). Así mismo es preciso señalar que este método se empleó para el análisis normativo comparado desarrollado en la presente investigación.

d) Método Exegético: Este método, consiste en la interpretación literal de los textos, en virtud a ello se empleó en el análisis literal o natural de los textos normativos del ámbito nacional e internacional.

e) Método Hermenéutico: Con el empleo de este método, que se fundamenta en la interpretación del deber ser del texto o norma materia de análisis, con la ayuda de la hermenéutica se analizara el contenido de la norma que contempla el marco de la presente investigación a fin de comprender su sentido.

Figura 12

Aplicación de los métodos de análisis



Fuente: Elaboración Propia.

2.7 Unidad de análisis: Categorización.

Las unidades de análisis del presente trabajo de investigación son las siguientes:

Tabla 4

Categorización de las unidades temáticas

Unidad Temática	Categorías	Sub Categorías	Técnicas de recolección de datos
Críticas a la aplicación del Proceso Inmediato	Crítica	Objetiva, Razonada	Análisis de Entrevistas
	Aplicación	Directa, Adecuada, Oportuna	
	Proceso Inmediato	Mecanismo, Especial, Simplificación	
	Perspectiva	Visión	
Perspectiva de los Principios Rectores del Nuevo modelo Procesal Penal	Principios Rectores	Fundamentos, Garantías	Análisis de Jurisprudencia
	Nuevo Modelo Procesal Penal	Adversarial, Euro-Continental, Acusatorio	
			Análisis Normativo

Fuente: Elaboración propia.

2.8 Aspectos éticos.

Esta fase de la investigación está orientada básicamente para que el investigador asuma de manera indubitable la necesidad de una reproducción autentica enmarcado en los valores éticos antes durante y después de la elaboración de su investigación; es en merito a ello que el presente estudio, ha desarrollado cada etapa del presente trabajo con sumo deber ético y profesional, reflejándose ello en el crédito reconocido para los autores de quienes se tomó las aportaciones justas y suficientes para enriquecer el desarrollo de esta investigación para ello, se empleó el manual de publicaciones de la American Psychological Association (APA), en su Sexta edición.

Así mismo, es preciso conminar tanto a los operadores del Derecho que al momento de realizar el cuestionario, sean respondidos con transparencia y de manera totalmente objetiva, resguardando la intimidad de las personas.

III. RESULTADOS

En este capítulo de la investigación, es donde primordialmente se exponen los resultados de la investigación, en otras palabras, es donde se cotejarán los datos obtenidos y recolectados mediante la aplicación de los instrumentos previamente validado, conllevando a un análisis y ordenamiento con el fin de la descripción, de los datos obtenidos; así mismo, esta presentación puede hacerse con cuadros, gráficos, tablas o mapas semánticos con el propósito de establecer de manera clara y concreta las afirmaciones o negaciones obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos.

Se presentan en forma organizada, mediante la categorización, la clasificación y ordenamiento de los resultados, a qué se llegó en la tarea de investigación. En él se deben exponer de manera ordenada los datos y resultados de la investigación y explicarlos suficientemente. (Domínguez, Sánchez y Sánchez, 2009, p. 47)

De los antes expuesto, se debe de tener presente que esta sección no solo importará una copia literal de los datos obtenidos, sino el sistemático ordenamiento y breve explicación de los resultados recolectados. “Desde un punto de vista lógico, **analizar** significa descomponer un todo en sus partes constitutivas (...). La actividad opuesta y complementaria a ésta es la **síntesis**, que consiste en explorar las relaciones entre las partes estudiadas” (Sabino, 1992, p.150). Para la descripción de los resultados se emplearán los métodos de análisis de datos descriptivo, exegético, sistemático y hermenéutico.

El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y/o preguntas formuladas, y las teorías o presupuestos planteados en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no, y se generan debate con la teoría ya existente. (Bernal, 2010, p. 220)

Por las consideraciones anteriores, después de la recopilación de los datos contenidos en los cuestionarios de las entrevistas realizadas, así como el análisis documental de la jurisprudencia, normas internacionales y casos, queda expedito el camino para el examen de los resultados de manera provechosa para los fines de la presente investigación, es precisamente en estos aspectos donde radica la importancia del análisis de los resultados para la presente investigación metodológica.

3.1 Descripción de los resultados de la técnica de entrevista.

El presente apartado contiene como finalidad la descripción metódica, ordenada y sistemática de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, para la cual se empleó el instrumento del cuestionario.

La técnica empleada es la entrevista, la misma que se aplicó de manera directa a los especialistas que han tenido incidencia directa y relevante en torno a la aplicación del proceso inmediato. En ese orden, esta sección está ordenada tomando en consideración el objetivo general que pretende Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal. En consecuencia, de los cuestionarios vinculados al objetivo general podemos hallar los resultados que analizaremos a continuación.

El incremento de la criminalidad como fundamento para la implementación de mecanismos de simplificación procesal.

En torno La ratio legis del proceso inmediato.

De los datos obtenidos en las entrevistas se tiene que **Aliaga, Lapa, Molina y Matamoros (octubre de 2017)**, coinciden en afirmar que no existe relación en el incremento de la delincuencia con la implementación de un proceso simplificado como lo es el proceso inmediato, aseverando que el crecimiento de la criminalidad responde a causas que reflejan un sistema social decadente carente de una política criminal seria, por lo que la simplificación procesal es un mecanismo empleada por el estado principalmente para la persecución procesal, garantizando el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional ya que para su aplicación se debe de configurar la concurrencia de los elementos probatorios, siendo este el su finalidad y no la de frenar el incremento de la delincuencia.

Concluyendo que el proceso inmediato como mecanismo de simplificación procesal no constituye una respuesta al incremento a la delincuencia sino a los procesos que no requieren mayor controversia, con fin de dar una respuesta judicial inmediata. En esa misma línea el Magistrado, **Mendoza (13 de octubre de 2017)**, sostiene que:

El proceso inmediato si bien en sus inicios fue propagandizado mediáticamente en la idea de que con la simplificación procesal se iba a combatir la criminalidad, (...) es por eso que no encontramos una suerte de relación entre la simplificación procesal y el combate con la criminalidad **es como si se pretendiera combatir con una aspirina un mal mayor tratando de superar solamente la fiebre**, lo que pasa es que frente al tema de la inseguridad ciudadana se ha pretendido dar un conjunto de soluciones y una de ellas es la simplificación procesal, pero encerrando a choferes embriagados o a padres irresponsables o a ciudadanos intervenidos por resistencia a la autoridad, no se supera los problemas de la gran criminalidad, como el sicariato, asesinato, robo u organizaciones criminales.

Sin embargo la especialista ***Ponce (10 de octubre de 2017)***, reflexiona que ante el incremento de la criminalidad, es el legislador quien debe de actuar optando por políticas de simplificación procesal en el ámbito del sector justicia, con la finalidad de acelerar el trámite del juzgamiento, enfatizando que para ello se debe de contar con todos los elementos que vinculen al sujeto inculpatado con los hechos concretos que merecen el reproche penal, facultando al Ministerio Público quien debe de cumplir su rol de titular de la acción penal y materializándose en fallos rápidos emitidos por el órgano jurisdiccional competente.

Desde una postura garantista y acorde a la constitucionalidad, ***Nakazaki (13 de octubre de 2017)***, quien sostiene que:

Existen los institutos de emergencia, y el derecho penal y procesal penal de emergencia es constitucional definitivamente, así como la vida no es un derecho absoluto porque está la legítima defensa como excepción, ósea ningún derecho es absoluto, todos los derechos son limitados entonces la sociedad tiene el derecho a trabajar con los institutos de emergencia.

En esa misma postura, ***Valdivia y Villa (octubre de 2017)***, consideran que tanto la celeridad como el endurecimiento de las penas no constituyen la solución al incremento del índice delictivo, aseveran además que debe aplicarse nuevas políticas de gobierno que se preocupe por la atención social INTEGRAL, restableciendo valores sociales sobre todo. Los especialistas son conscientes que el problema de la delincuencia debe de tratarse como un tema social ocasionado por una mala educación, integración familiar y empleo; para lo cual se debe de aplicar políticas gubernamentales necesarias; Aseveran que la simplificación procesal no

debe de significar ningún problema en su aplicación siempre y cuando se realice una adecuada aplicación y eso parte de una buena investigación,

Los principios procesales y su respeto en la aplicación del proceso inmediato.

En torno al respeto por los Principios Procesales.

Las garantías y principios procesales concitan un relevante interés en la opinión jurídica, así tenemos que **Aliaga, Lapa, Molina, Villa y Ponce (octubre de 2017)**, son categóricos al afirmar que no solo en los casos aplicados al proceso inmediato, se deben de garantizar el respeto por las garantías y principios procesales, ya que tanto en los procesos comunes de materia penal, los de materia civil o laboral es de suma importancia el respeto por los principios procesales, toda vez que son los principios son los pilares del Debido Proceso que fungen de mandatos optimizadores de las garantías procesales.

En armonía de lo antes sostenido, los precitados jurisconsultos concuerdan en que el hecho de que un sujeto haya sido comprendido por el proceso inmediato no conlleva automáticamente, que el mismo sea sujeto a discriminación y desigualdad ya que siempre se le debe garantizar el derecho a un debido proceso en el que forma parte el derecho a la defensa.

Convergiendo en la misma posición los especialistas, **Matamoros y Nakazaki (octubre de 2017)**, reafirman los resultados obtenidos por los precitados jurisconsultos, ya que concluyen que los principios como las garantías procesales son requisito indispensable para la procedibilidad del proceso inmediato por tratarse de un proceso simplificado.

De los resultados obtenidos, la especialista **Valdivia (11 de octubre de 2017)** asevera que los principios si son importantes en el proceso inmediato, sin embargo muchas veces en la praxis no se cumplen como se ha podido advertir en la aplicación del D.L 1194, que reforma el proceso inmediato; en esa misma idea afirma que:

Se habla de una justicia célere, con etapas procesales simplificadas, sin embargo el sistema de justicia es deficiente para poder aplicar una correcta justicia en las garantías constitucionales, toda vez que existe escases de defensores públicos, los fiscales no cumplen con su rol debido, los abogados no están preparados para el sistema.

Ahora bien, con un análisis concienzudo de la aplicación del proceso inmediato tenemos que el Magistrado, **Mendoza (13 de octubre de 2017)**, sostiene:

(...), es cierto que se van a restringir o limitar el derecho procesal o derecho fundamentales procesales **no cabe duda, esa reglamentación va afectar principios de hecho no solamente vamos a hablar de la supresión de etapas procesales como la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia para el caso se tiene que hacer una interpretación restrictiva** y considerar solamente el tema de la flagrancia clásica como el único supuesto que alimentaría el proceso inmediato, extraordinariamente ese un caso claro de cómo se hace una interpretación conforme a la constitucional de acuerdo a ese mandato que aparece los dispositivos que hemos indicado además de ello hay un problema en el sentido de acudir a la proporcionalidad y de cómo se materializa los fines de hecho.

De lo antes vertido por el especialista se puede inferir que la supresión de etapas procesales conlleva a un inminente peligro de transgresión a los principios procesales que fundamentan la norma penal adjetiva.

Los medios adecuados y la preparación suficiente para reguardar el respeto por los principios procesales.

Respecto a los medios adecuados que garanticen los principios procesales.

De los datos obtenidos, se tiene la similar posición establecida por **Mendoza, Ponce, Aliaga y Matamoros (octubre de 2017)**, quienes aseveran que tanto la preparación académica como la infraestructura son elementos de sustancial necesidad para asegurar el respeto por los principios y garantías procesales, toda vez que ante un proceso de simplificación procesal que busca una justicia más dinámica se debe de emplear todos los recursos necesarios para que la moderación de los principio no sufran una reducción de su aplicación.

En ese mismo sentido, **Molina (10 de octubre de 2017)**, refiere:

La falta de capacitación por parte de los operadores de justicia en la debida aplicación de proceso inmediato ha originado que se cometa errores en su debida aplicación, lo que ha conllevado a la Corte Suprema a establecer criterios mediante los acuerdos plenarios.

Así mismo, sostiene que, cuando se habla de los medios y la preparación, esto no debe de limitarse a los partícipes del proceso, sino inclusive a los policías quienes cumplen un rol importante previo al proceso y no por ello menos importante; considerando que estamos frente a un proceso que suprime etapas procesales este debe contar con una estructura consecuente con la celeridad del proceso, y profesionales capaces de afrontar de manera eficaz la simplificación procesal.

Ahora bien, de los resultados obtenidos de la entrevista realizada a los especialistas **Lapa, Villa y Valdivia (octubre de 2017)**, se tiene que estos nuevos cambios en nuestro sistema procesal, han sido realizados sin la preparación adecuada y suficiente de los operadores jurídicos; por lo que estos operadores no estarían suficientemente preparados para un sistema moderno como el que representa las innovaciones del nuevo modelo procesal, advirtiéndose un escaso respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales.

En concordancia con lo expuesto por los entrevistados antes citados, se tiene una crítica integral formulada por el especialista **Nakazaki (13 de octubre de 2017)**, quien sostiene que:

Existen los institutos de emergencia, y el derecho penal y procesal penal de emergencia es constitucional definitivamente, así como la vida no es un derecho absoluto porque está la legítima defensa como excepción, ósea ningún derecho es absoluto, todos los derechos son limitados entonces la sociedad tiene el derecho a trabajar con los institutos de emergencia, si se necesita trabajar con *Ferraris* en buena hora, pero **hay que preparar fiscales, jueces y abogados que estén de acuerdo a esa velocidad ese es el único tema para que se pueda balancear la cosa.**

Con lo antes citado, se puede evidenciar una clara relación entre la preparación y los implementos y el respeto por las garantías y principios que comprende el proceso.

Planteamiento de críticas entorno a la aplicación del proceso inmediato.

Respecto a las críticas evidentes en el proceso inmediato.

De los antes expuesto se ha podido avizorar una serie de críticas entorno a la aplicación del proceso inmediato en sus distinto supuestos de procedibilidad, en este sentido, **Villa (10 de octubre de 2017)**, sostiene que se trasgrede los derechos de la defensa, con respecto a las pruebas que no se evalúan correctamente por lo tanto el proceso se corrompe. Con ello el especialista hace una fuerte advertencia en lo referente a la valoración de la prueba en este procedimiento simplificado.

Así también, las críticas advertidas a este proceso especial por **Ponce, Molina, Valdivia y Lapa (octubre de 2017)**, quienes encuentran armonía al aseverar la urgencia par que tanto la Policía como el Fiscal cuenten con capacitaciones periódicas toda vez que se advierte incoherencias en el informe policial y en el desarrollo de las actas elaboradas por los Fiscales, concordando además que los letrados patrocinadores, no realizan una defensa de su patrocinado, conllevando a una inadecuada defensa técnica.

De los resultados obtenidos en la entrevista realizada al Magistrado **Mendoza (13 de octubre de 2017)**, se obtuvieron críticas resaltantes en cuanto a la aplicación del proceso inmediato, ya que sostiene lo siguiente:

Hay varias críticas al mismo diseño del proceso pero quizás una de las que puede generar problemas en la configuración al proceso recursal del proceso impugnatorio es el poco tiempo que tiene el impugnante para efectos de formular una pretensión impugnatoria, pues cuando hablamos de un proceso recursal en sentido fuerte del proceso tiene que tener un objeto y ese objeto es la pretensión recursal o la pretensión impugnatoria sino tenemos una pretensión procesal o impugnatoria definido con un pedido de revocatoria o nulidad y que coherentemente tenga fundamentos que lo sustenten entonces no tenemos un proceso y el principio de concurrencia recursal será un chiste, jueces que estén limitados a los fundamentos de la pretensión impugnatoria simplemente no se podría realizar porque (...) **requiere tiempo, pero sin embargo lo que vamos a encontrar una suerte de desutilización formal de algunos jueces**, (...), por lo que en diez minutos quiere

que sustente su apelación, creo que la solución debe ser darle el plazo de dos días conforme se le otorgue el plazo al imputado que no ha comparecido.

De manera correlacional, **Matamoros (06 de octubre de 2017)** coincidentemente con lo antes vertido por los especialistas, sostiene que tratándose de los operadores no todos están preparados para resguardar las garantías procesales, ya que no se da el tiempo necesario para que se pueda ejercer de manera suficiente la defensa del investigado.

De manera concluyente, el procesalista **Nakazaki (13 de octubre de 2017)** sostiene que:

(...), este proceso es como un *Ferrari*, ya que promueve instituciones novísimas para el proceso penal; pero hay que preparar fiscales, jueces y abogados que actúen acorde a esas velocidades, para que se pueda balancear la cosa a fin de resguardar el cumplimiento de los principios procesales.

Defiriendo, del resultado obtenido en la entrevista realizada a la procesalista **Aliaga (06 de octubre de 2017)** quien no tiene críticas al proceso inmediato; Entonces, podemos advertir que existen críticas que surgen en la aplicación del proceso inmediato, corroborándose el objetivo general de la presente investigación.

Ahora bien, en cuanto al primer objetivo específico que pretende fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio, es preciso el ordenamiento e interpretación sistemática de los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a los especialistas comprendidos en la presente investigación, relacionándolos con los siguientes criterios.

La obligación del ministerio público para la incoación del proceso inmediato.

En relación a la afectación de la autonomía de los Fiscales y la vulneración al principio acusatorio.

En atención a los datos obtenidos, es de observarse que de manera unánime, **Aliaga, Ponce y Valdivia (octubre de 2017)**, consideran que en el escenario donde la norma ordena que el Fiscal DEBE solicitar la incoación del proceso inmediato bajo sanción administrativa; no se vulnera el principio acusatorio, porque si bien el Ministerio Público, tiene el deber de la incoación, esto no le suprime el ejercicio de su autonomía como titular de la acción penal; garantizándose que no se ha menguado el principio acusatorio; ya que el Fiscal solicitara la incoación del proceso inmediato cuando aprecia que se cumple con los requisitos para realizarlo, ello en marco de la división de roles insertada por el nuevo modelo procesal penal.

En esa misma línea el especialista, **Mendoza (13 de octubre de 2017)** sostiene que:

(...) considero que ese operador deóntico imperativo tiene que mantenerse pero esto no significa afectar la autonomía del ministerio, si tenemos el supuesto de flagrancia y resulta que sin embargo no se ha configurado un causa probable o prueba eminente el fiscal tiene la autonomía de iniciar un investigación preparatoria este momento debe iniciar la investigación preparatoria esperando que esa información experta le llegue para eventualmente recién recurrir a este proceso inmediato derivado o aquel proceso inmediato regular de transito previa formalización de investigación preparatoria que entonces ese deber tiene que ser comprendido en tanto y en cuanto se configuren esos presupuestos materiales, en el contexto si existe ello todavía es una condición para requerir porque todavía debemos transitar también por la aplicación del principio de oportunidad, si después de verificar que concurren los otros presupuestos materiales y después de haber realizado las posibilidades de llegar a un acuerdo reparatorio de acuerdo al principio de oportunidad no ha sido posible, entonces recién debe de incoarse el proceso inmediato.

Así mismo, de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los especialistas, **Matamoros, Lapa, Nakazaki y Molina (octubre de 2017)**, se tiene una posición arraigada y en concordancia a lo aludido por los especialistas antes nombrados, toda vez que convergen en afirmar que habría una posible colisión puesto a que la norma obliga al Ministerio Público a formular la incoación del proceso inmediato, empero para eso debe de analizar la concurrencia de los presupuestos materiales como la simplicidad y la prueba evidente, solo así el representante del Ministerio Público podrá solicitar la incoación del proceso

inmediato; Señalándose además que la norma tiene que ser interpretada bajo las reglas de la interpretación constitucional.

Los resultados obtenidos de la presente investigación se tiene que, **Villa (10 de octubre de 2017)** de manera discordante a los especialistas antes citado, asevera que si se estuviera vulnerando el principio acusatorio, si se interpreta de manera literal lo dispuesto por la norma.

La necesidad de la imputación concreta en relación a la capacidad económica del imputado en el proceso por omisión a la asistencia familiar.

En torno a la determinación de la capacidad económica del inculpado en la imputación concreta.

De los resultados obtenidos, se contempla que los especialistas **Villa y Ponce (octubre de 2017)**, coincidentemente aseveran que es apropiada la relevancia en la determinación de la capacidad económica del obligado, considerando que el Ministerio Público no debe sujetarse al cumplimiento literal de la norma al incoar proceso inmediato ya que se estaría supeditando sólo a “verificar las copias certificadas de la sentencia emitida, dejándose de lado la verificación si realmente existe causa probable que permita establecer la existencia suficientes medios probatorios para establecerse la existencia de una conducta injustificada de parte del sujeto inculcado respecto a la omisión alimentaria que necesariamente debe estar ligada a la suficiencia de capacidad económica.

Bajo esta misma óptica, el Magistrado, **Mendoza (13 de octubre de 2017)**, sostiene lo siguiente:

(...) la verificación de la configuración de una causa probable en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, conlleva a determinar que la sentencia en lo civil, no debe de extinguir la posibilidad de determinarse la capacidad económica del imputado. Es preciso que se tome en cuenta que en sede de familia se presume la capacidad empero en el ámbito penal se tiene que en la imputación concreta se deben probar derribando toda duda y suposición, ya que los efectos punitivos atañen a la privación de la libertad. En consecuencia no se debiera de acudir a un proceso célere, si no se contempla de manera contundente la capacidad económica del sujeto obligado.

Del resultado obtenido se puede desprender entonces que ante los supuestos concretos que afecten la capacidad económica del procesado se debe de optar por el proceso común; ahora bien, el especialista **Nakazaki (13 de octubre de 2017)**, denuncia que en el delito de omisión a la asistencia familiar existe un gran problema al entender uno de los elementos del delito de omisión propia que es la capacidad individual de acción; ya que este proceso surge de un proceso civil donde la capacidad económica del alimentante muchas veces no se prueba porque hay una presunción legal de ingresos establecido en el código civil que resuelve en base solo de una presunción.

Por otro lado los especialistas, **Valdivia y Molina (octubre de 2017)**, concuerdan en que es el juez el garante de la legalidad y el fiscal actúa como titular de la acción por lo que es parte de la autonomía del Ministerio Público para presentar una imputación concreta determinado la capacidad económica del obligado.

Por otro lado, los especialistas, **Aliaga, Matamoros y Lapa (octubre de 2017)**, consideran que no es necesaria el debate de la capacidad económica del obligado, toda vez que este asunto ya se determinó en el proceso civil - familia, fundamentándose su determinación en el principio del daño causado.

La interpretación literal de la norma que regula el proceso inmediato como falencia de la actuación del ministerio público.

En relación a la afectación al principio acusatorio por la interpretación literal del Art. 446.4.

De los datos recolectados se obtuvieron los siguientes resultados en relación **Matamoros, Valdivia y Ponce (octubre de 2017)**, quienes son enfáticos al señalar que frente a una interpretación literal del artículo 446.4 que señala:

Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.

No, representa vulneración alguna al Principio Acusatorio toda vez que este articulado procesal otorga la potestad al Ministerio Público para ejercer la acción

punitiva; así mismo no advierten la afectación al Principio de Imputación necesaria toda vez la exigencia que pesa sobre el Fiscal para incoar el proceso inmediato, ante la existencia del delito de Omisión de Asistencia Familiar y Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, se da en mérito a su condición de titular de la acción penal y son los fiscales quienes deben de evaluar si el proceso inmediato es viable o no lo es, verificando la existencia de una causa probable en los delitos antes citados, sin embargo la especialista Ponce, realizó una atingencia señalando que: “si existiría transgresión si proceden a incoar sólo por dar estricto cumplimiento a lo descrito en el artículo 446.4”; dejando en claro que no se puede admitir una interpretación literal de la norma.

Difiriendo con los entrevistados precitados, **Nakazaki y Villa (octubre de 2017)**, yendo más allá de la simple teorización de los problemas dogmáticos que acarrea una inadecuada aplicación del proceso inmediato sostuvieron que; si, se estaría vulnerando el Principio Acusatorio ya que está intrínsecamente ligado al Principio de Imputación Necesaria, siendo que es el fiscal quien tiene que promover el procesos inmediato siempre y cuando se cumplan con los requisitos de las leyes constitucionales él no puede tener un mandato de legalidad, así podremos evitar que se incoe un proceso inmediato, porque simplemente se desea velocidad, el mandado no es de velocidad, los Jurisconsultos son enfáticos al afirmar que en el articulado del proceso inmediato el mandato es de legalidad antes que de obligatoriedad para la incoación del proceso inmediato.

En esta misma línea precedente **Mendoza (13 de octubre de 2017)**, compartiendo los fundamentos del Penalista Nakazaki, es categórico en la siguiente afirmación:

(...) el juez dentro de los parámetros de control tiene precisamente que evaluar y exigir una imputación concreta, estructurada sobre la base de estos presupuestos materiales; entonces con la imputación ya verificada, se debe de cotejar la prueba evidente si lo tramitan como flagrancia es un tema de flagrancia o un tema de Cuasiflagrancia, es entonces es el juez de investigación preparatoria quien debe verificar ello, si es que no concurre conforme a las exigencias, entonces no es quien manda a quien cómo se presentó en el tema de Trujillo sino es simplemente ver en cada uno en el ámbito de sus atribuciones como cumple con ese deber, si bien es cierto aparece con ese término de bajo responsabilidad, ese término de bajo

responsabilidad se confunde en tanto el juez se conduzca adecuadamente, lo que pasa es que los jueces y fiscales solamente leen él debe, es decir él debe si por la flagrancia si se ha configurado evidentemente la causa probable o no; si hay afectación ante una interpretación incorrecta.

Finalmente bajo el análisis de este criterio, **Aliaga, Lapa y Molina (octubre de 2017)**, guardan una posición distinta de los demás especialistas, toda vez que sustentan que el principio acusatorio no se vería vinculado a la incoación del proceso inmediato, ya que son facultades propias del Ministerio Público quien en ejercicio de su autonomía podría solicitar la incoación del proceso inmediato siempre que se hubieran presentado los supuestos de procedibilidad, concertando que es el derecho a la defensa la que se vería vulnerada.

En cuanto al segundo objetivo específico que pretende fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas, es preciso el ordenamiento e interpretación sistemática de los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a los especialistas comprendidos en la presente investigación.

Las diferencias de posibilidades que se presentan entre el fiscal y la defensa del procesado para la obtención probatoria.

Respecto a la igualdad de armas en las actuaciones de la defensa técnica en contraste del Fiscal investigador.

En referencia al tratamiento del principio de igualdad de armas en la aplicación del proceso inmediato, la especialista, **Ponce (10 de octubre de 2017)** señala que:

Definitivamente la defensa técnica a cargo de un abogado particular o Público no va a tener la misma posibilidad que el Ministerio Público para la obtención de pruebas; sin embargo, hay casos en que, el Juez de garantías constitucionales no requiere actuación probatoria de la defensa al tratarse de hechos acreditados por la propia conducta del sujeto activo (...).

Pero a pesar que, en la práctica cotidiana y diaria se desarrollan audiencias de incoación de proceso inmediato, resulta cierto también que el Ministerio Público muchas veces no presenta carpetas fiscales con los medios probatorios que corroboran la imputación concreta que realiza por lo que, el Juez de Garantías ante la falta de causa probable deriva los hechos al fuero común. -

Compartiendo la posición precedente, **Matamoros, Villa, Molina y Mendoza (octubre de 2017)**, enfatizan de manera concurrente en que existen ciertas limitaciones en cuanto a la obtención de las pruebas por parte de la defensa del procesado, ya que este es un simple ciudadano común, empero el Ministerio Público actuando de manera articulada como órgano persecutor del delito adquiere autoridad antes las demás instituciones público-privadas, por lo que no estarían equiparadas las posibilidades que tienen cada uno de estos sujetos procesales, siendo además un problema aplicativo del proceso inmediato que suprime los plazos necesarios para un estudio adecuado de las pruebas, atentando contra el modelo adversarial que garantiza la igualdad de armas.

En ese mismo sentido, las afirmaciones en relación al criterio de la vulneración al principio de igualdad de armas, **Nakazaki (13 de octubre de 2017)** de manera clara asevera que existe además la vulneración al derecho a la defensa, en mérito a ello señala que:

(...) el principio de igualdad de armas comprende además al derecho a la defensa eficaz que se materializa con una defensa técnica que cuente con todos los medios legales que el caso exige y con las mismas posibilidades que tiene el fiscal.

Ahora bien, en una posición contraria **Aliaga, Lapa y Valdivia (octubre de 2017)**, concuerdan en señalar que, con las innovaciones del sistema procesal penal, se garantiza la igualdad de armas para ambos sujetos procesales, toda vez que no existen limitaciones legales que así lo afirmen.

Así mismo, enfatizan que la diferencia radica en la calidad de profesionales que existen para el ejercicio de cada función estableciéndose principalmente la capacidad que ambos tiene para presentar las pruebas idóneas para la construcción de su teoría del caso.

La afectación al principio de igualdad de armas como producto de la desigualdad en la participación entre la defensa técnica y el ministerio público en los casos de flagrancia.

Referente a la vulneración al principio de igualdad de armas en la aplicación del proceso inmediato.

En relación al criterio de análisis, **Matamoros, Villa, Lapa y Valdivia (octubre de 2017)**, sostienen que, ante la desigualdad generada por el acceso a la información privilegiada con el que cuenta el Ministerio Público y el escaso tiempo con el que cuentan la defensa técnica para el análisis de la imputación del delito y de los medios que sustentan la acusación; se estarían vulnerando las garantías procesales, con grave incidencia en el derecho a la defensa, y el debido proceso.

Por otro lado, **Ponce (11 de octubre de 2017)**, de manera complementaria señala lo siguiente:

Si, nos pudiéramos en el hipotético caso que, un Juez dentro de un proceso inmediato da inicio una audiencia en la que se advierte una marcada desigualdad en la participación de la fiscalía, frente a la defensa técnica presente en dicho acto, esto es, que verificados los actuados se aprecie que, la incoación fue realizada sin que a nivel preliminar dicho procesado haya estado asistido por la defensa técnica; podríamos afirmar que las garantías procesales establecidas en el NCPP estarían siendo tremendamente vulneradas, afectadas, ya que estaríamos ante un proceso penal arbitrario sin el más mínimo respeto de los derechos que la Constitución Política del Estado le otorga a toda persona sometida a un proceso penal en el que mínimamente se le debe garantizar un debido proceso penal.

Así mismo, el especialista **Molina (10 de octubre de 2017)**, enfatiza en la importancia que contienen los principios procesales, ya que estas son construcciones dogmáticas con criterio o ideas fundamentales contenidos en el ordenamiento jurídico, garantizando así la estabilidad en el ordenamiento jurídico.

En este aspecto **Mendoza (13 de octubre de 2017)** es un convencido de la gran relevancia que tienen los principios procesales, las mismas que se ven modulados en la fugacidad que representa el proceso inmediato, en ese orden señala:

La brevedad del proceso inmediato, ha llegado a resaltar las deficiencias presentes en la formación del operador. Un ejemplo de ello se da en las erradas calificación jurídica que vulneran las garantías inmersas en la imputación necesaria y con ello el derecho de defensa, los efectos de estos errores afectan directamente a la sociedad, concretándose así la pérdida de la libertad de los procesado y el grave efecto de inseguridad jurídica en la sociedad; si partimos desde las funciones de cada operador tendremos al Ministerio Público quien tiene el poder y el deber de calificar el hecho para proporcionar la base para una adecuada imputación, en esa medida corresponde al juez de investigación preparatoria exigir las proposiciones fácticas que determina esa calificación jurídica; y en el ejercicio de la defensa del imputado, es el abogado defensor quien debe realizar el estudio adecuado de la tesis y las pruebas en las que el fiscal fundamenta su teoría del caso para ello debe de contar con un

plazo razonable; sin embargo esto no se ve presente, afectándose así principios procesales.

Desde el análisis propio de flagrancia, en torno al presente criterio se advierte la grave confusión que existe sobre la determinación de la culpabilidad, bajo esta perspectiva el entrevistado ***Nakazaki (13 de octubre de 2017)***, señala:

Tenemos que en los casos de Flagrancia tiene que existir un delito probado que yo remarco es diferente al delito descubierto yo puedo descubrir un delito pero no necesariamente tener la prueba suficiente para lograr una sentencia condenatoria acá confunden flagrancia con probanza por eso yo diferencio, flagrancia es igual a delito descubierto no necesariamente delito probado, yo puedo descubrir el hecho pero me falta establecer la capacidad de culpabilidad de la persona; sin duda estamos frente a posibles vulneraciones a las garantías del proceso penal, como sería el caso de una defensa eficaz que no se garantiza por la preparación y el escaso tiempo con el que cuentan los abogados para el estudio del caso.

Contrario a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los especialistas ya mencionados la Fiscal, ***Aliaga (06 de octubre de 2017)***, considera que no existe desigualdad entre los operadores.

Finalmente en relación al tercer objetivo específico que pretende Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa, fue preciso el ordenamiento e interpretación sistemática de los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a los especialistas comprendidos en la presente investigación.

La fugacidad que implica el proceso inmediato, modula las garantías y principios rectores del proceso, existiendo el alto riesgo de vulnerarlos.

En torno a la vulneración del Derecho de Defensa.

De los resultados obtenidos, se rescató lo vertido por ***Matamoros, Villa y Ponce (octubre de 2017)***, coinciden al señalar que con la simplificación procesal no se soluciona todos los problemas procesales que existen, llegándose a transgredirse derechos, así mismo son conscientes al indicar que la naturaleza del proceso inmediato trae consigo riesgos de vulnerar derechos como el derecho de defensa, debido a la falta de capacitación y coordinación que existe muchas

veces entre los miembros de la Policía Nacional y Ministerio Público; pues son ellos los que inmediatamente después de tomar conocimiento de una intervención en flagrancia delictiva deben proceder a brindarles todas las garantías como es el derecho a un abogado defensor quien debe participar desde el inicio de las investigaciones preliminares a fin de evitar arbitrariedades.

En similar posición el penalista, **Nakazaki (13 de octubre de 2017)**, fue enfático en poner especial relevancia en el derecho a la defensa, en esos términos indica que:

(...) el derecho a la defensa eficaz consiste, primordialmente en el derecho a la defensa técnica, y que esta defensa cuente con todos los medios legales que el caso exige, eso es derecho a la defensa, no simplemente con la presencia de abogado se garantiza el derecho a la defensa, sino que esta defensa debe de ser calificada. Y con las misma posibilidades que tiene el fiscal.

Sin embargo, de los datos obtenidos de la entrevista realizada a los especialistas, **Aliga y Molina (octubre de 2017)**, se desprende que no se estaría vulnerando el derecho de defensa, toda vez que en la aplicación del proceso inmediato el abogado del procesado tiene derecho a participar en todas las diligencias y aportar los medios de prueba conforme a lo establecido en el artículo 84 del Código procesal Penal, concluyendo que la modulación de los principios procesales no implica la vulneración de los principio, asegurándose el derecho a la defensa del procesado a través de su abogado defensor desde el momento en que toma conocimiento del hecho delictivo que se le atribuye.

Bajo la misma postura **Lapa y Valdivia (11 de octubre de 2017)**, sostienen que para la determinación de la vulneración al derecho de defensa, debería de evaluarse de manera aislada los casos en concreto y de advertirse tal vulneración, la acción inmediata seria la denuncia ante el juez de garantías; ahora bien, en la aplicación del proceso inmediato los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción, son delitos comprendidos en el procedimiento inmediato por constituir delitos que se configuran con el solo incumplimiento de un deber ser, concluyendo que la

aplicación del proceso inmediato no necesariamente representa riesgos de vulneración al derecho de defensa.

De otro lado el Magistrado **Mendoza (11 de octubre de 2017)**, reflexiona en cuanto al derecho de defensa y su posible vulneración, enfatizando en lo siguiente:

(...), la criminalidad organizada, de la criminalidad económica, no pueden ser combatidos, combatiendo las consecuencias sino las causas, entonces el derecho penal interviene solamente para ver los efectos; y eso a veces no se comprende claramente, entonces el derecho penal interviene en extrema ratio reaccionando sobre los efectos ya cometidos, considerar que combatiendo el efecto vamos a desaparecer la causa es idealismo puro y a veces tenemos una mirada tan estrecha que consideramos tal vez que aplicando más derecho penal con ello desaparecemos las causas que generan los hechos, de esta errada concepción se advierten posibles vulneraciones a las garantías del proceso.

En relación a la imputación necesaria y el derecho de defensa.

De las entrevistas realizadas, se obtuvieron datos de suma importancia en relación la necesidad de la imputación necesaria y concreta realizada por el Fiscal; toda vez que el no estar informado con certeza de los cargos imputados se advierte la lesión del derecho a la defensa, en este sentido, **Lapa, Aliaga, Mendoza y Matamoros (octubre de 2017)**, coinciden al señalar que en el caso en que imputación sea caseosa o imprecisa afectaría directamente al derecho de defensa, así mismo señalan que una imputación incompleta afecta todo tipo de defensa, porque no se sabría a ciencia cierto sobre que defenderse o sobre qué aspectos enfocar la teoría del caso de la defensa; ahora bien, es el juez dentro que del parámetros de control tiene precisamente que evaluar y exigir una imputación concreta, estructurada sobre la base de estos presupuestos materiales; entonces con la imputación ya verificada.

En ese mismo sentido, **Ponce (10 de octubre de 2017)**, señala lo siguiente:

Considero que, si nos encontramos efectivamente frente a una imputación concreta que presenta vicios definitivamente el derecho de defensa del inculcado se va a ver afectado; dado que no va saber cuáles son los hechos puntuales que se le atribuyen; por lo que es necesario que el MP, cumpla con describir de manera clara y precisa los

fundamentos facticos de los hechos, el tipo penal que reprocha la conducta descrita y los medios probatorios que corroboran la conducta.

De los datos recogidos en la entrevista realizada a **Molina, Valdivia y Villa (octubre de 2017)** se desprende coincidentemente que una imputación incompleta, afectaría a todo tipo de defensa por que no se tendría certeza a cabalidad de que defenderse. En esa misma línea **Nakasaki (13 de octubre de 2017)**, asevera que:

SI, Por ejemplo yo descubro que una persona ofende a un juez pero si sufre de un trastorno de personalidad limítrofe mientras que no venga la historia clínica, no venga la pericia psiquiátrica no tengo el delito completamente probado o todos los elementos de juicio necesarios, entonces es importante que el fiscal y el juez solo te presenten casos, el primero presente y el segundo decida un caso de proceso inmediato cuando hay un delito probado mediante una imputación concreta.

Referente a la defensa del procesado desde su detención en el caso de delito flagrante.

En cuanto al presente criterio de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados de la entrevista realizada a **Ponce, Molina, Matamoros y Mendoza (octubre de 2017)**, quienes señalan uniformemente que bajo el presente criterio no debería incoarse un proceso inmediato dado que implicaría una clara vulneración de las garantías procesales trasgrediendo los principios del nuevo modelos procesal así como la constitución política del estado que es garante de un debido proceso; señalaron además que el juez de investigación preparatoria es el juez de garantías y por ende deber asistir a las partes del proceso con la exigencia de la legalidad del proceso inmediato.

En ese sentido **Lapa y Valdivia (octubre de 2017)**, señalan, que es el estado quien debe de proveer de una defensa publica al procesado en flagrancia toda vez que o cuente con uno particular, esta defensa deberá de acudir a las diligencias programas por el desarrollo del proceso inmediato; aseverando que debe existir siempre una defensa que garantice y reguarde los derechos del procesado.

Guardando la misma posición de los especialistas precedente, **Nakazaki (13 de octubre del 2017)** señala:

No se debe de incoar el proceso especial; por eso es preciso recordar que el derecho a la defensa rige desde que la persona está en peligro de sus derechos fundamentales empezando por la libertad, cuando hay peligro, porque muchas personas dicen no “el derecho a la defensa comienza cuando recién te imputo” y mientras que no te impute no tienes un derecho a la defensa o en todo caso tu derecho a la defensa es débil, no es así, peor si esta privada de la libertad si la persona esta privada de la libertad, en el mismo instante en que le quitan la libertad en ese mismo instante surge el derecho a la defensa porque si analizan cual es la razón de ser del derecho a la defensa, (...).

Por su parte **Villa (10 de octubre de 2017)**, señala que es complicado que el procesado cuente con la presencia de un abogado desde su detención, sin embargo se debe de garantizar que la defensa una vez constituida debe de gozar del tiempo necesario para preparar su tesis de defensa correctamente.

Por el contrario, la especialista **Aliaga (06 de octubre de 2017)**, es enfática al sostener lo siguiente:

(...) la incoación del proceso inmediato no guarda relación directa o indirecta con la garantía defensa eficaz, y es más considero que la presencia o asesoramiento de un abogado desde el momento de la intervención y el contar con un plazo razonable no garantiza, de por sí, una defensa eficaz (...).

3.2 Descripción de los resultados la técnica de análisis documental.

Ficha Técnica	
Proyecto de Ley N° 5391/2015-CR	
Congreso de la Republica	
Autor	: Marco Tulio Falconí Picardo
Bancada	: Unión Regional
Fecha	: 15 de junio de 2016
Objetivo	: Modificar el numeral 1 del Art. 446 del DL 957

En la presente sección es necesario realizar la descripción ordenada y sistemática de los datos obtenidos mediante la técnica de análisis documental, para la cual

deberá de comprenderse como criterio de análisis al objetivo general de la presente investigación que pretende Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal y su relación con los ítems a valorarse.

La inseguridad ciudadana fundamenta la dación de una fórmula de simplificación procesal.

La motivación sociocultural de la dación el Decreto Legislativo N° 1194, se fundamente primordialmente en la lucha frontal contra la criminalidad organizada, dotando para ello con mecanismos de simplificación procesal a los órganos del sector justicia (Poder Judicial – Ministerio Público – Ministerio de Justicia – Policía Nacional), estos motivos fueron corroborados delos datos obtenidos en el análisis del presente documento que expone lo siguiente:

Es importante rescatar y advertir que el propósito del Decreto Legislativo 1194 (...) es facilitar la labor del Ministerio Público y poder Judicial, queriendo asegurar de ese modo la eficacia y celeridad de los procesos penales; ello debido a la inseguridad ciudadana que en estos momentos se vive.

Del análisis empleado se puede obtener mediante una interpretación hermenéutica de la norma propuesta, que la motivación del legislador se concreta en la de mantener el sentido originario de la dación de este articulado, atendiendo la exigencia político-criminal que propone la solución del problema de la inseguridad.

Por otro lado, este instrumento de análisis de datos fue aplicado bajo los criterios del primer objetivo específico de la presente investigación que pretende analizar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio, materializándose en el siguiente ítem.

Se evidencia la afectación de las facultades y de la autonomía del Ministerio Público.

El documento de análisis es el proyecto de Ley, propuesto oportunamente ante la modificatoria de los artículos 446 – 448 del Nuevo Código Procesal Penal por el

D.L N° 1194, de los argumentos que se expone se puede analizar el siguiente párrafo de la exposición de motivos que dice:

El decreto legislativo 1194 implicaría una afectación de las facultades de decisión y discrecionalidad del Ministerio Público y de su autonomía, establecidas en su Ley Orgánica y en la Constitución (...), **pues conduciría a una aplicación mecánica del proceso Inmediato, ya que obliga al fiscal a solicitar la incoación del proceso inmediato y bajo responsabilidad funcional; (...).**

Al respecto del presente análisis de este registro documental, se puede tener como la **ratio legis** de la ley, la anulación de la obligatoriedad que se impone en el articulado vigente (art. 446) respecto a la actuación del ministerio Publico frente a los casos que presenten los presupuestos de procedibilidad del proceso inmediato, afectando con ello la autonomía del Ministerio Público.

3.3 Descripción de los resultados de la técnica de análisis jurisprudencial.

Ficha Técnica CAS. N° 842-2016 SULLANA Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia	
Tipo de Proceso	: Recurso de Casación.
Recurrente	: Maximiliano Benites Rodríguez (Encausado).
Fecha de Res.	: 16 de marzo de 2017.
Pronunciamiento	: FUNDADO el Recurso de Casación.

En la presente sección se ha empleado la técnica de análisis documental en su variante de análisis de jurisprudencia materializándose mediante el instrumento de la guía de análisis documental, de los datos obtenidos se ordenado de manera sistemática con criterio relacionado al tercer objetivo específico que pretende analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de inviolabilidad al derecho de defensa, materializándose en el siguiente ítem en la lista de cotejo.

La defensa técnica ha contado con el plazo razonable para ejercer una adecuada defensa.

De la presente jurisprudencia en análisis se puede contemplar de lo vertido en el sexto párrafo de la sección de los Fundamentos de Derecho lo siguiente: (...), los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieren delitos no flagrantes. De lo antes vertido se coteja, que no se ha contado con un plazo razonable para el ejercicio de una defensa eficaz a efectos de resguardar los derechos del procesado.

Descripción de los resultados de la técnica de análisis jurisprudencial.

Ficha Técnica CAS. N° 692-2016 LIMA NORTE Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia	
Tipo de Proceso	: Recurso de Casación.
Recurrente	: Miguel Antonio Cortez Ortega (Encausado).
Fecha de Res.	: 04 de mayo de 2017.
Pronunciamiento	: <i>FUNDADO</i> el Recurso de Casación.

Respecto al análisis documental que se realizó a la presente jurisprudencia se obtuvo los datos que se detallan en relación al objetivo general de la presente investigación que pretende identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, para ello se ha determinado los criterios en base a los siguientes ítems.

La defensa técnica no cuenta con los medios adecuados y la preparación suficiente.

Del estudio pormenorizado a la jurisprudencia materia de análisis con numeración CAS. N° 692-2016 LIMA NORTE, se ha obtenido la corroboración del criterio de que, **en un proceso célere y expedito como el proceso inmediato, los operadores deben de ser calificados y eficaces a efectos de resguardar las**

garantías contenidas en los principios procesales, en la resolución materia de análisis se puede observar los fundamentos que se relacionan con este criterio, si tenemos el primer párrafo del fundamento E que a la letra dice:

(...) El cinco de febrero de dos mil dieciséis se inició el juicio oral. La defensa del imputado ofreció prueba testifical y documental [fojas noventa y seis]. (...), ***se tiene que el Tribunal de Primera Instancia llamó la atención a la defensora del imputado y apercibió que si no lleva a cabo una defensa efectiva se la cambiaría por un abogado de oficio*** [fojas ciento siete].

Corroborándose latente el peligro que existe en la vulneración del derecho a la defensa eficaz a causa de los operadores poco o nada preparados para este sistema expedito, con lo cual no estarías frente a operadores que cuenten con la preparación adecuada para poder garantizar un proceso sin desigualdades.

En el proceso inmediato es necesario el respeto por las garantías procesales contenidas en los principios.

La corroboración de la a través del método descriptivo y sistemático conlleva la consideración de lo establecido en el séptimo fundamento de derecho que recoge lo siguiente:

Que, sin analizar si, finalmente, el imputado **Cortez Ortega** es culpable o inocente, como consecuencia de la valoración del conjunto de la prueba actuada durante el enjuiciamiento, es de resaltar que el proceso no pudo ser tramitado por la vía inmediata, sino por la común u ordinaria. Al hacerlo, indebidamente, bajo el proceso inmediato se afectó el artículo 139, numeral 3, de la Ley Fundamental: el proceso no fue debido, con todas las garantías. La inobservancia de este derecho fundamental generó indefensión material, (...).

Según el análisis efectuado a la jurisprudencia en estudio, se puede confirmar la importancia del respeto por los principios y garantías procesales, toda vez que se fundamentan en los derechos reconocidos en la Constitución Política.

Por otro lado, se tiene que la información recopilada de la presente jurisprudencia ha sido contrastada con el tercer objetivo específico que pretende analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del

Principio de inviolabilidad al derecho de defensa, para lo cual se ha determinado el siguiente ítem.

Se le asistió con un abogado defensor al investigado desde la sede policial a fin de resguardar sus derechos.

Continuando con la descripción de los resultados de la presente investigación, es preciso determinar si la presencia del abogado defensor desde el primer momento de la detención en flagrancia garantiza una defensa eficaz al encausado, a mérito de resguardar los derechos en juego, en ese contexto la resolución materia de análisis en su párrafo cuarto de los fundamentos de derecho señala:

Desde luego, una diligencia de investigación, como es la pesquisa-registro vehicular, puede ser ampliada, más aún si en el primer registro vehicular no intervino el Ministerio Público. En este caso, sin embargo, ***no existen razones de extrema urgencia que impidan la intervención de un abogado defensor en sede de investigación preliminar*** (artículo 71, apartados 1 y 2, literal “c” del Código Procesal Penal). En la segunda acta ***no constan las razones por las cuales el imputado rehusó firmar el acta, tampoco por qué no se contó con un abogado defensor de confianza o, en todo caso, con un abogado defensor de oficio.***

Del análisis de los datos convergentes en la presente jurisprudencia, es posible determinar que el tercer objetivo de la presente investigación es corroborado toda vez, que se reconocen actuaciones sesgadas de toda garantía.

Ahora bien, los operadores como lo son la Policía Nacional y el Fiscal, son los primeros en conocer y desarrollar la investigación de la comisión del delito, sin embargo, la rapidez con que se actúa en el proceso inmediato admite la modulación de cierto principio, empero no admite su supresión total o parcial, de ser el caso se estarían vulnerando derechos procesales constitucionalmente reconocidos.

Descripción de los resultados de la técnica de análisis jurisprudencial.

Ficha Técnica

RES. N°: DOS – EXP N° 00124-2016-0

ENTIDAD: Juzgado Penal Colegiado - Lima

Etapas del Proceso : Juicio Inmediato

Delito : Femicidio

Fecha de Res. : 29 de noviembre de 2016

Pronunciamiento : Fundada la Excepción de Naturaleza de Juicio

En relación a los resultados que se obtuvieron del presente análisis jurisprudencial, se pudo rescatar la presente información vinculados siguientes criterios:

La complejidad del caso fue analizada conforme a las garantías de un debido proceso.

La incoación del proceso inmediato requiere como presupuesto material para su aplicación la simplicidad del caso, por lo que su aplicación en casos graves implica vulneración a los principios del nuevo modelo procesal. En ese sentido este criterio se encontró relacionado con el objetivo general de la presente investigación, en mérito al cual se observó lo señalado en la resolución materia de análisis:

Por la complejidad del caso, en tanto se encuentra pendiente de recabar el resultado de los diversos exámenes periciales practicados a nivel preliminar (...); el colegiado considera que el caso materia de análisis debe ser canalizado a través de un proceso común, (...) la evidencia probatoria es de tal magnitud que no existe la posibilidad de rebatirla ni desmentirla, por lo que, no puede aplicarse a casos donde la prueba no está suficientemente determinada, (...) privilegiando principios y garantías constitucionales, como el debido proceso y las garantías procesales.

Fundamento por el cual dejó sentada la posición que es preciso la simplicidad de la investigación para la aplicación del proceso inmediato a efectos de no vulnerar los principios ni garantías procesales.

La fiscalía actúa con total autonomía en el requerimiento de la incoación del proceso inmediato.

El presente criterio se relacionó de manera directa con el primer objetivo específico de la presente investigación, en esa línea se advirtió que la exigencia bajo sanción administrativa al que es sometido el fiscal en la incoación del proceso inmediato (art. N° 446), posibilita la concreción de vulneraciones tanto a la autonomía del ministerio público como al principio acusatorio; bajo la misma visión la resolución materia de análisis postulo que:

Por su parte la fiscalía señala que el presente caso lo está conociendo por disposición superior, que la fiscalía anterior presentó cargos para que sea conocido en proceso común pero fue negado en el juzgado de turno permanente conforme a la razón emitida por el asistente fiscal, que considera que existen documentos pendientes por recabar, estando de acuerdo con lo señalado por la defensa técnica ya que a la fecha se no cuenta con el resultado de las pericias ordenadas como los exámenes realizados al acusado, a la agraviada, al arma blanca con el que se habría ocasionado las lesiones a la agraviada y protocolo de necropsia.

El presente criterio fue rebatido con lo desarrollado en la presente jurisprudencia.

3.4 Descripción de los resultados de la técnica de análisis de caso.

Ficha Técnica	
EXPEDIENTE: 00186-2016-1JR-PE-03	
ÓRGANO JURISDICCIONAL: 1° Instancia: Sexto Juzgado Unipersonal de Lima	
2° Instancia: Segunda Sala Penal de Apelaciones	
Etapas del Proceso :	Sentencia de Segunda Instancia
Delito	: Acto contra el Pudor
Resol. (Fecha)	: 05 (16 de mayo de 2016)
Pronunciamiento	: Nula la Sentencia apelada y Nula la incoación de proceso inmediato

Para el análisis del presente caso se realizó un estudio integral de los pronunciamientos establecidos por las instancias correspondientes, dejando como resultado la información procesada en relación a los siguientes criterios:

El proceso inmediato por su simplificación procesal conduce a la transgresión de la seguridad procesal y las reglas de un debido proceso.

Se evidencia que el proceso inmediato como mecanismo procesal pretende garantizar una justicia oportuna, en este sentido, en el caso analizado se observó que en la resolución del colegiado se contempló lo siguiente:

El proceso inmediato constituye, no cabe duda, un buen mecanismo procesal que permite justicia oportuna, sin embargo existen cuestionamientos sobre su seguridad y garantías del cumplimiento de las reglas esenciales del debido proceso donde uno de los aspectos esenciales es precisamente la prueba, su forma de recabar , su actuación y finalmente su valoración, condiciones que en caso de delitos de esta naturaleza se complica aún más, por la inexistencia de pruebas objetivas o directas que deriven en la probanza del hecho.

Se advirtió que si existe latente peligro de transgredir los principios procesales en cuanto al ejercicio adecuado de la defensa.

En la práctica se evidencia que se están adecuando los casos para hacer posible la aplicación del proceso inmediato por la celeridad que comprende.

El criterio de análisis se vincula de manera directa con lo establecido por el objetivo general, se confirma con el criterio establecido en el presente caso, toda vez que el superior colegiado señalo:

No se soluciona las deficiencias del sistema de justicia penal, resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos los casos pueden incluirse dentro del proceso inmediato, el entusiasmo por decidir los casos en el menor tiempo posible es loable, pero igualmente importante es la calidad del sistema de justicia, que en ocasiones como esta requiere actividad probatoria completa, porque igual podemos incurrir en error por exceso como por deficiencias, condenando a inocente o absolviendo a culpables, por esto es preciso hacer las cosas de las justicia como corresponde hacerlas.

En el análisis precedente se obtuvo la confirmación del criterio postulado, evidenciándose en el presente caso que los hechos no eran acorde a los presupuestos de flagrancia para la incoación de proceso inmediato.

La defensa pública tiene las mismas oportunidades que los demos sujetos procesales en la actuación de pruebas.

En relación al segundo objetivo específico, se analizó lo desarrollado en el presente caso, advirtiéndose que la defensa pública padece la excesiva carga procesal, por lo que realizan un ejercicio en desmedro del procesado, conllevando a la desigualdad procesal, ello contemplado en el siguiente argumento para la determinación del fallo del superior colegiado.

En realidad prueba de descargo no se ha actuado en este caso, solo se ha hecho referencia el imputado, quien no cuenta con defensa particular, sino publica, condición que si bien no constituye desmedro en el ejercicio de su defensa, por el contrario la defensa publica viene actuando con mayor eficacia en muchos casos que la defensa particular, sin embargo las opciones de actuar pruebas se restringe debido a diversos factores entre los que destaca el escaso número de defensores públicos para la excesiva carga que existe, entonces es preciso también evaluar esas circunstancias en un sistema de justicia que hace esfuerzos por ser imparcial e igualar a las parte.

Del presente caso en análisis, se puede encontrar relación a lo establecido en el objetivo general y el segundo objetivo específico, dejando como datos relevantes la necesidad de un proceso célere no justifica la adecuación de todos los casos para su aplicación.

3.5 Descripción del resultado de la técnica de análisis normativo comparado.

En la presente sección se ordenarán los datos obtenidos en el empleo de la guía de análisis documental – normativo, mediante el cual se realizó un contraste entre la legislación nacional y la legislación comparada, considerándose el objetivo general que pretende Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, a partir de esta recolección de datos se podrá describir y analizar las normas mediante el método sistemático y exegético.

Normas analizadas	: Articulado del Derecho comparado
Procedimiento	: Contraste con el articulado nacional
Países de contraste	: Venezuela, Costa Rica, Ecuador, y Honduras

La aplicación de este tipo de procedimiento contiene principalmente a los delitos flagrantes.

Tabla 5

Legislación que contiene los Delitos Flagrantes

Perú	Venezuela	Ecuador	Costa Rica	Honduras
Artículo 446°.- Supuestos de aplicación. 1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259°;	Artículo 372. Procedencia. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este TÍTULO, en los casos siguientes: 1. Cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito;	640.- Procedimiento directo.- (...) 2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificado como flagrantes	Artículo 422.- Procedencia. Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie.	Artículo 440-A. Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos

Fuente: Elaboración en base a la normativa comparada

Análisis de la tabla 5: como se puede observar en la tabla precedente en todas las legislaciones propuestas a contraste con la legislación nacional (Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Honduras) contienen la figura de la flagrancia delictiva como principal detonante para la procedencia del proceso simplificado.

El Fiscal se encuentra coaccionado para la incoación o iniciación de este procedimiento.

Tabla 6

Coacción al Fiscal para la incoación del procedimiento

Perú	Venezuela	Ecuador	Costa Rica	Honduras
Artículo 446°.- Supuestos de aplicación. 1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: (...)	Artículo 372. Procedencia. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este TÍTULO, en los casos siguientes: (...)	640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas: (...)	Artículo 422.- Procedencia. Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud (...)	Artículo 440-A. Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución (...)

Fuente: Elaboración en base a la normativa comparada

Análisis de la tabla 6: como se puede observar en la tabla precedente en ninguna las legislaciones propuestas a contraste con la legislación nacional (Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Honduras) se emplea la coacción al Ministerio Público a fin de que solicite la incoación del proceso simplificado, con lo cual somos el único país donde se emplea el verbo debe.

Establece el límite de su aplicación observando la mínima cantidad de años de pena privativa de libertad.

Tabla 7

Límite para la aplicación del procedimiento simplificado

Perú	Venezuela	Ecuador	Costa Rica	Honduras
Artículo 446°.- Supuestos de aplicación. 1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: (...)	Artículo 372. Procedencia. (...) 2. Cuando se trate de delitos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su límite máximo ; 3. Cuando se trate de delitos que no ameriten pena privativa de libertad.	640.- Procedimiento directo.- (...) 2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos	Artículo 422.- Procedencia. Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud (...)	Artículo 440-A. Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución (...)

Fuente: Elaboración en base a la normativa comparada

Análisis de la tabla 7: como se puede observar en la tabla precedente solo en la legislación de Venezuela y Ecuador se contempla el límite por los años de pena privativa de libertad para la aplicación del procedimiento simplificado incoación del proceso simplificado.

El plazo máximo de la detención en caso de flagrancia.

Tabla 8

Plazo de detención por flagrancia

Perú	Venezuela	Ecuador	Costa Rica	Honduras
Artículo 447°.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva 1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264°, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, (...)	Artículo 373. Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido. El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo presentará ante el Juez de control (...)	Artículo 6.- Garantías en caso de privación de libertad.- 1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión.	Artículo 423.- Trámite inicial. El sospechoso detenido en flagrancia será trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía actuantes, ante el Ministerio Público, (...)	Artículo 440-D. Solicitud de audiencia ante el Juez de Letras. Cuando el fiscal considere pertinente la aplicación del juicio expedito y constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al Juez de Letras respectivo que realice una audiencia para conocer de su solicitud, en relación a la procedibilidad del trámite y la imposición de la medida cautelar, a su vez, pondrá a la orden del juzgado al detenido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su detención.

Fuente: Elaboración en base a la normativa comparada

Análisis de la tabla 8: como se puede observar en la tabla precedente que en la legislación de los países puestos a contraste, el Estado que tiene el plazo máximo de detención (48 Horas) es la legislación nacional, observándose así mismo regulaciones como la de Costa Rica y Ecuador que disponen que apenas es puesto en detención se resuelva la situación del detenido en flagrante delito.

IV. DISCUSIÓN

Toda investigación académica que guarde cierto rigor científico concentra su importancia en el presente capítulo titulado como discusión, ya que después de la recolección de la información se ordenó de manera clara y sistemática en la fase de los resultados; ahora bien, es precisamente con la información sustraída de los instrumentos de recolección de datos que se realizó la interpretación del sentido y el significado que guardan en relación a los supuestos del presente trabajo de investigación.

Como se ha podido advertir, la discusión es una de las fases más importantes del trabajo, toda vez que en ella el investigador realiza la convergencia, interpretación y contraste de los resultados obtenidos a través de los instrumentos como son la guía de entrevista y la guía de análisis documental; siendo requisito el dominio del tema del tema, así como una solidez argumentativo.

De esta manera, al analizar la información se parte del estudio de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las hipótesis y los instrumentos de recolección de datos. Tal vez, la etapa de la discusión de los resultados es la que requiere de mayor creatividad y habilidad intelectual, pues es en ésta, donde hay que encontrar los puntos de coincidencia de resultados con los que se plantearon en el esquema de investigación. (Rodríguez, 2005, p. 148)

De lo antes mencionado por el metodólogo, se puede concebir a la Discusión, como la fase en la que el investigador tiene la oportunidad para otorgarle la relevancia a los resultados obtenidos en la investigación. “El análisis y discusión de los resultados es el aspecto más importante que se va a tener en cuenta en toda investigación; sobre el deben hacer énfasis los jurados evaluadores del informe final presentado por los investigadores” (Bernal, 2010, p. 220). En términos generales es de suma importancia corroborar y contrastar los resultados obtenidos.

Después de la recolección de la información, mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se realizó el contraste respectivo con los fundamentos antecedentes, la doctrina, las entrevistas y el análisis documental en relación a los criterios relacionados a los supuestos de la presente investigación académica

4.1 Respetto al Objetivo General. - El presente trabajo de investigación plantea el siguiente objetivo general: Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

La ratio legis del proceso inmediato.

Es preciso tener en cuenta que todo acto que importe efectos jurídicos, debe de ser analizado dentro de un contexto histórico, político y social; ya que sin su previa contextualización no se podría analizar rigurosamente la necesidad que inspire tal acto.

En concordancia a lo precedente, se valuó el trabajo previo realizado por **Meneses (2015)**, quien en su tesis concluyó que el procedimiento especial para delitos flagrantes contribuirá a la *reducción de la sobre carga procesal y la inseguridad ciudadana*, por cuanto ya existen precedentes internacionales que han obtenido resultados positivos respecto al tratamiento de delitos flagrantes. Lo descrito por el autor revela la grave ineficiencia de nuestras autoridades al momento de abordar la problemática generada por la sobrecarga procesal ya que buscan salidas, improvisando mutilaciones al sistema procesal. Así mismo Meneses señaló que: “Los procedimiento especiales deben estar regulados y dirigidos para situaciones especiales y específicas con la finalidad de evitar etapas procesales innecesarias logrando una resolución más célere, eficaz y especializada”. Finalidad que no persigue la regulación actual del proceso inmediato.

De lo establecido en el marco teórico, se observó que bajo esa misma postura **Tejada, (2016, p. 57)**. Aseveró que: “La razón de ser de los procesos especiales es dotar al sistema de mecanismos procesales que permitan atender las necesidades de celeridad, tutela y paz que nuestra sociedad exige”

Del análisis que se realizó a los datos obtenidos en las entrevistas se pudieron arribar a las siguientes convergencias con las afirmaciones precedentes; en ese orden la especialista **Ponce (2017)**, afirmó que ante el incremento de la criminalidad, es el legislador quien debe de actuar optando por políticas de

simplificación procesal en el ámbito del sector justicia, con la finalidad de acelerar el trámite del juzgamiento.

Es necesario señalar que la solución ante la criminalidad, debe de contener respuestas viables a la luz del espíritu humanista y democrático característicos del código penal sustantivo; aplicando la norma procesal penal con la configuración de determinados principio procesales con el fin de plasmar respuestas institucionales que sean adecuadas y proporcionales; teniéndose en cuenta los fundamento que dieron origen al nuevo modelo procesal, reguardando las garantías procesales mínimas; de lo contrario atenderíamos un procedimiento vacío y alejado totalmente del deber ser del derecho procesal penal.

Divergiendo de la posición antes desarrollada se tiene que tanto **Aliaga, Lapa, Molina y Matamoros (2017)**, sostienen que no existe relación en el incremento de la delincuencia con la implementación de un proceso simplificado como lo es el proceso inmediato, aseverando que el crecimiento de la criminalidad responde a causas que reflejan un sistema social decadente carente de una política criminal seria.

A su vez, el entrevistado **Mendoza (2017)**, señaló que el proceso inmediato si bien en sus inicios fue propagandizado mediáticamente en la idea de que con la simplificación procesal se iba a combatir la criminalidad, es por eso que no encontramos una suerte de relación entre la simplificación procesal y el combate con la criminalidad es como si se pretendiera combatir con una aspirina un mal mayor tratando de superar solamente la fiebre, lo que pasa es que frente al tema de la inseguridad ciudadana se ha pretendido dar un conjunto de soluciones y una de ellas es la simplificación procesal, pero encerrando a choferes embriagados o a padres irresponsables o a ciudadanos intervenidos por resistencia a la autoridad, no se supera los problemas de la gran criminalidad, como el sicariato, asesinato, robo u organizaciones criminales.

Por otro lado, los entrevistados **Nakazaki, Valdivia y Villa (2017)**, señalaron que tanto la celeridad como el endurecimiento de las penas no constituyen la solución al incremento del índice delincuencial. Los especialistas son conscientes que el problema de la delincuencia debe de tratarse como un tema social ocasionado por

una mala educación, integración familiar y empleo; para lo cual se debe de aplicar políticas gubernamentales necesarias.

De la información que se adquirió a través de análisis documental, se tiene lo establecido por el **Proyecto de Ley N° 5391/2015-CR**, que en su fundamento expone, que el propósito del Decreto Legislativo 1194 es facilitar la labor del Ministerio Público y poder Judicial, buscando asegurar de ese modo la eficacia y celeridad de los procesos penales; ello debido a la inseguridad ciudadana que en estos momentos se vive. En ese sentido es oportuno coincidir respecto a la motivación que origina la implementación del proceso inmediato, confirmándose así que es la lucha frontal contra la criminalidad organizada que da impulso a la necesidad de un proceso expedito.

El estudio de los datos recolectados mediante el instrumento de **análisis normativo comparado**, se observó que en todas las legislaciones contratadas con la legislación nacional (Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Honduras) contienen la figura de la flagrancia delictiva como eje principal para la procedencia del proceso inmediato. De los resultados obtenidos se observó además que solo en la legislación nacional, se aplica el proceso inmediato para procesos distintos a los que comprenden la flagrancia delictiva como es el caso de los Delitos de omisión a la asistencia familiar o el de conducción de vehículo en estado de ebriedad, situación que a no se condice con la ratio legis del D.L N° 1194 (proceso inmediato reformado), procesos para los cuales se debería de propugnar una vía disociada del proceso inmediato.

Se concluyó de las convergencias y divergencias que, es evidente que el surgimiento del proceso inmediato obedece a la necesidad del Estado por recobrar las riendas de la seguridad nacional, garantizando así la dación de fórmulas expeditas que buscan la solución al conflicto y como era de esperarse, esto surge como producto de la reforma procesal penal que a manos del legislador nacional se han emitidos sendos mecanismos de simplificación que operan de manera excepcional cuando se advierte una diáfana y evidente ausencia de la necesidad de realizar la fase de la investigación preparatoria y la fase intermedia del proceso.

Sobre el respeto por los Principios Procesales en la aplicación del proceso inmediato.

Bajo la perspectiva de la presente investigación se advierte una errónea aplicación de política criminal, lo que conlleva a la vulneración de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Del análisis que se realizó a los trabajos previos, se observó que **Ore (2016)** en su tesis, establece que, dentro del desarrollo de todo proceso debe darse las garantías mínimas que demuestre que este se viene desarrollando sobre los cañones de un debido proceso y de un adecuado respeto del derecho a la defensa para todas las partes, aunado a ello resulta de mayor relevancia que estos se demuestren dentro de la incoación de un proceso especial inmediato el cual debe ser restringida por medio actividad probatoria que acredite la imputación de un ilícito penal a un determinado sujeto activo.

En concordancia con los resultados anteriores el tesista, **Cartagena (2015)** concluyó que el Decreto Legislativo N° 1194 que reformula el Proceso Inmediato, es Inconvencional, por violar el derecho al plazo razonable y a la defensa del procesado, así lo ha demostrado, el Derecho Internacional, la Jurisprudencia, Doctrina, y el 83% de los abogados encuestados de la Provincia de San Román de Juliaca.

Bajo este criterio, y en relación con el objetivo general de la presente investigación, el tratadista costarricense **Araya (2009)** es enfático al señalar que:

Un Estado Democrático de Derecho, está dirigido a cumplir los principios constitucionales, solucionar el conflicto, combatir la morosidad judicial, dar sentido humano a la justicia, crear un juez activo y dinámico en la resolución de conflicto, fortalecer la función del abogado dentro de la sociedad y el sistema judicial, simplificar el proceso, dignificar la justicia, buscar la verdad real, sustituir la escritura por la oralidad, dar publicidad a los procesos, garantizar el ejercicio de las libertades democráticas, propiciar el respeto del pueblo en el sistema de administración de justicia, (...) Pretende una justicia más humana, destinada a la solución oportuna y adecuada del conflicto.

Como se pudo observar es labor del Estado asegurar el respeto irrestricto de las garantías y principios procesales; en ese orden de ideas, **Aliaga, Lapa, Molina, Villa y Ponce (octubre de 2017)**, sostuvieron que no solo en los casos aplicados al proceso inmediato, se deben de garantizar el respeto por las garantías y principios procesales, ya que es de suma importancia el respeto por los principios procesales, toda vez que son los pilares del Debido Proceso.

Se advierte de la importancia del respeto a los principios procesales a fin de evitar que la aplicación del proceso inmediato persiga propósitos meramente efectistas y estadísticas lo que generaría condiciones procesales que van aplicar normas materiales desproporcionadas e irracionales, toda vez que hay delitos configurados en la norma sustantiva que importan la defensa del bien material con penas drásticas en comparación con los delitos contra la vida y la integridad.

Bajo una perspectiva garantista, los entrevistados **Matamoros y Nakazaki (2017)**, concluyeron que tanto los principios como las garantías procesales son requisito indispensable para la procedibilidad del proceso inmediato por tratarse de un proceso simplificado.

Por su parte **Valdivia (2017)**, aseveraron que los principios si son importantes en el proceso inmediato, sin embargo muchas veces en la praxis no se cumplen como se ha podido advertir en la aplicación del D.L N° 1194, que reforma el proceso inmediato; en esa misma idea sostuvo que el sistema de justicia es deficiente para poder aplicar una correcta justicia en las garantías constitucionales, toda vez que existe escases de defensores públicos, los fiscales no cumplen con su rol debido, los abogados no están preparados para el sistema.

Por otro lado, y compartiendo la misma postura, **Mendoza (2017)**; señaló que es cierto que se va limitar el derecho procesal o derechos fundamentales procesales no cabe duda, esa reglamentación va afectar principios, de hecho no solamente vamos a hablar de la supresión de etapas procesales como la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, para su aplicación se tiene que hacer una interpretación restrictiva.

Del análisis jurisprudencial realizado se observó la **Casación 692-2016- Lima Norte**, que en referencia al criterio de análisis que se relaciona de manera directa con el objetivo general del presente trabajo académico, se advirtió de manera relevante lo que el colegiado supremo estableció en el séptimo fundamento, precisándose que el proceso no debió ser tramitado por la vía inmediata, sino por la vía común. Ya que al tramitarlo en la vía de proceso especial –proceso inmediato-, se afectó el artículo 139°, numeral 3°, de la Constitucional Política del Estado, como consecuencia de la inobservancia de este derecho fundamental se generó la indefensión material, transgrediéndose así los principios procesales.

Ahora bien, con el contraste realizado se identificaron las divergencias y convergencias, concluyéndose que los legisladores están olvidando que el proceso penal es un instrumento esencial en el ejercicio de la *Ius Puniendi*, en habida cuenta el proceso mismo no puede ser instantáneo ya que para configurarse como tal debe de transcurrirse por etapas o fases que son distintas unas de otras, dejando como conclusión la uniforme postura en resguardo y protección de los principios procesales.

En relación a los medios adecuados y la idoneidad de los sujetos procesales para la aplicación del proceso inmediato.

El proceso inmediato como mecanismo de simplificación procesal, trae consigo exigencias materiales a fin de que su aplicación sea beneficiosa para todos los sujetos procesales; resguardando las garantías y principios procesales en las que inspira la norma adjetiva. Es correcto afirmar que el proceso inmediato como proceso especial, está contemplado en la normativa vigente y su implementación tiene fundamentos constitucionales –régimen de excepcionalidad-; sin embargo, en la aplicación práctica se han presentado terribles incongruencias con los principios y garantías procesales que desnaturalizan la figura procesal hasta convertirla en inconstitucional.

En palabras de **Reyna (2015)** el proceso inmediato, es un proceso especialísimo que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está prevista para aquellos casos en los que no se requiera mayor investigación para el fiscal logre su convicción. Acorde a lo antes establecido cabe

hacer la precisión respecto de la idoneidad con la que cuentan los sujetos intervinientes en este procedimiento simplificado.

De la entrevista realizada a los especialistas se obtuvo los siguientes pronunciamientos; en ese orden de ideas **Mendoza, Ponce, Aliaga y Matamoros (2017)**, quienes aseveraron que tanto la preparación académica como la infraestructura son elementos de sustancial necesidad para asegurar el respeto por los principios y garantías procesales, toda vez que ante un proceso de simplificación procesal que busca una justicia más dinámica se debe de emplear todos los recursos necesarios para que la moderación de los principio no sufran una reducción de su aplicación.

Bajo la misma postura, **Molina (2017)**, refiere: La falta de capacitación por parte de los operadores de justicia en la debida aplicación de proceso inmediato ha originado que se comenta errores en su debida aplicación, lo que ha conllevado a la Corte Suprema a establecer criterios mediante los acuerdos plenarios.

Así mismo, cuando se habla de los medios y la preparación adecuada, no se debe de limitar a los partícipes del proceso, sino inclusive a los policías quienes cumplen un rol importante previo al proceso y no por ello menos importante; considerando que estamos frente a un proceso que suprime etapas procesales este debe contar con una estructura consecuente con la celeridad del proceso, y profesionales capaces de afrontar de manera eficaz la simplificación procesal.

Respecto a las coincidencias de **Lapa, Villa y Valdivia (2017)**, se tiene que estos nuevos cambios en nuestro sistema procesal, han sido realizados sin la preparación adecuada y suficiente de los operadores jurídicos; por lo que estos operadores no estarían suficientemente preparados para un sistema moderno como el que representa las innovaciones del nuevo modelo procesal, advirtiéndose un escaso respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales.

Por otro lado, se analizó los resultados obtenidos de la entrevista, en ese orden **Nakazaki**, quien sostiene que:

Existen los institutos de emergencia, y el derecho penal y procesal penal de emergencia es constitucional definitivamente, así como la vida no es un derecho absoluto porque está la legítima defensa como excepción, ósea ningún derecho es absoluto, todos los derechos son limitados entonces la sociedad tiene el derecho a trabajar con los institutos de emergencia, si se necesita trabajar con *Ferraris* en buena hora, pero **hay que preparar fiscales, jueces y abogados que estén de acuerdo a esa velocidad ese es el único tema para que se pueda balancear la cosa.**

Con lo antes citado, se puede evidenciar una clara relación entre la preparación y los implementos y el respeto por las garantías y principios que comprende el proceso. Es preciso atender las deficiencias que acarrear los procesos especiales, si bien son una herramienta muy útil, no olvidemos que los que aplican estas figuras son personas con y sin la preparación debida para garantizar los derechos circundantes en un proceso penal

De los datos obtenidos por los instrumentos de recolección de datos se observó del análisis efectuado a la **CAS. N° 692-2016 Lima Norte**, que fue emitida por el supremo órgano de justicia, se obtuvo como claro resultado que en el proceso inmediato los operadores deben de ser calificados y contar con los medios eficaces a fin de resguardar los principios procesales, en la resolución antes mencionada se observó que en el desarrollo del juicio inmediato el tribunal de primera instancia llamó la atención a la defensora del imputado y apercibió que *si no lleva a cabo una defensa efectiva se la cambiaría por un abogado de oficio*. Corroborándose que en el ejercicio de un sistema expedito está latente la posibilidad de vulneración del derecho a la defensa eficaz a causa de los operadores poco o nada preparados para este sistema expedito, con lo cual no estarías frente a operadores que cuenten con la preparación adecuada para poder garantizar un proceso sin desigualdades.

En puridad para la implementación de un mecanismo de simplificación procesal no solo es necesario la modificatoria de normas procesales; sino además la implementación de políticas integrales que involucren la adecuación de juzgados exclusivos para los procesos de flagrancia; habilitar modelos únicos de desempeño en la función jurisdiccional frente al proceso inmediato de la mano de capacitaciones de calidad dirigida no solo al Ministerio Público y al Poder

Judicial, así también a la Policía Nacional, a los abogados litigantes y la población en general.

Respecto a las críticas presentes en la implementación del proceso inmediato.

Si bien es cierto, el proceso inmediato propugna un decurso mucho más sencillo y rápido; lo que se resume en un proceso menos formalista y complejo a diferencia del proceso ordinario o común; sin embargo la carrera incesante por la descarga procesal, secunda un fin distinto al proceso inmediato ya que tendría además como finalidad que el proceso penal solo se accione para los delitos que revistan mayor gravedad para la sociedad, sin duda la función de filtro que cumple el proceso inmediato no fue parte de la motivación de la norma que reforma esta figura del proceso especial.

Los problemas surgen a raíz de una redacción fría y calculada de la norma que regula este tipo de proceso especial, la misma que a rajatabla y a empujones busca la obtención de un resultado que por los últimas experiencias han importado la privación de la libertad de sujetos catalogados como delincuentes, como es el caso Buscaglia y Chu Cerrato; o en el caso de los centenares de omisos a la asistencia familiar.

El presente criterio se desarrolla bajo los preceptos que fundamenta el objetivo general, en ese sentido la investigación realizada por **Cartagena (2016)** concluyó que el proceso inmediato para casos de flagrancia causa un efecto de ineficacia, por no responder al derecho al plazo razonable. Así mismo a nivel del Poder Judicial el proceso inmediato ha generado una sobre carga procesal al Juez de Investigación Preparatoria y las sobre abundancia de sentencias condenatorias. Concordando de esta manera con el supuesto jurídico general de la presente investigación.

En el ámbito internacional, el costarricense **Monge (2009)** coincide de manera manifiesta con **Cartagena**, al señalar en su trabajo de investigación que tanto el imputado y como la imputada sometidos al procedimiento especial para flagrancias, reciben un trato diferenciado que pretende justificarse en la

notoriedad del delito cometido. Sin embargo, dicha diferenciación vulnera el principio de inocencia que cubre a toda persona perseguida por la presunta comisión de un ilícito. Así mismo sostuvo que las vulneraciones a principios procesales que se constatan en el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos flagrantes, hacen que no resulte posible afirmar la existencia de un adecuado respeto al “debido proceso” dentro de dicho trámite.

Sin embargo, **Meneses (2015)** concluyó que el procedimiento especial para delitos flagrantes no vulnera ningún derecho fundamental por cuanto tiene su fundamento en la Constitución e instrumentos internacionales protectores de derechos humanos. Sin duda en la tesis materia de análisis se contempla la aplicación del proceso inmediato de manera aislada a los presupuestos establecidos con la modificatoria del D.L 1194, desconociendo además los efectos en la aplicación de este mecanismo de simplificación procesal.

Respecto a las críticas al proceso inmediato, debe considerarse que el respeto por los principios y garantías son requisito de todo el sistema procesal penal, en este sentido el tratadista **Avalos (2015)** sostuvo que el Derecho Penal moderno asume los principios doctrinarios de mínima intervención, humanidad, protección, prevención y resocialización de la pena, contenidos tanto en la constitución política del estado como en el título Preliminar del Código Penal peruano vigente y estos mismos principios son lineamientos que regulan el poder punitivo del Estado, en el entendimiento que nuestra realidad carcelaria es sumamente drástica. Siendo que la aplicación de la pena subyace en el Principio de humanidad, por cuanto la pena debe ser vista como un mal necesario.

Coincidentemente con lo establecido por el tratadista precedente, **Rosas (2013)** señala que este nuevo modelo procesal penal se apunta y direcciona hacia un derecho penal reparador. En contraposición a un derecho penal sancionador; del mismo modo hacia una justicia restaurativa frente a una justicia retributiva. Sentenciando que hoy en día lo que se requiere es un derecho penal que resuelva conflictos mediante alternativas de solución inter partes con la propuesta de soluciones inmediatas y dentro del marco legal, respetando los derechos y garantías inherentes a las partes involucradas.

Sobre estos aspectos el especialista entrevistado **Villa (2017)**, sostuvo que se trasgrede los derechos de la defensa, con respecto a las pruebas que no se evalúan correctamente por lo tanto el proceso se corrompe. Con ello el especialista hace una fuerte advertencia en lo referente a la valoración de la prueba en este procedimiento simplificado. Coincidiendo con la posición de **Ponce, Molina, Valdivia y Lapa (2017)**, quienes señalaron que tanto la Policía Nacional como el Fiscal Penal, deberían ser capacitados y evaluados periódicamente a fin de evitar las incoherencias en el informe policial y las actas elaboradas por los fiscales. En ese orden de ideas para **Matamoros y Nakazaki (2017)** los operadores no están preparados para resguardar las garantías procesales, ya que no se da el tiempo necesario para que se pueda ejercer de manera suficiente la defensa del investigado.

En ese sentido **Mendoza (2017)**, aseveró que existen observaciones en la configuración al proceso recursal por el poco tiempo que tiene el impugnante para efectos de formular una pretensión impugnatoria, ya que lo tiene que formular en el acto mismo de la lectura de sentencia; advirtió al respecto que en diez minutos el órgano jurisdiccional requiere la sustentación de la apelación.

Sin embargo **Aliaga (2017)** señaló que el proceso inmediato no tiene críticas fundamentales; de lo establecido por la especialista, se advierte que las críticas surgen en la aplicación del proceso inmediato siendo los sujetos procesales quienes tienen la obligación de materializar la norma en una aplicación adecuada de este mecanismo de simplificación procesal; esta posición es corroborada por los fundamentos vertidos en la **Resolución Dos del expediente N° 00124-2016-0**, donde se estableció que por la complejidad del caso, en tanto se encuentra pendiente de recabar el resultado de los diversos exámenes periciales practicados a nivel preliminar; el colegiado considera que el caso materia de análisis debe ser canalizado a través de un proceso común, toda vez que al no encontrarse ante la evidencia probatoria que amerita los caso de flagrancia delictiva, deberá aplicarse el proceso común, privilegiando principios y garantías constitucionales, como el debido proceso y las garantías procesales.

Se debe tener en cuenta que la naturaleza del proceso inmediato es excepcional per se, es uno de los procesos especiales contenidos en el Libro Quinto del D.L 957 (código procesal penal del 2004), teniendo como fundamento principal su excepcionalidad.

Así mismo, los fundamentos establecido en el análisis de caso del ***Expediente N° 00186-2016-1-JR-PE-03***, donde se advirtió del error en el que incurrió el Juez A-quo a lo que el colegiado enmendó señalando que el proceso inmediato constituye un buen mecanismo procesal que permite justicia oportuna, sin embargo existen cuestionamientos sobre su seguridad y garantías del cumplimiento de las reglas esenciales del debido proceso donde uno de los aspectos esenciales es precisamente la prueba, su forma de recabar , su actuación y finalmente su valoración, condiciones que en caso de delitos de esta naturaleza se complica aún más, por la inexistencia de pruebas objetivas o directas que deriven en la probanza del hecho.

Dadas las condiciones que antecede; habiéndose revisado las convergencias y divergencias respecto a los lineamientos del objetivo general; resulta importante señalar que la incoación del proceso inmediato requiere como presupuesto material para su aplicación la simplicidad del caso, por lo que su aplicación en casos graves implica vulneración a los principios del nuevo modelo procesal; sin embargo no todo recae en la norma; sino de manera bipartita son los operadores quienes materializan lo establecido en la norma por ello hay que preparar fiscales, jueces y abogados que actúen acorde a esas velocidades, para que se pueda balancear la cosa a fin de resguardar el cumplimiento de los principios procesales. en la implementación de este proceso especial surgen problemas gravísimos, pues se han llegado a mutilar etapas sustanciales del sistema procesal, olvidándose de la inspiración garantista en el que se funda el novel cuerpo adjetivo que introduce a la vez las garantías del nuevo modelo procesal.

Así mismo, en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1194 -proceso inmediato reformado-, amplan su dación en datos estadísticos de inseguridad; también es cierto que reflejan la gran cantidad de proceso de omisión a la asistencia familiar (OAF) y conducción en estado de ebriedad (CEE) denotando

que la inclusión de este supuesto al proceso inmediato obedecería primordialmente, a la carga y congestión que representan en la realidad procesal del país.

Con los argumentos ya desarrollados se advierte la corroboración del presupuesto jurídico general a mérito del cual se advierten críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, en relación al cual se estableció que la simplificación del proceso es una herramienta muy útil, sin embargo algunos excesos y descuidos en su aplicación han generado fuertes críticas, ya que en vez de aplicar la norma procesal acorde a los principio y garantías en los que se inspira su fundamentación -olvidándose del precepto material de simplicidad en los procesos para su aplicación- se presenta un sistema procesal con miras a la aplicación de penas singulares y carentes de justificación constitucional.

4.2 Respecto al Primer Objetivo Específico. - El presente trabajo de investigación plantea el siguiente primer objetivo específico: Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio

Sobre la autonomía de los Fiscales y la vulneración al principio acusatorio.

El Ministerio Público, como órgano constitucionalmente reconocido, goza de autonomía institucional, es precisamente esa autonomía la que brinda la seguridad jurídica necesaria en los procesos judiciales; ahora bien el proceso inmediato reformado deja de lado el “PODRA” que se resumía en la facultad con la que contaba el Fiscal, -que era acorde a la autonomía que corresponde a su función- para dar paso al “DEBE” que se traduce en la obligatoriedad que le impone al Fiscal para requerir la incoación del proceso inmediato “bajo responsabilidad”, preceptos recogidos en el artículo 446° del Código Procesal Penal.

Ante la situación planteada, **Cartagena (2016)** en su investigación concluyó que bajo la reforma del proceso inmediato, se afecta gravemente su actuación Objetiva, su imparcialidad y su independencia, siendo sus funciones

encomendadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público. De la misma manera **Carrasco (2016)** determinó en su investigación académica que se debe cambiar el hecho de que el fiscal sea obligado a acusar una vez pasado la audiencia de proceso inmediato y darle la potestad que en caso de duda pueda pasar a proceso ordinario. Sin duda es un tópico relevante a considerarse toda vez que el proceso inmediato circunscribe los principios y garantías procesales con mayor riesgo de ser vulnerados por su naturaleza fugaz.

Así mismo, el venezolano **Castejón (2009)** en su tesis concluyó que la presentación por el Ministerio Público del aprehendido in fraganti ante el juez de control, y su solicitud de calificación de la flagrancia, derivan del carácter optativo que otorgan a esta actuación fiscal los vocablos “podrá proponer”, pero evidentemente que de solicitarlo así el representante del Ministerio Público, dispondrá en ese momento de todos los elementos probatorios que posibiliten que el juez de control pueda calificar la flagrancia, y en consecuencia poder realizar en forma inmediata el juicio oral y público.

En lo que refiere al principio acusatorio este se encuentra íntimamente relacionado con la autonomía con el que cuenta el Fiscal como titular de la acción; para el tratadista **Arbulú (2014)** el principio acusatorio guarda relación con otro principio: el de imparcialidad del juez que le permite que su rol decisor no se contamine con uno de persecución que le corresponde a la fiscalía, de esto se desprende que es labor íntegra y exclusiva del Ministerio Público la persecución del delito, como lo estableció además el Tribunal Constitucional, quien ha sostenido en reiterados pronunciamientos la exclusividad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin.

Así mismo, los especialistas **Matamoros, Lapa, Nakazaki y Molina (2017)**, sostuvieron en referencia al proceso inmediato y la autonomía del fiscal, que habría una posible colisión puesto a que la norma obliga al Ministerio Público a formular la incoación del proceso inmediato, empero para eso debe de analizar la concurrencia de los presupuestos materiales como la simplicidad y la prueba evidente, solo así el representante del Ministerio Público podrá solicitar la

incoación del proceso inmediato; Señalándose además que la norma tiene que ser interpretada bajo las reglas de la interpretación constitucional. En esa misma línea **Villa (2017)** aseveró que ante una interpretación literal de la norma se estaría vulnerando el principio acusatorio.

Por el contrario, **Aliaga, Mendoza, Ponce y Valdivia (2017)**, consideran que en el escenario donde la norma ordena que el Fiscal DEBE solicitar la incoación del proceso inmediato bajo sanción administrativa; no se vulnera el principio acusatorio, porque si bien el Ministerio Público, tiene el deber de la incoación, esto no le suprime el ejercicio de su autonomía como titular de la acción penal; garantizándose que no se ha menguado el principio acusatorio; ya que el Fiscal solicitará la incoación del proceso inmediato cuando aprecie que se cumple con los requisitos para realizarlo. Sin embargo nos encontramos con casos de latente vulneración al principio acusatorio ya que se están adecuando las situaciones como se advirtió en el análisis del **Caso N° 00186-2016-1JR-PE-03**, donde el colegiado superior fundamento que no se soluciona las deficiencias del sistema de justicia penal, resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos los casos pueden incluirse dentro del proceso inmediato; en este aspecto son los Fiscales quienes deberán de gozar con las prerrogativas de autonomía para la incoación del proceso inmediato siempre y cuando se ajuste a la norma.

De lo establecido en el **Proyecto de ley N° 5391/2015-CR** se rescató el fundamento que respalda la inconstitucionalidad del artículo 446° pues conduciría a una aplicación mecánica del proceso inmediato, ya que obliga al fiscal a solicitar la incoación del proceso inmediato, además se corroboró con los argumentos establecidos en la **Resolución Dos del Expediente N° 00124-2016-0** en el que se advirtió que la fiscalía provincial conoció el caso por disposición superior, toda vez que la fiscalía anterior presentó cargos para que sea conocido en proceso común porque consideró que existen documentos pendientes por recabar, pero fue negado en el juzgado de turno. Como se es de observarse se están incurriendo en graves vulneraciones al principio acusatorio.

Del **análisis normativo comparado** se rescató que en las legislaciones de Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Honduras se emplea la coacción al Ministerio

Publico a fin de que solicite la incoación del proceso simplificado, advirtiéndose de los resultados obtenidos que el Perú es el único país donde se emplea el verbo rector **DEBE**, para determinar obligación bajo sanción al fiscal, restándole así la autonomía y atentando gravemente contra el principio acusatorio.

Con las divergencias y convergencias analizadas en atención al primer objetivo específico; se concluyó que existe evidente trasgresión al principio acusatorio, toda vez que el D.L 1194, en clara contravención a lo dispuesto en el cuerpo normativo adjetivo (Art. 60), así como en la Constitución Política (Art. 158° y 129°), que revisten de autonomía e independencia del Ministerio Publico, dictamina la actuación del persecutor de delito con el imperativo “debe”; suprimiendo así, la autonomía del Ministerio Publico para ejercer su potestad en considerar la necesidad del proceso inmediato.

La imputación concreta y el principio acusatorio en el proceso inmediato por omisión a la asistencia familiar.

Surgen serios cuestionamientos a la inclusión de los proceso por omisión a la asistencia familiar, toda vez que la ratio legis del decreto Legislativo N° 1194 -que regula el proceso inmediato reformado- contempla en su exposición de motivos que su dación obedece a una lucha frontal contra la criminalidad organizada y hacer frente a la inseguridad ciudadana, ocultándose lo que en la práctica ha reflejado el empleo del proceso inmediato como un mecanismo de descarga procesal.

Sin embargo, la trasgresión al principio acusatorio se materializa a mérito de la inobservancia al requerimiento de imputación necesaria, advirtiéndose que se ha dejado de lado la previa verificación de la causa probable en estos procesos, otorgándole suficiencia probatoria a la sentencia civil que determina la obligación alimentaria, siendo necesario que concurra además elementos contundentes que corroboren la capacidad económica del procesado.

Como es sabido, la imputación fiscal debe de cumplir con las formas requeridas por la norma, a efectos de que esta imputación sea concreta, vale decir los sustentos facticos deben de ser probables, por lo que el Ministerio Publico al

solicitar la incoación del proceso inmediato solo con la concurrencia de la sentencia que obliga al procesado y su apercibimiento por el incumplimiento del mandato judicial no constituyen medios suficientes para dar sustento a la imputación concreta, inclusive se han evidenciado casos en los que se están omitiendo las conferencias con el procesado antes del requerimiento de la incoación del proceso inmediato. En este orden de ideas el tratadista **Mendoza (2017)** fue tajante al señalar que se debe realizar un real dimensionamiento del impacto de los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en la seguridad ciudadana, para no atizar expectativas ilusas en el sentido que su procesamiento en el proceso inmediato sería una herramienta idónea para afrontar los problemas de seguridad ciudadana.

Así mismo, los entrevistados **Villa, Mendoza y Ponce (2017)**, consideraron que es apropiada la relevancia en la determinación de la capacidad económica del obligado, considerando que el Ministerio Público no debe sujetarse al cumplimiento literal de la norma al incoar proceso inmediato ya que se estaría supeditando sólo a “verificar las copias certificadas de la sentencia emitida, dejándose de lado la verificación si realmente existe causa probable que permita establecer la existencia suficientes medios probatorios para establecerse la existencia de una conducta injustificada de parte del sujeto inculcado respecto a la omisión alimentaria que necesariamente debe estar ligada a la suficiencia de capacidad económica. Concluyendo que es preciso que se tome en cuenta que en sede de familia se presume la capacidad empero en el ámbito penal se tiene que en la imputación concreta se deben probar derribando toda duda y suposición, ya que los efectos punitivos atañen a la privación de la libertad.

Bajo la misma perspectiva, el especialista **Nakazaki (2017)**, aseveró que en el delito de omisión a la asistencia familiar existe un gran problema al entender uno de los elementos del delito de omisión propia que es la capacidad individual de acción;

No obstante, **Valdivia y Molina (2017)**, concuerdan en que es el Juez el garante de la legalidad y el Fiscal actúa como titular de la acción por lo que es parte de la autonomía del Ministerio Público para presentar una imputación concreta determinado la capacidad económica del obligado.

Ahora bien, ***Aliaga, Matamoros y Lapa (2017)***, consideraron que no es necesario el debate de la capacidad económica del obligado, toda vez que este asunto ya se determinó en el proceso civil - familia, fundamentándose su determinación en el principio del daño causado. Sin embargo resulta importante notar que en tanto la Fiscalía no presente elementos que corroboren la capacidad económica del obligado se estaría incumpliendo con la determinación de la tipicidad del acto del omitente; ya que en los delitos por omisión es determinante el elemento de la capacidad del autor y si el fiscal fundamenta su acusación solo en lo dispuesto por la sentencia civil, se está cometiendo un grave error puesto que con la finalidad de la protección del menor esta sentencia se fundamenta en la presunción de la capacidad del obligado al amparo del código civil, lo que no se puede tomar en materia penal ya que para emitir las determinaciones se debe de tener la certeza y no debe de contemplarse duda alguna en vista que las consecuencias son más gravosas.

De las divergencias y convergencias en la discusión relacionada a la imputación concreta como elemento del principio acusatorio, se concluyó que existe una errónea aplicación de política criminal, ya que no se debería de encausar a los sujetos omitente bajo los mismos supuestos de un delincuente común; así mismo la imputación fiscal en los casos de omisión a la asistencia familiar obedecen en su mayoría a la interpretación literal de la norma, observándose que no se realizan las diligencias preliminares para la determinación de la capacidad económica del procesado, otorgándole calidad probatoria a la sentencia procedente de la demanda de alimentos en lo civil; así mismo existe incongruencia en la aplicación del proceso inmediato para este tipo de proceso toda vez que la fugacidad que contempla este proceso para los casos de flagrancia delictiva se está empleando de manera desproporcionada, por el análisis antes realizado se constata lo establecido en el primer supuesto jurídico específico ya que se evidencia la vulneración al principio acusatorio por la aplicación del proceso inmediato.

4.3 Respecto al Segundo Objetivo Específico. - El presente trabajo de investigación plantea como segundo objetivo específico: Fundamentar las críticas

a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas.

El principio de igualdad de armas y su vulneración en la aplicación del proceso inmediato.

El principio de igualdad de armas es una instrucción jurídica que sienta las bases para el debido proceso, por ello su vulneración concita interés no solo desde el tanto de análisis procesal sino además desde el punto de análisis constitucional; ahora bien, con la aplicación del proceso inmediato, cabe preguntarse si se está respetando este principio; toda vez que ante los supuesto de flagrancia delictiva, es el fiscal quien premunido de todo el arsenal y equipo técnico del aparato estatal plantea y requiere las pruebas de cargo a fin de encausar el proceso inmediato; sin embargo, por el otro extremo es de verse los denodados esfuerzos de la defensa técnica para desvirtuar u objetar la imputación vertida sobre el procesado valiéndose de argumentos facticos muchas veces sin fuerza probatoria.

En este sentido, **Oré (2016)** en su trabajo de investigación concluyó que es a mérito de la brevedad que representa el proceso inmediato, que el imputado no puede reunir suficientes medio probatorio que demuestre su inocencia, por lo tanto el juez se encuentra limitado a los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía y para que dicha decisión se desarrolle un proceso con las garantía mínimas este queda solo facultado sobre la base del sentido discrecional del operador jurídico. Para los tratadistas **Cáceres e Iparraguirre (2017)** en referencia a la igualdad de armas sostuvieron que el presente código recoge el principio de igualdad de armas, con el que se borra principalmente las desigualdades entre fiscal y abogado defensor, convirtiendo a ambos en adversarios con igual posibilidad de acceso a los elementos probatorios.

Ahora bien, de las entrevistas realizadas, **Matamoros, Villa, Lapa y Valdivia (2017)**, señalaron que ante la desigualdad generada por el acceso a la información privilegiada con el que cuenta el Ministerio Publico y el escaso tiempo con el que cuentan la defensa técnica para el análisis de la imputación del delito y

de los medios que sustentan la acusación; se estarían vulnerando los principios procesales, con grave incidencia en el derecho a la defensa, y el debido proceso.

Del mismo modo **Ponce (2017)**, aseveró que de advertirse una marcada desigualdad en la participación de la Fiscalía, frente a la defensa técnica; podríamos afirmar que las garantías procesales establecidas en el nuevo código procesal penal estarían siendo tremendamente vulneradas, afectadas, ya que estaríamos ante un proceso penal arbitrario sin el más mínimo respeto de los derechos que la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, **Molina (2017)**, enfatizó en la importancia que contienen los principios procesales, ya que estas son construcciones dogmáticas con criterio o ideas fundamentales contenidos en el ordenamiento jurídico, garantizando así la estabilidad en el ordenamiento jurídico; coincidiendo con **Mendoza (2017)** quien resalta la gran relevancia que tienen los principios procesales, las mismas que se ven modulados en la fugacidad que representa el proceso inmediato, concluyendo que es el abogado defensor quien debe realizar el estudio adecuado de la tesis y las pruebas en las que el fiscal fundamenta su teoría del caso para ello debe de contar con un plazo razonable. En este aspecto no se puede dejar de lado lo mencionado por el especialista, toda vez que el plazo razonable es uno de las materializaciones del derecho de Defensa.

Bajo esta misma perspectiva el entrevistado **Nakazaki (2017)**, advierte de la necesidad de la igualdad entre los sujetos procesales; por el contrario **Aliaga (2017)**, considera que no existe desigualdad entre los operadores. Sin embargo de lo desarrollado en el **CASO 00186-2016-1JR-PE-03**, se advirtió que la defensa pública padece la excesiva carga procesal, por lo que realizan un ejercicio en desmedro del procesado, conllevando a la desigualdad procesal, ello contemplado en el siguiente argumento para la determinación del fallo del superior colegiado.

De la discusión realizada se han analizado las convergencias y divergencias referentes al segundo objetivo específico a mérito del cual se concluyó que el principio de igualdad de armas es de suma importancia en el proceso penal, toda vez que busca proveer de las mismas posibilidades a la parte imputada como al

persecutor del delito; buscando la paridad procesal, garantizando a los involucrados en un proceso penal, similares medios de ataque y de defensa.

Así mismo se debe de tener presente que tanto el órgano persecutor del delito como la defensa técnica deben de contar con similares instrumentos y herramientas de defensa y contradicción, ya que este nuevo modelo procesal penal inserta un escenario que garantiza una relación horizontal.

De la confrontación realizada se confirmó lo establecido en el segundo supuesto jurídico específico a propuesta realizada señala que se evidencia la vulneración al principio de igualdad de armas por la aplicación del proceso inmediato

4.4 Respecto al Tercer Objetivo Específico. - El presente trabajo de investigación plantea el siguiente tercer objetivo general: Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.

En relación a la vulneración del derecho a la defensa.

Los reportes estadísticos, por parte de la Policía Nacional así como de los institutos de monitoreo de la criminalidad han venido observando en gran medida el incremento de la criminalidad, del mismo modo se han presentado datos concretos de atención oportuna en los casos de flagrancia delictiva; de esta manera se está impartiendo justicia oportuna; sin embargo, la fugacidad que implica el proceso inmediato, modula las garantías y principios rectores del proceso, existiendo el alto riesgo de vulnerarlos.

Frente al mecanismo de simplificación que el Estado viene aplicando para los proceso que circunden su aplicabilidad, se encuentra la defensa técnica que muchas veces es ejercida por la defensa publica quien hace los esfuerzos denodado para ser participe y acudir a todas la diligencias necesarias, aun así no llegan a ser partícipes de la mayoría de las diligencia preliminares dejando en indefensión al procesado, en ese mismo tenor se advierte que la defensa técnica no cuenta con el plazo razonable para preparar una defensa adecuada.

En ese orden de ideas, **Matamoros, Villa y Ponce (2017)**, señalaron que con la simplificación procesal no se soluciona todos los problemas procesales que existen, llegándose a transgredirse derechos, así mismo son conscientes al indicar que la naturaleza del proceso inmediato trae consigo riesgos de vulnerar derechos como el derecho de defensa, debido a la falta de capacitación y coordinación que existe muchas veces entre los miembros de la policía nacional y ministerio público; pues son ellos los que inmediatamente después de tomar conocimiento de una intervención en flagrancia delictiva deben proceder a brindarles todas las garantías como es el derecho a un abogado defensor quien debe participar desde el inicio de las investigaciones preliminares a fin de evitar arbitrariedades.

En similar posición el penalista, **Nakazaki (2017)**, fue enfático en poner especial relevancia en el derecho a la defensa, ya que señaló que el derecho a la defensa eficaz consiste, primordialmente en el derecho a la defensa técnica, y que esta defensa cuente con todos los medios legales que el caso exige, eso es derecho a la defensa, no simplemente con la presencia de abogado se garantiza el derecho a la defensa, sino que esta defensa debe de ser calificada y contar con las mismas posibilidades que tiene el fiscal.

Ahora bien, se tiene la concesión del plazo razonable para la elaboración de una adecuada defensa, es sin duda un reto y su aseguración vendría a ser prácticamente una fantasía procesal, si tenemos en consideración que, en el proceso inmediato por flagrancia se imposibilitan la promoción y practica de actos defensivos, limitando a la defensa técnica simplemente a corroborar la actuación de la fiscalía, más aun si consideramos que es la defensa publica quien asume la defensa del imputado, este se verá maniatado su derecho de defensa.

Sin embargo, de los datos obtenidos de la entrevista realizada a los especialistas, **Aliga y Molina (2017)**, se desprende que no se estaría vulnerando el derecho de defensa, toda vez que en la aplicación del proceso inmediato el abogado del procesado tiene derecho a participar en todas las diligencias y aportar los medios de prueba conforme a lo establecido en el artículo 84° del código procesal penal, concluyendo que la modulación de los principios procesales no implica la

vulneración de los principio, asegurándose el derecho a la defensa del procesado a través de su abogado defensor desde el momento en que toma conocimiento del hecho delictivo que se le atribuye.

Bajo la misma postura **Lapa y Valdivia (2017)**, sostuvieron que para la determinación de la vulneración al derecho de defensa, debería de evaluarse de manera aislada los casos en concreto y de advertirse tal vulneración, la acción inmediata seria la denuncia ante el juez de garantías; ahora bien, en la aplicación del proceso inmediato los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción, son delitos comprendidos en el procedimiento inmediato por constituir delitos que se configuran con el solo incumplimiento de un deber ser, concluyendo que la aplicación del proceso inmediato no necesariamente representa riesgos de vulneración al derecho de defensa.

Por otro lado **Mendoza (2017)**, reflexiona en cuanto al derecho de defensa y su posible vulneración, enfatizando en que es de suma importancia garantizar el ejercicio amplio de este derecho a las partes que lo requieran en el proceso y más aún si se trata de un mecanismo de simplificación procesal-

La vulneración al principio de la inviolabilidad del derecho de defensa se materializa debido a la fugacidad que implica el proceso inmediato, así mismo es determinante además la poca preparación de las sujetos procesales; del análisis documental se tiene que en la **Casación N° 692-2016-Lima Norte** , en uno de sus fundamentos advierte que no existen razones de extrema urgencia que impidan la intervención de un abogado defensor en sede de investigación preliminar como lo dispone el artículo 71, apartados 1 y 2, literal “c” del Código Procesal Penal; así mismo, no constan las razones por las cuales el imputado rehusó firmar el acta, tampoco por qué no se contó con un abogado defensor de confianza o, en todo caso, con un abogado defensor de oficio. De lo antes vertido es preciso señalar que en la resolución en mención se declara nula la resolución materia de casación por las vulneraciones que se habría infringido al derecho de defensa y al debido proceso,

Del análisis de los datos convergentes en la presente jurisprudencia, es posible determinar el modelo acusatorio con rasgos adversariales que adopta el nuevo código procesal penal; es un sistema garantista –predominante en los sistemas jurídicos eurocontinental- que busca la reducción de los márgenes de arbitrariedad y desigualdad, con ello busca la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de ciertos elementos de un modelo que permite la obtención de los fines del proceso penal, los mismos que están asociados al respeto y realización de los derechos fundamentales como el derecho de defensa; bajo los términos ya desarrollados se tiene el cumplimiento del tercer supuesto jurídico específico a mérito del cual se evidencia la vulneración al principio de inviolabilidad del derecho de defensa por la aplicación del proceso inmediato.

Ahora bien, los operadores como lo son la Policía Nacional y el Fiscal, son los primeros en conocer y desarrollar la investigación de la comisión del delito, sin embargo, la rapidez con que se actúa en el proceso inmediato admite la modulación de cierto principio, empero no admite su supresión total o parcial, de ser el caso se estarían vulnerando derechos procesales constitucionalmente reconocidos.

V. CONCLUSIÓN

Luego de realizado el trabajo de investigación donde se ha identificado las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, se llegó a las siguientes conclusiones:

Primero. -

De acuerdo con el análisis de los resultados, el modelo acusatorio con rasgos adversariales que adoptó el nuevo código procesal penal (D.L 957); lo que conlleva a la implementación de un sistema garantista que busca la reducción de los márgenes de arbitrariedad y desigualdad. En este escenario surgió del proceso inmediato como respuestas del Estado ante la inseguridad ciudadana, garantizando así la dación de fórmulas expeditas que operan de manera excepcional; sin embargo se identificó contundentes críticas a la aplicación del proceso inmediato toda vez que la aplicación del proceso inmediato presenta vulneraciones a los principios que fundamentan el nuevo modelo procesal penal.

Se identificó las críticas a la aplicación del proceso inmediato; toda vez que este proceso especial obedecería a la efectivización del ius Puniendi del Estado, contraviniendo a los principios garantistas del nuevo modelo procesal; así mismo identificó críticas que radican en la inadecuada implementación del proceso inmediato ya que no solo es necesario la modificatoria de normas procesales; sino además la implementación de políticas integrales que involucren recursos humanos y logísticos a fin de que no se cometan excesos y descuidos en su aplicación, exigiéndose el respeto por los principio y garantías procesales ya que su inobservancia instauraría la aplicación de penas singulares y carentes de justificación constitucional.

Segundo. -

Se fundamentó las críticas por la vulneración del principio acusatorio, toda vez que el Decreto Legislativo N° 1194 que implementó el proceso inmediato reformado, ya que este contraviene al principio acusatorio, toda vez que el cuerpo normativo adjetivo (Art. 60), así como en la Constitución Política (Art. 158° y 129°), que revisten de autonomía e independencia del Ministerio Público, dictamina la actuación del persecutor de delito con el imperativo “debe”;

suprimiendo así, la autonomía del Ministerio Público para ejercer su potestad y autonomía directamente relacionada con el principio acusatorio.

Tercero. -

Se fundamentó las críticas por la vulneración del principio de igualdad de armas, toda vez que esta institución jurídica es amparada en el Derecho al Debido Proceso; a fin de garantizar una justicia con las mismas posibilidades para las partes procesales; sin embargo en la aplicación del proceso inmediato se evidenció que la defensa técnica no cuenta con las mismas facilidades y mecanismos para el ejercicio de una defensa eficaz, con lo que el precepto de justicia se encuentra supeditado a la agilidad del proceso, negando así la exigencia del plazo razonable situación que además se corrobora con lo vertido por los especialistas entrevistados.

Cuarto. -

Se fundamentó las críticas por la vulneración del principio de inviolabilidad del derecho de defensa en la aplicación del proceso inmediato; ya que una errónea aplicación de política criminal conlleva a encausar a los sujetos procesados por omisión a la asistencia familiar bajo los mismos supuestos de un delincuente común; observándose que la imputación fiscal en estos casos obedecen en su mayoría a la interpretación literal de la norma, ya que en la práctica se están suprimiendo las diligencias preliminares para la determinación de la capacidad económica del procesado; toda vez que de manera errónea se está aplicando la aceleración correspondiente a los delitos flagrantes, lo que desvirtúa la aplicabilidad del proceso inmediato puesto que no se puede concebir a la sentencia previa (sentencia civil) como prueba evidente siendo que esta sentencia se estructura en base a la suposición de la capacidad económica del obligado; esta práctica inadecuada conlleva a la postulación de la imputación con vicios en la tipicidad de supuesto hecho delictivo ya que no se corroboraría de manera fehaciente la posibilidad de cumplir con la obligación impuesta por la autoridad, evidenciándose trasgresión al derecho de la defensa.

Se fundamentó, además que el proceso inmediato ampara la modulación de los principios del proceso, materializándose en la rapidez de la actuación de la Policía

Nacional y la Fiscalía, quienes son los primeros en conocer y desarrollar la investigación de la comisión del delito, sin embargo no contempla la supresión total o parcial de estos principios procesales, en ese orden es la fugacidad que implica el proceso inmediato el detonante para la vulneración del principio de la inviolabilidad del derecho de defensa, materializándose en la ausencia del plazo razonable para el ejercicio adecuado de una defensa eficaz.

VI. RECOMENDACIONES

Luego de haberse precisado las conclusiones en el presente trabajo de investigación que tuvo como propósito identificar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal, en atención al cual se desarrollaron entrevistas a especialistas y análisis de diversas fuentes documentales y normativa comparada; se expresan las siguientes recomendaciones:

Primero.-

Que, el Ministerio Público, a través de la Junta de Fiscales disponga la creación de Fiscalías exclusivas para delitos tramitados bajo el proceso inmediato, con la finalidad de una actuación diferenciada de los Fiscales frente a estos procesos que por su naturaleza fugaz comprende la modulación de los principios procesales y las garantías constitucionales. En este mismo orden de ideas se recomienda que, se instale una comisión interinstitucional conformada por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia con participación directa de la comisión permanente del Congreso de la República, a efectos de evaluar la modificación normativa del proceso inmediato contenido en el libro quinto del Código Procesal Penal a efectos de que se precise las restricciones de aplicación del proceso inmediato restringiéndola solo para los delitos que no importan pena efectiva. Lo anterior se fundamenta en que la incoación del proceso inmediato requiere la simplicidad del caso como presupuesto material para su aplicación; por lo que su aplicación en casos graves implica vulneración a los principios del nuevo modelo procesal que prevé el juicio como garantía procesal.

Segundo.-

Que, la comunidad jurídica (Jueces, Abogados de oficios/particulares y Fiscales) y la Policía Nacional, sean capacitados de manera conjunta en materia del proceso inmediato, siendo esta capacitación requisito para la asunción cargo o postulación a concurso público; lo anterior se justifica en la necesidad urgente de una visión panorámica de la realidad sobre la criminalidad y de la aplicación adecuada del proceso inmediato en todas las instituciones intervinientes, puesto que una capacitación particular e independiente solo ocasiona una visión sesgada de la funcionalidad de este proceso especial; como se ha podido evidenciar en el desarrollo de la presente investigación no todo recae en la norma sino de manera

bipartita son los operadores del Derecho quienes materializan lo establecido en la norma; por ello hay que preparar Fiscales, Jueces y Abogados que actúen acorde a esas velocidades a fin de resguardar el cumplimiento de los principios procesales. Así mismo se recomienda a la comunidad jurídica impulsar el proyecto de ley que modifique el código procesal penal (D.L 957) en su artículo 446°, respecto al verbo “debe” por “puede”; garantizando la independencia del Ministerio Público la autonomía constitucional con que gozaba hasta antes de la dación del D.L 1194°. Para la realización de lo anterior expuesto se podrá crear programas de capacitaciones interinstitucionales e incentivas al personal interesado en ser capacitado.

Tercero.-

Que, el Gobierno central en coordinación con los gobiernos regionales instaure congresos y mesas de trabajo dirigido a la población a fin de sensibilizar sobre la excepcionalidad del proceso inmediato dotando de herramientas a la sociedad para la prevención del delito así como para la defensa de sus derechos, es preciso que se considere que la política criminal debe de aplicarse de manera sistemática y en todos los estratos de la población; lo antes requerido será de vital importancia para la implementación de la justicia restaurativa en la que se inspira el nuevo modelo procesal penal, otorgándose además de las herramientas adecuadas para el ejercicio de sus derechos.

Cuarto.-

Que, el Poder Ejecutivo disponga mediante un Decreto Legislativo, la implementación de un sistema de descongestión procesal penal ágil, oportuno y diferenciado para los procesos de omisión a la asistencia familiar (Art. 446. 4 del Código Procesal Penal) considerándose que la tramitación de estos delitos no obedecen a la ratio legis del proceso inmediato, por lo tanto su inclusión desvirtúa el deber ser de la norma del proceso inmediato, ocasionando la aceleración inadecuada que es propio y justificado en los delitos flagrantes por la prueba evidente y la simplicidad procesal. Debiendo de convocarse como interconsulta a una mesa de trabajo multidisciplinaria conformada por el Poder judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo.

VII. REFERENCIAS

7.1 Fuentes Primarias

7.1.1 Entrevistas

Aliaga, L. (2017), Abogada, Fiscal Superior de la 2° Fiscalía Penal de Lima contra la Criminalidad Organizada. Entrevista Realizada el 06 de octubre de 2017.

Lapa, R. F. (2017), Abogado, Procurador Publico Anticorrupción adjunto al Ministerio de Justicia. Entrevista Realizada el 11 de octubre del 2017.

Matamoros, C. (2017), Abogado, Fiscal Superior adjunto de la Fiscalía Penal de Lima contra la Criminalidad Organizada. Entrevista Realizada el 06 de octubre de 2017.

Mendoza, F. C. (2017), Abogado, Juez Superior del colegiado D de la Sala Penal Nacional. Entrevista Realizada el 13 de octubre del 2017.

Molina, W. E. (2017), Abogado, Juez del Juzgado de Investigación preparatoria de Santa Rosa – CSJV (mayo-dic de 2016). Entrevista Realizada el 10 de octubre del 2017.

Nakazaki, C.A. (2017), Abogado, Defensa Particular, Profesor de Derecho Procesal Penal y ética Profesional. Entrevista Realizada el 13 de octubre del 2017.

Ponce, R. M. (2017), Abogada, Jueza del 3° Juzgado de Investigación preparatoria – CSJV (enero-junio de 2016). Entrevista Realizada el 10 de octubre del 2017.

Valdivia, P. L. (2017), Abogada, Jueza del Octavo Juzgado Unipersonal de Lima, ex Fiscal de Prevención del Delito. Entrevista Realizada el 11 de octubre del 2017.

Villa, C. M. (2017), Abogado, Defensa Particular, ex Procurador del Ministerio de Justicia. Entrevista Realizada el 10 de octubre de 2017.

7.2 Fuentes secundarias

7.2.1 Referencias metodológicas

- Arazamendi, L. (2009). *Guía metodológica de la investigación jurídica del proyecto a la tesis*. Arequipa, Perú: Adrus.
- Ávila, H.L. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación*. Recuperado de <http://www.eumed.net/libros/2006c/203/>
- Bernal, C.A. (2010). *Metodología de la investigación*. Bogotá, Colombia: Pearson.
- Bijarro, F. (2015). *Desarrollo estratégico para la investigación científica*. Tamaulipas, México: Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- Cortes, M.E. e Iglesias, M. (2004). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Campeche, México: Universidad Autónoma del Carmen.
- Domínguez, S., Sánchez, E. E. y Sánchez, G. A. (2009). *Guía para elaborar una tesis*. D. F., México: Mc Graw-Hill.
- Gómez, S. (2012). *Metodología de la Investigación*. Talnepantla, México: Red Tercer Milenio.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. P. (2016). *Metodología de la investigación*. México, D.F: Interamericana editores.
- Jiménez, R. (1998). *Metodología de la investigación, elementos básicos para la investigación clínica*. La Habana, Cuba: Centro Nacional De Información De Ciencias Médicas.
- Monje, C.A. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, guía didáctica*. Neiva, Colombia: Universidad Surcolombiana.
- Muñoz, C. (2011). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. Naucalpan de Juárez, México: Pearson.
- Pacheco, A. y Cruz, M. (2006). *Metodología crítica de la investigación lógica, procedimientos y técnicas*. Distrito Federal, México: Cecsca.
- Ramos, C. (2014). *Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento (y como sustentar expediente)*. Lima, Perú: Grijley.

- Robles, L. W. (2014). *Guía Metodológica para la Elaboración del Proyecto de Investigación Jurídica*. Perú, Lima: Ffecaat.
- Rodríguez, E. A. (2005). *Metodología de la Investigación*. Tabasco, México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Sabino, C. (1992). *El proceso de investigación*. Caracas, Venezuela: Panapo.
- Supo, J. (2015). *Cómo empezar una tesis-Tu proyecto de investigación en un solo día*. Arequipa, Perú: Bioestadístico.
- Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica*. Distrito Federal, México: Limusa.

7.2.2 Referencias temáticas

- Academia de la Magistratura. (2007). *Código procesal penal - manuales operativos*. Lima, Perú: Súper Grafica.
- Araya, A.G. (2016). *Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia*. Lima, Perú: Jurista Editores.
- Arbulú, V. J. (2014). *La investigación preparatoria en el nuevo proceso penal*. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
- Avalos, C.C. (2015). *Determinación judicial de la penal, nuevos criterios*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Borja, M. H. (2009). *Violación de las Garantías Constitucionales de los Derechos Humanos y el Debido Proceso en la aprehensión por delito flagrante y la prisión preventiva*. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. Recuperado de: [http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1148/ 1/](http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1148/1/).
- Carrasco, A. (2016). *La implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y derecho a ser juzgado en un plazo razonables, lima-norte 2016* (tesis de pregrado). Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú.

- Cabanellas, de T. (2006). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- Cáceres, R. e Iparraguirre, R. D. (2017). *Código Procesal Penal Comentado*. Lima, Perú: Jurista.
- Castejón, M. (2009). *El procedimiento de flagrancia en el derecho procesal penal venezolano* (Tesis de Maestría). Universidad Católica Andrés Bello. Barquisimeto, Venezuela.
- Cartagena, E. (2016). *Inconvencionalidad del Decreto Legislativo N° 1194 y sus efectos en la administración de justicia de la provincia de san Román – Juliaca* (Tesis de Pregrado). Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Puno, Perú.
- Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente. (27 de enero del 2015). Recurso de Nulidad N° 4003-2013. [MP. Pariona Pastrana]
- Cuba, X. (2016). *Análisis del proceso penal inmediato en el caso de flagrancia delictiva*. Universidad Nacional de Piura, Perú. Recuperado de: <http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2016/09/>
- Cubas, V. (2009). *El Nuevo Proceso Penal Peruano, Teoría y práctica de su implementación*. Lima, Perú: Palestra.
- Especial. (2017). En el *Diccionario de la Real Academia Española* (23ª ed.). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=especial>.
- Gaceta Jurídica (2010). *Procedimientos Especiales: Lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004 sobre los procedimientos especiales*. Lima, Perú: Gaceta.
- Gálvez, T. A. (2017). *Medidas de coerción personales y reales en el proceso penal*. Lima, Perú: Ideas.
- Gutiérrez, W., Torres, M. y Esquivel, J. (2015). *La justicia en el Perú, cinco grandes problemas*. Perú, Lima: Fondo editorial de la biblioteca nacional del Perú.

- Inmediato. (2017). En el Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=inmediato>.
- Maestre, J. F. (2007). *La Discrecionalidad para acusar aspectos generales relacionados con el principio de oportunidad y reflexiones en torno a su reglamentación en Colombia*. Colombia, Bogotá: Fundación Cultural Javeriana.
- Martínez, V. J. (2015). *Derecho Procesal Penal, un enfoque doctrinario y jurisprudencial*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Mendoza, F.C. (2017). *Sistemática del procedimiento inmediato, perspectiva procesal crítica*. Lima, Perú: Idemsa.
- Mendoza, G.G. (2016). *Aplicación dogmática del proceso inmediato: interpretación del Decreto Legislativo N° 1194 según el acuerdo plenario extraordinario N° 2-2016/Cij-116*. En J. L. Salas, G. Taboada, M. E. Páucar, V. J. Valladolid, G. G. Mendoza, J. D. Burgos, . . . F. C. Mendoza (Eds.), *El nuevo proceso penal inmediato, flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción* (pp. 209-277). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Meneses, J. (2015). *Procedimiento para investigar y sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad*, (tesis de pregrado). Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú.
- Morales, A. (2001). *Nuevo Código de Procedimiento Penal: Redefinición y fines del proceso penal*. Quito, Ecuador: Fundación para el Debido Proceso Legal y Fundación Esquel.
- Monge, V. (2012). *La constitucionalidad del procedimiento penal de flagrancia*. Universidad de Costa Rica (Tesis de Pregrado), San José, Costa Rica.
- Monroy, J. (1996). *Introducción al proceso civil*. Lima, Perú: Temis. 135.
- Nakasaki, S. (2017). *El derecho penal y procesal penal desde la perspectiva del abogado penalista litigante*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

- Oré, A. (2016). *Estudio Introductorio*. En J. L. Salas, G. Taboada, M. E. Páucar, V. J. Valladolid, G. G. Mendoza, J. D. Burgos, F. C. Mendoza (Eds.), *El nuevo proceso penal inmediato, flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción* (pp. 5-32). Lima, Perú: Gaceta.
- Oré, C. (2016). *Trascendencia del Principio de Presunción de la Inocencia dentro del Proceso Inmediato en los Supuestos de Cuasiflagrancia y Presunción de Flagrancia*, (tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.
- Peña, A.R. (2016). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima, Perú: Pacífico.
- Peña, A.R. (2016). *Derecho Penal y Procesal Penal*. Lima, Perú: Idemsa.
- Reátegui, J. (2014). *Manual de Derecho Penal, Parte General*. Lima, Perú: Pacífico Editores S.A.C.
- Reyna, L. (2005). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Perú, Lima: Instituto Pacífico.
- Rosas, J. (2013). *Tratado de Derecho Procesal Penal: Análisis y desarrollo de las instituciones del nuevo modelo procesal penal*. Lima, Perú: Pacífico.
- Sánchez, J. H. (2011). *Procedimientos especiales: Problemas de aplicación del código procesal penal de 2004*. Lima, Perú: Gaceta.
- Sánchez, P. (2009). *El Nuevo Proceso Penal*. Lima, Perú: Idemsa.
- San Martín, C. (2015). *Derecho Procesal Penal, Lecciones*. Lima, Perú: Inpeccp.
- San Martín, C. (2005). *Introducción General al estudio del Nuevo Código Procesal Penal, apuntes preliminares*. Lima, Perú: Palestra.
- Tejada, J. E. (marzo 2016). *El proceso inmediato y su aplicación en los primeros cien días*. Revista Ius In Frangenti. Año 1(Nº 1), p. 56.
- Tribunal Constitucional, (mayoría). STC Nº 2096-2004-HC/TC de 27 de diciembre de 2004

ANEXOS

Anexo 1



MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Roy Ober Muñoz Yarihuaman.....:

FACULTAD/ESCUELA: Derecho.....:

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	“Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal”
PROBLEMA GENERAL	¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	<p>Problema Específico 1 ¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio?</p> <p>Problema Específico 2 ¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas?</p> <p>Problema Específico 3 ¿Cuáles son las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa?</p>
SUPUESTO JURÍDICO GENERAL	Se advierten críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.
SUPUESTOS JURÍDICO ESPECÍFICOS	<p>Supuesto Jurídico Específico 1 Se evidencia la vulneración al principio acusatorio por la aplicación del proceso inmediato.</p> <p>Supuesto Jurídico Específico 2 Se evidencia la vulneración al principio de igualdad de armas por la aplicación del proceso inmediato.</p> <p>Supuesto Jurídico Específico 3 Se evidencia la vulneración al principio de inviolabilidad del derecho de defensa por la aplicación del proceso inmediato.</p>
OBJETIVO GENERAL	Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<p>Objetivo Específico 1 Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio.</p> <p>Objetivo Específico 2 Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas.</p> <p>Objetivo Específico 3 Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.</p>
DISEÑO DE ESTUDIO	Teoría fundamentada y Estudio de casos
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	Entrevista (Guía de entrevista) Análisis documental (Guía de análisis documental) Observación (Guía de análisis de caso)
POBLACIÓN Y MUESTRA	Conjunto de personas y documentos sobre quienes recaerá la aplicación de los instrumentos de recolección de datos (9 especialistas y 6 documentos)
CATEGORIAS	Proceso Inmediato, Principios Procesales y Nuevo Modelo Procesal Penal.

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS	Método de análisis Sistemático - Método de análisis Hermenéutico Método de análisis Inductivo - Método de análisis Exegético - Método de análisis Argumentativo
DISCUSIÓN	Los operadores como lo son la Policía Nacional y el Fiscal, son los primeros en conocer y desarrollar la investigación de la comisión del delito, sin embargo, la rapidez con que se actúa en el proceso inmediato admite la modulación de cierto principio, empero no admite su supresión total o parcial, de ser el caso se estarían vulnerando derechos procesales constitucionalmente reconocidos.
CONCLUSIONES	El modelo procesal que adopta el nuevo código procesal penal (D.L 957); implementa un sistema garantista que busca la reducción de los márgenes de arbitrariedad y desigualdad. En este escenario surge el proceso inmediato como respuestas del Estado ante la inseguridad ciudadana, garantizando así la dación de fórmulas expeditas que operan de manera excepcional; sin embargo la aplicación del proceso inmediato ha recibido críticas que se enfocan en la vulneración de los principios que fundamentan el nuevo modelo procesal penal, advirtiéndose que este proceso especial obedecería a la efectivización del ius Puniendi del Estado contraviniendo a los principios garantistas del nuevo modelo procesal.

Anexo 2



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santesteban Llontop Pedro
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Auxiliar - Director Defensor
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											/		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											/		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											/		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											/		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											/		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											/		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											/		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.											/		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											/		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											/		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Si

90 %

Lima, 02 de octubre del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09803311 Telf. 999025433

PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 ABCRUU
 OAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: ACE TO LUCA
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV DE Q.ECHO
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: EN REVISIA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 24 DE JULIO del 2017

Juan Acuña
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No 000952340 Telf: 931 200720

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: VARGAS HUAMAN, ESAU
 1.2. Cargo e institución donde labora: ASESOR DE TESIS - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Si

93 %

Lima, del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 31042362 Telf. 969415453

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llantop Pedro
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar, MINISTERIO DE DEFENSA
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis Documental
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

31

90 %

Lima, 02 de octubre del 2017


 PEDRO SANTISTEBAN LLANTOP
 ABC 3230
 CAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 9803711 Telf.: 999025433

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: VARGAS HUAMAN ESAU
 1.2. Cargo e institución donde labora: ASESOR DE TESIS - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													✓
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													✓
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													✓
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.													✓
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.													✓
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 22 de octubre del 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 36940228 Telf. 969415451

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti Giuseppe Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													X
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													X
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													X
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.													X
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

98 %

Lima, 07 de octubre del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 0703466 Telf. 99 819 99 84

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres:.....MARGAS HUAMAN, ESAU.....
 1.2. Cargo e institución donde labora:.....ASESOR DE TESIS - UCV.....
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:.....GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL - JURISPRUDENCIA.....
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima,..... del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 31042328 Telf. 969 915453

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti Julio
 1.2. Cargo e institución donde labora: Auxiliar de Teoría - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis de Jurisprudencia
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarithuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													X
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

94 %

Lima, 02 de octubre del 2017


FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 4134462 Telf.: 978199984

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti Guiseppe Poul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente - JCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis Jurisprudencial
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													X
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													X
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

97 %

Lima, 02 de octubre del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 69634461 Telf. 998199904

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti Julio Cesar
 1.2. Cargo e institución donde labora: ASESOR METODOLOGIA
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ANÁLISIS DE CASOS
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												/	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												/	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													/
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													/
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													/
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												/	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												/	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.												/	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												/	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												/	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Sí

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

96.5%

Lima, 12 de Octubre del 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 41349162 Telf.: 9951999184

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: García Rivas, José Carlos
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis de Casos
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman Roy Ober.....

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 15 de noviembre del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 69919288 Telf.: 963870906

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti Guisseppi Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: JEFE DEL AREA DE INVESTIGACIÓN - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ANALISIS DE CASO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												/	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												/	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												/	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												/	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												/	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												/	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												/	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.												/	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												/	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												/	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Si

95 %

Lima, 12 de octubre del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09534461 Telf. 992386819

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: SANTISTEBAN LLONTOP PEDRO
 1.2. Cargo e institución donde labora: FISCAL AJUDANTE - MINISTERIO DEFENSA
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ANÁLISIS NORMATIVO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

S /

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 02 de octubre del 2017


 PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 ABOGADO
 CAL 17951
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 05801111 Telf.: 995025433

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: VARGAS HUAMAN, ESAU
 1.2. Cargo e institución donde labora: ASESOR TESIS - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ANÁLISIS NORMATIVO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

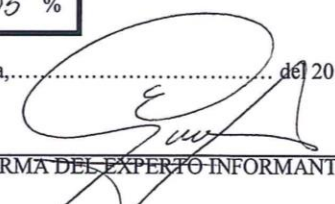
- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Si

95 %

Lima, de 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 31042328 Telf.: 969415453



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Morales Cauti Guiseppe Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Aproy de Tesis - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis normativo
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Muñoz Yarihuaman, Roy Ober

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr contrastar los supuestos.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

S/

90 %

Lima, 02 de Octubre del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09634461 Telf. 998199984

Anexo 3 – A



GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado:

Cargo/Profesión/Grado académico:

Instrucción:

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

.....
.....
.....
.....

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

.....
.....

-
-
4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Publico (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Publico. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

.....

.....

.....

.....

6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Publico en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

.....

.....

.....

-
-
7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

.....

.....

.....

.....

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

- 10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.**

.....
.....
.....
.....

- 11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.**

.....
.....
.....
.....

- 12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?**

.....
.....
.....

.....

Sello

.....

Apellidos y Nombres

FIRMA

Anexo 3 - B



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Ficha Técnica	
Documento:	
Congreso de la Republica:	
Autor	:
Bancada	:
Fecha	:
Objetivo	:

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

EL PROCESO INMEDIATO DEONTOLÓGICAMENTE BUSCA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS CONFLICTOS PENALES CON EL FIN DE ALCANZAR UNA SOLUCIÓN JUSTA, OPORTUNA Y EFICAZ.

		MARCAR	
		SI	NO
ÍTEMS			
1°	La inseguridad ciudadana fundamenta la dación de una fórmula de simplificación procesal.		
Fundamento materia de análisis			
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio.

LA OBLIGACIÓN COACTIVA AL MINISTERIO PÚBLICO DE REQUERIR LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO, CONLLEVA EN LA PRÁCTICA AL RIESGO DE VULNERAR SU AUTONOMÍA.

			Marcar	
ÍTEMS			SI	NO
1°	Se evidencia la afectación de las facultades y de la autonomía del Ministerio Público.			
Fundamento materia de análisis				
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.	

Anexo 3 – C



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Ficha Técnica

RES. N°:

ENTIDAD:

Tipo de Proceso :
Recurrente :
Fecha de Res. :
Pronunciamiento :

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.

EL EJERCICIO DE LA DEFENSA SE DESARROLLA EN UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE SE EJERCITE UNA DEFENSA ADECUADA EN ARTICULACIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.

ÍTEMS		Marcar	
		SI	NO
1°	<i>La defensa técnica ha contado con el plazo razonable para ejercer una adecuada defensa.</i>		
Fundamento materia de análisis			
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Ficha Técnica

RES. N°:

ENTIDAD:

Tipo de Proceso :
 Recurrente :
 Fecha de Res. :
 Pronunciamiento :

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

EN UN PROCESO CÉLERE Y EXPEDITO COMO EL PROCESO INMEDIATO, LOS OPERADORES DEBEN DE SER CALIFICADOS Y EFICACES A EFECTOS DE RESGUARDAR LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS PRINCIPIOS PROCESALES.

				MARCAR	
ÍTEMs				SI	NO
1°	La defensa técnica cuenta con los medios adecuados y la preparación suficiente.				
Fundamento materia de análisis					
		Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.	
2°	En el proceso inmediato es necesario el respeto por las garantías procesales contenida en los principios				
Fundamento materia de análisis					
		Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.	

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.

LA NECESIDAD DE LA PRESENCIA DEL ABOGADO DEFENSOR DESDE EL PRIMER MOMENTO DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA A FIN DE GARANTIZAR UNA DEFENSA EFICAZ

ÍTEMS			Marcar	
			SI	NO
1°	<i>Se le asistió con un abogado defensor al investigado desde la sede policial a fin de resguardar sus Derechos.</i>			✓
Fundamento materia de análisis				
	Parte de la Resolución		Párrafo	Pág.

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal

Ficha Técnica

RES. N°:

ENTIDAD:

Etapa del Proceso :

Delito :

Fecha de Res. :

Pronunciamiento :

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO REQUIERE COMO PRESUPUESTO MATERIAL PARA SU APLICACIÓN LA SIMPLICIDAD DEL CASO, POR LO QUE SU APLICACIÓN EN CASOS GRAVES IMPLICA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO MODELO PROCESAL.

		MARCAR	
		SI	NO
ÍTEMS			
1°	La complejidad del caso fue analizada conforme a las garantías de un debido proceso.		
Considerando sometido a análisis			
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio.

LA EXIGENCIA BAJO SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL QUE ES SOMETIDO EL FISCAL EN LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO (ART. N° 446), POSIBILITA LA CONCRECIÓN DE VULNERACIONES TANTO A LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO AL PRINCIPIO ACUSATORIO.

ÍTEMS		MARCAR	
		SI	NO
1°	La fiscalía actúa con total autonomía en el requerimiento de la incoación del proceso inmediato.		
Considerando sometido a análisis			
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.

GUÍA DE ANÁLISIS DE CASO

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal

Ficha Técnica EXPEDIENTE: ÓRGANO JURISDICCIONAL: 1° Instancia: 2° Instancia:	
Etapas del Proceso : Delito : Resol. (Fecha) : Pronunciamiento :	

Desarrollo del caso

Instancia	Sujeto procesal	Argumento
Primera Instancia	Fiscal Provincial (titular de la acción)	Acusación Fiscal:
	Juez Unipersonal	Sentencia condenatoria:
Segunda Instancia	Abogado defensor	Alegatos de apelación:
	Fiscal Superior	Fundamentos del Ministerio Público:

	Órgano Superior Colegiado	Consideraciones de la Sala Penal:
--	---------------------------	-----------------------------------

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

SE EVIDENCIA QUE EL PROCESO INMEDIATO COMO MECANISMO PROCESAL PRETENDE GARANTIZAR UNA JUSTICIA OPORTUNA

				MARCAR	
ÍTEMS				SI	NO
1°	El proceso inmediato por su simplificación procesal conduce a la transgresión de la seguridad procesal y las reglas de un debido proceso.				
Considerando sometido a análisis					
	Parte de la Resolución		Párrafo	Pág.	
2°	En la práctica se evidencia que se están adecuando los casos para hacer posible la aplicación del proceso inmediato por la celeridad que comprende.				
Considerando sometido a análisis					
	Parte de la Resolución		Párrafo	Pág.	

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas.

LA DEFENSA PÚBLICA PADECE LA EXCESIVA CARGA PROCESAL, POR LO QUE REALIZAN UN EJERCICIO EN DESMEDRO DEL PROCESADO, CONLLEVANDO A LA DESIGUALDAD PROCESAL.

		MARCAR	
ÍTEMS		SI	NO
1°	La defensa pública tiene las mismas oportunidades que los demos sujetos procesales en la actuación de pruebas.		
Considerando sometido a análisis			
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.

GUÍA DE ANÁLISIS NORMATIVO

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Normas analizadas :
Procedimiento :
Países de contraste :

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal

ÍTEMS					
1°	La aplicación de este tipo de procedimiento es exclusivo para los delitos flagrantes.				MARCAR
	Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	SI NO
2°	El Fiscal se encuentra coaccionado de iniciar este proceso especial.				MARCAR
	Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	SI NO

3°	Establece el límite de su aplicación en la cantidad de años de la pena que impone el delito.			MARCAR	
Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	SI	NO

➤ **Articulado valorado**

Articulo	Norma - País	Articulado Nacional

Anexo 4 - A



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: Dra. Liliana Aboga Cobena

Cargo/Profesión/Grado académico: Fiscal Superior/Abogada/Doctora

Instrucción: Fiscalía 2^{do} contra la Criminalidad Organizada.

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

No, porque la simplificación procesal se da como respuesta del Estado en la persecución penal y no para frenar el incremento de la delincuencia; por lo tanto no puede ser tomada como una solución.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

Si, en todo proceso, y no solo en el proceso inmediato, es importante el respeto a las garantías y principios procesales como criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico.

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

Respecto a los medios adecuados, considero que los operadores del derecho, en especial los fiscales, requieren de mayor logística para su labor en la investigación. En cuanto a la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato, considero que todos estamos capacitados para ello ya sea como abogados, magistrados, jueces y todos aquí comprometidos con la cultura jurídica.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

No hay ninguna crítica

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Publico (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Publico. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

No, porque la incoación del proceso inmediato, ante el juez, no vulnera el principio acusatorio, que determina el objeto del proceso, la distribución de roles y hechos que condicionan o realigará el enjuiciamiento; es decir la incoación del proceso inmediato - si cumpliera con los presupuestos - no tiene relación alguna con el principio acusatorio, entendido en palabras simples "nadie puede ser condenado en un juicio por un delito del que no ha sido acusado".

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

Por regla general la carga de prueba le corresponde al Ministerio Público, en el caso de Omisión de Asistencia Familiar, la capacidad económica debe probarse en el proceso civil, en caso de no evaluarse ésta para establecer el pago a realizar al alimentista, por lo tanto considero que en la imputación no se debe determinar la capacidad económica del imputado.

.....

.....

.....

.....

.....

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

No, considero que la incoación del proceso inmediato no guarda relación alguna con la imputación masaria, es decir que la imputación sea ínter, no implícita, sino precisa y expresa, por lo tanto, la incoación del proceso inmediato no traspasa tal principio.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

Si, considero que las partes intervinientes tienen las mismas posibilidades para la postulación y obtención de pruebas, dado que no existe limitación legal alguna, más aún, puesto el Ministerio Público tiene la carga de la prueba.

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

No considero que haya desigualdad, mucho menos "marcada desigualdad".

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

No. La implementación del proceso inmediato y con ello la modulación de los principios, no implica de por sí que exista un riesgo de vulnerar el derecho de defensa, es decir el derecho del imputado a ejercer su defensa desde el instante en que toma conocimiento que se le atribuye

un hecho delictivo, así como el derecho a un asesoramiento y patrocinio de un abogado. Es decir, la simplificación procesal no implica una privación o impedimento de eficaz, por parte del imputado, a una defensa.

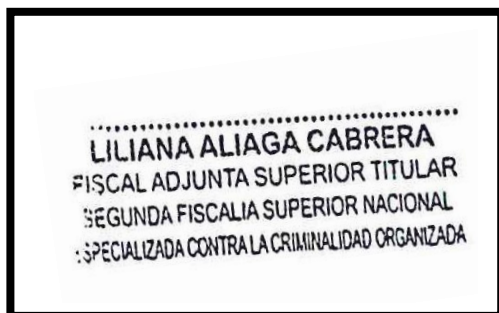
11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Si, en el caso que la imputación sea vaga, genérica o imprecisa, definitivamente afecta al derecho de defensa, toda vez que el imputado debe conocer de forma clara el hecho delictivo que se le atribuye, para poder contradecir eficazmente la imputación en su contra.

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

Considero que la incoación del proceso inmediato no prescinde de relación directa o indirecta, con la garantía de una defensa eficaz; es más, considero que la presencia o asesoramiento de un abogado desde el momento de la intervención y el contar con un plazo "razonable" no garantiza, de por sí, una defensa eficaz. La incoación del proceso inmediato y de

ante el cumplimiento de determinados presupuestos
establecidos por ley, entre los cuales no se halla que
pueda iniciarse dicho proceso "el cual se inicia
con el efecto de cesar el inicio".



SELLO

A handwritten signature in blue ink, written over a dotted line. The signature is stylized and appears to read "Liliana Aliaga Cabrera". Below the signature, the name "Liliana Aliaga Cabrera" is printed in a smaller, sans-serif font.

FIRMA



GUÍA DE ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: Carlos Matamoros Cumpaco

Cargo/Profesión/Grado académico: Fiscal del Superior Pen 21

Instrucción: Superior

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

donde si se dan los supuestos donde se evidencian con claridad los elementos probatorios que evidencian la comisión de un hecho delictivo considero que si se debe inmediatamente Procesar, en otras situaciones donde no se vea con claridad los elementos probatorios, es necesario agotar dentro del plazo que corresponde, las acciones necesarias para poder procesar de ser el caso.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

Como se dijo en un momento si los principios procesales y garantías resultan importantes siempre y cuando no se den los supuestos que la ley señala, respecto al proceso inmediato esto es cuando, en un hecho concreto se den o se recogen todos los elementos de convicción que sean necesarios para pasar a proceso, allí consideramos que no hay una atecia a los principios y garantías procesales

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

Trabaja de los operadores, consideramos que no todos están preparados para resguardar las garantías procesales aplicando el proceso inmediato, dado que muchas veces aplican la ley sin hacer la verificación de que en el recuento de la evidencia, como elemento de convicción se da la oportunidad y el tiempo necesario para que en el caso de la defensa pueda asumir de manera suficiente la defensa del investigado

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

Como se dijo hay situaciones en las que debe aplicarse el Proceso inmediato y en los que no resulta claro la existencia. Probablemente resulta necesario que debe procederse dentro del proceso ordinario.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Público (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Público. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

habría posiblemente una colisión. Pero esto se supera cuando desde el Principio de objetividad el Ministerio Público debe investigar, sin darse los supuestos de una investigación para aplicar el Proceso inmediato el Fiscal puede ampararse en seguir y proseguir con el proceso común.

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

Considero que no debe haber capacidad económica a sí, en sede distrital del J.A. del M.P., ya que esta capacidad sea evaluada en proceso Civil - familiar, allí debe ser donde se evalúa.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

no, debo que aquí también debe la Propiedad
Política Comunal de acuerdo que en este 2
debe aparecer dentro de los hechos la conducta
concreta Normativa si a que se efectúe
La Imputación Necesaria

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

aquí consideramos que en muchas de los casos
concretos poder afectar a la defensa del Ministerio
Público que no resulta con la misma premisa
o facultades que tiene el fiscal para por el
cual le resultan necesarios el tiempo y
también para obtener sus pruebas

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

Se afectan ya que la poca disponibilidad de tiempo a la defensa es poder conseguir los elementos necesarios para su defensa el tiempo, y sin las prerrogativas suficientes que tiene el fiscal hacen difícil obtener las pruebas para amparar la defensa

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

Si no le alcanza el tiempo suficiente esto afecta gravemente al Derecho de Defensa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Si no no está claro cuales son los hechos
Circunstancias que reflejen una imputación necesaria
afectan al derecho de defensa sin lugar a dudas,
debido que parte de un hecho cierto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

Si un abogado defensor, quien lo garantiza
hacemos considero que no debe procesarse
proceso inmediato

.....

.....

.....

.....

.....

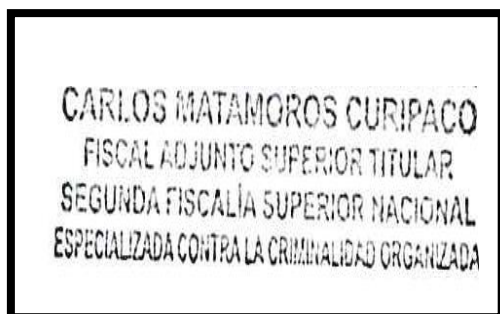
.....

.....

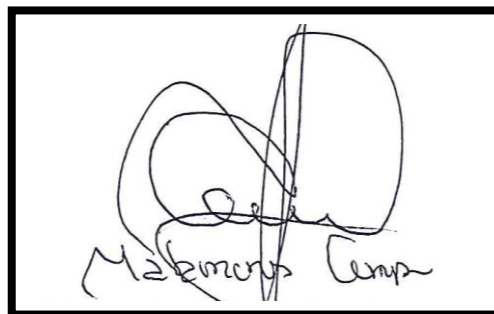
.....

.....

.....



SELLO



FIRMA



GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: Franklin Lapa Rivas

Cargo/Profesión/Grado académico: Procurador Anticorrupcion/Abogado

Instrucción: Procuraduria Anticorrupcion.

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

No relaciono el incremento de la delincuencia con la simplificación procesal, no considero que la solución parta de este factor. El incremento de la delincuencia tiene diversas causas desde sociales hasta políticas, y su manifestación solo es expresión de un sistema social decadente y sin una política criminal afianzada y seria.

La simplificación procesal, son mecanismos que coadyudan a la materialización de un derecho fundamental, esto es, la tutela judicial efectiva, la misma que no solo reconoce a todos los ciudadanos el derecho de acudir ante cualquier controversia - al sistema judicial, sino también en que tal controversia sea resuelta en un plazo razonable.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

No solo en el proceso inmediato, sino también en el proceso en general, el respeto por los Principios se toman importantes, esto en tanto y en cuanto, los principios actúan como mandatos de optimización de lo que se debe considerar en todo proceso. en el proceso inmediato, si se debería estar más atentos al respeto por los principios, dado que la simplificación de los plazos hace que algunos malos sujetos procesales soslayan y menosprecian muchos Principios

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

En realidad la implementación de estos nuevos cambios en nuestro sistema procesal penal, ha sido realizada sin la preparación adecuada y suficiente de los operadores jurídicos. no ha existido por parte del estado preocupación para preparar y capacitar a los operadores jurídicos para estos nuevos escenarios.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

Una crítica sería que debido a la deficiencia de algunos letrados Patrocinadores no realizan una defensa de su Patrocinado, quienes sometidos a un proceso rápido muchas veces son sancionados por una inadecuada defensa técnica.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Publico (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Publico. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

Existen Presupuestos Positivos recogidos en el código adjetivo, que se presentan en el M.P. Solicita la incoación de este tipo de procesos, obligar a sus aplicaciones pese a la no concurrencia de alguno de los presupuestos, o pese quizás a la presencia de un caso complejo, y que el titular de la acción Penal vea conveniente su no incoación, evidentemente transgrede el Principio de autonomía de MP.

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

No lo considero necesario, esto porque la fijación de la reparación civil se basa en el principio del daño causado, para nuestro caso, daño causado al menor alimentista. Así la capacidad económica del imputado, considero no debe ser tenida en cuenta como factor para ningún tipo de delito en general.

.....

.....

.....

.....

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

La imputación nunca es necesaria, solo es completa o incompleta. NO considero que se quebrante la imputación completa, esto porque existen ilícitos penales que en realidad no exigen mayor comprobación, supuestos ante los cuales, el titular de la acción penal puede solicitar la incoación de PI.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

Con el nuevo Sistema procesal penal, si existen igualdad de armas para ambos ministerios, tanto el de la defensa como el público. La diferencia está en la calidad de profesionales que existen en ambos bandos, y la capacidad que ambos tienen para presentar las pruebas idóneas para la construcción de su teoría del caso.

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

De existir una desigualdad entre estos dos ministerios, las garantías procesales que se verían afectadas serían marcadas, y se evidenciarían en una vulneración al derecho de defensa, debido proceso, ante estos supuestos, y si es evidente que la defensa técnica actúa sin la diligencia debida, recae sobre las autoridades judiciales un deber de tutela o control.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

Dependiendo de caso a tratar y de la complejidad de su tratamiento. Una adecuada defensa conlleva a cautelar un debido proceso y de considerar que se puede vulnerar pero los rectores del proceso, debe de actuar para denunciar ese acto ante los jueces quienes son los garantes de legalidad.

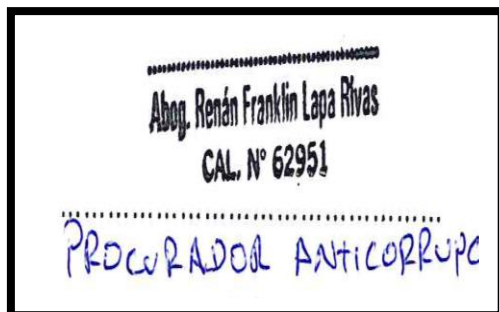
11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Por supuesto que afecta. Una imputación incompleta afecta todo tipo de defensa, por que no se sabría a ciencia cierta sobre que defenderse o sobre que aspectos enfocar la teoría del caso de la defensa.

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

No. debe existir siempre una defensa necesaria que acompañe toda diligencia y actuación procesal, conjuntamente con su defendido. El ejercicio de la defensa se concreta con la participación activa y desde el primer

momento sea particular o público, por eso
no se debe actuar sin su presencia a
efectos de resguardar los intereses del
investigado, bajo ningún contexto y
menor aun, so pretexto de agilizar el
proceso.



SELLO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several loops and a final flourish. The signature is contained within a rectangular black border.

FIRMA



GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: CARLOS MIGUEL VILLA ORTIZ

Cargo/Profesión/Grado académico: ABOGADO / MAGISTER

Instrucción: Superior

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

EL PROBLEMA NO ES LA SIMPLIFICACION PROCESAL SINO MAS BIEN QUE SE REALICEN BUENAS INVESTIGACIONES, QUE SE RECAPOEN CORRECTAMENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA QUE SE PUEDAN TIPIFICAR Y ACUSAR CORRECTAMENTE Y QUE CUANDO SE PROCESEN A LOS DELINCUENTES SE HAGA CUMPLIENDO TODAS LAS GARANTIAS DEL CASO Y NO SUEDA QUE POR ERRORES PROCESALES SE TENGAN EXCARCELACIONES ESCANDALOSAS

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

SIEMPRE EL RESPETO POR LAS GARANTÍAS Y
LOS PRINCIPIOS PROCESALES SON IMPORTANTES
NO SOLO EN EL PROCESO INMEDIATO SINO
EN TODO TIPO DE PROCESOS, PORQUE ES
LA IMAGEN QUE TODA JUSTICIA DEBE TENER
QUE SE RESPETEN TODOS LOS DERECHOS DE
TODAS LAS PERSONAS.

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

NO, EXISTE MUCHAS DEFICIENCIAS EN LAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE ENCARGAN
DEL PROCESO INMEDIATO, EMPEZANDO POR INFRA-
ESTRUCTURA, MAS APOYO DE PERSONAL, CAPACITACION,
Y ESO SE TRANSUCE MUCHAS VECES EN TRANS-
GRESIONES A UN DEBIDO PROCESO Y QUE LOS
INVESTIGACIONES DEVENGAN EN NULAS CON LA
CONSECUENCIA DE RECARCELACIONES INJUSTAS.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

En mi opinión transgrede los derechos de la defensa, con respecto a pruebas que no se dejan ser correctamente evaluadas y se corrompe por lo tanto el proceso.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Publico (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Publico. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

Si, pienso que no se debe admitir obligar al Ministerio Publico a realizar una actuación irrazonable por incoar un proceso, menos aun sino se presentasen los presupuesto procesales para ello.

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

Si me parece apropiado, porque en la
Materia de las veces la capacidad del
Imputado es real y debería tomarse
como una agravante el hecho de que
a pesar de contar con capacidad
no realice los aportes alimentarios
y también si sucede lo contrario que
se tome como un atenuante dicha
incapacidad.

.....

.....

.....

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

Si, porque amparados en dicho artículo el Ministerio Público, realiza o quien incoar todos los procesos de estos tipos al proceso inmediato generando que las actuaciones procesales y probatorias se supriman generando transgresiones a los derechos de los imputados.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

No, he aquí un gran problema que transgrede el proceso inmediato, no existe igualdad de posibilidades porque no da el plazo necesario para que la defensa haga un estudio correcto de las pruebas en contra y esto genera un desbalance en un supuesto modelo nuevo acusatorio adversarial.

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

JUSTAMENTE, RESPECTO A LA RESPUESTA ANTERIOR, GENERA DESIGUALDAD DEBIDO A QUE AL NO TENER IGUALDAD EN LA INFORMACION PROCESAL Y POR ENDE NO SE PUEDE REALIZAR UNA CORRECTA DEFENSA PERJUDICANDO CLARAMENTE A LOS INVESTIGADOS

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

SI LO CONSIDERO Y ES LO QUE SE APPRECIA EN LOS PROCESOS INMEDIATOS, QUE SE INCORAN EN LA INCONCIENCIA DE CREER QUE CON LA SIMPLIFICACION PROCESAL SOLUCIONAN TODOS LOS PROBLEMAS PROCESALES QUE EXISTEN, CUANDO

Lo que realmente realizan es transgredir los derechos de las partes procesales, porque hay casos que no solo afecta a los investigados sino también a los acusados porque no están desarrollando correctamente los medios probatorios.

11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Por supuesto, si desde el hecho de que hablamos de vicios en la imputación definitivamente debe de haber afectación y hay radica claramente las transgresiones a derechos procesales no solo a la defensa como mencione, sino también en algunos casos a las víctimas también.

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

Es un poco complicado por las circunstancias de la flagrancia que desde la intervención se encuentre con una defensa, pero se debe tratar de que la defensa, tenga más bien tiempo necesario para prepararse correctamente.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SELLO



FIRMA



GUÍA DE LA ENTREVISTA
(Transcripción)

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: *César Augusto Nakazaki Servigón*

Cargo/Profesión/Grado académico: *Abogado Litigante Penalista / Abogado*

Institución: *Estudio Sousa & Nakazaki S. Civil de R.L*

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

Existen los institutos de emergencia, y el derecho penal y procesal penal de emergencia es constitucional definitivamente, así como la vida no es un derecho absoluto porque está la legítima defensa como excepción, ósea ningún derecho es absoluto, todos los derechos son limitados entonces la sociedad tiene el derecho a trabajar con los institutos de emergencia.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

Los principios en el proceso penal, constituyen los elementos necesarios para garantizar un debido proceso; en tanto el proceso inmediato ofrece un procedimiento fugaz y simplificado, urge la necesidad de los principios al momento de determinar la procedibilidad o no del proceso inmediato.

3. **¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.**

Si, haciendo referencia al proceso inmediato, tenemos que este proceso es como un Ferrari, ya que promueve instituciones novísimas para el proceso penal; pero hay que preparar fiscales, jueces y abogados que estén de acuerdo a esa velocidad ese es el único tema para que se pueda balancear la cosa.

4. **¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?**

Una de las críticas presentes esta por ejemplo en materia de conducción en estado de ebriedad; se han olvidado que la ebriedad es un trastorno mental pudiendo agravar o exonerar o disminuir la responsabilidad del sujeto imputado, y que la pericia alcoholemica, no basta para establecer la capacidad mental del sujeto ebrio se necesita pericias psiquiátricas o psicológicas.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio Acusatorio.

Preguntas:

5. **En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Publico (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Publico. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.**

En este caso tenemos al fiscal quien tiene como mandato cumplir la ley y debe cumplirla. Esto tiene que interpretarse, los penalistas no interpretamos constitucionalmente la ley penal, estos proceso especiales exigen reglas de interpretación de la ley constitucional y así mismo reglas de interpretación constitucional de las leyes penales ordinarias.

6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

En el caso del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria al día de hoy hay una gran problema al entender uno de los elementos del delito de omisión propia que es la capacidad individual de acción porque nosotros vamos de un proceso civil donde la capacidad económica del alimentante muchas veces no se prueba porque hay una presunción legal de ingresos que establece el código civil, cuando el código civil dice que la capacidad económica del alimentante no tiene que ser establecida de manera rigurosa ósea es una excepción a la regla de la certeza y los alimentos se pueden establecer de la capacidad económica del alimentante sobre la base de la probabilidad porque ese proceso responde a una finalidad tutiva de un alimentista, pero no se puede llevar por contrabando la probabilidad de la capacidad económica del alimentante al proceso penal donde la finalidad es distinta es la sanción y por lo tanto allí la carga de la prueba es absoluta entonces si no está establecida la capacidad económica del alimentante porque solo tengo una sentencia civil que ha trabajado sobre la base solo de una presunción legal como podría yo decir que tengo un caso para un proceso inmediato.

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

Si, toda vez que el Fiscal tiene que promover el procesos inmediato siempre y cuando se cumplan con los requisitos de las leyes constitucionales el no puede tener un mandato de legalidad, así podremos evitar que se incoe un proceso inmediato porque simplemente se desea velocidad, el mandado no es de velocidad, el fiscal no es un atleta no es un corredor de cien metros, el mandato es de legalidad diferencia bien entre el delito descubierto y delito probado y

el segundo criterio hay un elemento que impide la realización del proceso inmediato que es la complejidad del objeto procesal y esa complejidad del objeto procesal puede tener dos causas una puede ser obviamente la actividad probatoria pero otra puede ser la complejidad jurídica de la discusión

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. **¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.**

No, ya que el principio de igualdad de armas comprende además al derecho a la defensa eficaz que se materializa con una defensa técnica que cuente con todos los medios legales que el caso exige y con las mismas posibilidades que tiene el fiscal.

9. **¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?**

Tenemos que en los casos de Flagrancia tiene que existir un delito probado que yo remarco es diferente al delito descubierto yo puedo descubrir un delito pero no necesariamente tener la prueba suficiente para lograr una sentencia condenatoria acá confunden flagrancia con probanza por eso yo diferencio, flagrancia es igual a delito descubierto no necesariamente delito probado, yo puedo descubrir el hecho pero me falta establecer la capacidad de culpabilidad de la persona; sin duda estamos frente a posibles vulneraciones a las garantías del proceso penal, como sería el caso de una defensa eficaz que no se garantiza por la preparación y el escaso tiempo con el que cuentan los abogados para el estudio del caso.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

- 10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.**

Si, ya que el derecho a la defensa eficaz consiste, primordialmente en el derecho a la defensa técnica, y que esta defensa cuente con todos los medios legales que el caso exige, eso es derecho a la defensa, no simplemente con la presencia de abogado se garantiza el derecho a la defensa, sino que esta defensa debe de ser calificada. Y con las mismas posibilidades que tiene el fiscal.

- 11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.**

Si, Por ejemplo yo descubro que una persona ofende a un juez pero si sufre de un trastorno de personalidad límite, mientras que no venga la historia clínica, no venga la pericia psiquiátrica no tengo el delito completamente probado o todos los elementos de juicio necesarios, entonces es importante que el fiscal y el juez solo te presenten casos, el primero presente y el segundo decida un caso de proceso inmediato cuando hay un delito probado mediante una imputación concreta.

- 12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?**

No se debe de incoar el proceso especial; por eso es preciso recordar que el derecho a la defensa rige desde que la persona está en peligro de sus derechos fundamentales empezando por la libertad, cuando hay peligro, porque muchas personas dicen no “el derecho a la defensa comienza cuando recién te imputo” y mientras que no te impute no tienes un derecho a la defensa o en todo caso tu derecho a la defensa es débil, no es así, pero si esta privada de la

libertad si la persona esta privada de la libertad, en el mismo instante en que le quitan la libertad en ese mismo instante surge el derecho a la defensa porque si analizan cual es la razón de ser del derecho a la defensa, es un derecho instrumental, hay derechos fines y derechos medios, el derecho a la libertad es un derecho fin y tiene un conjunto de derechos medios que permiten que exista la defensa garantiza que haya libertad, sino hay defensa no hay libertad entonces cuando hay una privación a la libertad, peor sin mandato judicial, hay una doble exigencia del derecho a la defensa.

“Transcripción de audio, entrevista realizada el 13 de octubre en las instalaciones de la sal penal nacional”

Anexo 4 - F



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE LA ENTREVISTA (Transcripción)

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: *Francisco Celis Mendoza Ayma*

Cargo/Profesión/Grado académico: *Juez Superior de la Sala Penal Nacional /*

Institución: *Poder Judicial - Sala Penal Nacional*

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

Definitivamente, no porque el proceso inmediato si bien en sus inicios fue propagandizado mediáticamente en la idea de que con la simplificación procesal se iba a combatir la criminalidad, pues hubo una suerte de desborde en el optimismo dado que un proceso no tiene los fines que se le asigna normalmente a la pena los fines de prevención cualquiera sea general o especial o en todo caso los fines de repulsión no le pueden ser asignados a un procedimiento sea moroso, rápido o célere es un despropósito al inicio es por eso que no encontramos una suerte de relación entre la simplificación procesal y el combate con la criminalidad es como si se pretendiera combatir con una aspirina un mal mayor tratando de superar solamente la fiebre, lo que pasa es que frente al tema de la inseguridad ciudadana se ha pretendido dar una conjunto de soluciones una de ellas es la simplificación procesal pero encerrando a choferes embriagados o a padres irresponsables o a ciudadanos intervenidos por resistencia a la autoridad, no se supera los problemas de la gran criminalidad, como sicariato, asesinato,

robo u organizaciones criminales, por eso sería absurdo considerar de que unos tres dispositivos serían el panacea para resolver los problemas de la gran criminalidad, en definitiva el formulado es una respuesta agnóstica del poder punitivo somos claros en señalar que el derecho penal en sí no es una herramienta para poder disminuir las prestaciones públicas que le corresponden al estado en otras líneas pero todavía un mero procedimiento o una simplificación pero también hay que ser claros en esto si es una herramienta para la descarga procesal respecto aquellos procesos que abundaban que sobrecargaban a la carga jurisdiccional, entonces, la mera simplificación procesal no sirve para luchar contra la criminalidad.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

Primero, esos tres dispositivos 446, 447 y 448, es cierto que van a restringir o limitar el derecho procesal o derechos fundamentales procesales no cabe duda, esa reglamentación va afectar principios de hecho no solamente vamos a hablar de la supresión de etapas procesales como la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, sino que en algunos casos incluso hay una suerte de merma del principio de imparcialidad objetiva cuando en el plenario del juicio el juez que realiza el saneamiento es el mismo juez que va a emitir una sentencia, un juez que realiza un cuestionamiento a la formulación de la causa probable por ausencia de los elementos de convicción es un juez que luego de revisar y declarar improcedente la petición del sobreseimiento es el mismo juez del enjuiciado que va sentenciar, es decir por hacer referencia solamente algunos principios que se ven afectados, ahora de lo que se trata es más bien cómo interpretar esos tres dispositivos pero conforme a la constitución, el acuerdo plenario 2-2002 ha dado una pauta iniciativa al decir que es imperativo observar lo que dice el artículo 139.9 y 139.11 en relación a la prohibición de la analogía o en las interpretaciones analógicas y en todo caso a la aplicación de normas que favorecen obviamente la realización de las libertades o la limitación de las libertades no hay que olvidar que el artículo 8° numeral 3) también del código procesal penal, establece claramente este mandato así es que juez que no hace esa interpretación, tenemos problemas, póngase usted a pensar el tema que es juez de flagrancia y los tres supuestos de la flagrancia, para el caso se tiene que hacer una interpretación restrictiva y considerar solamente el tema de la flagrancia clásica como el único supuesto que alimentaría el proceso inmediato, extraordinariamente ese un caso claro de cómo se hace una interpretación conforme a la constitucional de acuerdo a ese mandato que aparece los dispositivos que hemos indicado además de ello hay un problema en el sentido de acudir a la proporcionalidad y de cómo se materializa los fines de hecho voy a dar una lectura

del acuerdo plenaria “el principio de proporcionalidad se traduce en esos dos presupuestos materiales que se crea evidente y pues causa fácil”.

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

Cuando hablamos de los medios y la preparación en cuanto al tema de los medios logísticos, la única corte superior a nivel nacional que tiene una unidad de flagrancia es la de Lima Sur, en Ecuador tiene unidad de flagrancia donde está concentrada el Ministerio Público, Ministerio de Defensa, INPFE, los jueces, Medicina Legal, es decir es toda una estructura consecuente con la celeridad del proceso, esa fue una idea que se pretendió encender acá, pero obvio por las limitaciones logísticas lo impedían, ahora vamos directamente al plano de la preparación, nosotros somos consecuencia de nuestra misma formación educativa, es decir no queremos encontrar jueces como perspectiva constitucional o con una formación principista si su formación ha sido básicamente legalista, lo que vamos a encontrar es que muchas veces se sujetan a una legalidad extrema y como el código lo dice, van a aplicar conforme el código lo ordena, recuerde que la audiencia del proceso inmediato lo regulaba antes una forma distinta en el orden de emitir la resolución de tal manera que se determinaba anticipadamente lo que no se había incoado, no se había iniciado, pero como así aparecía en el código entonces el expediente solo era una pauta para la organización de la audiencia incluso Cesar San Martín Castro en el acuerdo plenario dice que debería ser así, lo que es un despropósito que va contra el sentido óptico de la cosa inicio y luego termino, no puedo terminar y luego recién iniciar, es decir el modo y la forma de cómo debo iniciar es con la imputación concreta que este estipulado sobre estos presupuesto materiales pero en realidad el problema viene a ser básicamente de formación y es por eso que más allá de las interpretaciones restrictivas que se tenían podemos encontrar propuestas como en la casación Sullana o Lima Norte, jueces que consideraban flagrancia en interpretación estricta, pues con la flagrancia presunta les alcanzaba para detener hay jueces que ni siquiera leen el acuerdo plenario no vamos a exigir que esos jueces tengan eventualmente una interpretación constitucional ese es un dato de la realidad así esto los jueces los quieran negar cuando se dicen un legalista o formulario o varios positivistas miran a cualquier lado buscando quien es el juez, pero en realidad no se percatan que a veces se requiere un espejo para encontrar a ese juez.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

Hay varias críticas al mismo diseño del proceso pero quizás una de las que puede generar problemas en la configuración al proceso recursal del proceso impugnatorio es el poco tiempo que tiene el impugnante para efectos de formular una pretensión impugnatoria, pues cuando hablamos de un proceso recursal en sentido fuerte del proceso tiene que tener un objeto y ese objeto es la pretensión recursal o la pretensión impugnatoria sino tenemos una pretensión procesal o impugnatoria definido con un pedido de revocatoria o nulidad y que coherentemente tenga fundamentos que lo sustenten entonces no tenemos un proceso y el principio de concurrencia recursal será un chiste jueces que estén limitados a los fundamentos de la pretensión impugnatoria simplemente no se podría realizar porque si yo le doy a usted, visto en este momento esa sentencia y le digo cual sería y como usted podría organizar su resolución, yo no podría en todo caso diría si voy a apelar cheque un papel para más o menos estar recordando como fueran las razones luego exponer el cuestionamiento verificar la ilogicidad en este momento tendría que armar la ilogicidad en el razonamiento que pronto decir en esta parte le asigna un valor probatoria en esta prueba que no significa que el testigo dijo tal pero sin embargo no es así, sin embargo requiere tiempo, pero sin embargo lo que vamos a encontrar una suerte de des utilización formal de algunos jueces, que en este momento no apela cuales son los fundamentos, como va a apelar en ese momento si la labor de construir una pretensión hasta alimentaria es bien difícil, por lo menos voy a requerir una hora, por lo que en diez minutos quiere que la sustente creo que la solución debe ser darle el plazo de dos días conforme se le otorgue el plazo al imputado que no ha comparecido.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio Acusatorio.

Preguntas:

- 5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Publico (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Publico. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.**

Si regresáramos al operador deóntico operativo como lo plantea Araya y otras personas creo que regresaríamos nuevamente a esa nefasta política que el Ministerio Público de encenderse en piloto automático y formalizar investigación preparatoria y terminar todo el proceso, la falta de criterio un 90% o 99% de los fiscales ha dado lugar a este tipo de prácticas, de tal manera que yo considero que ese operador deóntico imperativo tiene que mantenerse pero este no significa afectar la autonomía del ministerio público porque repare usted que está dentro del ámbito de sus funciones del ministerio público decidir el decidir si debe requerir la incoación del proceso inmediato en el proceso de flagrancia en cualquiera de los supuestos, si tenemos el supuesto de flagrancia y resulta que sin embargo no se ha configurado un causa probable o prueba eminente el fiscal tiene la autonomía de iniciar un investigación preparatoria el ejemplo de siempre resulta que una persona lo detienen en Huancavelica y no tiene laboratorio de alcoholemia por estado de ebriedad, y se remiten las pruebas al laboratorio de Huancayo y como tiene carga, se remitirá de acá de 30 días o 90 días entonces la pregunta vendría ser de acuerdo al 446, el fiscal debe, entonces es clarísimo, no debe por lo contrario en este momento debe iniciar la investigación preparatoria esperando que esa información experta le llegue para eventualmente recién recurrir a este proceso inmediato derivado o aquel proceso inmediato regular de tránsito previa formalización de investigación preparatoria que entonces ese deber tiene que ser comprendido en tanto y en cuanto se configuren esos presupuestos materiales, en el contexto si existe ello todavía es una condición para requerir porque todavía debemos transitar también por la aplicación del principio de oportunidad, si después de verificar que concurren los otros presupuestos materiales y después de haber realizado las posibilidades de llegar a un acuerdo reparatorio de acuerdo al principio de oportunidad no ha sido posible, entonces recién debe de incoarse el proceso inmediato.

- 6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.**

Si, toda vez que la verificación de la configuración de una causa probable en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, conlleva a determinar que la sentencia en lo civil, no debe de extinguir la posibilidad de determinarse la capacidad económica del imputado. Es

preciso que se tome en cuenta que en sede de familia se presume la capacidad empero en el ámbito penal se tiene que en la imputación concreta se deben probar derribando toda duda y suposición, ya que los efectos punitivos atañen a la privación de la libertad. En consecuencia, no se debiera de acudir a un proceso cetero, si no se contempla de manera contundente la capacidad económica del sujeto obligado.

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

Si hay afectación, si lo interpretan literalmente y consideran que en todos los supuestos formales de flagrancia, confesión o delito evidente siempre tengo que formalizar sin considerar las exigencias de proporcionalidad que aparecen configuradas en estos presupuestos.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

Desde luego, que existen grandes diferencias, puesto que el fiscal maneja el dominio de la etapa de investigación, sin embargo, la defensa técnica pese a contar con la carpeta fiscal no cuenta con la misma fuerza que el fiscal infiere en la investigación.

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

La brevedad del proceso inmediato, ha llegado a resaltar las deficiencias presentes en la formación del operador. Un ejemplo de ello se da en las erradas calificación jurídica que vulneran las garantías inmersas en la imputación necesaria y con ello el derecho de defensa, los efectos de estos errores afectan directamente a la sociedad, concretándose así la pérdida de la libertad de los procesado y el grave efecto de inseguridad jurídica en la sociedad; si partimos desde las funciones de cada operador tendremos al Ministerio Público quien tiene el poder y el deber de calificar el hecho para proporcionar la base para una adecuada imputación, en esa medida corresponde al juez de investigación preparatoria exigir las proposiciones fácticas que determina esa calificación jurídica; y en el ejercicio de la defensa del imputado, es el abogado defensor quien debe realizar el estudio adecuado de la tesis y las pruebas en las que el fiscal fundamenta su teoría del caso para ello debe de contar con un plazo razonable; sin embargo esto no se ve presente, afectándose así principios procesales.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

El problema es claro, las causas estructurales la criminalidad violenta, de la criminalidad organizada, de la criminalidad económica, no pueden ser combatidos, combatiendo las consecuencias sino las causas, entonces el derecho penal interviene solamente para ver los efectos; y eso a veces no se comprende claramente, entonces el derecho penal interviene en extrema ratio reaccionando sobre los efectos ya cometidos, considerar que combatiendo el efecto vamos a desaparecer la causa es idealismo puro y a veces tenemos una mirada tan estrecha que consideramos tal vez que aplicando más derecho penal con ello desaparecemos las causas que generan los hechos, de esta errada concepción se advierten posibles vulneraciones a las garantías del proceso.

11.¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Si, el juez dentro de los parámetros de control tiene precisamente que evaluar y exigir una imputación concreta, estructurada sobre la base de estos presupuestos materiales; entonces con la imputación ya verificada, se debe de cotejar la prueba evidente si lo tramitan como flagrancia es un tema de flagrancia o un tema de cuasiflagrancias, es entonces es el juez de investigación preparatoria quien debe verificar ello, si es que no concurre conforme a las exigencias, entonces no es quien manda a quien cómo se presentó en el tema de Trujillo sino es simplemente ver en cada uno en el ámbito de sus atribuciones como cumple con ese deber, si bien es cierto aparece con ese término de bajo responsabilidad, ese término de bajo responsabilidad se confunde en tanto el juez se conduzca adecuadamente, lo que pasa es que los jueces y fiscales solamente leen el debe, es decir el debe si por la flagrancia si se ha configurado evidentemente la causa probable o no; si hay afectación ante una interpretación incorrecta.

12.¿Considera Ud. que ante la ausencia de una abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

No debería de incoarse, para evitar la vulneración del derecho de defensa.

“Transcripción de audio, entrevista realizada el 13 de octubre en las instalaciones de la sal penal nacional”



GUÍA DE ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: Dra. Ruth Mariela Ponce Cornejo

Cargo/Profesión/Grado académico: Juez Supernumerario/Abogada

Instrucción: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

Es una realidad que actualmente en nuestro País la delincuencia se ha incrementado enormemente, alcanzando niveles que ponen muchas veces en riesgo a nuestros ciudadanos y a nuestra comunidad en general. En este sentido considero que ante tal situación el legislador tiene buena visión al optar por políticas de simplificación procesal en el ámbito del sector Justicia, porque a través de ello, se trata de acelerar el trámite y juzgamiento de hechos delictivos en donde por la propia forma y circunstancias en que se da la intervención policial contando con todos los elementos que vinculen al sujeto inculcado.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

Bueno como es de conocimiento publico a partir del 30 de diciembre del año 2015 entro en vigencia el decreto legislativo 1191 que regula el proceso inmediato sin embargo si bien el proceso inmediato por su propia naturaleza esta diseñado para resolver casos que no reviste mayor complejidad, en otras palabras para casos simples; sin embargo el hecho de que un sujeto haya sido intervenido policialmente bajo el marco del citado decreto legislativo no es pese que el mismo sea sujeto a discriminacion y desigualdad y que siempre se le debe garantizar el derecho a un debido proceso en el que forma parte el derecho a la defensa.

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

Considero que la buena aplicacion y desarrollo eficiente de todos los operadores de justicia en la aplicacion del proceso inmediato, al tratarse de un proceso en el que se juzga de manera simplificada a efectos de no vulnerarse derechos de los sujetos procesales, el estado como ente rector a traves de las entidades a cargo de la administracion de justicia debe mantener la capacitacion y orientacion constante de los operadores del derecho que intervienen en el dia a dia esto va desde el personal policial que desarrolla un papel muy importante hasta el magistrado que tiene que emitir la resolucion de procedencia o no del proceso inmediato.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

Las críticas que se podría plantear desde el inicio hasta la fecha de la aplicación del proceso inmediato, es que urge que tanto la policía como el ministerio público estén bien capacitados para poder establecer de acuerdo a la forma y circunstancias en que se desarrollaron los hechos incriminatorios si realmente el hecho que se pone a conocimiento del órgano jurisdiccional es realmente posible de ser sujeto a un proceso inmediato dado que se han presentado circunstancias en que no se reúne los requisitos exigidos dado que verificados ante el órgano jurisdiccional se advierte

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Público (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Público. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

No se está vulnerando ningún principio acusatorio, porque si bien el MP es autónomo como titular de la acción penal, esta garantía en ningún momento está siendo menoscada ya que este solo podrá incoar proceso inmediato cuando aprecia que efectivamente se cumple con los requisitos para realizarlo, es decir debe proceder a incoar el proceso inmediato cuando tenga pruebas suficientes y corroborar que corrobore la comisión delictiva.

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

Bueno, es verdad que el Decreto legislativo 1194 también establece que corresponde a la Fiscalía incoar proceso en los casos de omisión de Asistencia Familiar, siendo así, sabiendo que es en el imputado en quien recae la carga de la prueba; considero que el Ministerio Público no debe sujetarse al cumplimiento de manera literal al incoar proceso inmediato por este delito, esto es sujeta solo a "verificar" las copias certificadas de la sentencia emitida por incumplimiento de pensión de alimentos, sino que su función debe ir más allá, es decir verificar si realmente existen causas probables que permitan establecer que existen suficientes medios probatorios que establezcan con certeza la existencia de una conducta injustificada de parte del sujeto inculcado respecto a la omisión alimentaria.

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

Considero que no, se transgrede el principio de imputacion necesaria toda vez, que si bien es verdad que al ministerio Publico se le exige que debiera incoar proceso inmediato ante la existencia del delito de Omision de Asistencia Familiar y conduccion de vehiculo en estado de Ebriedad cierto tambien es, que en su condicion de titular de la accion Penal, les corresponde solo y solo si, incoar el proceso inmediato cuando verifique la existencia de una causa probable en los delitos antes citados, sin embargo si existe transgresion si proceden a incoar solo por dar estricto cumplimiento a lo descrito en el articulo 446-4.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Publico para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

Definitivamente la defensa tecnica a cargo de un abogado particular o publico no va a tener la misma posibilidad que el Ministerio Publico para la obtencion de pruebas, sin embargo hay casos en que, el juez de garantias constitucionales no requiere actuacion probatoria de la defensa al tratarse de hechos acreditados por la propia conducta del sujeto activo (cosas propiamente de Flagrancia in situ) Como es conduccion de vehiculo en estado de ebriedad cuyo certificado de dosaje etilico surge del propio procedimiento seguido al intervenido, el robo

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

Si nos pusieramos en el hipotético caso que, un juez dentro de un proceso inmediato da inicio una audiencia en la que se advierte una marcada desigualdad en la participación de la Fiscalía, frente a la defensa técnica presente en dicho acto, esto es, que verificados los actuados se opone que la incoación fue realizada sin que a nivel preliminar dicho procesado haya estado asistido por la defensa técnica; podríamos afirmar que las garantías procesales establecidas en el NCCP estarían siendo tremendamente vulneradas, afectadas, ya que estaríamos ante un proceso pero arbitrario sin el más mínimo respeto de los derechos que la constitución política del estado le otorga a toda persona sometido a un proceso penal.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

Dada la naturaleza de proceso inmediato, considero que si existen riesgos de la vulneración del derecho de defensa, hecho que se presenta debido a la falta de capacitación y coordinación que existe muchas veces los miembros de la policía nacional y ministerio público, pues son ellos los que inmediatamente

después de tomar conocimiento de una intervención en
flagrancia delictiva deben proceder a brindarles todas las
garantías como es el derecho a un abogado defensor quien
debe participar desde el inicio de las investigaciones preliminares
a fin de evitar arbitrariedad como es la formación de carpetas
fiscales en el que el Ministerio Público si bien ha participado en la
declaración del inculcado pero sin presencia de la defensa

11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Considero que si nos encontramos efectivamente frente a una imputación
concreta que presenta vicios definitivamente el derecho de defensa del
inculcado se va a ver afectado, dado que no va saber cuáles son los
hechos puntuales que se le atribuyen por lo que es necesario que el
M.P. cumpla con describir de manera clara y precisa los fundamentos
fácticos de los hechos, el tipo penal que reprocha la conducta
descrita y los medios probatorios que corroboren la conducta

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

Considero que no debería incoarse un proceso inmediato
dado que, realizarlo implicaría una clara vulneración de
las garantías procesales del NCCPP y la constitución
política del Estado que establece toda persona tiene
derecho a ser sometido a un debido proceso.

.....

.....

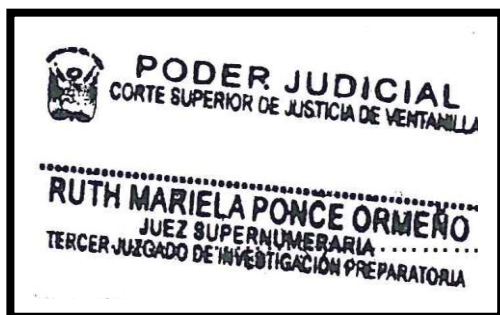
.....

.....

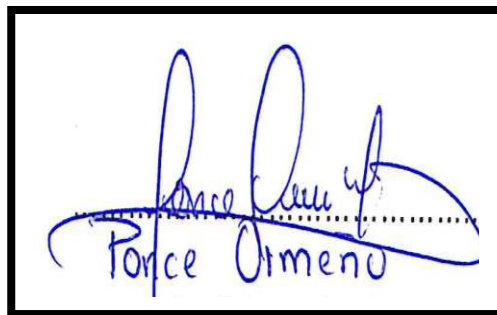
.....

.....

.....



SELLO



FIRMA



GUÍA DE ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado:

Cargo/Profesión/Grado académico:

Instrucción:

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

No. Porque bajar el índice de la delincuencia no se debe a la celeridad del proceso y al endurecimiento de las penas, enviando al Penal mediante condena efectiva, sino se trata de un mal social a consecuencia de la falta de una educación debida, integración familiar y empleo, para ello debe modificarse y/o aplicarse nuevas políticas de gobierno que se preocupe por la atención social INTEGRAL, restableciendo valores sociales, sobre todo.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

SI SON IMPORTANTES. Sin embargo muchos veces en la praxis no se cumple esto. Se advierte en la praxis de la Decreto Leg. 1194, si bien es cierto, se habla de una justicia celer, con etapas procesales simplificadas, sin embargo, el sistema de justicia es deficiente para poder aplicar una correcta justicia con las garantías constitucionales, toda vez que existe escasez de Defensores Públicos, los Fiscales no cumplen su rol debido, los Abogados no estan preparados para el sistema.

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

Considero que no, lo suficiente, toda vez que este nuevo sistema exige una preparación moderna intelectual y humana, por cuanto se trata de un proceso moderno, donde desde primer el respeto por las garantías constitucionales el imputado y la victima, sin embargo, debido a la falta de preparación de los que integran este nuevo sistema, no se aplica eficazmente, solo se advierte producción en cuanto a los procesos, pero con escaso respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales, sobre todo de la victima, q- en este proceso se encuentra totalmente desprotegida.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

No existe una adecuada infraestructura para el desarrollo del procedimiento, es decir una sala adecuada de audiencias, equipos tecnológicos de audio, y demás accesorios. No existe puntualidad y cumplimiento como DEBE SER en cuanto a los Fiscales, respecto a sus roles y funciones. No existe una basta asistencia de los Defensores Públicos; entre otras.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Público (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Público. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

No. El nuevo Código Procesal Penal y el Decreto Leg. 1194, tienen un contenido de justicia garantizada, este, en un extremo significa definir los roles y funciones de cada actor social en el proceso Penal; por tanto una vez cumplida la labor de investigación del Fiscal, si se dan los presupuestos legales, corresponde acusar el conflicto al Fiscal, para buscar la pretensión punitiva.

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

Primero, existe equivocación cuando se sostiene que en el proceso de O.A.F., el acusado no tiene derecho a la prueba, al debate, toda vez que este procedimiento garantiza para llegar a la dilucidación de la controversia (sentencia), no se ha simplificado ni modificado el procedimiento. Ahora, en cuanto a la función del Fiscal que formule imputación determinando la capacidad económica del imputado, está en la plena libertad y facultad legal de hacerlo (Principio de autonomía).

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

No. Por que, el Dec. Leg. 1194 que regula el Trámite del Proceso por delitos cometidos en Flagancia, también nomina como trámite especial bajo esta norma, los procesos inmediatos de Omisión a la Asistencia Familiar y delitos de conducción de Delincuente en Estado de ebriedad, y a este extremo prescribe la norma del ART. 446.4 del C.P.P. que se refiere estrictamente a la comparetencia del Fiscal que opera como Fiscalía Especializada de Procesos de Investigación bajo la aplicación del D. Leg. en mención.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

Claro que si. Este talio 2o Principio Procesal de Igualdad de Armas (derecho Constitucional de Defensa), garantiza la posibilidad y libertad legal de la Defensa Pública y Defensa Técnica de cumplir su rol en el proceso (desacreditar las imputaciones del Fiscal), presentando y debatiendo las pruebas; en este contexto legal, el Fiscal está considerado como un sujeto procesal activo en el proceso, no tiene Privilegios ni otro Prestigio, que lo garantizado Por la Constitución y la Ley (C.P.P.).

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

Bajo este contexto, se estaría retrocediendo y volviendo al sistema antiguo Código de Procedimientos de 1940, que contiene un sistema procesal inquisitivo acusatorio, vulnerando flagrantemente la ley del nuevo código Procesal Penal, el Dec. Leg. 1194 y el Dec. Leg. 1206, que son leyes de avance significativo de Justicia eficaz.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

No necesariamente. Los dos procesos inmediatos de O.A.F. y Condicion en Estado de Ebriedad son procesos especiales normados en el D. Leg. 1194 dentro de los procesos de Flagrancia. Estos dos

procesos mencionados son de Simplificación al proceso o etapas en si que regirán en el Nuevo Código Procesal Penal, por que contiene delitos que se configuran con el solo incumplimiento de un deber, en la O.A.F. incumplir el pago de alquiler desde el día siguiente de requerimiento. Y el proceso de inducción la única prueba es el Certificado de deber y pago, entonces no hay muchas pruebas a actuar y debatir.

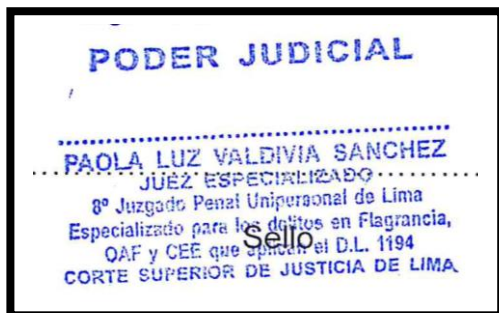
11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Claro que si. por que al no existir un hecho de imputación concreta y necesaria, no habria camino a defensa, toda vez que la unica obligación del imputado en el proceso es demostrar su inocencia, y el Fiscal probar su culpabilidad, que el Fiscal debe materializarlo en su acusación.

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz —es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

La pregunta la considero ambigua. Pero en el entendido que el investigado no cuenta con defensa Técnica desde la Investigación Preliminar hasta la incoación del proceso inmediato y lo de Flagrancia la norma procesal Penal establece la obligación

de asignarle una defensa Pública para el desarrollo de todas sus actividades procesales. Si en el supuesto que la pregunta sea, si en la etapa preliminar hubo defensa Técnica, y luego fue abandonado y el proceso tiene que continuar el trámite debido a la preclusividad de las actividades en la investigación, debe ser reemplazado por la defensa Pública, desde la etapa o actividad procesal que queda, y continuar.



SELLO

FIRMA

Anexo 4 - I



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ENTREVISTA

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Entrevistado: Walter Enrique Molina Lopez

Cargo/Profesión/Grado académico: Juez - abogado

Instrucción: Juez - Juzgado de Investigación Preparatorio

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Preguntas:

1. En la actual coyuntura, donde se advierte el incremento de la delincuencia. ¿Considera Ud. que la solución está en la simplificación procesal? ¿Por qué?

Si, empero. Para su efectividad aplicación debe cumplir con ciertas exigencias que la misma norma establece, como en casos de Flagrancia o prueba suficiente, y que por tanto no se requiera mas actuacion probatoria, aunado a ello, considero que el Proceso inmediato no es una respuesta al incremento a la delincuencia sino a todo tipo de proceso Penal - salvo excepciones - y que tiene como fin dar una respuesta Judicial inmediata ante procesos que no requieran mas controversias.

2. ¿Considera Ud. que el respeto por las garantías y los principios procesales en el proceso inmediato son importantes? explique.

En todos los procesos ya sea de naturaleza civil, Penal, laboral etc.; es importante el respeto a los principios procesales; mas en los procesos penales, en donde se discuten temas como la libertad o inocencia - derecho constitucional de una persona, en ese sentido, el respeto a los principios procesales - igualdad de armas, construcción, oralidad; constituyen hacer los pilares para el desarrollo del debido proceso y la emision de una resolucion digno sostenida en base a ello.

3. ¿Considera Ud., que los operadores del Derecho, cuentan con los medios adecuados y la preparación suficiente para resguardar las garantías procesales en el proceso inmediato? Explique.

No, la falta de capacitacion por parte de los operadores de Justicia en la debida aplicacion de proceso inmediato a originado que se cometan ciertos errores en su debida interpretacion, lo que ha llevado a la corte Suprema a emitir diversos acuerdos plenarios sobre ello; por otro lado, es evidente ademas que no se cuenta con los medios adecuados para la obtencion de la prueba por parte del Ministerio Fiscal lo que ha conllevado a que el Juezador la declare impracendente.

4. ¿Qué, críticas podrían plantearse en torno a la aplicación del proceso inmediato?

Como, lo he manifestado falta de capacitación por parte de los operadores de Justicia, empero además de los abogados y Policía Nacional, además la obtención de la prueba en ciertos delitos es tardía - T.I.D. - lo que conlleva a que se declare el sobreseimiento.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Analizar las críticas presente en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio Acusatorio.

Preguntas:

5. En el proceso inmediato reformado se establece la obligación coactiva al ministerio público de requerir su incoación, sin embargo la Constitución Política (art. 158°), la Ley Orgánica del Ministerio Público (art. 5°) y el Nuevo Código Procesal Penal (art. 60°), concluyen garantizando la autonomía del Ministerio Público. ¿Considera Ud. que se está vulnerando el principio acusatorio? Explique.

Es cierto que la norma obliga al Ministerio Fiscal a Formular incoación de proceso inmediato, en ciertos delitos, empero, para eso la autoridad Fiscal debe tener las pruebas suficientes solo así debe incoar procesos inmediatos, sino, no debe hacerlo así sea el delito por el cual se le imponga incoar procesos inmediatos, de esta manera hará notar su autonomía.

-
-
-
-
6. En los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, es en el imputado en quien recae la carga de la prueba para determinar su capacidad económica, en vista a que en el proceso inmediato no se debate esta capacidad del imputado. ¿Considera Ud. que es necesario que el Ministerio Público en el cumplimiento de su función acusatoria, formule una imputación concreta determinando la capacidad económica del imputado? Explique.

Todo juez es un juez de garantía y el Fiscal es el defensor de la legalidad y representa a la sociedad en ese sentido sus requerimientos no solo deben estar motivados en base al incumplimiento obligatorio, sino que además debe determinarse su imposibilidad, vale decir, las causas del incumplimiento.

.....

.....

.....

.....

7. Ante la interpretación literal del art. 446.4, a mérito del cual eventualmente las fiscalías solicitan la incoación del proceso inmediato solo por tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. ¿Considera Ud. que se trasgrede la figura de la imputación necesaria como elemento del principio acusatorio?

No, desde mi punto de vista nada tiene que ver la incoación del proceso inmediato (derecho de acción) con el principio de imputación necesaria, por cuanto en el requerimiento de incoación, el fiscal debe por derecho y principio precisar la conducta ilícita atribuida, y esta debe ser clara y precisa, esto más tiene que ver con el derecho de defensa en el sentido de que el procesado conozca debidamente los cargos que se le imputan.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Igualdad de Armas.

Preguntas:

8. ¿Considera Ud., que la defensa técnica a cargo de un abogado particular o público, tienen las mismas posibilidades que el Ministerio Público para la obtención y postulación de pruebas en un proceso inmediato? Explique.

Hay una cierta limitación en cuanto a la obtención de las pruebas por parte de la defensa (particular o de oficio) ya que este es un simple ciudadano común, enpero el Fiscal es un funcionario público con autoridad ante de los demás organismos estatales y personas, cualidad que no tiene la defensa letrada, en cuanto a la postulación de pruebas la ley no distingue en cuanto a su postulación por ambas partes.

9. ¿Cómo se verían afectadas las garantías procesales del nuevo modelo procesal penal, frente a la marcada desigualdad que existe en la participación de los fiscales y la defensa técnica, en los casos de flagrancia?

Los principios procesales son constataciones
dogmáticas con criterios o ideas fundamentales,
contenidos en forma explícita o implícita en el
ordenamiento jurídico y señalan las
características del derecho procesal; de verse
afectado la finalidad de dichos principios,
crearía un caso de inestabilidad jurídica.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Analizar las críticas presentes en la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del Principio de Inviolabilidad al Derecho de Defensa.

Preguntas:

10. La implementación del proceso inmediato obedece primordialmente a una simplificación procesal, reduciendo al máximo las etapas procesales y con ello modulando los principios rectores del proceso. ¿Considera Ud. que existen graves riesgos de vulnerar el Derecho a la Defensa? Explique.

No, recordase que la defensa tiene
derecho a participar en todas las
diligencias y aportar los medios de prueba
conforme así lo establece el Art. 89 de C.P.P.

-
-
-
-
-
-
-
11. ¿Considera Ud. que los vicios en la imputación necesaria/concreta, afectan al Derecho de Defensa? Explique.

Evidentemente que si no puede haber imputaciones, imprecisas, ambiguas o genericas toda vez que el procesado no va a tener conocimiento de la que realmente se le imputa.

.....

.....

.....

.....

.....

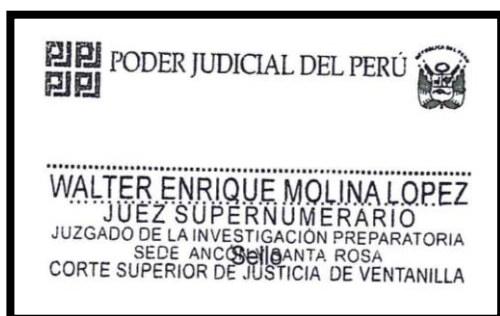
.....

.....

12. ¿Considera Ud. que ante la ausencia de un abogado defensor que garantice una defensa eficaz –es decir que cuente con el plazo razonable para argumentar su tesis de defensa y que se encuentre desde el primer momento de la intervención del detenido en flagrancia- se debería de incoar el proceso inmediato?

No, recordese que el juez JIP, es un juez de garantías, en ese sentido si el operador de justicia advierte mala defensa del imputado o parte civil, puede llamar la atención y recomendarle ejercer mejor estudio de los hechos entendiéndose que

Juridicamente no puede declararse
improcedente o negar la posibilidad al
Ministerio Público de incoar proceso
inmediato por dicha circunstancia.



SELLO

The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be "W. Molina". It is written over a horizontal dotted line.

FIRMA

Anexo 5 - A



GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Ficha Técnica

Proyecto de Ley N° 5391/2015-CR
Congreso de la Republica

Autor : Marco Tulio Falconí Picardo
Bancada : Unión Regional
Fecha : 15 de junio de 2016
Objetivo : Modificar el numeral 1 del Art. 446 del DL 957

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

EL PROCESO INMEDIATO DEONTOLÓGICAMENTE BUSCA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS CONFLICTOS PENALES CON EL FIN DE ALCANZAR UNA SOLUCIÓN JUSTA, OPORTUNA Y EFICAZ.

ÍTEMS		MARCAR	
		SI	NO
1°	La inseguridad ciudadana fundamenta la dación de una fórmula de simplificación procesal.	✓	
Fundamento materia de análisis	Es importante rescatar y advertir que el propósito del Decreto Legislativo 1194 (...) es facilitar la labor del Ministerio Público y poder Judicial, queriendo asegurar de ese modo la eficacia y celeridad de los procesos penales; ello debido a la inseguridad ciudadana que en estos momentos se vive.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Exposición de Motivos	Primer	03

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio.

LA OBLIGACIÓN COACTIVA AL MINISTERIO PÚBLICO DE REQUERIR LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO, CONLLEVA EN LA PRÁCTICA AL RIESGO DE VULNERAR SU AUTONOMÍA.

ÍTEMS		Marcar	
		SI	NO
1°	Se evidencia la afectación de las facultades y de la autonomía del Ministerio Público.	✓	
Fundamento materia de análisis	El decreto legislativo 1194 implicaría una afectación de las facultades de decisión y discrecionalidad del Ministerio Público y de su autonomía, establecidas en su Ley Orgánica y en la Constitución (...), pues conduciría a una aplicación mecánica del proceso Inmediato, ya que obliga al fiscal a solicitar la incoación del proceso inmediato y bajo responsabilidad funcional; (...).		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Exposición de Motivos	Tercer	03

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal

Ficha Técnica

CAS. N° 842-2016 SULLANA

Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia

Tipo de Proceso : Recurso de Casación.
Recurrente : Maximiliano Benites Rodríguez (Encausado).
Fecha de Res. : 16 de marzo de 2017.
Pronunciamiento : *FUNDADO* el Recurso de Casación.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.

EL EJERCICIO DE LA DEFENSA SE DESARROLLA EN UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE SE EJERCITE UNA DEFENSA ADECUADA EN ARTICULACIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.

ÍTEMS		Marcar	
		SI	NO
1°	<i>La defensa técnica ha contado con el plazo razonable para ejercer una adecuada defensa.</i>		✓
Fundamento materia de análisis	(...), los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieren delitos no flagrantes.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Fundamentos de Derecho	Sexto	08

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal

Ficha Técnica

CAS. N° 692-2016 LIMA NORTE

Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia

Tipo de Proceso : Recurso de Casación.
Recurrente : Miguel Antonio Cortez Ortega (Encausado).
Fecha de Res. : 04 de mayo de 2017.
Pronunciamiento : *FUNDADO* el Recurso de Casación.

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

EN UN PROCESO CÉLERE Y EXPEDITO COMO EL PROCESO INMEDIATO, LOS OPERADORES DEBEN DE SER CALIFICADOS Y EFICACES A EFECTOS DE RESGUARDAR LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS PRINCIPIOS PROCESALES.

ÍTEMES		MARCAR	
		SI	NO
1°	La defensa técnica cuenta con los medios adecuados y la preparación suficiente.		✓
Fundamento materia de análisis	(...) El cinco de febrero de dos mil dieciséis se inició el juicio oral. La defensa del imputado ofreció prueba testifical y documental [fojas noventa y seis]. (...), <i>se tiene que el Tribunal de Primera Instancia llamó la atención a la defensora del imputado y apercibió que si no lleva a cabo una defensa efectiva se la cambiaría por un abogado de oficio</i> [fojas ciento siete].		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Fundamentos de Derecho	Primero. E	04/05

2°	En el proceso inmediato es necesario el respeto por las garantías procesales contenidas en los principios.		✓	
Fundamento materia de análisis	Que, sin analizar si, finalmente, el imputado Cortez Ortega es culpable o inocente, como consecuencia de la valoración del conjunto de la prueba actuada durante el enjuiciamiento, es de resaltar que el proceso no pudo ser tramitado por la vía inmediata, sino por la común u ordinaria. Al hacerlo, indebidamente, bajo el proceso inmediato se afectó el artículo 139, numeral 3, de la Ley Fundamental: el proceso no fue debido, con todas las garantías. La inobservancia de este derecho fundamental generó indefensión material, (...).			
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.	
	Fundamentos de Derecho	Séptimo	07/08	

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de inviolabilidad del derecho de defensa.

LA NECESIDAD DE LA PRESENCIA DEL ABOGADO DEFENSOR DESDE EL PRIMER MOMENTO DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA A FIN DE GARANTIZAR UNA DEFENSA EFICAZ

ÍTEMS		Marcar	
		SI	NO
1°	Se le asistió con un abogado defensor al investigado desde la sede policial a fin de resguardar sus derechos.		✓
Fundamento materia de análisis	Desde luego, una diligencia de investigación, como es la pesquisa-registro vehicular, puede ser ampliada, más aun si en el primer registro vehicular no intervino el Ministerio Público. En este caso, sin embargo, <i>no existen razones de extrema urgencia que impidan la intervención de un abogado defensor en sede de investigación preliminar</i> (artículo 71, apartados 1 y 2, literal “c” del Código Procesal Penal). En la segunda acta <i>no constan las razones por las cuales el imputado rehusó firmar el acta, tampoco por qué no se contó con un abogado defensor de confianza o, en todo caso, con un abogado defensor de oficio.</i>		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Fundamentos de Derecho	Cuarto	06

Anexo 5 – D



GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal

Ficha Técnica

RES. N°: DOS – EXP N° 00124-2016-0

ENTIDAD: Juzgado Penal Colegiado - Lima

Etapas del Proceso : Juicio Inmediato

Delito : Femicidio

Fecha de Res. : 29 de noviembre de 2016

Pronunciamiento : Fundada la Excepción de Naturaleza de Juicio

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO REQUIERE COMO PRESUPUESTO MATERIAL PARA SU APLICACIÓN LA SIMPLICIDAD DEL CASO, POR LO QUE SU APLICACIÓN EN CASOS GRAVES IMPLICA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO MODELO PROCESAL.

ÍTEMES		MARCAR	
		SI	NO
1°	La complejidad del caso fue analizada conforme a las garantías de un debido proceso.		✓
Considerando sometido a análisis	Por la complejidad del caso, en tanto se encuentra pendiente de recabar el resultado de los diversos exámenes periciales practicados a nivel preliminar (...); el colegiado considera que el caso materia de análisis debe ser canalizado a través de un proceso común, (...) la evidencia probatoria es de tal magnitud que no existe la posibilidad de rebatirla ni desmentirla, por lo que, no puede aplicarse a casos donde la prueba no está suficientemente determinada, (...) privilegiando principios y garantías constitucionales, como el debido proceso y las garantías procesales.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Antecedentes	9	5

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio acusatorio.

LA EXIGENCIA BAJO SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL QUE ES SOMETIDO EL FISCAL EN LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO (ART. N° 446), POSIBILITA LA CONCRECIÓN DE VULNERACIONES TANTO A LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO AL PRINCIPIO ACUSATORIO.

ÍTEMS		MARCAR	
		SI	NO
1°	La fiscalía actúa con total autonomía en el requerimiento de la incoación del proceso inmediato.		✓
Considerando sometido a análisis	Por su parte la fiscalía señala que el presente caso lo está conociendo por disposición superior, que la fiscalía anterior presentó cargos para que sea conocido en proceso común pero fue negado en el juzgado de turno permanente conforme a la razón emitida por el asistente fiscal, que considera que existen documentos pendientes por recabar, estando de acuerdo con lo señalado por la defensa técnica ya que a la fecha se no cuenta con el resultado de las pericias ordenadas como los exámenes realizados al acusado, a la agraviada, al arma blanca con el que se habría ocasionado las lesiones a la agraviada y protocolo de necropsia.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Antecedentes	3	4

Anexo 5 - E



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ANÁLISIS DE CASO

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal

Ficha Técnica

EXPEDIENTE: 00186-2016-1JR-PE-03

ÓRGANO JURISDICCIONAL: 1° Instancia: Sexto Juzgado Unipersonal de Lima

2° Instancia: Segunda Sala Penal de Apelaciones

Etapas del Proceso : Sentencia de Segunda Instancia
Delito : Acto contra el Pudor
Resol. (Fecha) : 05 (16 de mayo de 2016)
Pronunciamiento : Nula la Sentencia apelada y Nula la incoación de proceso inmediato

Desarrollo del caso

Instancia	Sujeto procesal	Argumento
Primera Instancia -	Fiscal Provincial (titular de la acción)	<p>Acusación Fiscal:</p> <p>El titular de la acción atribuye al acusado Carlos Fernando Diego Cabanillas haber realizado tocamientos indebidos en sus partes íntimas (ano) al menor de iniciales J.C.S.L, de siete años de edad, al haberle bajado su pantalón para luego agacharlo y pasarle su dedo que previamente le había echado saliva; así como el haberle obligado a efectuarle tocamientos en su parte íntima (pene), amenazándolo que lo mataría si contaba lo sucedido. Hecho realizado el día veintidós de enero del presente año, a las 17:00 horas aproximadamente, en el interior del domicilio sito en el jirón Cotabambas 358-Lima Cercado</p>

<p><i>Sexto Juzgado Unipersonal De Lima</i></p>	<p>Juez Unipersonal</p>	<p>Sentencia condenatoria:</p> <p>Se ha acreditado la responsabilidad penal del acusado, estableciéndose que fue la persona que realizo tocamientos indebidos en la parte anal del menor agraviado, lo cual se encuentra corroborado no solo con la verosimilitud y persistente incriminación del menos quien lo sindicó directamente como el “bigote”, apelativo que tendría el acusado, sino también con el certificado médico legal N° 003993-E-IS, practicado al menor, el mismo que dio como resultado que la parte perianal del menor se encontraba rojiza; por lo que encontrándole responsabilidad penal, le impuso la pena de seis años de Pena Privativa de Libertad y cinco mil soles por concepto de reparación civil.</p>
<p>Segunda Instancia</p>	<p>Abogado defensor público</p>	<p>Alegatos de apelación:</p> <p>Preciso que las pruebas actuadas como la versión de la madre y la manifestación de los efectivos policiales intervinientes no vinculan a su patrocinado con el delito considerado, que el A Quo vulnerado su imparcialidad al haber dispuesto después del plenario la realización de la toma de declaraciones del menor agraviado en la cámara Gesell, cuando el Ministerio Público no postulo esta declaración. Alegando que esta situación contradice la doctrina y nuevo modelo procesal penal donde son las partes las que tienen que aportar sus pruebas, sin embargo no se habría cumplido con la segunda parte del artículo 382° del código procesal penal que recoge el carácter excepcional de la prueba de oficio; puso en tela de juicio el dictamen pericial dado que los resultados también podrían presentarse por causa dermatológicas; por lo que solicita que se revoque la sentencia condenatoria y se absuelva de los cargos.</p>
	<p>Fiscal Superior</p>	<p>Fundamentos del Ministerio Público:</p> <p>Manifiesta que la prueba de oficio llevada a cabo por la juzgadora se llevó a cabo de acuerdo a las facultades que le otorga la ley, ello no significa en modo alguno que se haya parcializado con alguna de las partes. Con respecto a lo manifestado por la</p>

<i>Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima</i>		<p>señora madre y lo referido por los efectivos policiales son pruebas periféricas que demuestran que la lesión que presentaba el menor se debía a los tocamientos indebidos del acusado sobre el menor.</p>
	Órgano Superior Colegiado	<p>Consideraciones de la Sala Penal:</p> <p>La prueba de la comisión de un delito, para vencer la presunción de inocencia que establece el artículo 2.24.c de la Constitución Política tiene que ser de tal magnitud que no deje la menor duda de que los hechos han ocurrido y que el responsable es el imputado.</p> <p>La Flagrancia implica que el autor es sorprendido en el momento mismo de la comisión del delito, lo que en Perú se denomina Cuasi flagrancia o actos inmediatos previos y anteriores a la comisión del hecho.</p> <p>En el mismo escrito de incoación de proceso, la fiscalía dice que la madre del menor agraviado, a las 3:30 horas del día 23 de enero del 2016 (los tocamientos habrían ocurrido el día 22 a las 17 horas aproximadamente) le mando a bañar, le conto que le dolía su potito y tenía granitos y al preguntarle que le había pasado, es ahí donde narra que el “Bigote” como era conocido el procesado, en horas de la tarde del 22 de enero le había realizado tocamientos.</p> <p>Respecto a las manifestaciones de los policías son solo referenciales en cuanto la denuncia realizada por la madre del menor, en consecuencia estas declaraciones no constituyen prueba de cargo ni descargo, la declaración de la médico legista, respecto a la lesión que debiera de existir, señala que los pliegues del ano del menor agraviado se encuentran normal y conservado y que el enrojecimiento es un signo inespecífico.</p> <p>Estas condiciones descritas, la incoación del proceso inmediato bajo condiciones de flagrancia que en ese caso no concurren, no es correcto porque descalifica la opción probatoria, toda vez que la flagrancia no requiere prueba indiciaria sino que por su naturaleza</p>

		<p>la prueba es directa.</p> <p>Bajo estos criterios en el presente caso hemos advertido que se ha vulnerado derechos constitucionales, en razón del apresuramiento procesal y se ha expedido sentencias condenatoria sin la debida actividad probatoria y sin que las partes hayan tenido oportunidad y tiempo necesario para demostrar sus afirmaciones lo que ha conllevado el impedimento del idóneo ejercicio del derecho de defensa.</p> <p>Por estas consideraciones resuelve:</p> <p>Declarar la nulidad de la sentencia que resuelve condenar a Carlos Fernando Diego Cabanillas; declarando la nulidad de la Resolución en el extremo que resolvió declarar procedente la incoación del proceso inmediato.</p>
--	--	--

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

SE EVIDENCIA QUE EL PROCESO INMEDIATO COMO MECANISMO PROCESAL PRETENDE GARANTIZAR UNA JUSTICIA OPORTUNA

		MARCAR	
ÍTEMS		SI	NO
1°	El proceso inmediato por su simplificación procesal conduce a la transgresión de la seguridad procesal y las reglas de un debido proceso.	✓	
Considerando sometido a análisis	El proceso inmediato constituye, no cabe duda, un buen mecanismo procesal que permite justicia oportuna, sin embargo existen cuestionamientos sobre su seguridad y garantías del cumplimiento de las reglas esenciales del debido proceso donde uno de los aspectos esenciales es precisamente la prueba, su forma de recabar , su actuación y finalmente su valoración, condiciones que en caso de delitos de esta naturaleza se complica aún más, por la inexistencia de pruebas objetivas o directas que deriven en la probanza del hecho.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Considerativa	5.5	6

2°	En la práctica se evidencia que se están adecuando los casos para hacer posible la aplicación del proceso inmediato por la celeridad que comprende.	✓	
Considerando sometido a análisis	No se soluciona las deficiencias del sistema de justicia penal, resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos los casos pueden incluirse dentro del proceso inmediato, el entusiasmo por decidir los casos en el menor tiempo posible es loable, pero igualmente importante es la calidad del sistema de justicia, que en ocasiones como esta requiere actividad probatoria completa, porque igual podemos incurrir en error por exceso como por deficiencias, condenando a inocente o absolviendo a culpables, por esto es preciso hacer las cosas de la justicia como corresponde hacerlas.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Considerativa	5.10	7

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Fundamentar las críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva del principio de igualdad de armas.

LA DEFENSA PÚBLICA PADECE LA EXCESIVA CARGA PROCESAL, POR LO QUE REALIZAN UN EJERCICIO EN DESMEDRO DEL PROCESADO, CONLLEVANDO A LA DESIGUALDAD PROCESAL.

		MARCAR	
ÍTEMS		SI	NO
1°	La defensa pública tiene las mismas oportunidades que los demos sujetos procesales en la actuación de pruebas.		✓
Considerando sometido a análisis	En realidad prueba de descargo no se ha actuado en este caso, solo se ha hecho referencia el imputado, quien no cuenta con defensa particular, sino publica, condición que si bien no constituye desmedro en el ejercicio de su defensa, por el contrario la defensa publica viene actuando con mayor eficacia en muchos casos que la defensa particular, sin embargo las opciones de actuar pruebas se restringe debido a diversos factores entre los que destaca el escaso número de defensores públicos para la excesiva carga que existe, entonces es preciso también evaluar esas circunstancias en un sistema de justicia que hace esfuerzos por ser imparcial e igualar a las parte.		
	Parte de la Resolución	Párrafo	Pág.
	Antecedentes	3	4

GUÍA DE ANÁLISIS NORMATIVO COMPARADO

Título: Críticas a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

Normas analizadas : Articulado del Derecho comparado
Procedimiento : Contraste con el articulado nacional
Países de contraste : Venezuela, Costa Rica, Ecuador, y Honduras

OBJETIVO GENERAL

Identificar las críticas presentes en torno a la aplicación del proceso inmediato desde la perspectiva de los principios rectores del nuevo modelo procesal penal.

ÍTEMS					
1°	La aplicación de este tipo de procedimiento contiene principalmente a los delitos flagrantes.				MARCAR
Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	SI	NO
372°.1	Código Orgánico Procesal Penal	VENEZUELA	PROCEDIMIENTO ABREVIADO	✓	
422°	Código Procesal Penal	COSTA RICA	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA	✓	
640°.2	Código Orgánico Integral Penal	ECUADOR	PROCEDIMIENTO DIRECTO	✓	
440°	Código Procesal Penal	HONDURAS	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA	✓	
446°.1-a	Código Procesal Penal	PERÚ	PROCESO INMEDIATO	✓	
2°	El Fiscal se encuentra coaccionado para la incoación o iniciación de este procedimiento.				MARCAR
Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	SI	NO
372°	Código Orgánico Procesal Penal	VENEZUELA	PROCEDIMIENTO ABREVIADO		✓
426°	Código Procesal Penal	COSTA RICA	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA		✓

640°.1	Código Orgánico Integral Penal	ECUADOR	PROCEDIMIENTO DIRECTO		✓
440-D	Código Procesal Penal	HONDURAS	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA		✓
446°	Código Procesal Penal	PERÚ	PROCESO INMEDIATO	✓	
3°	Establece el límite de su aplicación observando la mínima cantidad de años de pena privativa de libertad.			MARCAR	
Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	SI	NO
372°	Código Orgánico Procesal Penal	VENEZUELA	PROCEDIMIENTO ABREVIADO	✓	
422°	Código Procesal Penal	COSTA RICA	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA		✓
640°.2	Código Orgánico Integral Penal	ECUADOR	PROCEDIMIENTO DIRECTO	✓	
440-A	Código Procesal Penal	HONDURAS	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA		✓
446°	Código Procesal Penal	PERÚ	PROCESO INMEDIATO		✓
4°	Establece el límite de su aplicación observando la mínima cantidad de años de pena privativa de libertad.				
Articulado	Cuerpo normativo	País	Nominación	Plazo	
373°	Código Orgánico Procesal Penal	VENEZUELA	PROCEDIMIENTO ABREVIADO	36 horas	
423°	Código Procesal Penal	COSTA RICA	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA	Inmediatamente a su detención	
6°	Código Orgánico Integral Penal	ECUADOR	PROCEDIMIENTO DIRECTO	Inmediatamente después de su detención	
440- D	Código Procesal Penal	HONDURAS	PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA	24 horas	
447°. 1	Código Procesal Penal	PERÚ	PROCESO INMEDIATO	48 horas	

➤ **Articulado valorado**

Artículo	Norma - País	Articulado Nacional
<p>DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO</p> <p>Artículo 372. Procedencia.</p> <p>El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este TÍTULO, en los casos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito; 2. Cuando se trate de delitos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su límite máximo; 3. Cuando se trate de delitos que no ameriten pena privativa de libertad. <p>Artículo 373. Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido.</p> <p>El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público,</p>	<p>CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (Decreto N° 9.042 del 12 de junio de 2012)</p> <p>~</p> <p>Venezuela</p>	<p>CÓDIGO PROCESAL PENAL (D.L 957) (modificado por el Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto de 2015)</p>

<p>quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo presentará ante el Juez de control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido.</p> <p>En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.</p> <p>El Juez de control decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que sea puesto el aprehendido a su disposición.</p> <p>Si el Juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el Fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.</p> <p>En este caso, el Fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.</p> <p>En caso contrario, el Juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto.</p> <p>Artículo 374. ° Efecto Suspensivo.</p> <p>Cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad menor de tres años en su límite máximo y el imputado tenga antecedentes penales; y, en todo caso, cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad de tres años o más en su límite máximo, el recurso de apelación que interponga en el acto el Ministerio Público contra la decisión que acuerde la libertad del imputado, tendrá efecto suspensivo.</p> <p>En este caso, la corte de apelaciones considerará los alegatos de la defensa, si ésta los expusiere, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones.</p>		<p>Artículo 446°.- Supuestos de aplicación.</p> <p>1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:</p> <p>a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259°;</p> <p>b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160°; o</p> <p>c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.</p> <p>2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342°, sean necesarios ulteriores actos de investigación.</p> <p>3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.</p> <p>4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447° del presente Código.</p>
<p>PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA</p> <p>Artículo 422.- Procedencia.</p> <p>Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel.</p> <p>Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral.</p> <p>Artículo 423.- Trámite inicial.</p> <p>El sospechoso detenido en flagrancia será trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía actuantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba con que se cuente. No serán necesarios la presentación escrita del informe o el parte policial, bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.</p> <p>Artículo 424.- Actuación por el Ministerio Público.</p> <p>El fiscal dará trámite inmediato al procedimiento penal, para establecer si existe mérito para iniciar la investigación. Para ello, contará con la versión inicial que le brinde la autoridad de policía que intervino en un primer momento, así como toda la prueba que se acompañe.</p> <p>Artículo 425.- Nombramiento de la defensa técnica.</p>	<p>CÓDIGO PROCESAL PENAL (adicionado por el Art. 18 de la Ley 8720 de 4 de marzo de 2009)</p> <p>~</p> <p>Costa Rica</p>	

<p>Desde el primer momento en que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal procederá a indicarle que puede nombrar a un defensor de su confianza. En caso de negativa de la persona sospechosa o si no comparece su defensor particular en el término de veinticuatro horas, se procederá a nombrar, de oficio, a un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Una vez nombrado el defensor de la persona imputada, se le brindará, por parte del fiscal, un término de veinticuatro horas, para que prepare su defensa para tal efecto. El Ministerio Público, de inmediato, deberá rendir un breve informe oral acerca de la acusación y de la prueba existente.</p> <p>Artículo 426.- Solicitud de audiencia ante el juez de juicio.</p> <p>Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia.</p>		<p>Artículo 447*.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva</p> <p>1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264°, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.</p> <p>2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336°.</p> <p>3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.</p> <p>4. La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85°. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:</p> <p>a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;</p> <p>b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;</p> <p>c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.</p> <p>5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.</p> <p>6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448°.</p> <p>7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.</p> <p>Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446°, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria.</p>
<p>PROCEDIMIENTO DIRECTO</p> <p>640.- Procedimiento directo.-</p> <p>El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas:</p> <p>1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código.</p> <p>2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificado como flagrantes. Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.</p> <p>3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este procedimiento.</p> <p>4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia.</p> <p>5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito.</p> <p>6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha de su inicio.</p> <p>7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este Código.</p> <p>8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial.</p> <p>Artículo 6.- Garantías en caso de privación de libertad.-</p> <p>En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se observarán las garantías previstas en la Constitución y a más de las siguientes:</p> <p>1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión.</p> <p>2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará inmediatamente después de la aprehensión. (...)</p>	<p>CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL</p> <p>~</p> <p>Ecuador</p>	
<p>PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA</p> <p>Artículo 440-A. Procedencia.</p> <p>El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo.</p> <p>En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurren las circunstancias siguientes:</p> <p>1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la</p>		

<p>multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas;</p> <p>2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y,</p> <p>3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización.</p> <p>En estos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código.</p> <p>Artículo 440-B. Trámite Inicial.</p> <p>El sospechoso detenido en flagrancia deberá ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y hechos que se le imputan, posteriormente será trasladado de inmediato por las autoridades de policía actuantes, al Ministerio Público junto con la totalidad de la prueba con la que se cuente, la cual podrá exponerla de manera oral al Ministerio Público, quien decidirá si existe mérito para la aplicación de un juicio expedito.</p> <p>Artículo 440-C. Nombramiento de defensa técnica.</p> <p>El fiscal una vez iniciada la investigación, conformará el nombramiento de la defensa técnica del sospechoso, y en caso de negativa del mismo o que no comparezca su defensor particular en el término de dos (2) horas, se procederá a nombrar de oficio un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Constituida la defensa técnica del investigado, el fiscal le informará oralmente sobre los hechos imputados y los elementos de prueba hasta ese momento recabados, sin poner en riesgo la efectividad de la persecución penal, con el propósito de que prepare su defensa.</p> <p>Artículo 440-D. Solicitud de audiencia ante el Juez de Letras.</p> <p>Cuando el fiscal considere pertinente la aplicación del juicio expedito y constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al Juez de Letras respectivo que realice una audiencia para conocer de su solicitud, en relación a la procedibilidad del trámite y la imposición de la medida cautelar, a su vez, pondrá a la orden del juzgado al detenido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su detención.</p> <p>El juez, escuchadas las partes, resolverá de inmediato, oralmente, determinando si concurren o no los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia. Contra la admisión de la solicitud del Ministerio Público procederá oralmente la interposición y substanciación del recurso de apelación ante el juez que dictó la resolución; sin más trámite, se remitirán las diligencias a la Corte de Apelaciones respectiva, la cual resolverá dentro del plazo de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibidas las actuaciones y remitirá inmediatamente las diligencias al tribunal de primera instancia para que proceda de conformidad a la decisión adoptada. La resolución de la Corte de Apelaciones es irrecurrible.</p> <p>En la misma resolución que se determina la procedibilidad del trámite se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de preparación, la cual deberá de practicarse dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas. Respecto al señalamiento de la audiencia, la resolución es irrecurrible.</p> <p>Artículo 440-F. Audiencia de preparación.</p> <p>Definida la procedencia del juicio expedito, se dará inicio a la audiencia de preparación en la cual las partes propondrán los medios de pruebas que utilizarán para acreditar sus pretensiones, posteriormente se abrirá un turno para que planteen, en su caso, las recusaciones, excepciones, nulidades o la aplicación de cualquier medida alternativa del proceso penal.</p> <p>En dicha audiencia se presentarán y ejecutarán las pruebas que se relacionen con los planteamientos expuestos. Tales cuestiones serán resueltas por el Juzgado de Letras, en audiencia que deberá celebrarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de presentación de las pretensiones efectuadas por las partes.</p> <p>En la misma resolución se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá de celebrarse en un plazo no mayor de cinco (5) días. La resolución que resuelva el planteamiento podrá ser recurrida en apelación de manera diferida.</p> <p>Artículo 440-I. Recursos.</p> <p>En contra de la sentencia dictada en éste procedimiento procederá el recurso de apelación conforme a las reglas establecidas en éste Código. En éste recurso podrá solicitarse el examen de la decisión judicial respecto a las recusaciones, excepciones o nulidades que se hayan resuelto en la audiencia de preparación.</p> <p>Artículo 440-K. Garantías.</p> <p>Se entenderá para todos los efectos de éste Código y especialmente laborales, que la víctima y testigos tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, privado o público, cuando tenga que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello.</p> <p>Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el tribunal que conoce de la causa deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del mismo.</p>	<p style="text-align: center;">CÓDIGO PROCESAL PENAL (Incorporado por el Decreto No.74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013)</p> <p style="text-align: center;">~</p> <p style="text-align: center;">Honduras</p>	<p>Artículo 448°.- Audiencia única de Juicio Inmediato</p> <p>1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.</p> <p>2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85°. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.</p> <p>3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349°. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350°, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350° y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.</p> <p>4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato.</p> <p style="text-align: center;">Modificación CÓDIGO PROCESAL PENAL (D.L N° 1307 del Viernes 30 de diciembre de 2016)</p> <p>Artículo 401.- Recurso de apelación.</p> <p>1. Al concluir la lectura de la sentencia, el Juzgador preguntará a quien corresponda si interpone recurso de apelación. No es necesario que en ese acto fundamente el recurso. También puede reservarse la decisión de impugnación.</p> <p>2. Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el plazo empieza a correr desde el día siguiente de la notificación en su domicilio procesal.</p> <p>3. Rige en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 405.</p> <p>4. Si se trata de una sentencia emitida conforme a lo previsto en el artículo 448°, el recurso se interpondrá en el mismo acto de lectura. No es necesario su formalización por escrito. En caso el acusado no concurra a la audiencia de lectura, rige el literal c) del inciso 1 del artículo 414. La Sala Penal Superior, recibido el cuaderno de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de tres (3) días°.</p>
--	--	--

Anexo 6



PROYECTO DE LEY

Proyecto de Ley Nº 5391/2015-CR



CONGRESISTA MARCO FALCONI PICARDO

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"



PROYECTO DE LEY:

SUMILLA: LEY QUE MODIFICA EL NUMERAL 1 y 4 DEL ARTÍCULO 446° DEL CODIGO PROCESAL PENAL DEL 2004.

I. DATOS DEL AUTOR

El Congresista de la República que suscribe, **MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO**, miembro de la Bancada Unión Regional, en uso de las facultades legislativas que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y el artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto de Ley:

II. FÓRMULA LEGAL

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la República

Ha dado la ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL NUMERAL 1 y 4 DEL ARTÍCULO 446° DEL CODIGO PROCESAL PENAL DEL 2004

Artículo 1°. Modifícase el numeral 1 y 4 del artículo 446° del Código Procesal Penal del 2004, en cuanto al verbo "debe" por "puede"; debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

"Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal puede solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:


(...)

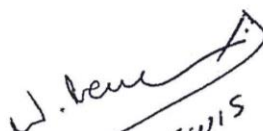
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también podrá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente código."

Lima, junio 08 del 2016.

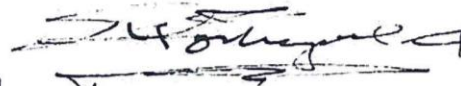

MARCO FALCONI PICARDO
Congresista de la República




W. Ben
N. Lewis


W. Ben
N. Lewis
PORTA VOL

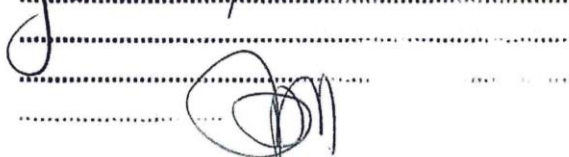

J. C. Cordero


M. PORTUGAL C.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, ...14...de...Junio...del 2016...

Según la consulta realizada, de conformidad con el
Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la
República: pase la Proposición N° 5391 para su
estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de
Justicia y Derechos Humanos.



HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor(e)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es importante rescatar y advertir que el propósito del Decreto Legislativo 1194 que modificó el artículo 446° del Código Procesal Penal del 2004 es facilitar la labor del Ministerio Público y Poder Judicial, queriendo asegurar de ese modo la eficacia y celeridad de los procesos penales; ello debido a la inseguridad ciudadana que en estos momentos se vive.

El proceso inmediato es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación.

La solución de un conflicto penal siempre debe tener atención inmediata, ya que tanto los agraviados como los procesados esperan alcanzar una solución justa, oportuna y eficaz del conflicto; sin embargo, consideramos que el Decreto legislativo 1194 implicaría una afectación de las facultades de decisión y discrecionalidad del Ministerio Público y de su autonomía, establecidas en su Ley Orgánica y en la Constitución en los artículos 158° y 159°, **pues conduciría a una aplicación mecánica del Proceso Inmediato, ya que obliga al Fiscal a solicitar la incoación del proceso inmediato y bajo responsabilidad funcional**; olvidándose que el objetivo es lograr el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

En ese sentido, es preciso advertir que la Ley Orgánica del Ministerio Público¹ en su artículo 1° señala que: "El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan

¹ Decreto Legislativo N° 52.

de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación".

La Autonomía funcional de los Fiscales está prevista en el artículo 5° de la Ley antes descrita: "*Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores*".

De otro lado, la Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie funciones constitucionales entre ellas: en su artículo 158° establece que "*el Ministerio Público es autónomo. (...)*" y el artículo 159° inciso 4 de la Constitución Política del Perú, señala entre otros que es atribución del Ministerio Público: "*Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función*" e inciso 5 en el que destaca la facultad del Ministerio Público de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte; en mérito a ello resultaría inaplicable el Decreto Legislativo N° 1194.

De la lectura de estas normas se desprende **la facultad de discrecionalidad** otorgada por el poder constituyente a los fiscales, la misma que no puede ser ejercida irrazonablemente con desconocimiento de los principios y valores constitucionales y menos aún al margen de los derechos fundamentales, ya que la Constitución puede realizar un Control Constitucional de los actos del Ministerio Público².

El Tribunal Constitucional en el expediente 06204-2006-HC ha opinado lo siguiente:

16. "De acuerdo con el *principio de interpretación* conforme a la Constitución, el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a criterio del TC establece dos principios en cuanto al ejercicio de las

² Artículo 200 de la Constitución Política del Perú
Garantías o procesos constitucionales

1. La Acción de Habeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

facultades reconocidas a los Fiscales: en primer lugar el principio de autonomía y, en segundo lugar un principio de jerarquía. En cuanto al primero, el *principio de autonomía*, es del caso precisar que si bien es cierto que se reconoce a los Fiscales el ejercicio independiente de sus funciones de acuerdo con sus propios criterios y en la forma que consideren más ajustadas a los fines constitucionales y legales que persigue el Ministerio Público, también lo es que el específico mandato del artículo 159° de la Constitución debe ser realizado de conformidad con criterios objetivos y razonables, y por tanto, exentos de un ejercicio funcional arbitrario.

17. En segundo lugar, el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público³ reconoce un *principio de jerarquía*, según el cual los Fiscales pertenecen a un cuerpo jerárquicamente organizado y deben sujetarse a las instrucciones que les impartan sus superiores. Tal disposición, si se quiere que sea conforme a la Constitución, sólo se justifica si de lo que se trata es de dotar de coherencia y unidad al ejercicio de las funciones constitucionales que establece el artículo 159° de la Constitución. De ahí la necesidad de que establezcan también relaciones de coordinación conjunta entre los Fiscales de los distintos niveles, en atención a que la política de persecución criminal no puede ser definida por cada fiscal o juez en particular, pues ello corresponde al propio Estado".

18. Pero ese *principio de jerarquía* no puede llevar a anular la *autonomía* del Fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus atribuciones. De ahí que se debe señalar que el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público no puede implicar, de ninguna manera, que los Fiscales de menor jerarquía se conviertan en una suerte de "mesa de partes" de sus superiores; como ha ocurrido en el presente caso, dado que el Fiscal emplazado se limitó a dar trámite a lo ordenado por la Fiscal de la Nación, sin realizar, por sí mismo, ningún acto de investigación, tal como se aprecia claramente de fojas 1277 a 1287.

³ Autonomía funcional

Artículo 5.- Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

En resumen, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, por tal motivo sus Fiscales gozan de independencia y criterio de discrecionalidad para emitir sus decisiones; por lo que ningún poder u órganos del Estado pueden interferir en sus decisiones.

Siendo que la aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 es inconstitucional, al vulnerarse gravemente la Constitución Política del Perú en su artículo 158° que señala: "El Ministerio Público es autónomo (...)"; artículo 159° "Corresponde al Ministerio Público: (...) 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito, (...) 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. (...) " y además vulnera abiertamente el derecho fundamental a la motivación⁴.

IV. EFECTO DE LA NORMA PROPUESTA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La aprobación de la presente iniciativa legislativa tiene como objeto modificar los incisos 1 y 4 del artículo 446° del Código Procesal Penal del 2004, de tal forma que dicha modificación no colisione con ninguna norma.

V. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

La aprobación de la presente iniciativa legislativa busca modificar los incisos 1 y 4 del artículo 446° del Código Procesal Penal del 2004. En el verbo "debe" por "puede".

Lima, junio 08 del 2016.



MARCO FALCONI PICARDO
Congresista de la República

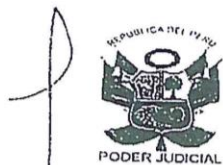
⁴ Artículo 139 de la Constitución Política del Perú:
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(...)

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

Anexo 7



JURISPRUDENCIA



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N° 692-2016
LIMA NORTE

Flagrancia presunta, flagrancia y diligencias preliminares

Sumilla. 1. El artículo 259 del Código Procesal Penal, según la Ley número 29596, el inciso 4 del citado artículo regula la denominada “flagrancia presunta”. En este supuesto el agente, ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito.
2. La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito.
3. Las citadas diligencias –las denominadas “diligencias urgentes e inaplazables”– son aquellas que se realizan bajo las exigencias de una situación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por inobservancia de la garantía del debido proceso e infracción de precepto procesal interpuesto por el encausado MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA contra la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y cuatro, de siete de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas ciento doce, de nueve de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de robo con agravantes en agravio de Gloria Rosa Matos Valera a doce años de pena privativa de libertad y al pago de mil quinientos soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitió la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y cuatro, de siete de junio de dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas ciento doce, de nueve de febrero de dos mil dieciséis, que condenó como autor del delito de robo con agravantes a Miguel Antonio Cortez Ortega en agravio de



Gloria Rosa Matos Valera a doce años de pena privativa de libertad y al pago de mil quinientos soles por concepto de reparación civil.

Contra esta sentencia el citado encausado interpuso recurso de casación.

SEGUNDO. Que los hechos declarados probados en la aludida sentencia de vista estriban en que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a las cero horas con cinco minutos, en circunstancias en que la agraviada Gloria Rosa Matos Valera salió de su trabajo y se encontraba en el paradero de la avenida Universitaria, cerca al grifo Repsol y frente a la puerta de ADUNI, en el distrito limeño de los Olivos, dos sujetos no identificados la abordaron violentamente y de manera sorpresiva. Uno de ellos colocó un arma de fuego en su cabeza y la rastrilló, mientras el segundo sujeto rebuscó entre sus pertenencias y la despojó de su cartera de color blanco con negro. La agraviada Matos Valera, por temor, no opuso resistencia ante el inminente peligro para su integridad física. La cartera sustraída contenía en su interior su celular marca Sony, un juego de llaves, cosméticos de uso personal, una billetera que con su Documento Nacional de Identidad, una tarjeta del Banco de Crédito del Perú y la suma de trescientos setenta soles.

En estas circunstancias se acercó un carro en ayuda de la víctima, pero uno de los asaltantes le dijo: “*qué miras*”, y le mostró su arma. Empero, acto seguido, se aproximó un segundo vehículo conducido por el imputado Cortez Ortega, quien abrió la puerta a los delincuentes para que éstos ingresen, a consecuencia de lo cual lograron darse a la fuga. La agraviada, sin embargo, atinó a apuntar la placa del citado vehículo (C2M-353). Es así que el imputado Cortez Ortega fue intervenido horas después en el distrito de Puente Piedra, lugar donde la agraviada fue a cenar con sus padres y reconoció el vehículo utilizado en el robo.

El proceso incoado contra el citado encausado es el inmediato.

CUARTO. Que el acusado Cortez Ortega en su recurso de casación de fojas doscientos sesenta, de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, introduce como motivos los de inobservancia de precepto constitucional y vulneración de precepto procesal (artículo 429º, incisos 1 y 2, del Código Procesal Penal).

Alega que la única prueba periférica que corrobora la versión de la agraviada es el segundo registro vehicular, realizado ocho horas después de su captura, en cuya virtud se restó valor probatorio al primer registro vehicular negativo, lo que vulnera las garantías del debido proceso y de defensa procesal. También aduce que se infringió el artículo 121 del Código Procesal Penal y que se aplicó equivocadamente el artículo 337, numeral 2, de la norma antes citada. Finalmente, indica que, al no constar prueba evidente, la causa debió tramitarse bajo las reglas del proceso común, no por las del proceso especial inmediato.



QUINTO. Que, conforme al recurso de casación y, esencialmente, a la Ejecutoria Suprema de fojas cuarenta y dos del cuadernillo de casación, de treinta de setiembre de dos mil dieciséis, lo que es materia de dilucidación en sede casacional es lo que a continuación se expone:

- A. Los motivos de casación admitidos son los de inobservancia de la garantía del debido proceso e infracción de precepto procesal, (artículo 429, numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal).
- B. La casación se circunscribe a la denunciada falta de eficacia procesal de un acta de registro vehicular y, luego, a la incoación de un procedimiento penal que no corresponde, por la ausencia de prueba evidente, por lo que el motivo de casación es el de inobservancia del debido proceso. Asimismo, como se cuestiona la correcta aplicación de dos artículos del Código Procesal Penal, respecto a la eficacia y validez de la referida acta, concurrentemente, el segundo motivo de casación es el de infracción de precepto procesal.

SEXTO. Que instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, materia de la resolución anterior –sin la presentación de alegato adicional alguno–, se expidió el decreto de fojas ciento cuarenta y nueve, de tres de abril de dos mil diecisiete, que señaló fecha para la audiencia de casación el día veinte de abril último.

SÉPTIMO. Que, según el acta adjunta, la audiencia de casación se realizó con la intervención de la abogada defensora del encausado Cortez Ortega, doctora Melisa Farfán Novoa, y del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, Alcides Mario Chinchay Castillo. Acto seguido se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta. La defensa del encausado Cortez Ortega presentó un informe escrito a fojas cincuenta del cuadernillo, de fecha veintisiete de abril del presente año. Efectuada, tras el preceptivo debate, la votación respectiva y obtenido el número de votos necesarios, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que los actos de investigación relevantes que dieron lugar a la incoación del proceso especial inmediato y ulterior tramitación bajo ese trámite procedimental, son:

- A. Producida la detención del imputado Cortez Ortega, merced a la indicación de la agraviada Matos Valera al percatarse de la presencia del vehículo cuya placa apuntó, se le efectuó un registro personal –realizada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a las tres horas con diez minutos, con resultado negativo para un bien de propiedad de la agraviada. Asimismo, diez minutos después, se realizó un registro vehicular con resultado negativo. En las actas levantadas al



efecto solo estuvieron presente el policía instructor y el imputado –la agraviada solo estuvo presente en la diligencia de registro vehicular– [fojas veintidós vuelta y veintitrés]. Cabe señalar que el vehículo intervenido se puso a disposición de la Comisaría de Puente Piedra ese mismo día a las dos horas con cuarenta y cinco minutos [fojas veintiocho]; luego, el registro vehicular se realizó en sede policial.

- B. La agraviada Matos Valcra denunció el robo en su agravio el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, como a las dos horas con veintiún minutos e indicó que no reconoció al chofer [fojas veintiséis]. En su primera manifestación preliminar [fojas quince], realizada el mismo día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a las siete horas con veinte minutos, con el concurso del Fiscal, detalló el hecho y si bien apuntó las placas del vehículo que utilizaron los asaltantes para huir, no logró ver el rostro del chofer, ni de ninguno de los intervinientes en el robo. De otro lado, en su manifestación preliminar [fojas diecinueve], llevada a cabo a las doce horas con veinticinco minutos del mismo día, luego del segundo registro vehicular al coche conducido por el imputado, reconoció como suyas las cosas encontradas en el automovil. Cabe resaltar, sin embargo, que la indicada agraviada al declarar en el juicio oral señaló que vio la cara del imputado Cortez Ortega y que lo reconoce plenamente [minuto cuarenta y dos].
- C. La policía por orden y con asistencia del Fiscal realizó un segundo registro vehicular a las once horas con treinta minutos del citado día veintinueve de enero de dos mil dieciséis en la Comisaría Laura Caller. En la parte de atrás, debajo de un cartón color blanco, se encontró un bolso negro de material sintético con bordes blancos, que contenía cosméticos de mujer, un peine, una tarjeta del Banco de Crédito del Perú y el Documento Nacional de Identidad de la agraviada, y un llavero con tres llaves. El acta se firmó por los fiscales, pero no lo hizo el imputado. Se devolvió a la agraviada los bienes de su propiedad [acta de fojas veintitrés vuelta, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis].
- D. La audiencia de proceso inmediato se realizó el día treinta de enero de dos mil dieciséis, a las once horas con treinta minutos, con asistencia de las partes (fiscal y el imputado y su defensor), según fojas sesenta y siete. Ese mismo día se dictó el auto de incoación del proceso inmediato, que quedó consentida el indicado día [fojas sesenta y ocho y sesenta y nueve].
- E. Se formuló acusación el uno de febrero de dos mil dieciséis [fojas setenta y seis], y el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis se emitió el auto de enjuiciamiento [fojas ochenta y siete]. El cinco de febrero de dos mil dieciséis se inició el juicio oral. La defensa del imputado ofreció prueba testifical y documental [fojas noventa y seis]. La audiencia continuó el nueve de febrero de dos mil dieciséis, ocasión en que, como dato singular, se tiene que el Tribunal de Primera Instancia llamó la atención a la defensora del imputado y



apercibió que si no lleva a cabo una defensa efectiva se la cambiaría por un abogado de oficio [fojas ciento siete].

F. El imputado Cortez Ortega siempre negó los cargos. No sabe cómo apareció el bolso en la maletera del vehículo que dedica al servicio de taxi. Señala que en el primer registro vehicular no se encontró nada, pero luego en un segundo registro apareció el bolso en la maletera del coche [fojas diecisiete y veinte].

SEGUNDO. Que, como se sabe, los presupuestos procesales son circunstancias tan importantes que la admisibilidad de todo el proceso depende de su presencia o ausencia; o, mejor dicho, son condiciones de admisibilidad para alcanzar una decisión material, por lo que la comprobación de los presupuestos procesales es de oficio en todas las etapas del proceso (VOLK, KLAUS, 2016: 208/210).

Uno de los presupuestos procesales está referido a la causa, a su correcta tramitación desde las reglas estipuladas por el Código Procesal. Esto último tiene un sólido respaldo constitucional en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución, cuando precisa que: *“Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos”*. Es pues uno de los derechos procesales fundamentales que integran la garantía genérica del debido proceso.

En el presente caso se discute si se presentan los presupuestos materiales de la incoación del proceso especial.

TERCERO. Que el artículo 446 del Código Procesal Penal establece los presupuestos materiales que determinan la incoación del proceso inmediato, en cuanto procedimiento especial informado por el principio de aceleramiento procesal. Esta norma, en lo pertinente, requiere flagrancia delictiva o prueba evidente del hecho y de la participación de su autor.

La flagrancia delictiva está regulada en el artículo 259 del Código Procesal Penal, según la Ley número 29596, de veinticinco de agosto de dos mil diez. El inciso cuatro del citado artículo regula la denominada “flagrancia presunta”. Según esta norma, existe flagrancia cuando: *“El agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”*. Por la naturaleza de acto en cuestión, que importa la privación del derecho fundamental a la libertad personal, es obvio que la indicada disposición debe interpretarse restrictivamente.

El agente, en este supuesto, ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito. El imputado Cortez Ortega no fue reconocido por la agraviada en el momento en que ocurrió el



robo en su agravio. Ella no le vio el rostro. Por eso es que no lo describió en su denuncia ni en su declaración preliminar, de suerte que llama la atención que recién lo haga en el juicio oral inmediato.

La agraviada, según expresó, apuntó el número de placa de rodaje del vehículo utilizado para el robo. Cuando horas después se capturó el vehículo, de inmediato, se efectuó un primer registro vehicular con resultado negativo para un bien de la agraviada. Empero, horas más tarde, a instancias de la Fiscalía, se realizó un segundo registro vehicular, sin presencia del abogado del imputado, y en la maletera se halló el bolso de la agraviada con parte de los bienes sustraídos, acta que no firmó el imputado pues no aceptó lo que se descubrió en la maletera del coche que conducía.

CUARTO. Que la actuación de las diligencias de investigación preliminar –las denominadas “diligencias urgentes e inaplazables”– son aquellas que se realizan bajo las exigencias de una situación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar. Ese es el caso de las pesquisas y, en especial, de un registro vehicular, regulado por el artículo 210, apartados 3 y 4, del Código Procesal Penal. El imputado, en este caso, tiene derecho de hacerse asistir por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.

Desde luego, una diligencia de investigación, como es la pesquisa-registro vehicular, puede ser ampliada, más aun si en el primer registro vehicular no intervino el Ministerio Público. En este caso, sin embargo, no existen razones de extrema urgencia que impidan la intervención de un abogado defensor en sede de investigación preliminar (artículo 71, apartados 1 y 2, literal ‘c’, del Código Procesal Penal). En la segunda acta no constan las razones por las cuales el imputado rehusó firmar el acta, tampoco por qué no se contó con un abogado defensor de confianza o, en todo caso, con un abogado defensor de oficio. Estatuye, al respecto, el artículo 120, apartado 2, del Código Procesal Penal que: ...“*Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran*”.

QUINTO. Que, en consecuencia, desde la perspectiva de la calificación de la flagrancia del delito, –en sus diversas modalidades– e incluso en el supuesto de prueba evidente del mismo, es de tener en consideración que para su calificación se asume exclusivamente todo aquello que constaba en determinados momentos procesales. Para el primer supuesto: la información que se tenía momentos previos y en el mismo instante de la detención (información de la víctima o de un testigo presencial del hecho, vestigios materiales o información videográfica, entre otros). Para el segundo supuesto: los actos de investigación acopiados en el curso de las diligencias preliminares, hasta el momento de la incoación del proceso inmediato. Así las cosas, no es posible afirmar que en este caso se cumplieron con esos presupuestos para incoar un proceso especial inmediato.



La agraviada no había visto el rostro del imputado –ni siquiera lo describió cuando denunció el delito en su perjuicio ni cuando declaró en sede preliminar–. Es más: en el vehículo, cuando se efectuó el primer registro vehicular, no se hallaron los objetos del delito. Es verdad que la agraviada apuntó la placa del vehículo y, al verlo posteriormente, luego de unas horas, identificó el coche y pidió la ayuda policial correspondiente para su captura. Pero, en atención: (i) al tiempo transcurrido, (ii) al hecho de que el imputado no se le capturó en el teatro del delito, (iii) a las protestas de inocencia de aquél, y (iv) que al momento de la primera revisión vehicular no se encontró los objetos del delito, no es posible concluir que se está ante un supuesto de flagrancia presunta.

La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito. En el presente caso, frente a los vacíos probatorios resaltados, no puede concluirse, todavía, que el imputado era quien conducía el vehículo utilizado para el robo en agravio de Matos Valera: no se daba una situación de flagrancia delictiva. La captura del vehículo, al coincidir su placa de rodaje con la apuntada por la agraviada, sin la posesión del objeto del delito y sin el reconocimiento de ésta, no satisface el rigor conceptual del delito flagrante.

SEXTO. Que tampoco es posible sostener el requisito de prueba evidente, que también permite la incoación del proceso inmediato. Lo central para que se dé por establecida la evidencia delictiva sería, en el presente caso, el hallazgo de los bienes robados en el carro conducido por el imputado. Como quedó dicho, en el primer registro vehicular no se encontraron parte de los bienes robados a la agraviada. Recién, al producirse un segundo registro vehicular, es que se hallaron los bienes descritos en el acta de fojas treinta, que luego se devolvieron a la víctima [acta de entrega de fojas 23 vuelta].

Empero, la diligencia no cumplió las exigencias legales que le confieren fiabilidad y eficacia procesal. No estuvo presente un abogado defensor, no se consignaron las razones por las cuales el primero no estuvo presente y el imputado no firmó el acta. La presencia de un abogado defensor, fuera de los supuestos de urgencia y peligro por la demora, es insustituible. El vehículo ya estaba en poder de la Comisaría de Laura Caller y el imputado estaba detenido, luego, no se justifica la inasistencia de un defensor en ese acto. Se vulneró, entonces, la concordancia de los artículos 71, apartados 1 y 2, literal 'c', y 120, apartado 2, del Código Procesal Penal.

SÉPTIMO. Que, sin analizar si, finalmente, el imputado Cortez Ortega es culpable o inocente, como consecuencia de la valoración del conjunto de la prueba actuada durante el enjuiciamiento, es de resaltar que el proceso no pudo ser tramitado por la vía inmediata, sino por la común u ordinaria. Al hacerlo, indebidamente, bajo el

proceso inmediato se afectó el artículo 139, numeral 3, de la Ley Fundamental: el proceso no fue debido, con todas las garantías. La inobservancia de este derecho fundamental generó indefensión material, por lo que es de ampararse el recurso de casación por la causal de vulneración de precepto constitucional: artículo 429, inciso 1, del Código Procesal Penal.

Asimismo, la segunda diligencia de registro vehicular no cumplió con los cánones estipulados en la Ley Procesal, por lo que la decisión de incoar el proceso inmediato no pudo basarse en esa actuación preliminar. Esa diligencia y el acta de su propósito, como generaron indefensión material, incurrieron en un quebrantamiento de la ley procesal (concordancia de los artículos 71, apartados 1 y 2, literal 'c', y 120, apartado 2, del Código Procesal Penal), que hace inutilizable tal acto de investigación. En él no se puede fundar ninguna resolución judicial. La causal de infracción de precepto procesal se estima y así se declara.

Debe quedar claro, por lo demás, que la exclusión de ese segundo registro vehicular no importa, de plano, la absolución. Es posible, desde una perspectiva general, que la autoría del imputado se acredite con otros medios de prueba. Esto último dependerá, obviamente, del conjunto de la prueba de cargo y si tal prueba está en condiciones de enervar la presunción constitucional de inocencia.

OCTAVO. Que, finalmente, cabe reiterar lo que estableció el Acuerdo Plenario número dos guion dos mil dieciséis oblicua CIJ guion ciento dieciséis, fundamento Jurídico veintitrés-D, de uno de junio de dos mil dieciséis. La desestimación de la incoación del proceso inmediato no trae consigo necesariamente la anulación de la prisión preventiva; y, la modificación de esta medida de coerción personal, requiere petición de parte, unida a un debate sobre los presupuestos materiales correspondientes.

Sin embargo, lo que es singular en el presente caso es el tiempo de privación procesal de la libertad: ya alcanza cerca de los quince meses. Como el plazo ordinario de la prisión preventiva, en estos casos, es de nueve meses (artículo 272, apartado 1, del Código Procesal Penal), es evidente que ya venció (se dictó el treinta de enero de dos mil dieciséis) –no cabe tomar en cuenta la mitad de la pena impuesta, porque la consecuencia de amparar el recurso de casación es la anulación de las sentencias de mérito, luego, la causa debe retrotraerse a la etapa de instrucción–. Rige para esta solución, el artículo 273 del citado Código, que es del caso aplicar.

DECISIÓN

Por estas razones: **I. Declararon FUNDADO** el recurso de casación por inobservancia de precepto constitucional y por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por el encausado MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA contra la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y cuatro, de siete de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas ciento doce, de nueve de



febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de robo con agravantes en agravio de Gloria Rosa Matos Valera a doce años de pena privativa de libertad y al pago de mil quinientos soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: **NULA** la sentencia de vista recurrida e **INSUBSISTENTE** la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon **SIN EFECTO** todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato de fojas sesenta y ocho, de treinta der enero de dos mil dieciséis, inclusive, sin perjuicio de la validez de la prueba documental y de las diligencias objetivas e irreproducibles llevadas a cabo legalmente, así como de las actas que contienen las diligencias preliminares no excluidas por esta Ejecutoria.

II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común u ordinario y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para los fines legales correspondientes.

III. DECRETARON la inmediata libertad del encausado MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA por vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y, de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal: **ESTABLECIERON** que el citado encausado (i) no se comunique con la agraviada y su familia; (ii) no se ausente de Lima Metropolitana sin autorización del Juzgado competente; y, (iii) se presente el último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanado de autoridad competente.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta sede Suprema.

V. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

CSM/amon

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Diny Yurianeud Chávez Vermeendi
Secretaria (a)
Primera Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

FUNDAMENTOS PROPIOS DEL SEÑOR JUEZ DE LA CORTE SUPREMA SALAS ARENAS RESPECTO AL PROCESAMIENTO INMEDIATO.

PRIMERO.

El régimen del procesamiento inmediato modificado por el artículo dos del Decreto Legislativo N.º 1194, generó una subclase de "inmediato directo" (que abarca tanto la flagrancia clásica y la cuasi flagrancia, como la conducción temeraria por alcoholemia o drogadicción objeto de intervención policial en el instante), en que cabe la incoación inminente del proceso y una sub clase de "inmediato diferido" (que comprende los casos de extensión de la flagrancia, de confesión de los hechos, de suficiencia de los elementos de convicción, de conducción temeraria —por alcoholemia o drogadicción— no flagrante, de omisión a la asistencia familiar), en que el lapso para incoarlo se extiende hasta el vigésimo noveno día de la formalización de la investigación preparatoria.

SEGUNDO.

La ausencia de marcador o cuantificador normativo respecto a la dimensión de la pena privativa de libertad pertinente para la viabilidad del procesamiento inmediato, sea el directo o el diferido, merece el establecimiento de un criterio jurisprudencial en aras de la proporcionalidad —mientras fije el Parlamento los razonables límites— estableciendo criterios restrictivos al calor del inciso 3, del artículo VII, del Título Preliminar del Código Procesal Penal, en tanto favorezca el ejercicio de los derechos del imputado; para que el recorte de las etapas y los plazos de duración del trámite generen la menor intensidad posible de afectación a las atribuciones legítimas propias de la defensa del investigado.



TERCERO:

El ordenamiento procesal penal presenta algunas vallas normativas respecto a la gravedad del acto delictivo; así, con el artículo 427 se limita el recurso de casación para los casos de sentencias y autos que pongan fin al procedimiento, en tanto el extremo mínimo de la pena conminada en abstracto supere los 6 años de privación de libertad, de lo que se puede deducir que tal cota dimensional connota que el hecho delictivo es grave como para habilitar la procedencia ordinaria del recurso de casación; como consecuencia, los delitos cuyas penas privativas de libertad fueran inferiores a los 6 años (en dimensión abstracta), se hallan normativamente considerados como menos graves.

CUARTO.

Según lo establecido en el inciso b, del artículo 268 del mismo cuerpo legal la gravedad del delito radica la pena probable que podrá ser impuesta en el caso concreto, en tanto fuera superior a 4 años de privación de libertad; en tales casos, con la concurrencia razonable de los otros presupuestos procesales, corresponderá imponer la prisión preventiva.

QUINTO.

Si ha de excluirse del encausamiento inmediato a todo hecho penal que fuera considerado grave y con mayor razón el que resultara estimado como especialmente grave, será pertinente tomar en cuenta como parámetro aquellos criterios normativos.

2



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.º 692-2016
LIMA NORTE

SEXTO.

En este caso concreto el apresuramiento por juzgar ha dado lugar a afectaciones diversas, que por su naturaleza deslegitiman el proceder de la justicia.

Por ello:

Estimo que el límite punitivo razonable para la aplicación del proceso inmediato –teniendo en cuenta que se trata de un encausamiento para tramitaciones sencillas y delitos que no fueran graves– no debe superar los 6 años de pena privativa de libertad en su extremo mínimo y en el caso en concreto para el robo agravado se ha establecido 12 a 20 años años de tal sanción por lo que no correspondía tal procesamiento acelerado.

S. S.

SALAS ARENAS

DINY YURIANNA CHAVEZ VERAMENI
SECRETARIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.º 842 – 2016
SULLANA

Proceso inmediato y flagrancia delictiva

Sumilla. i) Es verdad que el auto que dispuso que se siga con el proceso inmediato no fue recurrido por el imputado, pero no se puede sostener que operó la preclusión y, por tanto, ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. La convalidación u saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que comprometen derechos y garantías fundamentales, sino únicamente cuando se observan las formalidades previstas en la Ley para el desarrollo de un acto procesal. ii) El proceso inmediato se estimó porque el encausado fue detenido en flagrancia, empero por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales la interpretación de las normas que lo autorizan debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal. En el presente caso, los policías captadores no presenciaron la comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Lo cierto es que el delito no puede calificarse como flagrante. En consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS; en audiencia privada: el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, de veintidós de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, de quince de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A. a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.



Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que por escrito de fojas una el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, culminada la investigación preparatoria, formuló acusación contra Maximiliano Benites Rodríguez por delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A., de siete años de edad. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana mediante auto de fojas diecinueve, de veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, declaró la procedencia del juicio oral bajo los trámites del proceso especial inmediato.

SEGUNDO. Que los hechos declarados probados en las sentencias de instancia son los siguientes:

A. El día diecinueve de enero de dos mil dieciséis, como a las once de la mañana, en circunstancias que la menor agraviada de iniciales M.B.A.A., de siete años de edad, se encontraba sola en su domicilio, ubicado en el caserío Mallares, Calle Sáenz Peña – Sullana, llegó al mencionado inmueble el encausado Benites Rodríguez –vestía uniforme de ENOSA, camisa azul con pantalón jean azul y zapatos negros– para reconectar la luz eléctrica. Al advertir que la menor se encontraba sola, le pidió que verificara la luz. En ese momento, sin embargo, la agarró de los brazos, le dio un beso en la boca y luego la soltó, pero nuevamente le solicitó que prendiera la luz y la volvió a tomar de los brazos, así como a tocarle todo su torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía puesto e introducir un dedo dentro de su vagina, el mismo que le produjo lesiones traumáticas genitales en la mucosa introito vaginal.

B. Al día siguiente, veinte de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las nueve horas –luego de veintidós horas de ocurrido el hecho–, en circunstancias que la menor agraviada y su madre Mercedes Alburquerque Roa de Albán se dirigían en un vehículo policial, conjuntamente con tres efectivos policiales, a la Segunda Fiscalía Provincial de Sullana, esta última observó al encausado cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en una motocicleta, por lo que, ante la sindicación de la madre de la agraviada, la policía detuvo al imputado Benites Rodríguez.



TERCERO. Que, en lo relevante desde la perspectiva procedimental, se tiene que con fecha veinte de enero de dos mil dieciséis el Fiscal Provincial formuló requerimiento de incoación de proceso inmediato, el cual fue declarado procedente por auto –no impugnado– de fojas doce, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis. En la misma audiencia única de incoación del proceso inmediato, el Fiscal solicitó mandato de prisión preventiva contra el citado encausado Benites Rodríguez, que el Juez de la Investigación Preparatoria por auto de fojas trece, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, declaró fundado y por un plazo de cinco meses.

Seguida la causa conforme a sus respectivas reglas de procedimiento, mediante sentencia de fojas treinta y tres, de quince de febrero de dos mil dieciséis, se condenó al acusado Benites Rodríguez como autor del delito de violación sexual de menor de edad a la pena de cadena perpetua. Este fallo fue confirmado por sentencia de vista de fojas doscientos cinco, de veintidós de junio de dos mil dieciséis.

CUARTO. Que la defensa del encausado Benites Rodríguez en su recurso de casación de fojas ciento doce, de quince de julio de dos mil quince, introduce como motivos los de inobservancia de precepto constitucional y quebramiento de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal Penal).

Alega que se tramitó la causa en la vía inmediata como si se tratase de un supuesto de flagrancia delictiva, que no corresponde, y, en consecuencia, se afectó el derecho de defensa de su patrocinado. Afirma que la flagrancia no opera cuando es un tercero quien sindicó al presunto autor, más aún si la detención ocurrió con posterioridad a los hechos aunque antes de las veinticuatro horas de su presunta comisión. Acota que se interpretó extensivamente el artículo 259, apartado 3, del Código Procesal Penal y que la legalidad del procedimiento debió ser sostenida por el Fiscal y el Juez. De otro lado, apunta que la sentencia de vista incurrió en motivación deficiente porque no incorporó razones acerca de la ausencia de flagrancia delictiva y de la consiguiente arbitrariedad del arresto policial.

QUINTO. Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas cuarenta y ocho, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, del cuadernillo formado en esta instancia Suprema, declaró bien concedido el citado recurso, aunque –en aplicación de la concepción de la “voluntad impugnativa”– exclusivamente



por la causal de quebrantamiento de precepto procesal (artículo 429, apartado 2 del Nuevo Código Procesal Penal), a fin de examinar la legalidad de la incoación del proceso inmediato y la corrección jurídica del procedimiento subsiguiente.

SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el nueve de marzo del presente año, realizada esta con la concurrencia de la abogada defensora del encausado, doctora Mercedes Herrera Guerrero, y del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

SÉPTIMO. Que deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, se acordó por unanimidad dictar la correspondiente sentencia de casación en los términos que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la sentencia el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que, como ha quedado establecido en los fundamentos de hecho de la presente sentencia, es del caso determinar si se interpretó y aplicó correctamente los presupuestos legales que rigen la incoación del proceso inmediato reformado, previstos en el artículo 446 del Código Procesal Penal; y, por tanto, si correspondía dilucidar los cargos contra el encausado Benites Rodríguez en un proceso célere y abreviado como el inmediato.

Es verdad que el auto que, aceptando el requerimiento de la Fiscalía Provincial, dispuso se siga la causa en la vía inmediata, no fue recurrido por el imputado. Sin embargo, no es posible sostener como regla jurídica pética que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. Cuando se cuestiona sostenidamente –en apelación y casación de las sentencias de mérito– la licitud de la concreta incoación del proceso inmediato, en el que se compromete una garantía constitucional, vinculada al debido proceso, como es la “interdicción de ser desviado de la jurisdicción determinada por la ley”, a que hace mención el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución, no es de recibo aceptar el principio de convalidación por omisión de cuestionamiento en el momento en que se advirtió su infracción. La convalidación y el saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que



comprometen derechos y garantías fundamentales (artículo 150, literal 'd'. del Código Procesal Penal), sino únicamente cuando no se observan las formalidades previstas en la Ley para el desarrollo de un acto procesal –se circunscribe a los defectos no absolutos–.

SEGUNDO. Que, según el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se declaró procedente ese proceso especial porque se estimó que el imputado Benites Rodríguez fue detenido en flagrancia delictiva. La Fiscalía Provincial acompañó a estos efectos la denuncia verbal, la declaración de la víctima y de su madre, la declaración del imputado –quien negó los cargos–, actas de reconocimiento en rueda, fotografías, documentos y actas de inspección [requerimiento fiscal de fojas siete, de veinte de enero de dos mil dieciséis].

Es de precisar, como dato esencial, el mérito del acta denominada de “intervención policial”, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, acompañada por el recurrente en esta sede y al que las sentencias de mérito han hecho mención. Allí se indica que cuando la menor agraviada, su madre y personal policial en una unidad policial se dirigían a la Fiscalía Provincial de Sullana, “...la madre de la menor logró visualizar al presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos contra el pudor), quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte [...] en un vehículo menor [...], siendo intervenido e identificado tratándose de la persona de Maximiliano Benites Rodríguez...”.

En la sentencia de primera instancia, resumiendo la declaración de la madre de la agraviada, se anotó que “lo reconoce porque su hija le dio las características...; estaba vestido con ropa azul y en la moto roja al momento en que ella lo observó”. Asimismo, en la audiencia del juicio oral de cinco de febrero de dos mil dieciséis, se ratifica la forma cómo se identificó, quién lo hizo y la detención policial consiguiente: estelar, en esa intervención, fue la declaración de la denunciante Mercedes Alburquerque Roa de Albán.

Estos son los hechos procesales relevantes y definidos en las sentencias de mérito. Por ende, sobre esa base es que debe examinarse si correspondía o no el proceso inmediato y si en su actuación se vulneraron derechos básicos de carácter procesal del imputado, al punto que las sentencias de condena emitidas no pueden sostenerse por carecer de eficacia procesal.

TERCERO. Que el artículo 446, numeral 1), literal a), del Código Procesal Penal, estatuye que el proceso inmediato procede cuando, entre otros supuestos, “el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera



de los supuestos del artículo 259". La norma de remisión (artículo 259 del citado Código), en el inciso tercero, dispone que existe flagrancia, y permite la detención por la Policía, cuando: "3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, [...], y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas producido el hecho punible".

En estos casos, como es obvio por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales –la flagrancia, como institución procesal, tiene un objetivo instrumental para facilitar la actuación de la autoridad policial o para instituir procedimientos simplificados y celeres–, la interpretación de las normas que lo autorizan, por sus efectos, debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal.

CUARTO. Que la flagrancia es una institución procesal de carácter instrumental o medial, a cuyo amparo se autoriza que la autoridad penal pueda realizar determinados actos de limitación de derechos fundamentales (medidas de coerción o medidas instrumentales restrictivas de derechos) con fines de investigación del delito y, en su caso, poder instaurar procedimientos simplificados que dan lugar a una decisión célere. El delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino; y, como tal, debe cometerse públicamente y ante testigos. Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión del delito en el mismo momento en que se perpetra (evidencia o percepción sensorial del hecho delictivo), y que ante la realización de la infracción penal surja la necesidad urgente de la detención del delincuente para poner coto a la comisión delictiva, cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del delincuente. La inmediatez que ello implica hace patente el hecho delictivo –la flagrancia se ve, no se demuestra– y su comisión por el detenido, de suerte que como existe una percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, intuición o deducción. Se asume, por ello, que todos los elementos del hecho están presentes y que no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación del detenido (Acuerdo Plenario número 2-2016/CIJ-116, fundamento jurídico 8-A, de uno de junio de dos mil dieciséis).

Lo últimamente expuesto, de uno u otro modo, se recoge en el citado artículo 259, apartado 3 del Código Procesal Penal, más allá de la dudosa extensión en la captura del delincuente de hasta veinticuatro horas después del hecho



delictivo. Se trata de la denominada *cuasi flagrancia*, en cuya virtud el delincuente, sorprendido en plena comisión del hecho punible o cuando inmediatamente acaba de cometerlo –pero siempre en el mismo teatro de los hechos–, por diversos factores o circunstancias, logra huir de la escena del delito, no obstante lo cual ha sido reconocido o identificado por la propia víctima, por la policía o, en todo caso, por un testigo presencial –este último puede ser el acompañante del agraviado o un tercero que se encontraba por el lugar de los hechos–.

Ser testigo presencial del delito –verbigracia: víctima, policía, sereno u otra persona– importa que directamente y a través de sus sentidos expone acerca de lo que observó y esta observación está referida, precisamente, a la comisión de un delito. No cumple con este requisito la institución del testigo de oídas o de referencia, pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado –su información es indirecta, la obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas [*Diccionario del Español Jurídico*, RAE-CGPPJ, Madrid, 2016, páginas 1575/1576]–; y, por tanto, en tanto prueba indirecta –al no haber sido percibidos los hechos con sus sentidos–, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial.

Cabe acotar, desde ya, por su carácter de medio de prueba subsidiaria, sirve (i) para identificar a la persona que realmente tiene conocimiento directo de las circunstancias sobre las que declara, (ii) para valorar la credibilidad y fiabilidad de otro testigo –presencial o de referencia inclusive–, o (iii) para probar la existencia o no de corroboraciones periféricas –por ejemplo, para coadyuvar a lo que sostiene el testigo único– (SSTSJ de treinta de abril de dos mil trece y de treinta de septiembre de dos mil dos).

QUINTO. Que, en el presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito. Tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella.

Con independencia de lo que mencionó la niña agraviada y del valor probatorio que puede otorgársele a su testimonio, lo cierto que el delito *sub-judice* no puede calificarse de flagrante. Nadie, excepto la propia víctima, presenció la violación que ha sido objeto de denuncia, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y sentencia. Ni siquiera se recogió en ese acto, o inmediatamente después, algún vestigio material. Todo queda circunscripto al relato directo de la víctima, a la versión de oídas de sus familiares –que



afronta una problemática en orden a su veracidad y credibilidad-, y a la negativa del imputado, sin perjuicio de la prueba pericial recabada.

Un caso como el aludido requiere de un elaborado análisis deductivo, de un riguroso análisis de la versión de la víctima, y de una actividad probatoria variada o diversa, tanto más (i) si no se cuenta con vestigios materiales y fluidos corporales examinados pericialmente, (ii) si la captura no se produjo en el mismo momento o instantes después de sucedido el hecho delictivo -a las veintidós horas del mismo, al día siguiente-, y (iii) si el imputado niega los cargos, quien incluso está en la posibilidad de ofrecer, desde la perspectiva de un procedimiento más extenso, prueba documental y personal de descargo. Por lo demás, se está ante un delito especialmente grave, que está asociado a la pena más grave del sistema penal: cadena perpetua, por lo que por razones de estricta proporcionalidad no puede solventarse, sin prueba evidente derivada de la flagrancia, en un proceso célere y reducida actuación probatoria, como el inmediato (Acuerdo Plenario número 2-2016/CIJ-I16, fundamento jurídico 10, de uno de junio de dos mil dieciséis).

SEXTO. Que, en consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato. Se vulneró, en tal virtud, el artículo 139, apartado 3, 2do párrafo, de la Constitución, y al infringirse el artículo 466, apartado 1), literal a) del Código Procesal Penal, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal d), del aludido Código. Ello determina a su vez que debe ser amparada la causal de casación procesal establecida en el inciso 2) del artículo 429 del Código citado.

La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable. No cabe saneamiento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del procedimiento legal preestablecido que determine una retroacción de actuaciones radical. Como no se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones -que, por lo demás, ha de ser interpuesto en la instancia respectiva-; y, dado que la pretensión impugnativa está dirigida contra todo el procedimiento y, señaladamente, contra las sentencias de mérito, lo que único que se exige es que se plantee adecuadamente como un motivo impugnativo puntual -que es lo que se ha hecho-. Por lo demás, los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieren delitos no flagrantes.



SÉPTIMO. Que, de otro lado, en los marcos de la petición impugnativa se solicita que la nulidad alcance al mandato de prisión preventiva y, por tanto, que se dicte la inmediata libertad del imputado Benites Rodríguez.

Sobre el particular es de rigor puntualizar lo que estableció el Acuerdo Plenario número 2-2016/CIJ-116, fundamento jurídico 23-D, de uno de junio de dos mil dieciséis. La desestimación de la incoación del proceso inmediato no trae consigo necesariamente la anulación de la prisión preventiva; y, la modificación de esta medida de coerción personal, requiere petición de parte, unida a un debate sobre los presupuestos materiales correspondientes.

Empero, lo que es singular en el presente caso es el tiempo de privación procesal de la libertad: ya alcanza cerca de los catorce meses. Como el plazo ordinario de la prisión preventiva, en estos casos, es de nueve meses (artículo 272, apartado 1 del Código Procesal Penal), es evidente que ya venció (se dictó el veinte de enero de dos mil dieciséis) –no cabe tomar en cuenta la mitad de la pena impuesta, porque la consecuencia de amparar el recurso de casación es la anulación de las sentencias de mérito, luego, la causa debe retrotraerse a la etapa de investigación preparatoria–. Rige para esta solución, el artículo 273 del citado Código, que es del caso aplicar.

DECISIÓN

Por estas razones: **I. Declararon FUNDADO** el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, de veintidós de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, de quince de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A. a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: **NULA** la sentencia de vista recurrida e **INSUBSISTENTE** la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon **SIN EFECTO** todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, inclusive, sin perjuicio de la validez de la prueba documental, los informes o dictámenes periciales, las diligencias objetivas e irreproducibles, y, en lo pertinente, de las actas que contienen las diligencias preliminares.



II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para la emisión de la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. **III. DECRETARON** la inmediata libertad del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ por vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y, de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal, **ESTABLECIERON** que el citado encausado (i) no se comuniqué con la agraviada y su familia; (ii) no se ausente de las provincias de Sullana y Piura sin autorización del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria competente; y, (iii) se presente el último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanado de autoridad competente. **IV. DISPUSIERON** que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta sede Suprema. **V. MANDARON** que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte. Intervienen las señoras Juezas Supremas Luz Sánchez Espinoza y Zavina Chávez Mella por vacaciones de los señores Jueces Supremos Víctor Prado Saldarriaga y Jorge Luis Salas Arenas, respectivamente.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

SÁNCHEZ ESPINOZA

CHÁVEZ MELLA

CSM/ast

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FOLIO CLAVADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
JUZGADO PENAL COLEGIADO

Sede Edificio Carlos Zavala Loayza- Jr. Manuel Cuadros N° 182 - Cercado de Lima

INDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO INMEDIATO

Expediente	:	124-2016
Fecha	:	29 de noviembre del 2016
Juzgado	:	Juzgado Penal Colegiado
Magistradas	:	Dra. Doly Roxana Herrera López.(D.D) Dra. Lisdey Magaly Bueno Flores Dra. Delia Graciela Flores Gallegos
Acusado(s)	:	Manlio Nicolás Sturlese Coz
Delito	:	Feminicidio
Agraviada	:	Liz Madeline Achong Abensur
Especialista J. de Audiencias	:	Guillermo Mardon Zárate
Especialista de Causas	:	Carolina Sulca Cahuana
Hora de inicio	:	09:00 hrs
Hora de Término	:	09:43 hrs

SE DEJA CONSTANCIA que la presente audiencia se realizada en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho y es registrada mediante audio, tal como lo prevee el inciso 2 del artículo 361° del Código Procesal Penal, pudiendo acceder las partes a la copia de dicho registro una vez finalizada la presente.

I. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES

- Representante del Ministerio Público Celso Isidro Gálvez Núñez, Fiscal Adjunto Provincial de la Décimo Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, domicilio procesal en Av. Abancay cuadra 5 piso 5 oficina S/N, celular 955762478, correo cgalvez@mpfn.gob. pe.
- Fiscal interconsulta: José Alberto Flores Rioja.
- Defensa Técnica del Acusado: Dr. Herny Flores Cuadros, identificado con registro CAL N°43808, domicilio procesal en Jr. Carabaya 831 oficina 501 - Cercado de Lima, correo electrónico heniy.flores@minjus.gob.pe y celular 942024710.
- Acusado: Manlio Nicolás Sturlese Coz, identificado con DNI 07627474, nació en Lima el 28 de julio de 1967, sus padres Manlio y Norma, estado civil casado, grado de instrucción secundaria, ocupación desempleado, domicilio en Av. Boulevard de Surco N° 1136 San Borja Sur, no tiene cicatrices, tiene un tatuaje con la forma de un dragón en el hombro derecho y una pantera en la espalda.

audio, tal como lo prevee el inciso 2 del artículo 361° del Código Procesal Penal, pudiendo acceder las partes a la copia de dicho registro una vez finalizada la presente.

I. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES

- Representante del Ministerio Público Celso Isidro Gálvez Núñez, Fiscal Adjunto Provincial de la Décimo Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, domicilio procesal en Av. Abancay cuadra 5 piso 5 oficina S/N, celular 955762478, correo cgalvez@mpfn.gob. pe.
- Fiscal interconsulta: José Alberto Flores Rioja.
- Defensa Técnica del Acusado: Dr. Herny Flores Cuadros, identificado con registro CAL N°43808, domicilio procesal en Jr. Carabaya 831 oficina 501 - Cercado de Lima, correo electrónico heniy.flores@minjus.gob.pe y celular 942024710.
- Acusado: Manlio Nicolás Sturlese Coz, identificado con DNI 07627474, nació en Lima el 28 de julio de 1967, sus padres Manlio y Norma, estado civil casado, grado de instrucción secundaria, ocupación desempleado, domicilio en Av. Boulevard de Surco N° 1136 San Borja Sur, no tiene cicatrices, tiene un tatuaje con la forma de un dragón en el hombro derecho y una pantera en la espalda.

II. INSTALACION DE JUICIO INMEDIATO

09:03 hrs. Directora de Debates: Declara instalada la audiencia y concede el uso de la palabra a la Fiscal para que exponga los hechos materia de acusación.

III. EXPOSICION

- 09:03 hrs. Ministerio Público: Expone los hechos, precisa los elementos de convicción y refiere que los hechos se encuentran tipificados como delito contra la Vida, Cuerpo y la Salud -Feminicidio previsto en el numeral 1 del artículo 108°-B del Código Penal, solicita se imponga al acusado quince años de pena privativa de libertad y el pago de veinte mil nuevos soles por reparación civil a favor de las hijas de la agraviada.
- 09:15 hrs. Directora de Debates: Corre traslado a la defensa técnica del acusado a efectos de que precise si tiene alguna observación de carácter formal a la acusación.
- 09:16 hrs. Defensa técnica: Formula observaciones carácter formal respecto a la imputación formulada en contra del acusado (Corre en audio).
- 09:18 hrs. Ministerio Público: Aclara indicando que se imputa al acusado haber causado la muerte de la agraviada a quien le profirió dos heridas punzocortantes con un cuchillo(Corre en audio).

- 09:20 hrs. Defensa técnica: Conforme.
- 09:20 hrs. Directora de Debates: Corre traslado a defensa técnica a efectos que precise si tiene alguna observación de carácter sustancial a la acusación.
- 09:21 hrs. Defensa técnica: Realiza observación de carácter sustancial y deduce excepción de naturaleza de juicio (Corre en audio).
- 09:27 hrs. Ministerio Público: Absuelve el traslado, señalando estar conforme con lo solicitado por la defensa (Corre en audio).

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

Lima, veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis

Vistos y Oídos.-

La excepción de naturaleza de juicio planteada por la defensa técnica del encausado Manlio Nicolás Sturlese Coz, y

ATENDIENDO

1. Que conforme a la descripción realizada por el señor Fiscal, se imputa a la persona de Manlio Nicolás Sturlese Coz, haber ocasionado la muerte de su cónyuge Liz Madeline Achong, a quien le habría causado dos heridas punzocortantes en el tórax con un arma blanca -cuchillo-, hecho ocurrido el día 17 de noviembre del año 2016 a horas 12:00 del mediodía aproximadamente en el interior del inmueble ubicado en Av. Boulevard N° 1130 en el Distrito de San Borja; conducta que ha sido tipificada en el inciso 1 del artículo 108-B del Código Penal; solicitando se le imponga 15 años de pena privativa de la libertad y el pago de S/20,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de las hijas de la agraviada.
2. Que la defensa técnica del acusado ha planteado la excepción de naturaleza de juicio, en tanto la naturaleza propia del proceso especial es que los hechos delictivos sean evidentes, y conforme a los elementos de convicción recabados a nivel preliminar, éstos deben ser ampliados para que se produzca una mayor actividad probatoria, lo cual no podrá realizarse en el proceso inmediato, que no existe pruebas como el resultado de las pericias realizadas en el arma con el que le habría quitado la vida a la occisa, al acusado y a la agraviada, el protocolo de necropsia e inspección criminalística así como la obtención de la pericia psiquiátrica y psicológica al acusado a fin de determinar si se encontraba con grave alteración de la conciencia ya que ha estado sometido a tratamiento en una Clínica, por lo que, estos actos de investigación debe de desarrollarse en un proceso común.

3. Por su parte la fiscalía señala que el presente caso lo está conociendo por disposición superior, que la fiscalía anterior presentó cargos para que sea conocido en un proceso común pero fue negado en el Juzgado de Turno Permanente conforme a la razón emitida por el asistente fiscal, que considera que existen documentos pendientes por recabar, estando de acuerdo con lo señalado por la defensa técnica ya que a la fecha no se cuenta con el resultado de las pericias ordenadas como los exámenes realizados al acusado, a la agraviada, al arma blanca con el que se habría ocasionado las lesiones a la agraviada y protocolo de necropsia, que se han presentado a las diversas dependencias pero no han podido ser recabadas, las cuales serán puestas a disposición de la fiscalía en un plazo de tres días aproximadamente.
4. Que el Proceso Inmediato se encuentra regulado en los artículos 446° y siguientes del Código Procesal Penal, en el inc. 3 del artículo 448° se señala que instalada la audiencia, el Fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, y en audiencia las partes puede plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350°, en lo que corresponda.
5. Que el Código Acotado en el inciso 1 numeral a) del artículo 6°, señala que la Excepción de Naturaleza de Juicio procede cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista por ley; y en su inciso 2 prescribe que en caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva. Del mismo modo, el inciso 1 del artículo 7°, que se aplica a los procesos inmediatos según el inciso 4 del artículo 448, prescribe que las excepciones también se pueden deducir durante la etapa intermedia, en la oportunidad fijada por ley.
6. Que si bien es cierto, en el trámite de un proceso inmediato la etapa intermedia se elimina, también en lo es, que conforme al Fundamento 21 del Acuerdo Plenario N°2-2016, emitido por los Jueces de la Corte Suprema de fecha 01 de junio del 2016 y publicado el 04 agosto del 2016, en la audiencia de juicio inmediato, existen dos periodos: el primero que consiste en la delimitación de los hechos y de las pruebas, así como en la dilucidación de todas las articulaciones tendentes a garantizar un enjuiciamiento concentrado en la cuestión de la culpabilidad y, de ser el caso, de la sanción penal, consecuencias accesorias y reparación civil -decidir y superar todos aquellos presupuestos procesales o cuestiones procesales que impidan la celebración y definición del enjuiciamiento, periodo que culmina con la emisión acumulada de los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio; y el segundo periodo que consiste en la celebración del juicio propiamente dicho.
7. Que en el presente caso, se advierte que la imputación está dirigida al tipo penal de Femicidio, que prevee una pena no menor de 15 años de privativa de la libertad,

que según lo expuesto por la Fiscalía se cuenta con los siguientes elementos de convicción: manifestación policial del acusado, de las hijas de la occisa agraviada Andrea Fernanda Braga Achong y Diana Carolina Guisado Achong, del efectivo policial interviniente Manuel Félix Chero Fernández, el Certificado de Necropsia donde se establece el motivo de la defunción de la agraviada y que presenta dos heridas punzo cortantes en tórax y el acta de levantamiento de cadáver.

8. Que debemos tener en cuenta el cuarto párrafo del Fundamento 9 del Acuerdo Plenario 22016 señala que la complejidad no sólo está vinculada a la naturaleza interna del acto de investigación -a lo complicado y/o extenso del mismo-, sino también a las condiciones materiales referidas a la ejecución del acto de investigación o en su incorporación a la causa - por razones de distancia, de remisión de muestras y su análisis, de saturación de los servicios periciales, de demora en la expedición de informes por parte de diversos órganos públicos, etcétera-, y en el Fundamento 10 se indica que otro elemento que debe tenerse en cuenta para seguir esta vía procedimental, desde el principio constitucional de proporcionalidad, es la gravedad del hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal. A mayor gravedad del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión o procedencia del proceso inmediato. Sus presupuestos o requisitos deben ser analizados con mayor rigor para justificar, en clave de proporcionalidad, la exclusión del proceso común.

9. En ese orden de ideas, por la complejidad del caso, en tanto se encuentra pendiente de recabar el resultado de los diversos exámenes periciales practicados a nivel preliminar al acusado, a la occisa agraviada, al arma blanca, la obtención de documentales como el Protocolo de Necropsia de la agraviada y la Inspección Criminológica realizada en el lugar de los hechos, así como un examen psiquiátrico y psicológico que debe practicarse al encausado toda vez que plantea haber estado en una grave alteración de la conciencia al momento de los hechos, los cuales por las características del delito materia del presente proceso se requiere de su incorporación para que a la imputación formulada en contra del encausado sea corroborada o desvirtuada; el Colegiado considera que el caso materia de análisis debe ser canalizado a través de un proceso común, tanto más aún, si un proceso inmediato procede en casos evidentes o cuando la evidencia probatoria es de tal magnitud que no existe la posibilidad de rebatirla ni desmentirla, por lo que, no puede aplicarse a casos donde la prueba no está suficientemente determinada, lo que permitirá un resultado positivo o negativo pero más cercano a la verdad y la justicia, privilegiando principios y garantías constitucionales, como el debido proceso y las garantías procesales.

10. Que siendo así, al ser necesaria la reunión de los mencionados actos de investigación a efecto de corroborar o desvirtuar la imputación formulada en contra del encausado, los cuales no son factibles de obtenerlos en un proceso inmediato por el

corto tiempo en el que se desarrolla éste, el cual conforme al Fundamento 7 del mencionado Acuerdo Plenario N° 2-2016 son los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto: la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad-o simplicidad. En consecuencia, el presente caso debe ser reconducido al proceso común donde con las garantías del caso se determine las cuestiones planteadas por el Ministerio Público y la defensa técnica del encausado.

11. Finalmente, atendiendo que el acusado se encuentra con medida de coerción de Prisión Preventiva, no debe verse afectada con la presente decisión, por lo que debe mantenerse en los términos concedidos en la audiencia de incoación de proceso inmediato.

Por las consideraciones antes expuestas, el Juzgado Penal Colegiado para Procesos en Flagrancia de Lima,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la excepción de naturaleza de juicio planteada por la defensa técnica del acusado.
2. DISPONER que el proceso sea adecuado a un proceso común, debiendo el señor fiscal reconducir el trámite con arreglo a sus atribuciones.
3. DEVOLVER la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público.
4. REMITIR los actuados al Juzgado de Origen.
5. DECLARAR que SUBSISTE la medida de prisión preventiva dictada en contra del acusado MANLIO NICOLAS STURLESE COZ por la presunta comisión de delito de FEMENICIDIO en agravio de quien en vida fuera LIZ MADELINE ACHONG ABENSUR.

09:43 hrs. Defensa técnica: Conforme (Corre en audio). 09:43 hrs. Ministerio Público: Conforme (Corre en audio).

09:43 hrs. Directora de Debates: No habiéndose interpuesto recurso impugnatorio, se resuelve.

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES

Lima, veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis Vistos y Oídos.-

DECLARAR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN DOS

IV. CONCLUSIÓN:

Siendo las 09:45 horas de la mañana, se da por concluida la presente audiencia y por cerrada la grabación el audio, procediendo a firmar la señora Jueza y el Especialista Judicial de Audiencia, ante mí, doy fe.-----

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES**

Segunda Sala Penal de Apelaciones

Expediente : 00186-2016-I-1826-JR-PE-03
Jueces : Sequeiros Vargas/ Sánchez Espinoza/ Mendoza Retamozo
Especialista : Paico Valqui Flor Carolina.
Novena Fiscalía : Novena Fiscalía Superior
Sentenciado : Carlos Fernando Diego Cabanillas
Delito : Actos contra el pudor.
Agravado : Menor de edad de iniciales J.C.S.L.
Materia : Apelación de sentencia
Procedencia : Sexto Juzgado Unipersonal de Lima

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
RESOLUCION N°05.**

Lima, dieciséis de mayo del dos mil dieciséis

VISTOS y OIDOS; por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrado por los señores Jueces Superiores que suscriben, la audiencia pública de apelación de sentencia resolvió **CONDENAR** a **CARLOS FERNANDO DIEGO CABANILLAS**, como autor del delito Contra La Libertad Sexual Actos Contra el Pudor en agravio del Menor de Iniciales J.C.S.L (7 años), Imponiéndole 6 Años de Pena Privativa de La Libertad Efectiva, y fija en la suma cinco mil nuevos soles, el monto de la Reparación Civil a favor de la parte agraviada; interviniendo como director de debates el señor Juez Superior Sequeiros Vargas; y,

CONSIDERANDO:

1.- LA APELACIÓN

1.1.- Es materia de conocimiento, la apelación interpuesta por la defensa pública del sentenciado Carlos Fernando Diego Cabanillas, contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del presente año, que resuelve **CONDENARLO** como autor del delito

la suma cinco mil nuevos soles, el monto de la Reparación Civil a favor de la parte agraviada; interviniendo como director de debates el señor Juez Superior Sequeiros Vargas; y,

CONSIDERANDO:

1.- LA APELACIÓN

1.1.- Es materia de conocimiento, la apelación interpuesta por la defensa pública del sentenciado Carlos Fernando Diego Cabanillas, contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del presente año, que resuelve **CONDENARLO** como autor del delito Contra la Libertad Sexual - Actos Contra el Pudor en agravio del menor de iniciales J.C.S.L (7 años), **IMPONIÉNDOLE SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA**, disponiendo su ejecución provisional, y fija en la suma de cinco mil nuevos soles, el monto por concepto de Reparación Civil a favor de la parte agraviada, representado por su madre la señora Nerry Maribel Lizana López.

1.2.- Agravios

El abogado defensor público del condenado fundamenta sus agravios señalando que:

- Que la sentencia carecería de objetividad, dado que los medios probatorios como la declaración de la madre, la perito Médico Legal y los efectivos policiales intervinientes, en que basa la condena de su patrocinado no han sido debidamente analizados, por el contrario, los mismos no aportarían nada respecto de los hechos, por lo que la sentencia condenatoria se sustentaría en meras subjetividades, con la sola versión del menor sin ningún otro medio probatorio periférico que lo sustente, por tanto no cumpliría con lo establecido en el acuerdo plenario N° 02-2005/CJ-116.
- Que la juzgadora a inobservado las reglas que instituyen el nuevo modelo procesal penal, como es la regla de aportación de parte de los medios probatorios, sin embargo, dispuso que se lleve a cabo una prueba de oficio con toma de declaración del menor en Cámara Gesell, sin tomar en cuenta lo previsto en el artículo 385.2 del Código Procesal Penal, que exige la excepcionalidad de la prueba de oficio, en tanto la misma no reemplace la actuación propia de alguna de las partes, mas aun si el acuerdo plenario N° 1- 2011/CJ-116, a establecido que le corresponde al Fiscal recabar esta prueba en la fase de investigación preliminar.
- Señala que con la actuación de la prueba de oficio, la juzgadora suplió la actuación del Ministerio Público en la carga de prueba que le corresponde por mandato constitucional, situación que habría afectado gravemente su imparcialidad, al vincular su decisión a un elemento de convicción formándose un pre-judicio acerca de la responsabilidad penal de su patrocinado.

- Finalmente indica que no se ha tomado en cuenta la versión de su patrocinado en cuanto señalo la denuncia obedecería a un resentimiento y animadversión marcada de la madre del menor hacia su persona, dado que anteriormente habían tenido problemas, por la pérdida de un celular e incluso que su patrocinado informaba al dueño del hospedaje sobre los problemas que originaba la familia del menor. Culmina solicitando que se revoque la sentencia apelada al haberse vulnerado el principio de inocencia de su patrocinado.

2.- IMPUTACIÓN y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1.- Acusación

2.1.1.- El titular de la acción penal le atribuye al acusado Carlos Fernando Diego Cabanillas haber realizado tocamientos indebidos en sus partes intimas (año) al menor de iniciales J.C.S.L, de siete años de edad, al haberle bajado su pantalón para luego agacharlo y pasarle su dedo que previamente le había echado saliva; así como el haberle obligado a efectuarle tocamientos en su partes intima (pene), amenazándolo que lo mataría si contaba lo sucedido. Hecho realizado el día veintidós de enero del presente año, a las 17:00 horas aproximadamente, en el interior del domicilio sito en el Jirón Cotabambas 358 - Lima Cercado.

2.2.- Sentencia condenatoria

2.2.1.- La señorita Juez fundamenta su resolución señalando que luego del debate Probatorio se ha acreditado la responsabilidad penal el acusado, estableciendo que fue a persona que realizó tocamientos indebidos en la parte anal del menor agraviado de iniciales J.C.S.L, lo cual se encuentra corroborado, no solo, con la verosímil y persistente incriminación del menor quien lo sindicaba directamente como el “bigote”, Japelativo que tendría en acusado, quien toco su potito con su dedo; sino también con el Certificado Médico Legal N° 003993-E-IS, practicado al menor, por la perito Ana María Arroyo Arpasi, el mismo que dio como resultado que la parte perianal del menor se encontraba rojiza, extremo que también fue advertido por su señora madre, cuando lo mando a bañarse.

2.2.2.- Además, señala que entre el acusado y el menor agraviado, así como con la madre del menor, al momento de los hechos no había ninguna circunstancia de odio, rencor o animadversión, que pueda hacer perder credibilidad a los hechos que se le atribuyen, y que lo vertido por el acusado respecto a que habían tenido problemas por la pérdida de un celular estos acontecimientos sucedieron con mucha anterioridad a los ventilados en el presente caso.

2.2.3.- Por lo que encontrándole responsabilidad penal, le impone la pena a seis años de Pena Privativa de la Libertad, al encontrarse dentro del primer tercio, y habiéndole ocasionado un daño no cuantificable al menor encuentra proporcional fijar la suma de cinco mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

3.- DELITO MATERIA DE IMPUTACIÓN

3.1 - El delito de actos contra el pudor en agravio de menores de edad, sanciona a quien: “(...) *sin propósito de tener acceso carnal (...) realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor (...)*” estableciendo una pena no menor de seis ni mayor de nueve años de pena privativa de la libertad, cuando la víctima tiene entre siete a diez años de edad.

3.2.- El bien jurídico protegido, es la indemnidad sexual del menor, entendida como el libre desarrollo sexual y psicológico, protegiendo el libre desarrollo de la personalidad de la menor, sin interferencia de ningún factor extraño que altere el equilibrio psíquico futuro.

3.3.- La doctrina¹ nacional ha señalado que los actos contrarios al pudor son aquellos tocamientos y manipulaciones que realiza el agente sobre el cuerpo de la víctima así como aquellos tocamientos o actos libidinosos efectuados por el autor con el fin de satisfacer su propia lujuria, dichos tocamientos deben ser lascivos, lúbricos, eróticos, lujuriosos e impúdicos. Siendo que para la configuración típica del delito, se requiere la concurrencia en el caso concreto de los elementos objetivos, subjetivos y valorativos requeridos por el tipo, es decir, que el agente someta a la víctima a tocamientos en sus zonas sexuales con una clara finalidad de obtener una satisfacción erótica.

4.- DEL JUICIO DE APELACIÓN

4.1.- Actividad Probatoria

El acusado previa conferencia con su abogado defensor, hizo uso de su derecho a guardar silencio, por lo que no se recibió su declaración.

4.2.- Alegatos del Abogado Defensor:

4.2.1.- El abogado defensor del acusado, reiterando los argumentos de su apelación preciso que las pruebas actuadas como la versión de la madre y la manifestación de

1 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Los delitos de carácter sexual en el Código Penal Peruano”. JURISTA Editores, Lima, 2008, pp. 218-219,

los efectivos policiales intervinientes no vinculan a su patrocinado con el delito. Considerando que la A quo a vulnerado su imparcialidad al haber dispuesto después del plenario la realización de la toma de declaración del menor agraviado en la Cámara Gesell, cuando el Ministerio Público no postuló esta declaración en la etapa intermedia, dado que tenía la declaración del menor en la vía preliminar donde no estuvo presente el abogado defensor.

4.2.2.- Alegando que esta situación contradice la doctrina y nuevo modelo procesal penal donde son las partes las que tienen que aportar sus pruebas, sin embargo no se habría cumplido con la segunda parte del artículo 382 del Código Procesal Penal, esto con el carácter excepcional de la prueba de oficio; por el contrario, la señora juez suplantó la actuación fiscal, quien no cumplió con el Acuerdo Plenario 1-2011, donde se precisa la toma única de la declaración del menor a efectos de evitar la revictimización del menor.

4.2.3.- Puso en tela de juicio el resultado del Dictamen Pericial N° 003993-E-IS; respecto a la escoriación que presentaba el menor en la parte perianal, dado que el resultado también podría presentarse por causas dermatológicas; situación que sumado a un supuesto problema entre su patrocinado y la madre del menor agraviado, generarían una fuerte duda respecto a la responsabilidad de su patrocinado, habiéndose vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, por lo que solicita que se revoque la sentencia condenatoria y se le absuelva de los cargos.

4.3.- Fundamentos del Ministerio Público

4.3.1.- Por su parte la representante del Ministerio Público manifiesta que la prueba del oficio llevada a cabo por la juzgadora se llevó a cabo de acuerdo a las facultades que le otorga la ley, ello no significa en modo alguno que se haya parcializado con alguna de las partes. Con respecto a lo manifestado por su señora madre y lo referido por los efectivos policiales son prueba periférica, que demuestran que la lesión que presentaba el menor se debía a los tocamientos indebidos del acusado sobre el menor agraviado, por lo que estas, junto con lo manifestado por el menor cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.

4.3.2.- En cuanto a los problemas que tuvieron la madre con el acusado, señala que los mismos estuvieron vinculados a la pérdida de su celular, hecho sucedido cuatro meses atrás, por lo que no tienen ninguna vinculación con lo que se ventila.

4.4.- De la defensa material

El acusado, manifestó estar conforme con su defensa técnica considerando que no es necesario que agregue nada antes de emitirse sentencia.

5.- CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO:

5.1.- La defensa del sentenciado solicita la absolución de su patrocinado debido a que la prueba no ha sido objetivamente evaluada, además considera que la actuación del órgano judicial no ha sido imparcial, al haber actuado prueba de oficio cuando le correspondía hacerlo al Ministerio Público.

5.2.- Aduce la defensa que solo con la declaración del menor agraviado (declaración cuestionada) y su madre, así como los policías intervinientes se ha establecido una presunta responsabilidad penal, sabiendo que la madre y los policías no son testigos del hecho, lo que reduce la actividad probatoria únicamente al dicho del menor, que en opinión del sentenciado está influenciado por su madre.

5.3.- Dice finalmente la defensa que han existido problemas anteriores entre el sentenciado y la madre del menor, lo que habría originado resentimientos y animadversión, lo que habría decidido a la madre del menor a interponer la denuncia. Por su parte el sentenciado manifiesta que ese día a la hora que indica el menor no estuvo en el domicilio donde ocurren estos hechos, encontrándose por la avenida la Marina en compañía de un conocido.

5.4.- La prueba de la comisión de un delito, para vencer la presunción de inocencia que establece el artículo 2.24.c del Código Político, tiene que ser de tal magnitud que no deje la menor duda y otorgue plena convicción al juzgador de que los hechos han ocurrido y que el responsable es el imputado.

5.5.- El proceso inmediato constituye, no cabe duda, un buen mecanismo procesal que permite justicia oportuna, sin embargo existen cuestionamientos sobre su seguridad y garantías del cumplimiento de las reglas esenciales del debido proceso donde uno de los aspectos esenciales es precisamente la prueba, su forma de recabar, su actuación y finalmente su valoración, condiciones que en caso de delitos de esta naturaleza se complica aún más, por la inexistencia de pruebas objetivas o directas que deriven en la probanza del hecho.

5.6.- Si la prueba en este tipo de delitos y otros es esencialmente la indiciaria, es preciso que el recojo de esos indicios para otorgar márgenes de convicción, tiene que ser suficiente, lo que se logra, normalmente, a través de diversos medios que requieren tiempo y diligencia para ser completos, caso contrario corremos el riesgo de incurrir en errores judiciales que debido a los bienes jurídicos y derechos en conflicto, los perjuicios pueden resultar irreparables, cuando los principios del derecho, nos indican precisamente todo lo contrario, en efecto cuando hay duda es preciso comprobar para disiparla o confirmarla.

5.7.- La flagrancia implica que el autor es sorprendido en el momento mismo de la comisión del delito, lo que en Perú se denomina cuasi flagrancia o actos inme-

diatos previos y anteriores a la comisión del hecho, evidentemente, en puridad no es flagrancia, sin embargo, por razones de comodidad y política judicial se adoptan criterios y condiciones que no se corresponden con la realidad. En este caso, sería delito flagrante si el sujeto hubiera sido descubierto haciendo los tocamientos al menor, lo que no ha ocurrido, sin embargo se menciona que ha “sido sorprendido y detenido en flagrante delito”, (así refiere el requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, ver folios 44), afirmación que por cierto constituye una falacia y ningún sistema de justicia que se precie de razonable se puede sustentar en falacias.

5.8.- Luego de hacer esta afirmación, en el mismo escrito de incoación de proceso, la fiscalía dice que “la madre del menor agraviado, a las 3.30 horas del día 23 de Enero del 2015 (los tocamientos se habrían producido el día 22 a las 17 horas aproximadamente, dato que obra en el mismo escrito), le mando bañar, le conto que le dolía su potito y tenía granitos y al preguntarle que le había pasado y es ahí donde narra que el “Bigote” (como se le conoce al denunciado Carlos Fernando Diego Cabanillas) en horas de la tarde del día 22 de enero del 2016, cuando no había nadie en su domicilio, le había dicho que se baje el pantalón...”. Evidentemente algo está mal en esa incoación de proceso inmediato, o la narración de cómo se descubre el hecho no es correcto, o la afirmación de haber sido sorprendido y detenido en flagrancia delictiva es falso, por tanto es obligación del Juez exigir a las partes que aclaren esa evidente contradicción, pues los hechos no están para satisfacer y acomodarse a las normas, sino que las normas deben adecuarse a los hechos y si no hay coincidencia, no se puede forzar la realidad para satisfacer la exigencia o previsión normativa.

5.9.- La idoneidad, pulcritud y calidad del sistema de justicia penal se determina en la medida que se aproximen a la realidad y verdad de los hechos, sin forzar las circunstancias, ni utilizar términos que la ley requiere con el único propósito de satisfacer criterios de producción, estadísticas o resolver los casos de forma inmediata, sin percatarse de los costos, que ese prurito por decidir el caso puede ocasionar, en efecto hay situaciones en las que los hechos y su autoría no requieren más actuación probatoria debido a su evidencia y contundencia, lo que justifica efectivamente el proceso inmediato, pero hay otros en los que es preciso detenerse por un momento y tratándose de asuntos de suyo importantes y graves, su tratamiento tiene que ser medurado y completo.

5.10.- No se soluciona las deficiencias del sistema de justicia penal, resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos los casos pueden incluirse dentro del proceso inmediato, el entusiasmo por decidir los casos en el menor tiempo posible es loable, pero igualmente importante es la calidad del sistema de justicia, que en ocasiones como esta requiere actividad probatoria completa, porque igual podemos incurrir

en error por exceso como por deficiencia, condenando a inocentes o absolviendo a culpables, por tanto es preciso hacer las cosas de la justicia como corresponde hacerlas.

5.11.- Conforme se describe en este caso, es el dicho del menor agraviado que sirve de sustento para imputar y considerar responsable del hecho a Diego Sabanillas, quien no solo niega el hecho, sino que además ofrece una coartada, indicando que no estuvo en el lugar de los acontecimientos e indica personas que pueden probar su versión, lo que no ha podido actuarse debido a la rapidez del proceso inmediato.

5.12.- En realidad prueba de descargo no se ha actuado en este caso, solo ha hecho referencia el imputado, quien no cuenta con defensa particular, sino pública, condición que si bien no constituye desmedro en el ejercicio de su defensa, por el contrario la defensa pública viene actuando con mayor eficacia en muchos casos que la defensa particular, sin embargo las opciones de actuar pruebas se restringe debido a diversos factores entre los que destaca el escaso número de defensores públicos para la excesiva carga que existe, entonces es preciso también evaluar esas circunstancias en un sistema de justicia que hace esfuerzos por ser imparcial e igualar a las partes.

5.13.- La sentencia describe como prueba de cargo, el dicho de la madre del menor, quien narra lo que el hijo le cuenta en horas de la madrugada del día siguiente de ocurridos los hechos y circunstancias de la forma en que conviven diversas personas en el lugar que denominan hospedaje, luego cita la declaración del 503 PNP Diana Silva Falcón, quien únicamente describe la denuncia que hizo la madre y cuando concurre a verificar la presencia del sindicado, encuentra que esta ensangrentado porque los vecinos del lugar lo habían linchado al recibir la noticia de los supuestos actos contra el pudor. En mismo sentido describe los hechos el policía John Pimentel Quiñones, en consecuencia estas dos declaraciones no constituyen prueba de cargo ni descargo, pues únicamente describen haber recibido la denuncia a las 4.30 de la madrugada aproximadamente y al concurrir al lugar descubren que el imputado había sido linchado y estaba ensangrentado.

5.14. - La declaración de la médico legista, Ana María Arroyo Arpasi en calidad de perito, sobre el estado físico en que encuentra al menor, refiere que a las 6.35 de la mañana, realiza el examen y señala que la parte “perianal”, (por fuera del ano en la piel) se encontraba congestiva, lo que significa que hay cambio de coloración, estaba rojizo, además la parte del ano estaba normal, los pliegues están conservados y no encontraron lesiones en el ano. El menor dice que “bigote” le metió el dedo al que previamente le echo saliva, por tanto hubiera existido lesión en el ano, sin embargo la perito medico dice que esta normal y conservados los pliegues, (según descripción textual y no valorativa), por tanto no hay coincidencia entre lo que describe el menor y la condición física del menor. Agrega la medico perito que la congestión de la región perianal es un signo inespecífico, porque puede haber sido causada por una situación

un menor de esa edad, por tanto las confusiones e imprecisiones, son normales, lo que determina que un proceso penal no puede basar la responsabilidad de una persona por delito tan grave, solo en el dicho de un menor.

6.18.- Al margen del cuestionamiento de la legalidad de la actuación de dicha prueba en las condiciones descritas, que hace la defensa, tenemos que señalar. Sin que esto constituya valoración probatoria, sino únicamente, descripción de lo que aparece en lo actuado, que por la corta edad del menor y la imprecisión de algunos datos, así como la incongruencia entre lo que dice, respecto de los tocamientos y el certificado médico, puesto que en buena cuenta el menor indica una violación (introducción del dedo en su ano), lo que se ve desvirtuado con el mencionado certificado médico y las condiciones descritas por la perito medico, agregamos las imprecisiones sobre los factores entorno del hecho y las condiciones en que se desenvuelven los hechos, teniendo en cuenta además que el imputado rechaza reiteradamente la ocurrencia de los hechos que se le imputa, evidentemente estamos ante un caso donde la prueba de cargo no resulta suficiente, tampoco hay prueba de descargo, condiciones originadas por la rapidez que exige en el procesamiento la forma inmediata, condiciones en las que expedir una sentencia condenatoria o absolutoria, resulta riesgosa.

5.19.- La señora Juez en su fundamentación cita lo que refiere el menor como prueba de cargo, pero creemos que lo correcto es corroborar ese dicho así como lo referido por el imputado, que reclama ser inocente, por tanto en ese amplio margen de debate entre dos versiones antagónicas, es necesario acudir a la prueba de indicios para desvirtuar o corroborar esas posiciones contradictorias, es preciso establecer con claridad condiciones de tiempo y espacio así como circunstancias previas y posteriores del hecho sin dejar de evaluar las condiciones personales de todos los involucrados.

6.20.- En realidad existen muchas interrogantes que contestar para tener certeza y convicción sobre la ocurrencia del hecho, sobre las circunstancias en que se produjo, sobre las relaciones que existían entre el sentenciado y la madre del menor, debemos tener presente que cuando es interrogado, el procesado sobre las relaciones con la madre del menor dice que prefiere guardar silencio (así aparece en su declaración preliminar) y luego señala que hubo incidentes y problemas no solo con la madre del menor sino también con la abuela a quienes quiso botar del hospedaje, entonces es preciso establecer cuáles eran las condiciones en las relaciones de estas personas y en todo caso descartar que se trate de denuncias con propósitos vedados. Igualmente el sentenciado refirió que la madre del menor consume drogas y es extraño que un niño de 7 años sea obligado por su madre a que se bañe a las 3 de la madrugada, por tanto también se requiere una debida explicación sobre las relaciones madre hijo.²

2 El defecto de numeración corresponde a la información virtual.

5.21.- Inclusive se incurre en error al momento de acusar por parte del Ministerio Público, debido a que se solicita 12 años de prisión inicialmente, considerando que el imputado era habitual en el delito y solo ante el reclamo de la defensa, se vuelve a evaluar y finalmente el Ministerio Público, rectifica su pedido y solicita 7 años y seis meses de prisión, (ver acta de fecha 11 de Febrero 2016).

5.22.- Es verdad que el sentenciado tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio, referencia negativa que sirve para la determinación de pena, pero en ningún caso para establecer condiciones de responsabilidad penal, menos cuando se trata de delito de distinta naturaleza, en consecuencia, esa relación de antecedentes, no constituye prueba de cargo contra el sentenciado.

5.23.- En resumen la única prueba de cargo directa, en las condiciones descritas, para establecer responsabilidad penal del procesado, es el dicho del niño agraviado, dicho que además ha derivado en la intervención que se produjo en la madrugada del día siguiente de los hechos, el linchamiento contra el supuesto responsable, la denuncia ante la policía y finalmente el proceso inmediato bajo condiciones de flagrancia, sin que existan en realidad, flagrancia delictiva. Dicha prueba de oficio fue propiciada por el mismo juzgado, que no fue propuesta ni reclamada por el titular de la acción penal, condiciones que ciertamente no contribuyen en beneficio de un debido proceso, sino que precisamente originan el cuestionamiento de la defensa del sentenciado, que reclama imparcialidad y debido cumplimiento de lo que informa el artículo 385 del Código Penal, referido a la prueba de oficio, que en principio es excepcional y no debe tener la calidad de reemplazar la actuación propia de las partes, sino como ya se ha establecido debe estar referido a corroborar un hecho o una circunstancia ya probada o deslindar en caso de duda severa una cuestión técnica o probatoria mediante una prueba adicional.

5.24.- Estas condiciones descritas, nos ubican en una incertidumbre para definir la situación jurídica del sentenciado, debido a que los cargos de imputación para sustentar debidamente la incoación de un proceso, tienen justificación, por el dicho del niño y el certificado médico que a pesar de no ser definido abre la posibilidad que se trate de tocamientos indebidos, pero no descarta cuestiones patológicas totalmente explicadas y razonables, por tanto no podemos incurrir en la ligereza de confirmar la sentencia condenatoria, pero por otro lado, tampoco podemos incurrir en la facilidad de absolverlo, porque podríamos incurrir en dejar impune la comisión de un delito, situaciones que se originan por la rapidez del proceso, siendo lo más razonable y cuerdo, disponer que se reconduzca el proceso a través de un mecanismo procesal más amplio donde se actúe toda la prueba necesaria y se despeje toda duda para decidir con solvencia la situación jurídica de esta persona.

5.25.- En ese entendido, estimamos que la incoación del proceso inmediato bajo condiciones de “flagrancia” que en este caso no concurren, no es correcto, porque descalifica la opción probatoria, tanto más si en delitos de esta naturaleza, son los indicios los que regularmente conducen a la verdad, positiva o negativa, entonces se atenta contra un derecho fundamental que tienen las partes, esto es probar sus afirmaciones. Igualmente se vulnera el derecho de defensa que tienen las partes, en este caso especialmente el imputado, a quien se le debe otorgar la posibilidad de acreditar sus afirmaciones de la manera más amplia y suficiente, debiendo en todo caso el órgano judicial llenar aquellos vacíos de probanza, cuando las partes no son plenos ni suficientes en su actividad probatoria, no como complementador de las pruebas de las partes, sino como verificador de que las afirmaciones probadas efectivamente son como las partes indican o no, a eso se denomina excepcionalidad y complementariedad probatoria.

5.26.- El derecho fundamental del debido proceso que en el Código Político está contenido a través del artículo 139.3, entre otros propósitos reclama que nadie debe ser penado sin proceso judicial, (inciso 10), lo que garantiza no solo la existencia de una forma procesal determinada, sino que esa forma ofrezca y garantice a las partes expresarse y probar sus intereses, el inciso 14 de dicha norma garantiza el derecho de defensa que debe ser pleno y desde el inicio del caso, en caso de duda aplicar lo más favorable al reo, (inciso 11), condiciones que en este caso se habrían rebasado, bajo el propósito de incoar proceso inmediato.

5.27.- La flagrancia pura en su probanza, no requiere prueba indiciaria, sino que por la naturaleza de su descubrimiento, la prueba normalmente es directa, salvo excepciones periféricas que requieren comprobación de otra índole, en cambio los hechos no flagrantes, generalmente requieren prueba indiciaria, pues el no conocimiento directo del hecho y la clandestinidad con que se producen, solo por excepción se encuentra acreditada con prueba directa, siendo la prueba indiciaria la que tiene privilegio en este tipo de descubrimiento de delitos, (en realidad no hay delitos de flagrancia o no flagrancia, el termino se refiere a la forma en que se descubre el delito), consecuentemente un delito de actos contra el pudor, deberá contar con abundante prueba indiciaria que otorgue convicción sobre su producción y la responsabilidad del actor, no siendo factible que en un proceso inmediato que toda esa actividad probatoria referida a buscar indicios sea posible hacerlo en tan corto tiempo y con las limitaciones que un proceso inmediato.

5.28.- Dictar una sentencia condenatoria implica mucha responsabilidad, porque se trata de confinar en prisión a una persona por un periodo largo de tiempo que eventualmente puede perjudicarlo para el resto de su vida, por tanto no se trata de expedir la mayor cantidad de sentencias en el menor tiempo posible, sino que cada

caso, con el análisis, ponderación y medida correspondiente sea resuelto de la manera más idónea y cumpliendo criterios y principios básicos que fundados en prueba contundente y sin resquicio de duda otorguen convicción sobre la responsabilidad penal, caso contrario la función judicial decae porque se linda con la arbitrariedad, la ligereza, la negligencia o el apresuramiento, tanto más si el Juez es el último servidor del Estado en quien debe confiar la persona para que se solucione su problema judicial de manera equilibrada, razonable y en lo posible justa.

5.29.- El artículo 150 del Código Procesal Penal, establece los casos de nulidad absoluta, después que el artículo 149 del mismo cuerpo normativo señala que “la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por la Ley”, norma que limita de manera expresa las declaraciones de nulidad, en clara alusión a que los casos deben resolverse positiva o negativamente, funcionando las nulidades solo en casos determinados y puntualmente señalados por la norma. Dentro de las nulidades absolutas que señala las omisiones o deficientes actuaciones procesales, que originan ese mandato, la letra d) dice que acarrea nulidad absoluta, inclusive cuando las partes no lo soliciten lo que implica que pueda ser declarada de oficio, “la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”.

5.30.- Por otro lado el artículo 152 del mismo cuerpo procesal, se refiere a la convalidación de los actos procesales, para no declarar la nulidad, norma que guarda relación con el 153 que se refiere al saneamiento, condiciones que exigen al juzgador evitar nulidades y en lo posible convalidar y sanear errores, siempre y cuando resulte viable y finalmente el artículo 154 se refiere a los efectos de la declaración de nulidad, que señala que su declaración anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisara los actos dependientes que son anulados.

5.31.- Bajo estos criterios en el caso presente hemos advertido que se ha vulnerado derechos constitucionales, en razón del apresuramiento procesal y se ha expedido sentencia condenatoria sin la debida actividad probatoria y sin que las partes hayan tenido la oportunidad y tiempo necesario para demostrar sus afirmaciones, pues aun tratándose de un delito tan grave y execrable, no basta la declaración de un menor, en las condiciones y circunstancias descritas para considerar que está probado el hecho, tanto más si existen imprecisiones respecto de hechos y circunstancias concomitantes al evento delictivo denunciado, por tanto es preciso declarar la nulidad de la sentencia y de los actos procesales que determinan precisamente el impedimento del idóneo ejercicio del derecho de defensa y los otros derechos referidos al debido proceso que hemos señalado.

5.32.- Los efectos de la declaración de nulidad determinan que los actos procesales declarados nulos no tienen validez, por tanto su declaración en este caso, se debe considerar desde el momento que el juzgado admite la incoación del proceso inmediato por flagrancia, acto procesal que debe ser renovado, teniendo en consideración la complejidad del caso y los requerimientos probatorios que han sido ampliamente desarrollados en la fundamentación de esta resolución, debiendo tenerse en cuenta que la prueba irrepetible y aquella que no necesita reiteración, debe ser incorporada al proceso, privilegiando principios y garantías constitucionales, como el interés superior del niño, el debido proceso y las garantías procesales.

5.33.- Advertimos en este caso, que por complejidad y necesidad de actuación probatoria, debía ser canalizado a través de un proceso ordinario, con todas las garantías del caso, tanto más si hemos cuestionado la flagrancia, que es para lo que está previsto el Decreto Legislativo 1194, proceso penal que si bien es verdad no modifica las etapas ni las formas procesales en sustancia y solo reduce al máximo del términos y requerimientos procesales, resulta plenamente valido en casos simples y evidentes (flagrancia) o cuando la evidencia probatoria es de tal magnitud que no existe posibilidad de rebatirla ni desmentirla, que no es el caso.

5.34.- El proceso penal de flagrancia no tiene porque reemplazar a los procesos ordinarios, sino que la complementa, la hace ágil e inmediata por las circunstancias en que se descubre el hecho, por la contundencia probatoria directa y porque ya no resultan viables debates estériles e innecesarios que derivan en la demora procesal, pero no puede aplicarse a aquellos casos donde no hay evidencia, donde no hay prueba directa ni donde los hechos y la prueba no están suficientemente determinados, casos en los que se tiene que conducir el caso a través del proceso ordinario normal, lo que permitirá un resultado positivo o negativo pero más cercano a la verdad y la justicia, en consecuencia, en este caso es preciso que se reconduzca el proceso por la vía ordinaria.

5.35.- Finalmente estas consideraciones de nulidad no deben afectar la prisión preventiva decretada contra el imputado Diego Cabanillas, en razón a que su determinación es independiente a la vía de sustentación del proceso principal, que según el artículo 271° del Código Procesal Penal, debe resolverse después de determinar la situación jurídica del imputado y porque los elementos de convicción y las otras condiciones que conforme dispone el artículo 268° del Código Procesal Penal, sustentan dicho mandato y que determinaron su procedencia no han sido afectados con los vicios que ocasionan la nulidad de la incoación del proceso inmediato en este caso.

6.- RESOLUCIÓN:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo que informan los artículos: 139, incisos: 3; 10 y 11 de la Constitución Política del Estado; 149, 150 y 154 del

Código Procesal Penal; la Segunda Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve:

6.1.- **DECLARAR la NULIDAD** de la sentencia de fecha veintiséis de febrero del presente año, que resuelve Condenar a Carlos Fernando Diego Cabanillas como autor del delito Contra la Libertad Sexual - Actos Contra el Pudor en agravio del menor de iniciales J.C.S.L (7 años), y le Impone Seis Años de Pena Privativa de la Libertad Efectiva, disponiendo su ejecución provisional, y fija en la suma de cinco mil nuevos soles, el monto por concepto de Reparación Civil a favor de la parte agraviada;

6.2.- Declararon la **NULIDAD** de la Resolución de fecha veinticinco de enero del dos mil dieciséis, **en el extremo que resolvió declarar procedente la incoación de proceso inmediato**, debiendo el señor Fiscal de la causa reconducir el trámite con arreglo a sus atribuciones.

6.3.- **RESOLVIERON, POR MAYORÍA; que la nulidad decretada no afecta el mandato de prisión preventiva dispuesto por el Juzgado, conforme a los argumentos establecidos en el considerando 5.35.**

6.4.- **DISPUSIERON** que se remitan los autos al juzgado de origen para el trámite correspondiente; **que la sentencia se lea en acto público; hágase saber y notifíquese y devuélvase.**

SS

SEQUEIROS VARGAS (DD). / SANCHEZ ESPINOZA / MENDOZA RETAMOZO.

LA ESPECIALISTA JUDICIAL CERTIFICA EL VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA AISSA MENDOZA RETAMOZO, EN RELACIÓN A LA PRISIÓN PREVENTIVA, ES EL QUE SIGUE:

Atendiendo a que la declaración de nulidad de la sentencia y del proceso comprende hasta la resolución N° 02, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Especializado en Procesos inmediatos de Flagrancia, en la que se declara tanto procedente la incoación de proceso inmediato como fundado el requerimiento de prisión preventiva; y estando a los fundamentos de la presente resolución, considero que los efectos de la nulidad se extienden a la medida coercitiva antes señalada, y en tanto éstos ponen en cuestionamiento la existencia de graves y fundados elementos de convicción que justifiquen su subsistencia; tanto más que al no existir ya proceso inmediato el representante del Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones se encuentra habilitado tanto para ampliar la investigación preliminar, archivar, como presentar cargos ante el Juez de instrucción en virtud del Decreto Legislativo N° 1206; por lo que mi voto es porque se disponga la excarcelación del señor Carlos Fernando Diego Cabanillas, salvo que exista mandato de detención en su contra dictada por otra autoridad competente.-

Anexo 8



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Lima, 01 de setiembre de 2015

OFICIO N° 135 -2015-PR

Señor
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
Presente.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 104° de la Constitución Política, nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley N° 30336, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1194, que Regula el Proceso de Inmediato en Casos de Flagrancia.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra estima y consideración.

Atentamente,


OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República


PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Lima, 01 de setiembre de 2015.

En aplicación de lo dispuesto en el inc. b) del artículo 90° del
Reglamento del Congreso de la República: para su estudio,
PASE el expediente del Decreto Legislativo N° 1194 a la
Comisión de Constitución y Reclamos. -


HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor(e)
CONGRESO DE LA REPUBLICA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ML
MARCO LEÓN FLORES TAPPOZA TELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Legislativo Nº 1194

[Firma]
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia delictiva; que permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N° 30336 y en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

Artículo 1°.- Objeto de la norma

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N°

957.



Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957

Modifícanse los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

"Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
 - b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o
 - c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.



"Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva

Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para determinar la



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ML
MARCO LEÓN FELIPE CARBOZA TELLO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Legislativo

U
procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.

- [Scribble]*
2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.
 3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
 4. La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:



- a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
- b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
- c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.



6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.



7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria."



~~"Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato"~~

Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato".



Artículo 3°.- Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957

Adelántase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA: Vigencia

La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El Peruano.



A. Garcés M.



F. JIMENEZ



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

146
CARCO LEÓN FELIX LA BUZA TELLO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Decreto Legislativo

SEGUNDA: Gestión de Audiencias

En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia designan a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así como las tareas relativas a su registro, publicidad, organización y asistencia de las partes.



C. VÁSQUEZ G.

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o quien haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace con el funcionario responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a fin de coordinar los temas interinstitucionales de organización para la realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias.



A. Garcés M.

Tercera.- Financiamiento

La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.



A. Marín L.



F. JIMENEZ

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior

GUSTAVO ADRIÁN ZÉN OLAYA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

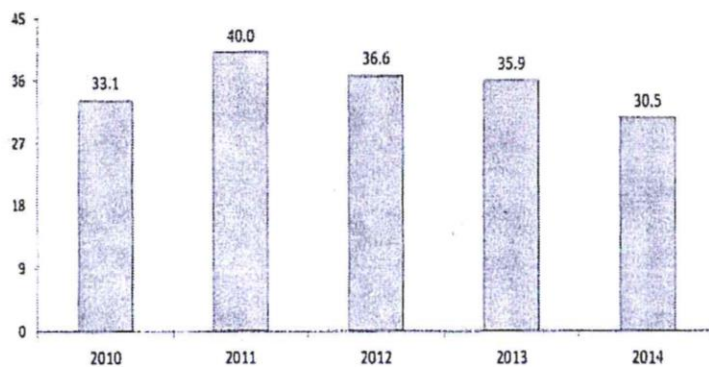
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, determinan que si bien las tasas de victimización se han reducido en un 10% del año 2011 al 2014, aún estas siguen siendo altas, lo que determina que 3 de cada 10 encuestados ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses.

GRÁFICO N° 01

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD?
Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular, estafa, amenazas e intimidaciones, maltrato y ofensas sexuales, secuestro, extorsión, robo de negocio y robo o intento de robo de vehículo automotor, autopartes, motocicleta, mototaxi o bicicleta
(Porcentaje)



Año 2010: Los datos corresponden al periodo mayo - diciembre.
Año 2011: Los datos corresponden al periodo abril - diciembre.
Año 2012, 2013, 2014: Los datos corresponden al periodo enero - diciembre.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos.

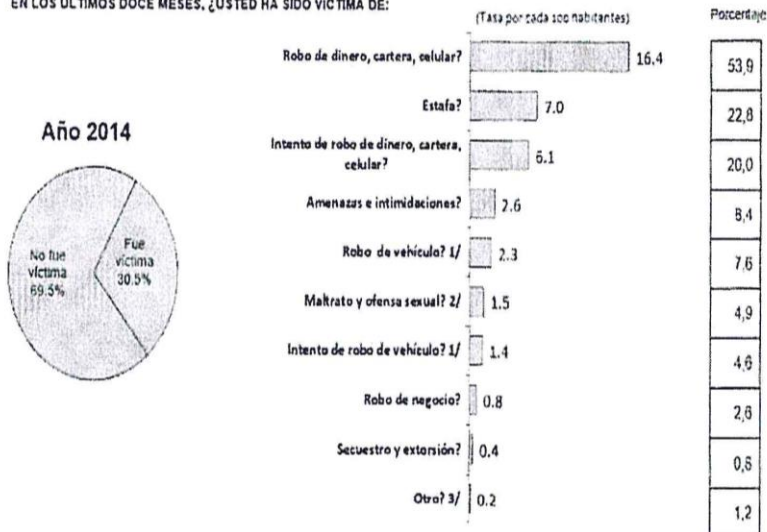


Del 100% de delitos cometidos en los últimos doce meses, la mayor incidencia lo representan los delitos patrimoniales, en especial los robos de cartera, celular, vehículos, negocios, a los que se suma las extorsiones y secuestros. Estos delitos se cometen, principalmente, en espacios públicos o privados, de naturaleza flagrante, siendo estos los principales hechos delictivos que generan la mayor percepción de inseguridad de los ciudadanos, quienes esperan una respuesta rápida de las autoridades para la aprensión y posterior sanción de quienes las realizan.

GRÁFICO N° 02

HECHOS DELICTIVOS MAS FRECUENTES

EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, ¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DE:



1/ Comprende: Auto, camioneta, autopartes de vehículo a, tractor, motocicleta, moto-taxi y bicicleta.
 2/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
 3/ Comprende: Robo de mascota, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos

No suma el 100% porque una persona pudo haber sido víctima de más de un hecho delictivo.

La Reforma Procesal Penal en el Perú ha generado una transformación en el Sistema de Justicia Penal, generando una mayor descongestión de casos, celeridad, transparencia, imparcialidad entre otras características que hacen posible una mayor satisfacción del usuario de justicia y mejores condiciones procesales para el adecuado funcionamiento de dicho Sistema de Justicia¹.

Dicha situación se debe en gran parte a la metodología de atención que el nuevo Código Procesal Penal incorpora al procesamiento de casos penales, posibilitando el uso de salidas alternativas o mecanismos de simplificación procesal, con la finalidad de racionalizar la cargas de trabajo, por razón de las personas, materia, gravedad del delito, estándar probatorio, entre otros.

Dichos mecanismos alternativos o de simplificación se fundamentan bajo los siguientes criterios:

- El carácter selectivo del Sistema de Justicia Penal, la necesidad de racionalizar la persecución penal pública frente a los escasos recursos públicos disponibles y las características de última ratio y subsidiariedad del mismo.
- Razones de conveniencia social que indiquen que debe prescindirse al máximo la respuesta penal tradicional respecto de personas que cuentan con altas posibilidades de reinserción social.



A. MARICÓ



C. VÁSQUEZ G.



F. JIMENEZ

¹Véase el "Informe Estadístico Nacional, 2006-2010 – La Reforma Procesal Penal Peruana – Hacia una Justicia Rápida y Transparente". Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima - 2011.

- La satisfacción real y oportuna de los intereses de la víctima por parte del Sistema de Justicia Penal².
- Organizar y planificar la respuesta del Sistema de Justicia Penal bajo el criterio de eficiencia sobre aquellos casos en los que, por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación³.

Por tanto, dichos mecanismos constituyen en conjunto uno de los pilares principales del Código Procesal Penal, pues permite simplificar, economizar y descongestionar el Sistema de Justicia Penal, logrando resultados de mayor eficacia en la respuesta penal frente a los punibles.

Dentro de estos, el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación, el mismo que tiene sus bases en el Ordenamiento Italiano de 1988 que regula el *giudizio immediato* (443° a 458°)⁴, donde se prescinde de la etapa intermedia, quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado.

El fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio. En la legislación comparada, conocidos son el "*procedimiento acelerado*" (Alemania), "*sentencia de conformidad*" (España), "*procedimiento simplificado*" (Francia), "*giudiziodirettissimo y giudizio immediato*" (Italia), "*proceso sumarísimo*" (Portugal), "*summary offenses, indictable offenses o felonies; hybrid o dual procedure offenses*" (Países del commonlaw), "*procedimiento simplificado*" (Chile y Ecuador), "*procedimiento extraordinario*" (Uruguay), entre otros países.

El VI Plenario Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, denominado "Acusación Directa y Proceso Inmediato", del dieciséis de noviembre de 2010, en la que definió al proceso inmediato como "*un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación* (Fundamento N° 07)". En tal sentido, siguiendo la regla hermenéutica del Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, establece la "*aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal*".

Bajo dichos presupuestos, el proceso inmediato, "*al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias*



²DUCE J. Mauricio y RIEGO R. Cristian. "Proceso Penal". Editorial Jurídica Chile 2007. p. 295.

³Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú N° 06-2012/CJ-116.

⁴NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo proceso penal, 2010.

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedias (Fundamento N°17)".

Desde su vigencia, el proceso inmediato ha pasado por varios criterios interpretativos de aplicación, ya sea debido a su confusión con la acusación directa⁵ en los primeros años, para luego cuestionar su legitimidad -fundamentada en la limitación del ejercicio de las garantías procesales y derechos de las partes procesales-, al no desarrollarse bajo este proceso la etapa de la investigación preparatoria y etapa intermedia.

Dicho situación estableció casi por inercia una situación de incertidumbre en cuanto a su aplicación por parte de los operadores de justicia, lo que aunado al factor discrecional de su aplicación y a la falta de capacitación de varios operadores de justicia, hizo que dicho mecanismo deje de ser aplicado a nivel nacional.

La importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de intervención y naturaleza -sobre aquellos delitos que configuran flagrancia delictiva-, ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante (tránsito directo de las diligencias preliminares a la etapa de juzgamiento), a diferencia del proceso común donde el caso deberá transitar por todas las etapas procesales (diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento), dilatándose innecesariamente el caso.

Este factor cualitativo del proceso inmediato justifica su vigencia, así como el restablecimiento de su aplicación a nivel nacional, resultando necesario que el Estado incentive su aplicación a través de las modificaciones y precisiones normativas pertinentes que la hagan más operativa y predecible.

En ese sentido, el Poder Judicial viene implementando el Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, el cual tiene por objeto establecer un tratamiento especial y célere en la investigación y juzgamiento de los delitos flagrantes, a fin de obtener una decisión pronta y eficaz a los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.

Mediante Resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ, del 15 de julio del 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso por mayoría implementar a partir del 1 de agosto del 2015, en el Distrito Judicial de Tumbes el Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la Flagrancia Delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, designando como órganos componentes a:

- Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.
- Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes.
- Sala Penal de Apelaciones de Tumbes.

La Resolución en mención dispone que estos órganos jurisdiccionales, tendrán competencia en todo el distrito judicial de Tumbes y conocerán los delitos flagrantes como el de peligro común (conducción de vehículo en estado de ebriedad), entre otros.

Se entiende que este plan se complementa con los protocolos de actuación conjunta entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás entidades del sistema de justicia que participan en la investigación, juzgamiento y resolución de delitos flagrantes.

⁵VASQUEZ GANOZA, Carlos Zoe. Acusación Directa vs Proceso Inmediato, en: Dialogo con la Jurisprudencia, Tomo 116.



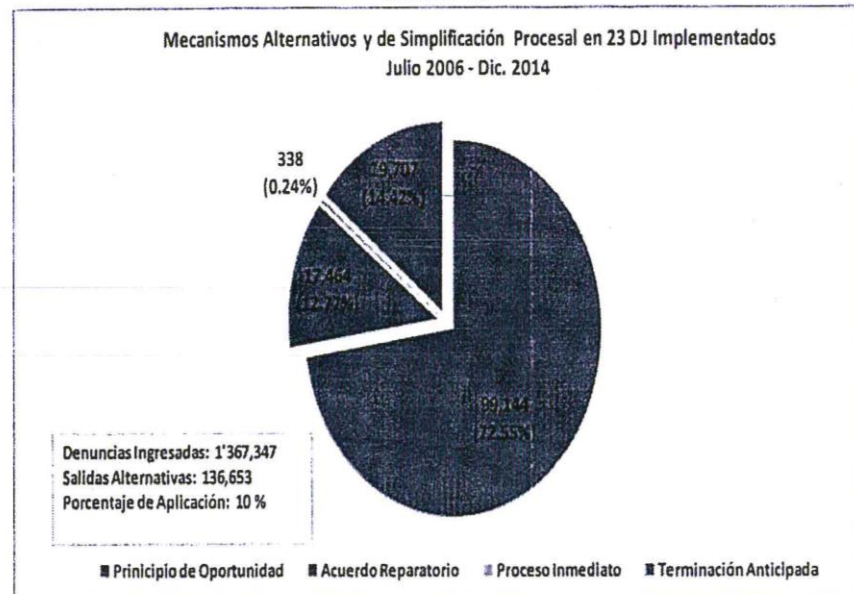
Asimismo, en el marco de este proceso, la presente propuesta normativa condice con la iniciativa del Poder Judicial y permitirá revestir su implementación bajo una norma con rango de ley.

II. PROBLEMÁTICA

De los constantes monitoreos efectuados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, se evidencia luego de 9 años de su vigencia una considerable aplicación de salidas alternativas y mecanismos de simplificación, especialmente del Principio de Oportunidad, Acuerdo Reportorio, ~~terminación Anticipada del Proceso e incluso la Acusación Directa⁵, no obstante ello,~~

l Proceso Inmediato es el mecanismo procesal que menos se ha aplicado durante estos 9 años, representando tan solo 338 casos, conforme se aprecia en el gráfico siguiente:

Grafico N° 01



Fuente: SGF – Ministerio Público
Elaboración: Secretaría Técnica de la CEI-CPP
Periodo: Julio 2006 – Diciembre 2014

Esta falta de aplicación impacta negativamente en el Sistema de Justicia Penal, pues no permite que una considerable carga procesal que ingresa bajo los presupuestos de flagrancia delictiva sea resuelta mediante este mecanismo, haciéndose necesario reactivar su uso mediante el presente proyecto legislativo. Asimismo, su falta de aplicación genera una sobrecarga procesal (en diligencias, audiencias, notificaciones, trámites administrativos, etc.) a las etapas de investigación preparatoria y etapa intermedia.

⁵Véase los "Reportes Estadísticos de la aplicación del Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Piura y Lambayeque", realizados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del CPP, donde el 36% promedio de las audiencias de control de acusación son del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en la que generalmente se utiliza la acusación directa.



Respecto a los delitos por omisión de asistencia familiar y contra la seguridad pública, entre los años 2012 al 2015, el Poder Judicial ha constatado un incremento en los ingresos por este tipo de delitos, por lo que se sugiere implementar el proceso inmediato en estos casos a fin de coadyuvar en la reducción de la carga procesal.

Alcances de la modificación:

Para la aplicación eficiente y eficaz del Proceso Inmediato, debe delimitarse en primer término, de manera expresa, su ámbito orientado a los delitos cometidos en flagrancia, así como a quienes confiesen la comisión del acto delictivo o que los elementos de convicción acopiados sean abundantes para acreditar la responsabilidad del agente, exceptuándose los casos complejos.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la norma dispone su aplicación a dos delitos que por su naturaleza, ciertos operadores de justicia consideren que no se encuentran en estado de flagrancia: se trata del emblemático delito de peligro común de Conducción en estado de Ebriedad o Drogadicción, y también al no menos importante y recurrente delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Y es que la probanza de ambos hechos no requiere de validación especial alguna para demostrar, ya sea por la evidencia de la prueba y por el estado de flagrancia permanente de su comisión y su autor; pues en el caso primer caso, la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, se corrobora con el examen de aire aspirado o cualitativo, los cuales son indicios de la comisión del delito, que se corrobora con la prueba del Dosaje Etílico Cuantitativa a través del análisis de la prueba de sangre, que permite cuantificar los gramos/litros de alcohol en la sangre; y, en el segundo caso, con la sentencia firme que condena al autor/autora de la omisión de la obligación legal de asistir al acreedor alimentario.

Carece de sustento que los procesos penales por la comisión de ambos delitos se prorroguen de manera innecesaria- si el agente no se acoge al Principio de Oportunidad- cuando el procesamiento se fundamenta en fuertes elementos de convicción que vinculan al presunto autor con el delito, resulta inaudito, que se tramite un proceso el cual pasa por todas sus etapas, existiendo medios de prueba incuestionables que hacen innecesario prolongarlo, cuando, desde sus inicios, el Juzgador cuenta con los elementos que le permiten determinar la situación jurídica del imputado.

Acortar los plazos de los procesos, respetando escrupulosamente las garantías que informan el debido proceso, se convierte en una de las metas a cumplir por el Poder Judicial, al cual debe dotársele de las herramientas orientadas a dicho fin, más aún, cuando en las reuniones de coordinación sostenidas entre dicho poder del Estado y el Ministerio del Interior, los representantes de aquél señalaron, de manera reiterada, de la necesidad de contar con un mecanismo que les permita procesar ambos delitos bajo los alcances del Proceso Inmediato.

Por todo ello, la norma exige se cumplan ciertas condiciones que garanticen la defensa del imputado así como de mecanismos que permitan no solo que cuente con abogado defensor durante todo el proceso, sino que sea posible ofrecer y actuar todos los medios que le permitan sustentar su teoría, de manera tal, que el Proceso Inmediato, en lo referido a garantías procesales, no tiene limitaciones en relación al Proceso Común, quedando así establecido que aún tratándose de un proceso célere, los derechos del imputado están garantizados.



En este sentido, el Centro de Informática del Poder Judicial ha remitido las estadísticas relacionadas a los procesos por delito de Omisión de Asistencia familiar, observándose casi cien mil causas a nivel nacional, conforme al siguiente cuadro:

INGRESO POR DELITOS DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

CSJ	2012	2013	2014	2015	Total General
AMAZONAS	240	209	158	30	637
ANCASH	1180	297	327	44	1848
APURIMAC		131	120	17	268
AREQUIPA	1346	1708	1671	235	4960
AYACUCHO		581	648	83	1312
CAJAMARCA		875	1047	361	2283
CALLAO	386	492	438	122	1438
CAÑETE	3	568	657	122	1350
CUSCO		788	1241	66	2095
HUANCAVELICA		661	468	20	1149
HUANUCO	1986	503	1103	262	3954
HUAURA		1373	1704	365	3442
ICA		2624	4816	58	7498
JUNIN		2312	5350	407	8069
LA LIBERTAD	2139	2471	2087	449	7146
LAMBAYEQUE		4062	4411	489	8962
LIMA		2414	2683	174	5271
LIMA ESTE			3418	368	3786
LIMA NORTE		1535	1692	271	3498
LIMA SUR		946	926	59	1931
LORETO		178	110	99	387
MADRE DE DIOS		295	324	70	689
MOQUEGUA		209	298		507
PASCO		120	359	43	522
PIURA	1866	2253	3256	205	7580
PUNO		415	605	168	1188
SAN MARTIN		350	731	98	1179
SANTA		1531	2071	419	4021
SULLANA		935	605		1540
TACNA		945	891	122	1958
TUMBES		906	948	135	1989
UCAYALI		176	130	7	313
VENTANILLA			143	2	145
TOTAL GENERAL	9146	32963	45436	5370	92915

Fuente: Poder Judicial - CIJ

En cuanto a los delitos de conducción en estado de ebriedad y drogadicción, si bien la cantidad de procesos se reduce en un tercio del anterior, sesenta mil causa aproximadamente en los últimos años, la finalidad de la presente norma está orientada a reducir los plazos del procesamiento, por tanto creemos que incidirá, de manera favorable, en reducir los plazos de los procesos a iniciarse.



La misma fuente el Centro de Informática del Poder Judicial, ha remitido la estadística de las causas por delito contra la Seguridad Pública – Conducción en Estado de Ebriedad y Drogadicción:

INGRESO POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CSJ	2012	2013	2014	2015	TOTAL GENERAL
CALLAO	763	1068	960	178	2969
LIMA		3806	2858	281	6945
LIMA ESTE			4697	552	5249
LIMA NORTE		2297	1874	376	4547
LIMA SUR		1019	1477	772	3268
VENTANILLA			168	18	186
Total general	763	8190	12034	2177	23164

CSJ	2012	2013	2014	2015	TOTAL GENERAL
AMAZONAS	36	48	35	7	126
ANCASH	468	122	226	27	843
APURIMAC		67	124	5	196
AREQUIPA	988	1299	1895	265	4448
AYACUCHO		203	205	15	423
CAJAMARCA		522	569	192	1283
CAÑETE		172	204	46	422
CUSCO		436	954	72	1462
HUANCAVELICA		24	41		65
HUANUCO	942	324	660	135	2061
HUAURA		476	652	167	1295
ICA		573	1088	12	1673
JUNIN		746	2132	101	2979
LA LIBERTAD	2181	2032	1805	227	6245
LAMBAYEQUE		1536	1944	186	3666
LORETO		421	150	102	673
MADRE DE DIOS		99	146	29	274
MOQUEGUA		35	92		127
PASCO		14	50	6	70
PIURA	550	849	1559	160	3118
PUNO		194	242	47	483
SAN MARTIN		179	319	50	548
SANTA		300	512	126	938
SULLANA		251	173		424
TACNA		453	591	59	1103
TUMBES		373	507	63	943
UCAYALI		101	117	7	225
Total general	5165	11849	16993	2106	36113

Fuente: Poder Judicial - CIJ



III. PROPUESTA NORMATIVA PROCESAL EN TORNO A LA FLAGRANCIA DELICTIVA

1. Definición del Proceso Inmediato y supuestos de su aplicación:

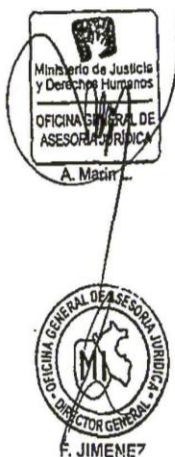
La presente norma parte por conceptualizar, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116, al proceso inmediato como uno de naturaleza especial y

simplificado, que tiene por finalidad el juzgamiento oportuno y ágil de determinados casos que, por su naturaleza (flagrancia, confesión sincera del imputado o suficientes elementos de convicción), tornan innecesarios mayores actos de investigación y, por ende, del uso de etapas previas al juicio (investigación preparatoria y etapa intermedia). En tal sentido, de preeminencia oral, el proceso inmediato permite un ahorro significativo de tiempo y recursos humanos, que la Administración de Justicia Penal puede concentrar en otros casos de mayor complejidad, lo que no implica un desmedro en el respeto a las garantías del justiciable, sino el establecimiento de un debido proceso proporcional a las circunstancias que lo motivaron⁷.

Tres son los supuestos en los que procede el proceso inmediato: a) Flagrancia delictiva; b) Confesión sincera del imputado; o, c) Suficientes elementos de convicción. De estos, la flagrancia constituye un elemento objetivo sobre el hecho materia del proceso (v.gr.se ha encontrado al imputado cometiendo el hecho delictivo; dentro de las 24 horas de su realización con los efectos de instrumentos procedentes del delito; o ha sido identificado por la víctima o testigos, dentro del término antes establecido). Los dos otros elementos constituyen por el contrario elementos subjetivos relacionados a la facultad o al criterio del Fiscal, quien determinará que pese a la confesión o interrogatorio previo, existen suficientes elementos de convicción o no que corroboren el hecho delictivo. En tal sentido, la propuesta normativa se orienta a establecer la incoación del proceso inmediato de manera imperativa para casos de flagrancia, preservando su naturaleza facultativa para los otros dos supuestos.

De igual manera, se busca aplicar de manera taxativa a los delitos de peligro común como el caso de la conducción en estado de ebriedad, o al delito de Omisión a la Asistencia Familiar estando a que su probanza – como se señaló anteriormente – no requiere de validación alguna para demostrar la evidencia de la prueba.

No cabe duda que, por su naturaleza, el proceso inmediato está diseñado para casos que no revisten la característica de complejidad o conexidad de delitos, para lo cual la propuesta establece la excepción de su no aplicación, siendo los únicos supuestos que, pese a la existencia de una flagrancia, el fiscal estaría exento de responsabilidad funcional de no haber solicitado su incoación.



⁷Véase ARAYA VEGA, Alfredo. El delito en flagrancia, Análisis y propuesta de un nuevo procedimiento especial. Editorial Sur Gráfica. Lima, 2015. Pág. 135. "La existencia de un procedimiento especial no es per se una cuestión discriminatoria y desigual, siempre y cuando exista una base objetiva que requiera hacer la diferenciación... mediante la atención en flagrancia se pretende agilizar el procedimiento usando como criterio de diferenciación la detención en flagrancia, en tanto implica la existencia inmediata de los elementos de prueba necesarios, en principio, para resolver adecuadamente el asunto (por ejemplo, la existencia de una víctima del hecho, testigos presenciales, decomiso de bienes, etc.)."

2. Audiencia única de la incoación del proceso inmediato para casos de flagrancia:

Teniendo en consideración que los casos de flagrancia, de conformidad con el artículo 259° del Código Procesal Penal, determinan la detención del imputado, la propuesta normativa establece la necesidad de regular una audiencia única que permita al Fiscal mantener o no dicha detención previa, a través de una medida coercitiva, la aplicación de un criterio de oportunidad por las partes, de ser el caso, para luego pronunciarse sobre la incoación del proceso inmediato.

Debido a su característica célere, la propuesta normativa establece plazos perentorios e inaplazables, que deben ser respetados por los funcionarios públicos competentes, bajo responsabilidad funcional. En tal sentido, la norma dota de una característica esencialmente oral a las solicitudes de las partes, así como de la decisión jurisdiccional.

3. Audiencia única de juicio inmediato

Al igual que la audiencia anterior, la norma establece la naturaleza inaplazable del juicio inmediato. En tal sentido, la audiencia única se bifurca en dos partes: Una primera, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos de validez de la acusación y se resolverán las cuestiones planteadas por los demás sujetos procesales frente a dicho requerimiento. Una segunda, tendiendo en consideración las características propias de la flagrancia, donde la norma instruye a las partes a preparar y conducir a sus órganos de prueba a la audiencia única, desarrollándose el juicio inmediato en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión.

Dada la naturaleza célere del proceso inmediato, la norma establece el imperativo de la culminación del juicio por parte del Juez Penal que instaló e inició aquel, esto es, no podrá instalar otros juicios hasta que no haya culminado la audiencia única ya instalada. Asimismo, la aplicación supletoria del proceso común, se debe ajustar a dicha naturaleza de celeridad.



IV. OBJETIVOS DE LA NORMA:

- 4.1. Sancionar los hechos delictivos en flagrancia delictiva, facilitando la intervención del Estado para la rápida conclusión del proceso penal.
- 4.2. Satisfacer oportunamente el daño sufrido por la víctima, así como las expectativas ciudadanas.
- 4.3. Otorgar mayor celeridad a los procesos penales bajo el supuesto flagrancia delictiva, al impedir que transiten por todas las etapas del proceso penal.
- 4.4. Reducir la sobrecarga procesal de la etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia, pues no se necesitarían mayores actos procedimentales y de investigación que corroboren la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado.

- 4.5. Generar el ahorro de los recursos públicos, evitando gastos y esfuerzos humanos innecesarios.
- 4.6. Reducir la carga procesal significativamente.
- 4.7. Evitar la impunidad en aquellos casos que por el transcurso del tiempo dejen de ser perseguibles.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Conforme lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 000-2000-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, el análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios o, en su defecto, posibilita apreciar analíticamente los beneficios y costos no cuantificables. La necesidad de la norma debe estar justificada dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para solucionarlos.

La dación de la presente norma, permitirá simplificar el procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio.

Asimismo, la implementación de las medidas establecidas en la presente norma, se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL

La presente norma modifica el Código Procesal Penal, con la finalidad de dotar a los operadores de justicia de un instrumento ágil y simplificado para sancionar oportuna y eficientemente los delitos cometidos bajo el supuesto de flagrancia delictiva y otros establecidos en la norma. Como se ha mencionado, la presente norma se orienta al fortalecimiento del ordenamiento jurídico procesal, a fin de contar con instrumentos normativos que permitan una lucha eficaz contra la delincuencia.



- 20) **Nota Anual de Rendimiento Profesional o Técnico:** Puntaje de la evaluación del desempeño profesional o técnico.
- 21) **Oficial de Armas:** Profesional egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú.
- 22) **Oficial de Servicios:** Profesional egresado de una Universidad, con título registrado en la Asamblea Nacional de Rectores e inscrito en el Colegio Profesional respectivo, cuando corresponda, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público, de acuerdo a las necesidades institucionales.
- 23) **Personal:** Para efectos de la presente norma, la palabra personal se refiere a Oficiales y Suboficiales de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú.
- 24) **Precedencia:** Constituye la preeminencia entre el personal para el cumplimiento de actividades de mando, empleo, ceremonial y protocolo, en consideración a la categoría, jerarquía, grado y antigüedad.
- 25) **Reasignación:** Ubicación del personal en situación de actividad, en un cargo específico, acorde a las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal. Se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio.
- 26) **Renovación de cuadros:** Causal de pase a la situación de retiro. Tiene la finalidad de mantener los cuadros de personal en función a las necesidades institucionales.
- 27) **Separación temporal del cargo:** Medida preventiva establecida en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
- 28) **Servicio policial:** Conjunto de actividades que ejecuta el personal en situación de actividad, para el cumplimiento de su finalidad y misión institucional.
- 29) **Suboficial de Armas:** Personal egresado de las Escuelas Técnico Superiores de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú.
- 30) **Suboficial de Servicios:** Personal acreditado como Técnico, egresado de los institutos superiores o centros académicos con valor oficial, debidamente registrado ante la entidad correspondiente, que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público, de acuerdo a las necesidades institucionales.
- 30-A) **Suspensión temporal del servicio:** Condición derivada de Medida Preventiva prevista en el Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
- 31) **Tiempo de servicios reales y efectivos:** Período de tiempo en que el personal presta servicios reales y efectivos desde el egreso de la escuela de formación en su respectiva categoría o desde la fecha de incorporación al servicio policial para el personal de servicios.

Artículo 72.- Situación de actividad fuera de cuadros.

La situación de actividad fuera de cuadros es la condición en la que el personal de la Policía Nacional del Perú con empleo, se encuentra fuera del servicio, en cualquiera de los casos siguientes:

- 1) Enfermo o lesionado por el período comprendido entre seis (6) meses a dos (2) años.
- 2) Prisionero o rehén durante el desempeño del servicio policial, por el término máximo de tres (3) años, al cabo del cual, si se ignora su existencia o paradero, es considerado como fallecido en acto de servicio.
- 3) Desaparecido en acción de armas, en acto o como consecuencia del servicio, por el término máximo de tres (3) años, al cabo del cual si se ignora su existencia o paradero, es considerado como fallecido en acción de armas, acto del servicio o como consecuencia del servicio.
- 4) Con mandato de detención emanado de autoridad judicial competente por un período mayor de seis (6) meses.
- 5) Sometido a la medida preventiva de cese temporal del empleo prevista en la Ley del

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

- 6) **Sometido a la medida de suspensión temporal del servicio prevista en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.**

Al personal de la Policía Nacional del Perú comprendido en el numeral 4) del presente artículo, que obtenga sentencia absolutoria se le reconocerá el tiempo de servicios transcurrido como de actividad en cuadros.»

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación

Derógase el literal e) del numeral 1) del artículo 88 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO

Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE

Ministro del Interior

1281034-1

DECRETO LEGISLATIVO N° 1194

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia delictiva, que permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N° 30336 y en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República,
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA

Artículo 1°.- Objeto de la norma

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957

Modifícanse los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, en los siguientes términos:

"Artículo 446.- Supuestos de aplicación

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
 - b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o
 - c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ~~ulteriores actos de investigación~~.
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique el debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.

"Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva

1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia.
2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.
3. En la refenda Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
4. La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:
 - a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;
 - b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
 - c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.
5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo imposterizable, en la misma Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo.
6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento

fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda a la formalización de la Investigación Preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria."

"Artículo 448 Audiencia única de Juicio Inmediato

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.
2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato".

Artículo 3°.- Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957

Adelántase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera: Vigencia

La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Segunda: Gestión de Audiencias

En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia designan a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así como las tareas relativas a su registro, publicidad, organización y asistencia de las partes.

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o quien haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace con el funcionario responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a fin de coordinar los temas interinstitucionales de organización para la realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias.

Tercera.- Financiamiento

La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO

Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE

Ministro del Interior

GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1281034-2

DECRETO LEGISLATIVO N° 1195

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en ese sentido el literal d) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar para promover el consumo humano directo del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura;

Que, el desarrollo de la acuicultura como actividad económica de interés nacional, coadyuva a la diversificación productiva, la competitividad y seguridad alimentaria, en armonía con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, destacándose su importancia en la obtención de productos de calidad para la alimentación y la industria, la generación de empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros beneficios;

Que, resulta necesario orientar, integrar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación y cumplimiento de la política pública en materia de acuicultura, así como los planes, programas y acciones destinados a fomentar el crecimiento y desarrollo de la acuicultura a nivel nacional; y a promover prácticas acuícolas que contribuyan a la conservación y aprovechamiento sostenible del ambiente donde se desarrolle, para lo cual se requiere la participación de todas las entidades y usuarios vinculados a las actividades acuícolas;

De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 2 de la Ley N° 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera, el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY GENERAL DE ACUICULTURA

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fomentar, desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas fases productivas en ambientes marinos, estuarinos y continentales.

Artículo 2.- Declaración de interés nacional

Declarase el desarrollo de la acuicultura sostenible como actividad económica de interés nacional

que coadyuva a la diversificación productiva y la competitividad, en armonía con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, destacándose su importancia en la obtención de productos de calidad para la alimentación y la industria, la generación de empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros beneficios.

Artículo 3.- Principios

El desarrollo de la acuicultura se rige por los siguientes principios:

- 3.1 **Sostenibilidad.-** El Estado promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura, en armonía con la conservación de los recursos y del ambiente considerando la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población a través de la promoción de una actividad acuícola rentable y competitiva.
- 3.2 **Enfoque Ecosistémico.-** La actividad acuícola se adecúa y respeta el enfoque ecosistémico, considerando las dimensiones ambiental, social e institucional, garantizando la participación, equidad en la distribución de los beneficios y el respeto a la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, garantizando la capacidad de recuperación de los sistemas socio-ecológicos interconectados.
- 3.3 **Diversidad Genética.-** La diversidad genética representa la materia prima biológica tanto de la acuicultura como de otros usuarios y su preservación es determinante para el equilibrio ecológico. La diversidad genética de las poblaciones naturales o de criaderos, por lo tanto, se gestiona de manera responsable basándose en la mejor evidencia científica disponible, analizando los riesgos ecológicos de las alteraciones antrópicas y tomando en consideración también el conocimiento tradicional.
- 3.4 **Seguridad alimentaria y nutricional.-** El Estado reconoce que la acuicultura es un pilar importante de la seguridad alimentaria y nutricional de la población ya que representa una fuente de alimentos de alto valor proteico.
- 3.5 **Sanidad, Calidad e Inocuidad.-** Las actividades acuícolas se realizan en ambientes de cultivo que propician la sanidad de las especies que en él se crían,
- 3.6 **asegurando la sanidad animal, la calidad e inocuidad de los productos acuícolas con sistemas de trazabilidad implementados a lo largo de toda la cadena productiva.**
- 3.7 **Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.-** El Estado promueve y fortalece la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, procurando la diversificación productiva, la competitividad y la optimización de la cadena productiva de la acuicultura.
- 3.8 **Transparencia e información.-** El Estado, promueve y facilita el registro y acceso a la información actualizada relacionada con la actividad acuícola, de acuerdo con las normas correspondientes, articulando con los sectores público y privado.
- 3.9 **Participación ciudadana.-** El Estado, a través del Ministerio de la Producción, así como de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, promueve acciones que fortalecen la confianza y credibilidad entre los actores involucrados con la actividad acuícola, a través del establecimiento de procesos participativos libres e informados, que favorezcan la prevención y gestión de conflictos, para asegurar la sostenibilidad de la actividad acuícola y el desarrollo de las comunidades costeras y continentales.
- 3.10 **Inclusión.-** La acuicultura, como actividad productiva, deberá contribuir a la generación y diversificación de oportunidades económicas, al desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos en las zonas rurales donde se desarrolle; así como a la seguridad alimentaria y nutricional asociada al incremento de la disponibilidad de proteína de buena calidad.

Artículo 4.- Definiciones

- a. **Abastecimiento de semilla.-** Obtención de semilla para cultivo, la misma que puede